

167/0



PROCEDIMIENTO PENAL ARGENTINO

C. MALAGARRIGA y S. A. SASSO

PROCEDIMIENTO PENAL ARGENTINO

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS

CRIMINALES

PARA LA JUSTICIA FEDERAL

Y LOS TRIBUNALES DE LA CAPITAL Y TERRITORIOS

Comentado por la doctrina y la jurisprudencia

Y COMPLETADO

CON EL TEXTO DE LOS CÓDIGOS DE TODAS LAS PROVINCIAS

TOMO II

(Artículos 376 á 609)

APÉNDICES É ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS



BUENOS AIRES

LIBRERÍA NACIONAL

J. LAJOUANE & CIA. — EDITORES

270 — CALLE BOLÍVAR — 270

1910



Biblioteca de la Corte Suprema	97.515	777
	100	122000





TÍTULO DÉCIMOCTAVO

De la libertad bajo fianza

ARTÍCULO 376

Cuando el hecho que motiva la prisión del procesado tenga solo pena pecuniaria ó corporal, cuyo promedio no exceda de dos años de prisión, ó una y otra conjuntamente, podrá decretarse su libertad provisoria, siempre que preste algunas de las cauciones determinadas en el presente título.

El texto anterior es conforme á la ley 3508 de 22 de Septiembre de 1897; en la redacción primitiva, en vez de *promedio*, se decía *máximum*.

Para la aplicación del artículo no hay que atender á las circunstancias que pueden agravar ó atenuar la responsabilidad del procesado sino al delito (en abstracto) que se le impute.

Primera consecuencia: sólo después de la indagatoria en que se hace saber al procesado la naturaleza del delito que se le atribuye, procederá formular el pedido de excarcelación provisoria.

Segunda: la libertad supone la anterior privación de ella; la excarcelación presupone el encarcelamiento; el



prófugo, el rebelde, no pueden acogerse al beneficio de la fianza. Aquel—dice Mangin—que pretende obtener de la justicia un acto de favor, debe antes obedecer sus mandatos.

Véase además otro caso de excarcelación en el artículo 504.

—Para hacerse lugar á la excarcelación, es necesario que el reo se constituya en prisión. Cám. Crim., t. 15, p. 399.

—Aunque el procesado lo era por tentativa de homicidio, las constancias del sumario no autorizan á decir que hayan indicios de semejante delito, por lo cual, se concede la excarcelación. Cám. Crim., t. 27, p. 315.

—Estando en suspenso la jurisdicción del juez en virtud de una apelación, deben volver los autos al juzgado para que resuelva sobre su procedencia. Cám. Crim., t. 30, p. 105.

—No procede, si del informe médico resulta la posibilidad de la pérdida de un miembro. Cám. Crim., t. 32, p. 116.

—No procede en caso de homicidio voluntario.

Ni el sexo, ni la edad, ni las demás condiciones personales, influyen en el incidente. Cám. Crim., t. 37, p. 421.

—La procedencia de la libertad bajo fianza, debe resolverse sin tomar en cuenta las circunstancias que hayan concurrido. Es privativa la facultad del juzgado para calificar la responsabilidad del fiador personal. Cám. Crim., t. 38, p. 63.

—Las causas eximentes de pena no son de atenderse en el incidente sobre excarcelación. Cám. Crim., t. 39, p. 253.

—La calificación de tentativa de homicidio, hecha por el querellante (era un delito apreciado por el juzgado como de lesiones) carece de valor legal á los efectos de la excarcelación. Cám. Crim., t. 83, p. 131.

ARTÍCULO 377

No podrá, sin embargo, decretarse la libertad bajo caución:

1.º Cuando el procesado fuere reincidente.

2.º Cuando mediase reiteración ó concurrencia de varios delitos.

ARTÍCULO 377

Concuerda con los siguientes artículos del C. Penal:

«ART. 84. Son circunstancias agravantes:

Inciso 19. Haber sido el culpable castigado anteriormente por delito á que la ley señale igual ó mayor pena.

Inciso 20. Ser reincidente, no contándose las condenaciones por delito exclusivamente militar ó político. Esta agravante no podrá aplicarse si han pasado diez años de la anterior condenación (según el artículo 15 de la ley 4189; el texto primitivo del Código decía: Ser reincidente de delitos de la misma especie).

ART. 85. Si se ha reiterado el mismo delito contra varias personas ó cosas, ó si el mismo malhechor comete delitos de diferente especie por otras tantas acciones, la pena del uno se agregará á la del otro; pero si esta reunión fuese imposible por la naturaleza de las penas ó por exceder del máximum legal la suma resultante de la acumulación, se aplicará la del delito mayor, agravándola con las adicionales que fuese posible.

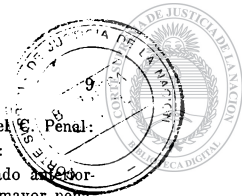
Si no fuese posible acumulación alguna por la diversa clase de las penas, el delito menos grave será circunstancia agravante del más grave.

ART. 86. Si un delito de la misma especie se comete varias veces contra una misma persona ó cosa, se castigará el acto más grave y los otros se considerarán circunstancia agravante.

ART. 87. Si el mismo culpable, con ocasión de la ejecución del delito que se propone cometer, perpetrare otros, se le aplicará la pena del más grave y los otros se considerarán circunstancia agravante».

* * *

Aquí ya entran consideraciones de carácter subjetivo, así como en el artículo anterior sólo se atendía al carácter objetivo del delito.





La reincidencia era antes de la reforma expresada la puramente jurídica que exigía delito anterior é identidad específica. Hoy sólo se exige lo primero, debiendo el delito anterior haber sido declarado tal por sentencia ejecutoriada (pendiente el proceso, en caso de reiteración: artículo 85 citado) siempre que no se haya efectuado la prescripción de diez años. Se entiende, sentencia dada por un tribunal de la misma jurisdicción ordinaria ó federal (no de una provincia).

La reiteración presenta las distintas figuras expresadas en los artículos transcritos:

Delito contra varias personas ó cosas.

Delitos distintos.

Delitos de la misma especie repetidos.

Delitos ejecutados con ocasión del que se proponía cometer.

El único punto á discutirse, es el de si bastará la afirmación (ó acusación) que se hiciere en contra del reo, de que ha cometido varios delitos. Al respecto, opinamos que la sola afirmación de su existencia, no impedirá la excarcelación; no así cuando acerca del nuevo ó nuevos delitos se hubiere ya pronunciado en el proceso por el juez auto declarando la presunta responsabilidad criminal sobre los nuevos delitos: el auto de prisión preventiva, p. ej., que es el que generalmente la fija *á priori*.

—Al preso N. se le procesa por los delitos de falsificación y defraudación, comprobados por declaraciones y documentos. No se hace lugar á la excarcelación. Cám. Crim., t. 13, p. 361.

—Concurriendo el delito de usurpación de estado civil, que es independiente del de defraudación, no procede. Cám. Crim., t. 32, p. 77.

—No procede, si *prima facie*, existe reiteración. Cám. Crim., t. 34, p. 315.

—Si los disparos de arma de fuego han sido dirigidos contra diversas personas, constituye un caso de reiteración. Cám. Crim., t. 34, p. 381.

ARTÍCULOS 377 Y 378

—El acto de herir á dos personas distintas en una sola ríñ, se conceptúa como una sola acción. Cám. Crim., t. 5, p. 351.

—Procede para el encubridor del robo. En cuanto á la reincidencia que alega el acusador, éste no precisaba al juez el tiempo y el delito de la primera causa, sino que pedía se librara oficio á todos los juzgados de la capital para ver si por alguno de ellos el querellado había sido procesado, llegando has'a pedir diligencias en el extranjero que á nada conducían para los efectos de la excarcelación en un delito cometido en esta capital. Cám. Crim., t. 39, p. 228.

—No puede considerarse reiteración del delito de abuso de autoridad, la prisión de diversas personas en virtud de una sola causa. Cám. Crim., t. 39, p. 279.

—La pena impuesta por un delito *voluntario*, no puede reputarse agravante al considerarse lesiones cometidas por *imprudencia*. Cám. Crim., t. 96, p. 45.

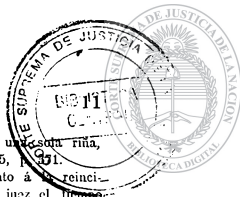
ARTICULO 378

Para determinar la calidad y cantidad de la caución, se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado, y todas las demás circunstancias que pudieran influir en el mayor ó menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad, como asimismo la importancia aproximativa de su responsabilidad civil.

Ya declarada la procedencia de la excarcelación bajo fianza, para fijar el monto y la clase de ésta, se vuelve á las circunstancias subjetivas del procesado, además de la naturaleza del hecho imputado.

Debe entenderse aplicado á esto mismo lo prevenido en el artículo 395, es decir, que las resoluciones sobre excarcelación no causan instancia.

También ha de entenderse que siendo apelable el auto del juez, las mismas consideraciones deberán ser tenidas





en vista por el Superior al resolver, y así debe entenderse «el soberano arbitrio del juez».

—Consintiendo el acusador la excarcelación, el monto de la fianza es potestativo del juzgado. Cám. Crim., t. 19, p. 377.

—El monto de la fianza es apelable para el querellante. Cám. Crim., t. 21, p. 74.

—El monto de la cantidad fijada para la fianza no hace cosa juzgada. Cám. Crim., t. 76, p. 380.

ARTÍCULO 379

La caución tendrá por objeto garantir la comparecencia del procesado, cuando fuere llamado ó citado por el Juez que conociere de la causa. Garante además el cumplimiento de la pena pecuniaria, las costas del juicio y las responsabilidades civiles que nacen del delito, en caso de que el procesado no compareciere.

Es equivalente al 411, pues ambos tienden al mismo fin: garantir la pena pecuniaria, las costas del juicio y las responsabilidades civiles del delito. De manera que la caución, cualquiera que sea la especie de fianza, debe siempre determinarse por una suma líquida que no deberá ser nunca inferior á la que se hubiere fijado al ordenarse el embargo en el caso de aquel artículo 411, salvo que el procesado hubiere ya dado bienes á embargo suficientes á cubrir las responsabilidades legales arriba mencionadas, lo que permitiría reducirla á una cantidad menor.

—El excarcelado bajo fianza puede disponer libremente de sus bienes. Cám. Crim., t. 7, p. 162.

—El embargo preventivo contra el acusado debe dictarse aun cuando haya presentado fianza para la excarcelación. Cám. Crim., t. 79, p. 426.

—Las obligaciones del fiador no se extinguen por la prescripción de la pena impuesta al procesado. Cám. Crim., t. V, p. 142.

ARTÍCULOS 380 Y 381

ARTICULO 380

La caución puede ser personal, real ó juratoria.

La personal, es de un tercero que ofrece hacerla efectiva en el caso de que se le exija.

La real, es del procesado ó de un tercero que responde desde luego con bienes de que se desprende ó que grava.

La juratoria, es del mismo procesado que en realidad nada da ni ofrece, más que la promesa de comparecer cuando se le exija.

ARTÍCULO 381

Puede ser fiador toda persona que teniendo capacidad legal para contratar, sea de responsabilidad y arraigo.

Una misma persona no podrá otorgar más de dos fianzas en cada distrito ó sección judicial, mientras no sean canceladas.

Capacidad. La establece el artículo 2011 del Código Civil, el cual dice:

«Todos los que tienen capacidad para contratar empréstitos, la tienen para obligarse como fiadores, sin diferencia de casos, con excepción de los siguientes:

1.º Los menores emancipados, aunque obtengan licencia judicial y aunque la fianza no exceda de quinientos pesos;

2.º Los administradores de bienes de corporaciones en nombre de las personas jurídicas que representaren;

3.º Los tutores, curadores y todo representante necesario, en nombre de sus representados, aunque sean autorizados por el juez;





4.º Los administradores de sociedad si no tuvieren dineros especiales;

5.º Los mandatarios en nombre de sus constituyentes, si no tuvieren poderes especiales;

6.º Los que tengan órdenes sagradas, cualquiera que sea su jerarquía, á no ser por sus iglesias, por otros clérigos ó por personas desvalidas».

Responsabilidad. Debe resultar de un hecho positivo debidamente comprobado en su existencia real, no por testigos que quieran declarar sobre la fama de solvencia que el fiador pueda merecer á los demás, porque la prueba de la responsabilidad no es de deducirla por apreciación íntima de terceros, que, en ningún caso, podrían afirmarla con certeza, salvo que el fiador fuere de un crédito indisputable de fortuna, es decir, tenido públicamente como persona de solvencia real. Si un fiador es propietario, bastará que exhiba el título que lo justifique; si es comerciante, los documentos que acrediten la existencia de su negocio en el momento de la fianza.

Arraigo. Nada tiene que ver con la responsabilidad; son distintos, á pesar de confundirseles en la práctica. Arraigo es la circunstancia del domicilio real, no legal ni transitorio, del fiador, dentro del distrito judicial donde el juez ejerce su jurisdicción: artículo 1998 del Código Civil.

—La responsabilidad y arraigo del fiador deben resultar como hechos probados. Cám. Crim., t. 25, p. 186.

—El fiador carece de personería para apelar de la sentencia consentida por el reo ó su defensor. Cám. Crim., t. 55, p. 199.

ARTICULO 382

A los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior, las fianzas deberán anotarse:

ARTÍCULOS 382 Y 383

En el distrito de la Capital, en un registro especial llevado por los funcionarios y en la forma que determine la Cámara de Apelaciones en lo Criminal.

En los Juzgados Seccionales y de los Territorios Nacionales, por los Secretarios de los Jueces y en la forma que lo determine la Suprema Corte.

En el distrito de la Capital (justicia ordinaria), el Registro de Fianzas Carcelarias está á cargo del Registro Público de Comercio.

En cuanto á los demás Juzgados, la Suprema Corte Nacional, en 14 de Marzo de 1889, dictó el siguiente acuerdo: «Que la mencionada anotación se haga por los secretarios de los Juzgados en un registro especial que deberán llevar con sujeción á lo dispuesto por las leyes generales y en lo adaptable por el artículo 9 del reglamento dictado por los Juzgados seccionales, inserto en la página 12, tomo I, de los Fallos del Tribunal».

Por resolución de Marzo 22 de 1900, la Corte declaró: «que esta acordada no ha modificado ni podido modificar las disposiciones relativas á la forma en que se hace constar las cauciones admitidas para la excarcelación, en los casos en que ésta sea procedente; que ella se ha limitado á estatuir, en virtud de lo dispuesto en el artículo 382 del Código, la forma del registro de la fianza constituida, lo que no puede confundirse con la constitución de la misma, en observancia de las reglas establecidas por el citado Código».

ARTÍCULO 383

La caución real podrá constituirse:

1.º Gravando con hipoteca bienes inmuebles.

2.º Depositando la suma de dinero que el Juez determine.





3.º Depositando efectos públicos ú otros papeles de crédito cotizables al precio de su cotización.

En este último caso, la cantidad señalada para la garantía deberá ser aumentada en una cuarta parte más de la determinada.

Siendo hipotecaria la caución (caso del inciso 1.º), desaparece la regla que consagra el artículo 390 sobre escrituras *apud acta*, pues constituyendo un derecho real el gravamen hipotecario, éste debe extenderse por escribano público y con intervención del juez que lo acepta (artículo 3128 del Código Civil).

Tratándose de dineros, efectos públicos, ó papeles de créditos, su depósito ha de hacerse sólo en el Banco de la Nación Argentina, pues así se dispone en la ley creando esta institución.

ARTICULO 384

Los dineros, los efectos públicos ú otros papeles de crédito, depositados de conformidad á lo dispuesto en el artículo anterior, quedan sometidos á un privilegio especial para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la caución.

Obligado accesoriamente el fiador en favor del procesado á los efectos del pago de la pena pecuniaria, daños y perjuicios, multa y costas que puedan imponerse al reo, el dinero y demás efectos gozan, en caso de concurso civil ó comercial del fiador, de privilegio especial que sólo cede al privilegio general que las leyes establecen en algunos casos. (Véanse artículos 3878 y siguientes del Código Civil y 1472 del de Comercio).



ARTÍCULO 385

La caución real puede ser prestada por el procesado ó por un tercero.

En el caso de que la preste el procesado no puede llamarse propiamente fianza. (Véase artículo 1986 del Código Civil).

—La suma depositada por el reo como fianza de excarcelación, sólo puede embargarse por honorarios después de redimida la pena y repuesto el papel sellado. Cám. Crim., t. 92, p. 374.

ARTÍCULO 386

La caución juratoria se admitirá cuando concurren conjuntamente las circunstancias siguientes:

1.º Que el procesado sea notoriamente pobre ó desvalido.

2.º Que la pena del delito no exceda de cuatro meses de arresto ó quinientos pesos de multa.

3.º Que los antecedentes del procesado no den lugar á presumir que burlará la acción de la justicia.

ARTÍCULO 387

Para ser puesto en libertad bajo caución juratoria el procesado prometerá lo siguiente:

1.º Presentarse siempre que sea llamado por el Juez de la causa.

2.º Fijar domicilio, del que no podrá ausentarse sin conocimiento y autorización del Juez que de la causa conozca, bastando su contravención para ordenar nuevamente su prisión.



ARTÍCULO 388

La caución aceptada se extenderá por diligencia en el proceso, previniéndose en ese acto al encausado, la pena en que incurrirá por su trasgresión.

No habiendo delitos con pena cuyo promedio sea de cuatro meses de arresto y siendo raros los casos de encarcelamiento por un delito con multa como la prevista, no se han dado hasta ahora más casos de caución juratoria que en aplicación del artículo 504.

—En la excarcelación del absuelto en primera instancia, cabe caución juratoria. S. C. N., t. 49, p. 47. Cám. Crim., t. 64, p. 307.

—Si la sentencia apelada reconoce agotada la pena, procede la excarcelación bajo caución juratoria. Cám. Crim., t. 64, p. 307.

ARTÍCULO 389

El Ministerio Fiscal, el acusador particular y el Juez, deberán expedirse sucesivamente cada uno de ellos en las peticiones de libertad provisoria bajo caución, dentro de cuarenta y ocho horas.

Al mandarse oír al acusador particular y al ministerio fiscal, es entendiéndose que para contestar la vista, el sumario deberá mantenerse en secreto para el primero (salvo caso de excarcelación en plenario), pues, como se dice en los artículos 376 y 378, para resolverse la incidencia de una excarcelación, deberá estarse sólo al promedio de la pena que corresponda al delito y á la naturaleza de éste (1).

(1) Una Acordada de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital, de 18 de Julio de 1895, dispone que los Secretarios den cuenta del vencimiento del término dentro del cual deban expedirse los Agentes Fiscales, al día siguiente en que hayan debido efectuarlo. Puede consultársela en la nota sobre el artículo 463.

—El auto que ordena al fiscal intervenir antes que el querellante, es inapelable. Cám. Crim., t. 80, p. 10.



ARTÍCULO 390

Las cauciones para decretarse la libertad provisoria, podrán otorgarse apud acta. En el caso de gravamen hipotecario, se ordenará también la inscripción en el registro correspondiente.

Apud acta, es decir, por escritura otorgada ante el mismo juez, en el mismo expediente.

En cuanto á la caución mediante gravamen hipotecario, véase el artículo 388.

ARTÍCULO 391

El inculcado y el fiador deberán, en el mismo acto de prestar la caución, elegir domicilio en el lugar donde tenga su asiento el Juzgado, para las citaciones y notificaciones que ocurrieren en adelante.

Las citaciones y notificaciones que se hagan al inculcado ó su defensor, deben ser hechas también al fiador, cuando aquéllas se relacionen con la obligación de éste.

La fijación del domicilio es condición esencial para el reo y su fiador á los efectos de que proceda la aplicación del artículo 392.

ARTÍCULO 392

Si el procesado no compareciese al llamado del Juez durante el proceso, el Juez decretará inmediatamente or-



den de prisión contra él, y fijará un término al fiador para que lo presente, bajo apercibimiento de hacerse efectiva la garantía.

Si el fiador ó dueño de los bienes dados en la garantía, no presentare al procesado en el término que fija el Juez, se procederá á hacerse efectiva la garantía. El fiador podrá ofrecer á embargo bienes del procesado.

Se estimará que hay incomparecencia á los efectos de este precepto, cuando las notificaciones y citaciones á que se refiere el artículo anterior, se hubieren hecho en forma de ley, es decir, por cédula dejada en el domicilio constituido por el inculpado y su fiador.

El término de la presentación para el reo, es privativo para el juez, sin perjuicio de la orden de prisión contra aquél. Vencido aquel término, empieza desde entonces el momento de hacerse efectiva la fianza.

Véase también el artículo 148.

— Si el fiador no presenta al fiado, debe hacerse efectiva la fianza. Cám. Crim., t. 32, p. 430; t. 88, p. 342 y t. 81, p. 402.

— El fiador no puede pedir la extradición del fiado: debe hacer efectiva la fianza. Cám. Crim., t. 94, p. 13.

— El fiador no puede pedir el remanente de la fianza después de pagadas las costas. Cám. Crim., t. V, p. 166.

ARTÍCULO 393

Si el procesado compareciese ó fuese presentado por el fiador antes de hacerse efectiva la garantía, quedará revocado el auto que ordenó su efectividad, siendo los costos y costas á cargo del fiador.

Repite el inciso 1.º del artículo 396. Los costos y costas deberán abonarse previamente, porque, como ya hemos visto, la fianza comprendía también á ellos.



El artículo presente es aplicable al caso de que el procesado fuese capturado: el artículo parece referirse sólo á los dos casos de presentación espontánea del fiado ó presentación que de él haga el fiador, pero dado lo dispuesto en el artículo 396 inciso 2.º, debe entenderse como lo proponemos. No podría, en efecto, hacerse efectiva la fianza y á la vez hacer cumplir la pena.

Queda entendido que una vez hecha efectiva la fianza, no procede ninguna gestión del fiador: sólo le resta el ejercicio de los derechos contra su fiado, á que se refiere el artículo 397.

—Todas las costas son de cargo del fiador. Cám. Crim., t. 84, p. 314.

ARTÍCULO 394

Para hacer efectiva la obligación personal del fiador, se procederá ejecutivamente. Cuando la caución consista en inmuebles hipotecados, éstos se venderán en público remate con los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles.

Los efectos públicos se enajenarán por corredores de Bolsa ó en su defecto por agentes comerciales.

Se previene aquí el caso de que el fiador personal ó real (artículo 383 incisos 1.º y 3.º), hayan omitido la presentación del reo, previamente ordenada.

Contra el primero, fiador personal, la acción ejecutiva, en caso que no hubiere ofrecido y entregado bienes suficientes de su fiado, ó depositado el importe de la fianza, se seguirá á la manera de una acción civil ejecutiva cualquiera: embargo de bienes del fiador, etc. Contra el segundo: fiador real hipotecario, se procederá igualmente.



como ordena la ley civil, en juicio ejecutivo seguido de oficio, á instancia del acusador si lo hubiere ó del Ministerio Fiscal.

ARTÍCULO 395

El auto que decreta ó deniegue la libertad bajo caución será reformatable de oficio ó á instancia de parte, durante todo el curso de la causa.

El término para apelar de resoluciones sobre excarcelación, es de tres días, y el recurso sólo se otorgará en relación.

Varias serían las causas que pueden ó deben determinar al juez á revocar la concesión anterior de la libertad provisoria del reo: que éste, pendiente el primer proceso, hubiere cometido otro delito (lo que produciría la reiteración), ó que la faz legal del hecho hubiere sufrido modificación en el sentido de que la pena á imponerse haya de ser mayor de la que permite la excarcelación, etc.

En cuanto al segundo párrafo, diremos que las decisiones negando ó concediendo la libertad bajo fianza, son apelables al solo efecto devolutivo, de manera que, declarada la procedencia de la libertad bajo fianza, es el caso de hacerla inmediatamente efectiva una vez otorgada la caución, sin dejarse transcurrir los tres días que el acusador particular ó el Ministerio Fiscal tendrían para apelar. (Véase el artículo 505 y su comentario). Las sentencias que van en contra de esta clara disposición, como la práctica de algunos tribunales en el mismo sentido, son decididamente injustas.

—El auto de excarcelación provisional, apelado, no debe ejecutarse pendiente el recurso. S. C. N., t. 45, p. 65.



—El auto que concede ó deniega la excarcelación bajo fianza, no hace cosa juzgada, ni causa instancia. Cám. Crim., t. 8, p. 85, t. 32, p. 356 y t. 36, p. 93.

—En los juicios criminales la apelación de autos interlocutorios, sólo procede en el efecto devolutivo; el suspensivo se encuentra tácitamente derogado. Cám. Crim., t. 12, p. 233.

—En tanto se resuelve la competencia, no puede encarcelarse al excarcelado ante uno de los jueces. Cám. Crim., t. 78, p. 211.

—Las resoluciones sobre excarcelación bajo fianza no causan instancia. La circunstancia de considerar excarcelable al procesado por razón de la pena que según un juicio *a priori* puede corresponderle, no excluye la posibilidad de un juicio distinto *a fortiori*, ni induce forzosamente á conclusión alguna sobre la competencia del juez. Cám. Crim., t. 98, p. 375.

—Declarada procedente la excarcelación, debe ponerse inmediatamente en libertad al procesado; no obstarán á ella el recurso de apelación que el Ministerio fiscal y el acusador particular hubieren interpuesto contra el auto concediéndola, porque la apelación, en tal caso, debe concederse al sólo efecto devolutivo. (Auto del Juez de Instrucción Dr. D. J. Frías—no publicado—confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal: proceso contra L. B. R., año 1909.)

ARTÍCULO 396

Se cancelará la fianza:

1.º *Cuando el fiador lo pidiera, presentando á la vez al procesado.*

2.º *Cuando fuere constituido en prisión, revocándose el auto de libertad provisoria.*

3.º *Cuando se dictare auto irrevocable de sobreseimiento ó sentencia irrevocable absolutoria, ó cuando siendo condenatoria, se presentase el reo llamado para cumplir la condena.*

4.º *Por muerte del procesado, estando pendiente la causa.*



El primer inciso exige la presentación por el fiador: deberá entenderse por tal la designación de hospital en que se asistiera ó caso análogo que equivalga á la presentación.

El segundo puede referirse al caso de presentación del procesado ó prisión (ó detención) por otro delito, en la misma jurisdicción de aquel en que se concedió la excarcelación.

El tercero se refiere en su parte final á la presentación espontánea, no ya del procesado, sino del condenado. En lo demás, por irrevocabilidad del auto ó sentencia, deberá entenderse que por haber pasado á autoridad de cosa juzgada, por consentimiento de las partes ó su confirmación en grado de apelación. Es decir, que si, p. ej., el juez sobreseyera en un proceso en que el inculcado está excarcelado, la cancelación de la fianza procederá sólo cuando aquella resolución esté ya consentida ó ejecutoriada. La forma del sobreseimiento, es decir, definitivo ó provisorio, no ejerce ninguna influencia á los efectos del modo de considerar el precepto; el definitivo tendría la fuerza de cosa definitivamente juzgada; el provisorio es claro que no, porque permitiría la reapertura del proceso más adelante, pero la ley nos habla sólo de auto irrevocable, no de procesos capaces de ser reabiertos más adelante; de modo que la caución lo mismo se habría extinguido para el fiador, si confirmado en apelación un sobreseimiento provisorio, el acusado al devolverse el proceso al juez *aquo* pidiera su reapertura.

El cuarto explica bien su alcance: la caución se cancelará por muerte del procesado, *estando pendiente la causa*; y es natural, porque la fianza tendía á asegurar las responsabilidades del reo *sólo en el caso de no comparecer al llamado del juez* (artículo 379). Las cauciones en materia criminal son carcelarias por excelencia y no podrán extenderse nunca á responder á las resultas del



juicio, aun falleciendo el procesado, porque la parte objetiva de todo juicio criminal es el castigo del reo, y como es sabido, no podrá haber nunca tal castigo en virtud del conocido principio según el cual no habrá condena sin defensa en el reo. (Véase artículo 2042 del Código Civil).

—La presentación del acusado cancela la fianza. Cám. Crim., t. 33, p. 297.

ARTÍCULO 397

Una vez hecha efectiva la fianza, sólo quedan al fiador contra el procesado las acciones que acuerda el derecho común para su indemnización.

Es decir, las que le acuerdan los artículos 2026 inciso 1.º, 2030 y 2036 del Código Civil: embargo de los bienes del deudor y repetición de lo pagado.

ARTÍCULO 398

Todas las diligencias de libertad provisional bajo caución se substanciarán por cuerda separada.

Al solo fin de no entorpecer la marcha rápida y regular del proceso; además, por tratarse de lo que no tiene conexión especial con el delito, se seguirá por cuerda separada, es decir, en expediente aparte que va comúnmente unido al principal, pero tiene existencia propia, debiendo en él agregarse todas las diligencias, documentos y actuaciones que con la excarcelación tengan atinencia.

TÍTULO DÉCIMONOVENO

De las visitas domiciliarias y pesquisas en los lugares cerrados

ARTÍCULO 399

Los Jueces encargados de la instrucción, á instancia del Ministerio Fiscal ó de oficio, pueden practicar pesquisas ó investigaciones, sea en la habitación ó domicilio del procesado, ó en cualquier otro lugar, cuando existan indicios suficientes para presumir que allí se encuentra el presunto delincuente ó que puedan hallarse objetos útiles para el descubrimiento y comprobación de la verdad.

El allanamiento de domicilio es acto de tal gravedad como excepción al principio constitucional de su inviolabilidad (artículo 18 Constitución Nacional), que sólo la autoridad judicial—y concretamente el juez que instruye el sumario en que la diligencia se hace precisa—puede decretarlo, y esto *en auto fundado* (artículo 403), en el que se expresen sus motivos.

La policía (en particular la Comisaría de Investigaciones en otra época), ha pretendido gozar de tal prerrogativa y de hecho parece que algún juez se la otorgó, si no dan-





do órdenes de allanamiento en blanco, por lo menos emañándolas de sumarios que nada tenían que ver con el allanamiento que se decretaba, y que si daba resultado, aprovechaba á la pesquisa para la que realmente se había dado, dejándose á un lado si no daba resultado alguno. Recuerdo de aquella antigua errada pretensión, es la facultad otorgada al Jefe de Policía para decretar allanamientos de domicilio (por su sola voluntad, que bastará con que se formule por escrito, ni siquiera se le exige fundada) para perseguir juegos de azar (artículo 9 de la ley 4097. Con un Jefe poco discreto, queda de hecho derogada la garantía constitucional y resultan inútiles todas las precauciones con que en el presente título se limita la facultad de allanar domicilios, aun tratándose de jueces que por razones de cerebración, de mecanismo procesal, y de sentido jurídico, se presume que sólo la usarán en casos estrictamente necesarios.

Véase también nuestro comentario al artículo 363, donde también se habla de la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio.

—El registro del domicilio del acusado debe practicarlo el mismo juez; no puede delegar esta diligencia en su secretario. En el caso, el juez que así lo ordenó, fué amonestado por el Superior, Cám. Crim., t. 23, p. 272.

—No procede orden de allanamiento para prender á los autores de simples contravenciones, por ser éstas de exclusiva competencia de la policía. Cada jurisdicción debe tener sus medios propios de cumplir los fines de la ley y la policía no puede acudir á la justicia correccional para reprimir las contravenciones. Cám. Crim., t. 75, p. 23.

ARTÍCULO 400

No podrán hacerse pesquisas domiciliarias sino desde que sale hasta que se pone el sol.



Se exceptúan de esta disposición:

1.º Las pesquisas que deban practicarse en edificios ó lugares públicos.

2.º Las que no admitan demora en su ejecución sin gran peligro.

3.º En los casos determinados en el artículo 189 y otros de análoga naturaleza.

4.º En los casos en que el interesado ó su representante preste su consentimiento expresa ó tácitamente.

En atención á los trastornos y molestias de mil género que una visita del juez ó su enviado causaría en un hogar durante las horas que la naturaleza dedica al reposo, la ley limita el tiempo para ella á las horas del día claro.

El motivo de la primera excepción es fácil concebirlo, pues poca ó ninguna molestia se causaría en edificios ó lugares donde la estadía es eventual y libre para todo el mundo: negocios de bebidas, teatros, etc.

El de la segunda también: «que no admitan demora en su ejecución sin gran peligro» dice la ley; es decir, que la apreciación de urgencia y peligro, sólo podrá determinarla cada caso concreto, siendo difícil prever los que pueden presentarse, pero debiendo siempre constar la urgencia.

En el tercero tendríamos los casos de *infraganti* delito, que demandarían una intervención inmediata de la autoridad para evitarlos ó detenerlos y el de la aprehensión del reo.

En el cuarto caso la conformidad del dueño ó encargado del domicilio dispensaría la prohibición general. La conformidad tácita consistirá en la no oposición del dueño á la acción judicial; la expresa podrá constar por escrito ó probarse en otra forma.

—Basta que un empleado público, fuera de los casos permitidos, penetre al domicilio contra la voluntad del morador, sin orden escrita de autoridad competente, para que quede consumado el delito de abuso de autoridad y su autor sea pasible de pena. Cám. Criminal, t. 47, p. 276.



ARTÍCULO 401

Se reputan edificios ó lugares públicos, para la observancia de lo dispuesto en este título:

1.º Los que estuvieren destinados á cualquier servicio oficial, militar ó civil, de la Nación, de la Provincia ó del Municipio.

2.º Los que estuvieren destinados á cualquier establecimiento de reunión ó recreo, fueren ó no lícitos.

3.º Cualquier otro edificio ó lugar cerrado que no esté destinado á la habitación ó residencia particular.

En resumen, todo lugar abierto, y de los cerrados, el que no esté destinado á residencia particular. En España se ha discutido, aplicando una disposición igual, si un director de periódico que tiene una habitación en las oficinas de éste, le da el carácter de lugar cerrado considerado como público á los efectos del allanamiento. En el Senado se discutió largamente el punto entre el ministro Romero Robledo y el senador Rojo Arias, dominando la teoría del primero, favorable al allanamiento; pero en los tribunales se ha mantenido el principio contrario, favorable á la inviolabilidad del domicilio, como seguramente predominaría aquí. Permítase á uno de los autores de este libro, que fué directamente interesado en la cuestión—pues fué su domicilio el allanado—que la haya recordado en este lugar.



ARTÍCULO 402

Para practicar pesquisas en los templos ó lugares religiosos, y en los edificios públicos de la Nación, de las Provincias ó de los Municipios, deberá darse aviso de atención á las personas á cuyo cargo estuvieren.

El hecho de autorizarse para el momento que más convenga la visita de un establecimiento público, no exime al funcionario que la realice, de la obligación de prevenirlo antes á las personas á cuyo cargo estuviere.

Los conventos no son los lugares religiosos á que alude el artículo, sino habitaciones que para ser allanadas serán consideradas domicilios privados.

ARTÍCULO 403

La resolución en que el Juez ordene la entrada y registro en el domicilio de un particular, será siempre fundada.

Concuerda con el 399.

La determinación del juez sobre entrada y registro, deberá fundarse en la existencia de los indicios á que alude aquel artículo. Dada la urgencia de la medida, no puede ser objeto del recurso de apelación, pero, si resultare que no había «los indicios suficientes», podrá llegar el caso de responsabilidad civil para el juez que la hubiere dictado.

—Para el allanamiento del domicilio, así como para el auto de prisión, se requiere *causa probable apoyada por juramento ó afirmación*, salvo los casos de *infraganti* delito. Ambas garantías afectan directamente la libertad personal. Cám. Crim., t. 13, p. 252.

—El juez está obligado á fundar la resolución por la cual ordena el allanamiento de un domicilio. Cám. Crim., t. 57, p. 312.



ARTÍCULO 404

El Juez expresará determinadamente en todo auto de entrada ó registro, el edificio ó lugar cerrado que ha de ser su objeto, si ha de tener lugar solamente de día y la autoridad ó funcionario que lo hubiere de practicar.

Importando la visita del edificio de un tercero la violación momentánea del domicilio, la ley deja al arbitrio del juez, salvo los casos especiales de premura, ó de lugares ó establecimientos públicos, la elección del momento en que deberá realizarse, su objeto y el sitio; y el determinarlo así, es para asegurar á los interesados las reclamaciones á que pudieran tener derecho si la orden de entrada y registro se hubiera dispuesto en violación de los casos en que sólo puede autorizarse.

—Las irregularidades que afecten á la orden de allanamiento y la forma en que se haya cumplido, no anulan el procedimiento si existe constatada la existencia del delito. Cám. Crim., t. 59, p. 311.

ARTÍCULO 405

Si la pesquisa hubiera de hacerse en el domicilio de un particular, se notificará á éste la orden de allanamiento, ó á su encargado, si aquél no fuere habido á la primera diligencia de su busca.

Si no fuere tampoco habido el encargado, se hará la notificación á cualquiera otra persona, mayor de edad, que se hallare en el domicilio, prefiriendo para esto á los individuos de la familia del interesado.

Si no se hallare á nadie, se hará esto constar por diligencia, que se extenderá con asistencia de dos vecinos.



Este artículo supone al juez constituido en persona en el domicilio motivo del registro, ó á otro funcionario enviado en su lugar.

Siendo el mismo juez, la notificación deberá hacerse en el proceso; cuando fuere su delegado, éste deberá practicarla lo mismo, previamente al registro. En ambos casos, las personas notificadas y requeridas, serán en el orden que se indica, pero la falta de todas ó alguna de ellas no hará postergable la requisita para otro momento y se recurrirá entonces á vecinos que intervendrán como testigos, firmando en tal concepto el acta.

ARTÍCULO 406

Desde el momento en que el Juez acordare la pesquisa en cualquier lugar, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del procesado ó la sustracción de los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles ó cualquier otra cosa que hubiera de ser objeto del registro.

En vista del intervalo de tiempo que puede mediar entre el momento de la resolución y de la ejecución de una pesquisa domiciliaria, bien sea para la aprehensión del reo, ó bien para la de secuestro de efectos, y siempre con el fin de asegurar el éxito de aquélla, se disponen esas medidas de vigilancia que el juez indicará en cada caso cómo deberán llevarse á cabo.

El juez puede encargar de esas medidas de vigilancia á extraños á su juzgado, la policía en primer lugar, pero una y otro deben entender que se trata de una limitación á una garantía constitucional de interpretación restrictiva por tanto, y que requiere gran discreción en los funcionarios.



ARTÍCULO 407

El registro se hará á presencia del interesado ó de la persona á quien encomendare sus veces.

Si aquél no fuese habido ó no quisiere concurrir ni nombrar representante, se practicará á presencia de un individuo de su familia, mayor de edad.

Si no lo hubiere, se hará á presencia de dos testigos vecinos.

El artículo 405 supone el registro en el domicilio de un extraño al hecho; el que nos ocupa, en el del *interesado*; éste puede ser el reo ó quien haga sus veces, es decir, quien sea su representante, previamente elegido por aquél, si se negare á concurrir personalmente.

Se infiere de esta disposición, que la orden de registro antes debe ser notificada al interesado (el reo) para que haga ó no uso de los derechos que se le acuerdan, con lo que ningún peligro puede resultar si se han adoptado las medidas de vigilancia del artículo 406.

La ausencia ó fuga del reo, su inasistencia voluntaria, y la falta de miembros de su familia, determinarán la aplicación del inciso tercero del artículo.

ARTICULO 408

Practicada la visita ó pesquisa, el Juez hará extender acta en la cual se consignará el resultado de la diligencia, haciendo constar todas las circunstancias que puedan tener alguna importancia en la causa.

La diligencia será firmada por los concurrentes, y si alguien no lo hiciere se expondrá la razón.

La diligencia de registro, como cualquiera de las otras que la ley autoriza, debe tener su eco en el proceso en



forma escrita, y el acta que se labre, deberá consignar su resultado circunstanciadamente, es decir, que si se han secuestrado efectos, éstos deberán ser descriptos de tal manera que en cualquier momento pueda identificárseles. La firma de los concurrentes, juez, secretario, interesados ó testigos en su caso, deberá también aparecer al pie del acta.

ARTÍCULO 409

El Juez ó funcionario que practique el registro, recogerá los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles y cualquier otra cosa que hubiere encontrado, si esto fuere necesario para el resultado del sumario.

Los libros y papeles que se recogiesen, serán foliados, sellados y rubricados en todas sus hojas útiles, por el Juez, Secretario y el interesado ó sus representantes.

Los objetos mencionados serán inventariados y colocados en lugar seguro á disposición del Juzgado.

Es el mismo procedimiento que se aplica para la prueba instrumental. Lo del *lugar seguro* de que se habla, sólo será cuando no sea posible por razones de volumen ó causas parecidas, la acumulación á los autos de los libros ó documentos secuestrados, en cuyo caso el inventario deberá hacerse en la misma acta relativa á la diligencia del secuestro.

ARTÍCULO 410

Si para apreciar la necesidad de recoger las cosas que se hubiesen encontrado en la pesquisa, fuere nece-

sario algún reconocimiento pericial, se acordará en el acto por el Juez en la forma establecida en el título «Del examen pericial».

Concuerda con los artículos 322 y siguientes. Allí se dice cuál es la *forma establecida*: que sean dos por lo menos en casos de importancia; que presten juramento, que no tengan inhabilidades legales, etc.



TÍTULO VIGÉSIMO

De los embargos

ARTÍCULO 411

Junto con la orden de prisión preventiva, el Juez decretará el embargo de bienes suficientes del procesado para garantizar la pena pecuniaria y la efectividad de sus responsabilidades civiles.

El procesado podrá substituir este embargo por una caución personal ó real.

Tiene su fuente en el artículo 1077 del Código Civil: «Todo delito—dice—hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare á otra persona». «El delito, como los contratos—dice Obarrio—es fuente de obligaciones. El delincuente acepta el deber de indemnizar el perjuicio que causa. Esta obligación importa para él una deuda que grava sus bienes».

Todo delito, pues, lleva aparejada como consecuencia natural del mismo, además de la pena corporal que haya de corresponderle á su autor por ley, otra accesoria de orden pecuniario que el procesado habrá de satisfacer una vez que la justicia criminal haya pronunciado sentencia firme pasada á autoridad de cosa juzgada, declarándolo culpable (artículo 1101 del Código Civil).





El acto judicial de la prisión preventiva, establece, desde luego, sobre el reo, además de una supuesta responsabilidad criminal, la existencia de otra civil en favor de la parte ofendida y de aquellas que también hubieren resultado damnificadas por efecto del delito.

No determinándose que el embargo haya de decretarse mediante requerimiento de los ofendidos ó damnificados, procederá entonces dictarlo de oficio, tanto más cuanto él tiende, por otra parte, á garantir las costas que puedan imponerse, aparte del resarcimiento de daños y perjuicios.

Por lo que hace al *quantum* ó valor de los bienes que han de embargarse, es punto que debe resolverse con el criterio de las disposiciones pertinentes del Código Civil: artículos 1084 al 1095, según los casos; esto es, teniendo en cuenta la gravedad del delito y sus probables consecuencias ó resultado, con respecto á los terceros damnificados.

Por otra parte, para la aplicación del precepto que nos ocupa, no debe olvidarse el del artículo 1081 del Código Civil, según el cual la obligación de reparar los daños causados por un delito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros ó cómplices.

En cuanto á la substitución del embargo por la caución que puede ofrecer el procesado, este Código sigue el sistema que para los deudores simples establece el artículo 474 del Código de Procedimientos en lo Civil; y será de admitirla, siempre que la caución ofrezca la misma garantía desde el punto de vista de la responsabilidad, que la que se admite en los casos de excarcelación bajo fianza, esto es, que el fiador, tratándose de caución personal, sea persona capaz, de responsabilidad y arraigo.

Debe advertirse que el embargo se llevará siempre adelante aunque el auto (que es el de prisión preventiva)



hubiese sido recurrido, puesto que siendo tal apelación de concederse en un solo efecto (artículo 505), el recurso no puede detener la marcha del procedimiento.

Véase también el artículo 65 del Código Penal (se halla transcripto, con otros, como comentario al artículo 561 del presente Código).

—Decretada la prisión preventiva procede el embargo. Siendo varios los procesados, la solidaridad implica solamente que debe embargarse á uno ó á todos la cantidad suficiente. S. C. N., t. 50, p. 192.

—El procesado puede pedir se sustituya el embargo general de sus bienes con el particular de los que ofrece, siendo bastantes, y presentando títulos que á juicio del juzgado demuestren que son de su propiedad. S. C. N., t. 53, p. 362.

—No procede el embargo sin requerimiento previo al pago, sino en el caso en que viviendo el ejecutado en el domicilio denunciado, no se hallase presente. Cám. Civil, t. 49, ps. 129, 175 y 189.

—No solamente los actos deliberadamente ejecutados con discernimiento, libertad y voluntad para causar daños, pueden dar acción á la indemnización, sino también los que son ocasionados por culpa ó negligencia. El daño puede sobrevenir de un hecho positivo y de una omisión. Cám. Crim., t. 1, p. 551.

—El dinero secuestrado á los reos no puede ser devuelto hasta la terminación de la causa, ni aun al abogado defensor en pago de honorarios. Cám. Crim., t. 11, p. 51.

—Los bienes embargados al procesado, no pueden afectarse al pago de honorarios de la defensa. Cám. Crim., t. 21, p. 320.

—El juez de instrucción es competente para entender en las tercerías de dominio sobre bienes embargados por su orden en juicios criminales. Cám. Crim., t. 30, p. 107.

—El dinero encontrado en poder del reo y depositado como de su pertenencia, responde á las costas del juicio, aun cuando no haya sido embargado oportunamente. Cám. Crim., t. 30, p. 109.

—El espíritu de las disposiciones contenidas en los artículos 178, inc. 4.º, 378, 379 y 411, demuestra que en procedimiento criminal no es necesario petición de parte para que el juez asegure las responsabilidades pecuniarias que puedan pesar sobre los procesados. Cám. Crim., t. 40, p. 303.



—Los jueces civiles no pueden, aun cuando se deduzca acción reivindicatoria, embargar los objetos cuya entrega se ha ordenado en el juicio criminal. Cám. Crim., t. 71, p. 173.

—El procesado puede sustituir el embargo de bienes con fianza personal cuya admisibilidad es potestativa del juzgado. Cám. Crim., t. 72, p. 113.

—El embargo preventivo contra los bienes del acusado, debe dictarse aún cuando haya presentado fianza para su excarcelación. Cám. Crim., t. 79, p. 426.

—No debe hacerse lugar á la entrega del dinero secuestrado, si la información producida no justifica la propiedad. Cám. Crim., t. 80, p. 5.

—Sobreseído el proceso no procede el embargo de fondos del acusado ante el juez que conoció de la causa, aunque la parte acusadora pida su retención anunciando una futura reclamación civil contra el procesado. Cám. Crim., t. 80, p. 9.

ARTÍCULO 412

La fijación de la cantidad por la cual deberá trabarse el embargo, será hecha por el Juez en el mismo auto en que lo decreta.

Véase lo dicho en la página 37 del presente tomo, párrafo tercero.

ARTÍCULO 413

El embargo deberá hacerse sobre bienes señalados por el procesado, ó en su defecto por su mujer, hijos ú otras personas que se encuentren en su domicilio en el acto de practicarse la diligencia.

No señalando bienes el procesado ó las personas indicadas por no encontrarse ó negarse á hacerlo, se procederá á trabar embargo sobre bienes que se reputen de propiedad del primero y cuyo valor alcance á cubrir la cantidad determinada por el Juez.



El embargo se hará en el orden y forma establecida en el Código de Procedimientos Civiles, respecto de las ejecuciones.

La clase de los bienes á embargarse, deberá ser en el orden que establece el artículo 476 del Código de Procedimientos en lo Civil (258 de la Ley de Procedimientos en lo Federal), y en la forma que expresan las demás disposiciones del mismo Código, artículos 477 al 81 (260 y siguientes de dicha ley federal).

—La cantidad por la que ha sido trabado el embargo, puede ampliarse ó reducirse según el resultado ulterior de la causa. S. C. N., t. 41, p. 368.

—El embargo trabado para garantir el resultado del juicio criminal iniciado por diversos cargos, de los cuales algunos han sido eliminados del proceso, debe reducirse en su *quantum* á los cargos no eliminados. S. C. N., t. 46, p. 210.

—El procesado puede siempre sustituir los bienes embargados en la designación del juez, por otros bienes que él señale ó por caución personal ó real. S. C. N., t. 41, p. 368.

—Sólo procede la inhibición después de diligenciado (negativamente) el mandamiento de embargo. Cám. Crim., t. 42, p. 207.

—La excepción del art. 480 del Cód. de Proc. en lo Civil, es privilegio á favor del deudor, por lo cual si es él quien da los bienes exceptuados á embargo, no puede luego invocar aquel precepto. Cám. Civil, t. 43, p. 228.

—El dinero y títulos secuestrados al reo, no pueden serle devueltos sin consentimiento de los damnificados. Cám. Crim., t. 65, p. 149.

—No puede entregarse al procesado los fondos embargados, aun cuando haya sido excarcelado bajo fianza. Cám. Crim., t. 65, p. 274.

—Debe justificar el acusado la propiedad de los bienes secuestrados, aun cuando no exista reclamo de tercero. Cám. Crim., t. 93, p. 438.

—Los muebles de comedor están comprendidos entre los exceptuados del embargo. Cám. Crim., t. 75, p. 6.



ARTÍCULO 414

Cuando el alguacil ó funcionario encargado de trabar el embargo, creyere que los bienes señalados no son suficientes, embargará además los que considere necesarios, sujetándose á lo prescripto en el artículo anterior.

Es decir, que la apreciación del valor será potestativa del alguacil (oficial de justicia, según la L. de O. de los Tribunales).

—Para obtener una sustitución de embargo, el procesado debe manifestar los bienes que ofrece, y en caso de disconformidad por parte del acusador, debe procederse á su valuación por peritos, de acuerdo con el art. 336 del Cód. de Proc. en lo Criminal. S. C. N., t. 53, p. 243.

—Siendo el oficial de justicia un delegado del juez cuya providencia va á cumplir, comete desacato el que lo injurie ó amenace al llenar sus funciones. Cám. Crim., t. 15, p. 375.

ARTÍCULO 415

Si los bienes embargados fueren muebles, se entregarán en depósito, bajo inventario, por el encargado de hacer el embargo, al vecino que designare al efecto.

El depositario firmará la diligencia de recibo, obligándose á conservar los bienes á disposición del Juez que conozca de la causa, y en caso contrario á pagar la cantidad que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que pudiere incurrir.

El depositario podrá recoger y conservar en su poder los bienes embargados, ó dejarlos, bajo su responsabilidad, en el domicilio del procesado.

Al facultarse al oficial de justicia la elección del depositario en la persona de un vecino, deberá conceptuar como



tal á aquel con domicilio real más inmediato al del procesado y su familia. La elección, dado lo demás que se exige, deberá hacerla en aquel que á su juicio ofrezca mayor seguridad y responsabilidad, en razón á la facultad que á su vez se da al depositario para conservar las cosas por sí mismo ó dejarlas en poder del reo.

—El acusador que no está conforme con los bienes ofrecidos á embargo, tiene derecho de nombrar perito por su parte para que los valúe. S. C. N., t. 55, p. 248.

—El depositario judicial no puede ejercer el derecho de retención. Cám. Crim., t. 83, p. 34.

ARTÍCULO 416

Verificado el embargo, se requerirá al procesado para que manifieste si opta porque se enajenen los bienes embargados ó porque se conserven en depósito y administración.

Si optare por la enajenación, se procederá á la venta en remate, hasta cubrir la cantidad señalada, que se depositará en el Banco Nacional.

Si optare por el depósito y administración, cuando se trate de bienes muebles, se nombrará por el Juez un depositario administrador de responsabilidad, que recibirá los bienes bajo inventario y se obligará á rendir al juzgado cuenta justificada de sus gastos y productos cuando se le mande.

Entiéndase el inciso segundo como refiriéndose al Banco de la Nación.

Como el cargo de depositario no es obligatorio ni gratuito, salvo renuncia de aquél, esta disposición sólo tiende á que el reo consulte sus conveniencias económicas.

—Los bienes embargados al acusado pueden venderse contra su voluntad si son de fácil deterioro. Cám. Crim., t. 96, p. 320.



ARTÍCULO 417

Los bienes embargados se enajenarán aun contra la voluntad del procesado y la opinión del depositario administrador, siempre que los gastos de administración y conservación, excedan de los productos que dieren, á menos que el pago de dichos gastos se asegure por el procesado ú otra persona á su nombre.

La ley, que vela por lo que pueda interesar no sólo al procesado, sino también á los damnificados, deja al arbitrio del juez, á pesar de la opinión del primero ó del depositario administrador que se haya nombrado, resolver la venta de las cosas embargadas, á menos que se produzca el hecho á que se refiere el artículo en su última parte.

—El producto de la venta de bienes del reo debe ser puesto á disposición del juez de la causa, quedando á salvo los derechos que sobre ellos puedan tener las partes. Cám. Crim., t. 21.

ARTÍCULO 418

El embargo de bienes inmuebles, no comprende el de sus frutos ó rentas, salvo el caso en que el Juez lo determine expresamente.

Este embargo deberá anotarse en los Registros respectivos.

La excepción, que se fundará expresamente por el juez, atenderá á las necesidades del reo consigo mismo, las de su familia, la posición pecuniaria del ofendido y tantas otras que no es posible prever.

—El embargo de alquileres hace procedente el nombramiento de administrador judicial. Cám. Civil, t. 40, p. 51.



ARTÍCULO 419

Cuando se trabare embargo sobre sementeras ó plantaciones, el juez designará la forma de su administración.

En todos los casos, el procesado tiene derecho á designar una persona de su confianza, como interventor.

ARTÍCULO 420

El Juez ordenará que el administrador dé fianza del buen cumplimiento del cargo, cuando no fuera de notoria responsabilidad.

ARTÍCULO 421

El administrador tendrá derecho á una retribución.

Para determinar esta retribución, se atenderá á la importancia de los bienes, á los cuidados y responsabilidades que la administración imponga y á la manera cómo haya sido desempeñado el encargo por el administrador.

Nunca podrá exceder, sin embargo, de un diez por ciento sobre el producto líquido de los bienes administrados.

ARTÍCULO 422

Si el embargo consistiere en pensiones ó sueldos, se librará oficio á quien hubiere de satisfacerlos, para que retenga á disposición del Juzgado la cuarta parte de lo que corresponde percibir.

**ARTÍCULO 423**

Todas las diligencias sobre fianzas y embargos se instruirán en pieza separada, no admitiéndose las apelaciones que se interpongan sino en el efecto devolutivo.

Véase sobre el último lo que hemos dicho para el artículo 411.

—No es apelable el auto, por el cual el juez manda tasar los bienes ofrecidos por el procesado á efecto de asegurar con su embargo las responsabilidades del juicio. S. C. N., t. 51, p. 257.

—El poseedor á quien se devuelven los objetos secuestrados, no está obligado á pagar los gastos de depósito. Cám. Crim., t. 63, p. 426.

ARTÍCULO 424

Las tercerías que se deduzcan serán substanciadas en la forma que establece el Código de Procedimientos Civiles.

Véanse los artículos 529 al 534 del Código de Procedimientos en lo Civil y 301 y siguientes de la ley federal de procedimientos.

—El juez de instrucción es competente para entender en las tercerías deducidas sobre bienes embargados por su orden en juicios criminales. Cám. Crim., t. 30, p. 107.

—Procede la absolución de posiciones en el juicio de tercería, aun cuando ésta se tramite ante la jurisdicción criminal (porque se sigue el procedimiento civil). Cám. Crim., t. 35 p. 219.

TÍTULO VIGÉSIMOPRIMERO

De la responsabilidad de terceras personas

ARTÍCULO 425

Los Jueces decretarán el embargo de bienes pertenecientes á personas extrañas á la ejecución del delito, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

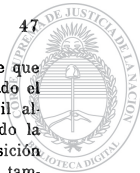
1.º Que esas personas se encuentren sometidas á la responsabilidad civil del delito, con arreglo á disposiciones legales.

2.º Que la parte damnificada lo haya solicitado.

La responsabilidad civil de terceras personas ajenas á la perpetración del delito, sólo deberá ser considerada como tal, siempre que medie requerimiento expreso de la parte damnificada ó que deba ser tenida como tal, y cuando de cada caso particular ó por una presunción de disposiciones del Código Civil, resulte acreditada ó deba suponerse.

Esta disposición rige, generalmente, para los hechos que el Código Penal denomina delitos por culpa ó imprudencia, y está inspirada en el precepto del artículo 1113 del Código Civil, según el cual «la obligación del que ha causado un daño, se extiende á los daños que causaren





los que están bajo su dependencia, ó por las cosas de que se sirve, ó que tiene á su cuidado». Y hemos empleado el término *generalmente*, porque la responsabilidad civil alcanza también por excepción á terceros, aun faltando la condición de dependencia á que se refiere la disposición antes transcrita, en otros casos en que el delito es también producto de un deliberado pensamiento criminal, v. gr., en aquellos hechos en que las cosas que fueron objeto de un robo, se hallaren en poder de un tercero de buena fe y que la persona desposeída de esos efectos tenga sobre ellos el derecho de reivindicarlos que consagra el artículo 2765 del Código Civil, que dice: «El que ha perdido, ó á quien se ha robado una cosa mueble, puede reivindicarla aunque se halle en un tercer poseedor de buena fe».

Al efecto debe recordarse:

1.º Sólo se aplica la calidad de cosa robada á la substracción fraudulenta de la cosa ajena y no al abuso de confianza, violación de un depósito, engaño ó estafa: artículo 2766 de aquel Código. Por lo cual, la acción reivindicatoria no es admisible contra el poseedor de buena fe que hubiese pagado el valor á la persona á quien la cosa se hubiese confiado para servirse de ella, para guardarla ó para cualquier otro objeto: artículo 2767 del mismo Código.

2.º Que el que reivindica una cosa mueble robada de un tercer poseedor de buena fe, no está obligado á reembolsarle el precio que por ella hubiere pagado, á no ser que la cosa se hubiese vendido con otras iguales, en una venta pública ó en casa de venta de objetos semejantes: artículo 2768.

3.º Que el que hubiere adquirido una cosa robada—fuera del caso del artículo anterior—no puede, por vender la cosa en remate, mejorar su posesión ni empeorar la del propietario autorizado á reivindicarla: artículo 2769.



4.º Que los anuncios de hurtos ó de pérdidas, no bastan para hacer presumir de mala fe al poseedor de cosas hurtadas que las adquirió después de los anuncios: artículo 2770.

5.º Que será considerado poseedor de mala fe el que compró la cosa hurtada á persona sospechosa que no acostumbraba á vender cosas semejantes ó que no tenía capacidad ó medios para adquirirlas: artículo 2771.

—No puede decretarse embargo preventivo contra el padre del menor acusado, si su responsabilidad civil no está plenamente demostrada. Cám. Crim., t. 73, p. 232.

—Si la acusación se limitó á la responsabilidad penal del acusado (sin hacerle cargo de los daños y perjuicios emergentes del delito que se le impute), no pueden intervenir en el proceso los terceros responsables civilmente. Cám. Crim., t. V, p. 91.

ARTÍCULO 426

Regirán, respecto de esta clase de embargos, las disposiciones del título anterior.

Dado que en los efectos legales resulta identidad en la responsabilidad civil del reo y la del tercero responsable civilmente, la ley marca el mismo procedimiento, sin otra diferencia que, para embargar los bienes del último, deberá expresarse por el ejecutante cuáles son ellos ó en qué consisten, si el requerido de embargo negare sus bienes ó no abonara la suma fijada por el juez.

ARTÍCULO 427

Las personas á quienes pertenecieren los bienes embargados ó que para libertarse del embargo hubieren

prestado caución, serán oídas, aun durante el sumario, sobre las excepciones ó defensas que alegaren para demostrar su irresponsabilidad.

Primero el embargo, después las excepciones ó defensas; es el criterio de todo juicio ejecutivo.

La ley concibe que la supuesta responsabilidad civil de un tercero puede ser aparente y no real; de ahí que le dé ingreso al ejecutado como parte interesada en el proceso, pero al solo efecto de demostrarlo así.

Las excepciones pueden ser varias, y como aquí ya se trataría de una contienda civil, el procedimiento sería también el que determina la ley procesal civil.

Aunque se silencia cómo se procedería si el tercero responsable quisiera liberarse del embargo denunciando bienes de la persona autora directa del daño, consideramos que la intervención que se le acuerda alcanza hasta dicho fin, atento lo prescripto en el artículo 1123 del Código Civil, pues una vez embargados los bienes del procesado, no tendría ya razón de ser la acción de embargo contra el tercero, si aquéllos, por su valor, cubrieran el importe de la suma fijada para la indemnización de los daños.

Durante el plenario, las personas aludidas serán oídas en la oportunidad del artículo 463.

ARTÍCULO 428

Este incidente, como todos los que se refieren á bienes afectados ó comprometidos por el embargo, correrá por cuerda separada y los autos que en él se dictasen serán sólo apelables en el efecto devolutivo.

Dada la conexión que existe entre la acción criminal misma y el embargo, pues de la decisión de la pri-



mera dependerá la suerte del último, se ordena que el incidente de embargo corra por separado, pero agregado. En realidad, lo que se busca en todo proceso, es que su substanciación se haga libre de cualquiera otra cuestión que aunque él la haya originado no le sea esencial para su desenvolvimiento.

En cuanto á la forma de la apelación, ella procede en un solo efecto, que es la regla general del art. 505.



TÍTULO VIGÉSIMOSEGUNDO

DE LA CONCLUSIÓN DEL SUMARIO Y DEL SOBRESEIMIENTO

CAPÍTULO 1

De la conclusión del sumario

ARTÍCULO 429

Practicadas las diligencias que el Juez sumariante haya creído necesarias para la averiguación del hecho punible y de sus autores, cómplices y encubridores, dictará un auto declarando cerrado el sumario, y lo elevará bajo recibo al Juez de sentencia, cuando no fuere el mismo, con todas las piezas de convicción.

Concuerda con el artículo 178.

Como enseña el doctor Canale, «la instrucción no debe olvidar el propósito final del proceso, esto es, llegar al descubrimiento de la verdad, á aquel grado de verdad que sea humanamente posible en el orden práctico».

En práctica judicial, á la resolución que responde al precepto que tratamos, se le llama «auto cerrando el sumario»; efectivamente, lo clausura en el hecho material de que el juez de instrucción no intervendrá más en él, pero, en cambio, importa abrirlo en el sentido de que





sus constancias no serán desde entonces un misterio ó cosa ignorada para las partes.

El auto en cuestión, con tal motivo, es el que permitirá estimar la labor del juez que tuvo á su cargo el esclarecimiento del delito, su pericia en el difícil arte de la investigación, su criterio para la reunión de todos aquellos elementos que han de ser necesarios para dar por establecida aquella verdad humanamente posible de que nos habla el nombrado profesor.

Un proceso deficiente en datos, podrá, en muchos casos, hasta determinar la impunidad de un delito; por eso, es preciso que contenga, no solamente aquellos que el juez haya creído necesarios para producir su convencimiento íntimo sobre la existencia del delito y la culpabilidad de su autor, sino todos los que sean capaces de producir el mismo convencimiento, á través de la simple lectura del proceso, en los que más adelante hayan de intervenir en el mismo para juzgarlo definitivamente; deberá procurar que se destaque la prueba plena, clara, convincente, aun tratándose de simples circunstancias, porque si bien la semiplena prueba y los indicios vehementes de culpabilidad permiten la prisión preventiva del reo, no bastan, en cambio, muchas veces, para servir de fundamento á una sentencia condenatoria. El sumario, una vez concluido, debe ser algo así como la imagen del hecho mismo y el de todas sus circunstancias; debe obrar á la manera de un espejo en el que irá reflejado el hecho mismo, representándolo con nitidez, con tal precisión, que haga que en la mente de los que más adelante hayan de estudiarlo y resolverlo, se fije aquella imagen como si estuviera viéndose el hecho en su vida material y real. En condiciones contrarias, el sumario sería una viva mentira, una nota de descrédito para la institución y para el mismo juez, pues los jueces de instrucción prácticos, avezados, no ignoran que la probabilidad de reunir los ele-



mentos de juicio va disminuyendo en proporción al mayor tiempo que transcurra desde aquel en que el delito se consumó: es lo que ocurriría si la conversión del estado de sumario á plenario se hiciera prematuramente; y es lo que el precepto preinserto tiende impedir, al determinar que se cerrará el sumario una vez practicadas las diligencias que el juez haya creído necesarias, es decir, las indispensables, las que serán de utilidad conocer más adelante para la apreciación objetiva y subjetiva del delito considerado en sí mismo y de la responsabilidad criminal del autor.

«Un proceso que no presenta bien confirmado el cuerpo del delito, dudosa y obscura la causa determinante—dice Manduca—opuesta, contradictoria, deficiente la prueba por falta de eliminación y ahogada por la falta de proligidad y poca claridad de las declaraciones, mal practicada la de descargo, incompleto por no tener documentos indispensables para la graduación de la pena y adoleciendo de otros defectos que no debieran existir en un sumario, no puede dar por resultado el triunfo de la verdad y de la justicia». En términos parecidos se expresan Mittermaier y Hélie.

Véase también nuestro comentario sobre el art. 457.

* * *

Declarándose cerrado el sumario como dice el presente artículo, y *elevado* al juez de sentencia (la expresión es falsa, pues los juzgados de instrucción están en el mismo plano jerárquico que los de sentencia), ¿podrá reabrirse por el mismo juez de instrucción?

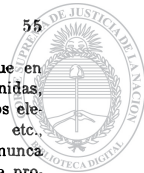
Desde luego, es un principio general en materia procesal, que el procedimiento no debe nunca retrogradar, salvo caso de nulidad expresamente declarada. Si el juzgado de instrucción—ó cualquier otro funcionario, aun po-



licial,—*elevado* ya el sumario al juez de sentencia, entra en posesión de elementos que puedan influir en el proceso, deberá remitirlos á este último sin tardanza y sin formar por su parte expediente de ninguna clase. Allí recibirán la colocación que permita el estado del procedimiento: el artículo 493 indica el extremo límite al cual se podrá llegar y aun la posibilidad de su agregación para *mejor proveer*.

Podrá darse el caso de que estando el proceso en plenario, al juzgado de instrucción se sometiera el conocimiento del mismo asunto en cuanto apareciera en él un nuevo procesado, antes ignorado, en calidad de coautor, cómplice ó encubridor. Es evidente que deberá entonces abrirse nuevo sumario—con la base de los elementos reunidos en el anterior, cuyo testimonio deberá recabarse—porque al nuevo delincuente el funcionario policial ó el juez de instrucción, no podría ciertamente—sino con violación de reglas esenciales de procedimiento—ponerlo á disposición inmediata del juez de sentencia, que nada tendría que hacer con él. En tal caso, terminado el nuevo sumario, deberá pasarse el preso y efectos al juez de sentencia para acomodar un procedimiento al otro: nada se opondría á que se diera vista y corrieran los demás trámites propios del plenario. Mientras no llegare el límite extremo del artículo 493, el juez de sentencia podría casar los dos expedientes que llegarían de tal modo á sentencia unificados y susceptibles de una sola resolución final que comprendiese el caso en toda su complejidad.

La materia de acumulación de procesos no ha sido tratada en el presente Código, y cuando el caso se produzca, los jueces deben extremar su atención para conciliar los dos intereses opuestos: el *social* que requiere la averiguación íntegra, total y completa de los delitos, y el *individual* de los que por haber sido detenidos primero no pueden esperar indefinidamente la solución de nuevos



sumarios. En el caso de tener que proceder así, que en rigor sólo cabrá cuando haya nuevas personas detenidas, pues no habiéndolas bastará la remisión de los nuevos elementos, averiguaciones, declaraciones, documentos, etc., todo sin forma de sumario, y no retrogradando nunca el procedimiento, en el caso, repetimos, de tener que procederse á incoar el nuevo sumario que más tarde habrá de injertarse, si alcanza, en el plenario,—un aviso de atención del juez instructor al de sentencia, puede ser de gran utilidad.

En resumen, creemos que dentro del procedimiento del presente Código no chocaría con ninguna de sus disposiciones la práctica de las siguientes reglas:

Primera. En el caso de que estando ya en plenario el proceso, el juez de instrucción recibiera directamente ó por intermedio de la policía, documentos, efectos ó diligencias referentes á aquel proceso, los remitirá sin dilación y sin formar expediente, al juez de sentencia. Este último les dará la colocación oportuna en el proceso, corriendo los traslados ó dando la vista ó el conocimiento á que hubiere lugar, siempre teniendo en cuenta el principio de la no retrogradación del procedimiento.

Segunda. Si estando el proceso en plenario, el juez de instrucción iniciara un sumario que se refiera al mismo objeto de aquel, pero comprendiendo á una nueva persona complicada y detenida, proseguirá la instrucción y terminada la pasará al juez de sentencia que entendía ya en el primer proceso. El juez de sentencia dará al nuevo proceso la tramitación de ley, siempre antes de la oportunidad del artículo 493.

Tercera. Solamente, cuando por haberse terminado toda discusión, según el artículo 493, no quepa la acumulación de los dos procesos, será el caso de resolverlos con absoluta independencia, pronunciándose la sentencia que co-



responda en el primero y dándosele al otro los trámites que por la ley sean pertinentes. No obstará, por supuesto, á que cuando el último á su vez esté en situación de resolución definitiva, se le incorpore el primero—que probablemente habrá ya terminado—como antecedente ilustrativo y conexo que será del mismo.

—La resolución que da por terminado el sumario, no hace cosa juzgada, pues el agente fiscal puede pedir ampliación del sumario ante el juez de sentencia antes de entablar la acusación. Cám. Crim., t. 13, p. 107.

—Debe elevarse la causa á plenario si existe comprobado el delito y la persona del autor: las excepciones ó defensas deben juzgarse por el juez de sentencia. Cám. Crim., t. 18, p. 379.

—Debe elevarse la causa á plenario, si constando el delito, existen indicios contra determinados acusados, aun cuando se dicte sobreseimiento provisional contra otros y aun definitivo para los que no aparezcan inculcados. Cám. Crim., t. 52, p. 432.

—Debe elevarse la causa á plenario si existe semiplena prueba que hace improcedente el sobreseimiento provisional. Cám. Crim., t. 78, p. 253.

—El auto que ordena la elevación de la causa á plenario es inapelable. Cám. Crim., t. 81, p. 240.

—Si existen presunciones graves sobre la culpabilidad del procesado, debe elevarse la causa á plenario. Cám. Crim., t. 93, p. 294.

—Si encontrándose el proceso en el Juzgado de Sentencia, el Juez de Instrucción volviera á necesitarlo con motivo de la aprehensión de un prófugo afectado en el mismo proceso, debe serle enviado en estado original; en caso tal, no puede exijírsele al Juez de Instrucción que mande sacar un testimonio del mismo. Cám. Crim., resol. de 19 de Abril de 1910, proceso contra Enrique Gomez por hurto.

ARTÍCULO 430

Si en cualquier estado del sumario, resultare que el hecho á que se refiere sólo reviste el carácter de un delito correccional, el Juez sumariante ordenará que el proceso con los demás antecedentes sea pasado al



Juez competente para el conocimiento de esta especie de causas.

Una constante jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, ha establecido que los jueces de instrucción solamente se declararán incompetentes, cuando considerándose que sea de carácter correccional el delito en que intervengan, éste resulte de un modo indudable; es decir, que si el caso no fuera manifiestamente del conocimiento de la jurisdicción del juez correccional, el de instrucción conservará su juzgamiento.

Así se ha interpretado esta disposición de la ley, porque en nada perjudica al procesado, puesto que no importa alterar la pena que pueda corresponder al delito ni desconocer el principio del artículo 13.

La aplicación de este artículo debe ser siempre posterior al dictamen que antes se pedirá al ministerio fiscal, como parte necesaria que es en cuestiones de competencia y jurisdicción.

—Si el Ministerio Fiscal consiente el auto que resuelve la incompetencia, la falta de audiencia anterior, no anula la resolución. Cám. Crim., t. 99, p. 20.

ARTÍCULO 431

Del auto mandando remitir el proceso al Juez Correccional, podrá apelarse por el Ministerio Fiscal ó por el querellante particular.

El recurso será admitido en ambos efectos, pero sólo en relación.

Este precepto constituye la única excepción á la regla según la cual todas las apelaciones que se interpongan en estado de sumario se concederán al solo efecto



devolutivo; de tal suerte que, en el caso de dicho precepto, la jurisdicción del juez cesará á partir del momento en que declare su incompetencia.

CAPÍTULO II

Del sobreseimiento

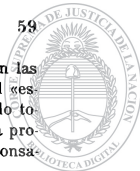
ARTÍCULO 432

En cualquier estado del sumario, el Juez podrá decretar el sobreseimiento.

Sobreseer (de *super sedere*, sentarse encima) significa *desistir, cesar*; es decir, así como en el caso del artículo 429 el juez elevará el proceso al estado de plenario cuando estime que hay delito y reo punible, el precepto de que ahora tratamos lo faculta también para cesar en su procedimiento *en cualquier estado del sumario*, lo cual deberá entenderse que procederá cuando el sobreseimiento se imponga como consecuencia natural de las siguientes causas:

- 1.^a Que sea evidente la inexistencia del delito.
- 2.^a Que los elementos probatorios reunidos no acrediten suficientemente la existencia del delito.
- 3.^a Que el hecho acusado y probado no constituya un delito del fuero criminal.
- 4.^a Que resulte manifiesta é incuestionable la irresponsabilidad del reo.
- 5.^a Que, probado el delito, falten indicaciones bastantes para determinar á sus autores.

En las situaciones 1.^a y 3.^a, que resultan negativas respecto á la existencia del delito, corresponderá entonces



el sobreseimiento en cualquier estado del sumario; en las otras, 2.^a, 4.^a y 5.^a, que son afirmativas ó dudosas, el «estado del sumario» será cuando el juez hubiere agotado todos los medios de información á su alcance, bien para probar claramente el delito, bien la evidente falta de responsabilidad en el reo, bien para determinar quién es él.

—El juez de instrucción puede dictar auto de sobreseimiento en cualquier estado de la causa. S. C. N., t. 90, p. 248.

—La sentencia de sobreseimiento debe contener la relación de la causa y fundamento de sus conclusiones. Cám. Crim., t. 24, p. 269.

ARTICULO 433

El sobreseimiento será definitivo ó provisional, total ó parcial.

La primera clasificación es de calidad, la segunda es de cantidad. La primera se refiere á los efectos del sobreseimiento, que, ó bien terminan el procedimiento, ó bien lo dejan en suspenso; la segunda se refiere á las personas afectadas por el sobreseimiento, que, ó son todas las involucradas en el proceso ó son alguna ó algunas. De ahí que, con los cuatro términos, se puedan hacer distintas combinaciones: es decir, que el sobreseimiento definitivo puede ser total y parcial y el provisorio también; visto de otro modo: el total puede ser definitivo ó provisorio y el parcial lo mismo. En una palabra, cabe un auto en que para un procesado se eleve la causa á ple-nario, para otro se sobresea en definitiva, y para otro se sobresea provisionalmente.

ARTICULO 434

Será definitivo:

1.º Cuando resulte con evidencia que el delito no ha sido perpetrado.



2.º Cuando el hecho probado no constituyere delito.

3.º Cuando aparecieren de un modo indudable exentos de responsabilidad criminal los procesados.

El inciso 1.º se distingue por su carácter objetivo, es decir, que se refiere á la falta de delito, á su inexistencia, á que habiendo sido él supuesto ó creído, aparece luego que no existe como hecho real; sería, p. ej.: el de la imputación de un homicidio contra determinada persona, la cual apareciendo luego, destruye la afirmación delictuosa. La *evidencia*, pues, en un caso así, impone sin vacilar el sobreseimiento definitivo.

El inciso 2.º lo caracteriza la existencia del hecho, probado y acreditado en el proceso, pero que considerado bajo la faz legal, resulta no constituir delito del fuero criminal.

Ejemplos:

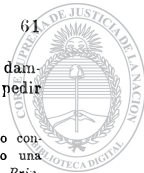
a) Que la violación ó incumplimiento de un contrato civil, la parte acusadora los hubiera calificado de delito.

b) El de un caso de muerte violenta, que logra demostrarse era el resultado de un suicidio ó de un fatal accidente no imputable á tercero.

c) El de un rapto en que por razón de la edad de la raptada y por haber mediado su consentimiento, el hecho probado escapa á toda punibilidad.

El inciso 3.º se distingue á su vez de los dos anteriores por ser de orden subjetivo. Prescinde del delito considerándose probado, y envuelve sólo al reo: á su indudable falta de responsabilidad criminal, que puede nacer de cualquiera de las situaciones que se enumeran en el artículo 81 del Código Penal: haber realizado el reo el delito en estado de beodez completa é involuntaria, de sonambulismo, mediante el derecho de legítima defensa, etc.

Por este inciso 3.º se desenlazará la dificultad creada por la muerte del procesado: subsistirán, en tal caso, las



responsabilidades civiles que deberá hacer efectivas el damnificado ante la jurisdicción civil, á la cual deberá pedir que se transfieran los bienes embargados.

—Toda infracción se compone de dos elementos: un hecho contrario á la ley penal y la culpabilidad del agente; faltando una ú otra de estas condiciones esenciales, no hay delito: (Haus. *Principios Generales*, núm. 559). Cám. Crim., t. 23, p. 192.

—La declaración sobre el carácter doloso de la querella, sólo procede en la sentencia definitiva, pero no en autos de sobreseimiento. Cám. Crim., t. 47, p. 140.

—Justificada ante el juez de instrucción la legítima defensa, procede sobreseimiento definitivo. Cám. Crim., t. 57, p. 227.

—Las circunstancias eximentes de pena pueden ser tomadas en consideración por el juez de instrucción. Cám. Crim., t. 58, p. 242.

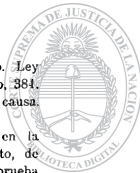
—El auto de sobreseimiento no puede declarar el carácter calumnioso de la acusación. Cám. Crim., t. 95, p. 72.

—El pago de una deuda por medio de un cheque incobrable no importa defraudación. «El acreedor—dice la Cámara—queda en las mismas condiciones anteriores, con más la ventaja de tener un documento que comprueba la existencia del crédito, que antes no tenía. ¿En qué puede consistir entónces la defraudación imputada? ¿En no haber recibido el pago comprometido? El hecho de no pagar no importa defraudación ni delito alguno. ¿En haber otorgado recibo de cancelación? Tampoco, porque á pesar del recibo extendido, el derecho del acreedor permanece el mismo sin que sufra lo más mínimo por la presentación del recibo».

«Importa defraudación—declara la Cámara en otro caso—cuando la entrega de un cheque ha sido en pago de mercaderías, y no existen en el banco fondos á disposición del girante». Cám. Crim., t. 99 p. 431 y t. 98 p. 128, respectivamente.

—El depósito á que refiere el art. 203, inc. 6.º del C. Penal, no es otro que el llamado regular, en que el depositante conserva la propiedad de la misma cosa depositada; no se refiere al irregular ó mútuo, en cuyos contratos solo se tiene acción para pedir la restitución de otras tantas cosas de la misma especie y calidad. (En el caso, reputándose irregular el depósito, se declaró no haber delito. Cám. Crim., t. 99, p. 327 y 426.

—No siendo el suicidio legislado como delito en el Código Penal, no es posible responsabilizar (*como reo de culpa ó de imprudencia*), al autor de una acción ú omisión que pudiera tener una relación de causalidad más ó menos remota con él. Cám. Crim., t. 99, p. 85.



—Procede el sobreseimiento por la muerte del procesado. Ley 15, Tit. 22, Part. 3.º, y 23, tit. 1.º. Part. 7.º Cám. Crim., t. I, p. 384.

—Ocurrido el fallecimiento del reo, debe sobreseerse la causa. Cám. Crim., t. V, p. 200.

No hay delito y corresponde sobreseimiento definitivo, en la falsa declaración hecha por un padre en el acto de nacimiento, de ser legítimos los hijos, siendo adulterinos, porque el acto prueba el nacimiento pero no la calidad de la persona. Cám. Crim., t. V, p. 252.

—(Consultense otros casos en el artículo 200, también aplicables al 434).

ARTÍCULO 435

Será provisional:

1.º Cuando los medios de justificación acumulados en el proceso, no sean suficientes para demostrar la perpetración del delito.

2.º Cuando comprobado el hecho criminal, no aparezcan indicaciones ó indicios bastantes para determinar á sus autores, cómplices ó encubridores.

Se refiere, como el anterior, al delito y al reo, pero bajo otro aspecto.

El inciso 1.º tiene su punto de contacto con el 1.º del artículo 434; en éste, la característica es la evidencia de la falta de delito; en aquél, la duda sobre su perpetración.

El inciso 2.º obra también á la manera del inciso 3.º del artículo 434, pues, como éste, comprende al delito y al reo. Su diferencia proviene de que los indicios no aparecen, á la inversa del 434, suficientes para determinar al autor. Constituye, pues, este precepto, el término medio entre el sobreseimiento definitivo y la prisión preventiva, cuando habiéndose procesado á persona determinada, su falta absoluta de responsabilidad criminal, ó, en cambio, los indicios suficientes de ella, no resultan justificados.



Manduca, enumera como causas más frecuentes de esto último: la falta de moralidad de los testigos, el carácter astuto del delincuente, la naturaleza del delito y alguna vez el poco celo ó la ignorancia del funcionario.

—No debe sobreseerse en una causa criminal, en razón de no resultar del sumario quienes son los delincuentes, cuando existen aun diligencias que practicar para adelantarlos. S. C. N., t. 23, p. 88.

—El sobreseimiento provisional no hace cosa juzgada. Cám. Crim., t. 19, p. 125.

—El sobreseimiento provisional basta para devolver al absuelto el dinero que posea al ser detenido. Cám. Crim., t. 25, p. 112.

—La falta de prueba plena sobre el delito, no basta para dictar sobreseimiento: debe continuarse el sumario. Cám. Crim., t. 52, p. 537.

—La reapertura de un sumario sobreseído provisionalmente, es inapelable para el acusado. Cám. Crim., t. 54, p. 252.

—Los efectos del sobreseimiento provisional solo se extinguen por prescripción. Cám. Crim., t. 59, p. 305.

—No procede sobreseimiento definitivo si la existencia del delito depende de una cuestión prejudicial; debe rechazarse la que-
rella. Cám. Crim., t. 83, p. 117.

—No puede admitirse al inculcado cómplice, información sobre su honorabilidad, para convertir en definitivo el sobreseimiento provisional. Cám. Crim., t. 87, p. 176.

—El sobreseimiento provisional no basta para decretar se inutilicen las medidas de identificación que la ley permite á la policía. Cám. Crim., t. 93, p. 88.

ARTÍCULO 436

El sobreseimiento definitivo es irrevocable, dejando cerrado el juicio definitivamente, en los dos primeros casos del artículo 434, de una manera absoluta, y en el tercer caso, respecto de los procesados ó procesado á cuyo favor se decretare.

El sobreseimiento provisional, deja el juicio abierto hasta la aparición de nuevos datos ó comprobantes, salvo el caso de prescripción.



La irrevocabilidad es la consecuencia lógica del resultado evidente de la inexistencia del delito, de que el hecho probado no hubiera constituido un acto punible, ó de la irresponsabilidad indudable del que había sido procesado en virtud de un hecho probado de carácter delictuoso. Pero como la ley supone los casos en que, además del reo que resultó exento de responsabilidad, puedan existir otros que no siendo conocidos la tengan, ó que conocidos puedan resultar más adelante teniéndola, dispone á la vez el sobreseimiento provisional para éstos.

Los nuevos *datos ó comprobantes* á que se refiere la segunda parte, pueden ser tanto respecto del hecho como de la culpabilidad de los procesados, pues al referirse el artículo al sobreseimiento provisional, comprende los dos casos del artículo 435.

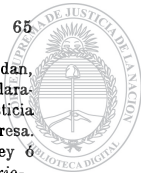
—En el caso de sobreseimiento provisorio apelado por el procesado y consentido por el ministerio fiscal, no cabe revocarlo para que siga el sumario, aunque el tribunal aprecie que debiera proseguirse. Cám. Crim., t. 41.

—El agente fiscal debe pedir las diligencias que crea necesarias; no basta que indique que la parte querellante las pedirá para reabrir el sumario. Cám. Crim., t. 49, p. 260.

ARTÍCULO 437

En los casos de sobreseimiento definitivo, deberá hacerse la declaración de que la formación del sumario, no perjudica el buen nombre y honor de los procesados.

Esta declaración debe ser expresamente consignada y no citada bajo el número del precepto como algunas veces se hace, porque el reo no ha de andar con el Código en sus manos para que las personas á las que quiera ó



deba hacer conocer el fallo que tuvo á su favor puedan, sólo con él á la vista, saber en qué consiste la declaración del artículo 437. Es un desagravio que la justicia debe con la misma franqueza con que la ley lo expresa. Es curiosa la forma con que á veces se burla la ley ó se quita fuerza á la declaración: *la formación del sumario—se dice—no perjudica el buen nombre y honor de que gozara ó pudiese gozar el procesado*. Esto es poco serio: la declaración, tal como la fija el artículo, no aumentará el honor del que no lo tenga: bastará con hacerla lisa y llanamente en todos los casos.

ARTÍCULO 438

El sobreseimiento es total, cuando se decreta para todos los procesados.

Es parcial, cuando se limita á alguno ó algunos de los procesados.

ARTÍCULO 439

Si procediere el sobreseimiento parcial en la causa, resultando completa inculpabilidad de un procesado, se sobreseerá definitivamente respecto de éste.

Envuelven los dos artículos la misma idea del 436: el segundo es la aplicación escueta del inciso 3.º del 434.

ARTÍCULO 440

Decretado el sobreseimiento total, se mandará que se archiven los autos y las piezas de convicción que



no tuvieren dueño conocido, después de haberse practicado las diligencias necesarias para la ejecución de lo mandado.

Se entiende cuando el sobreseimiento es total y definitivo, porque pudiera ser total para los procesados y para ellos definitivo y seguir abierta la causa: 2.º inciso del artículo 435.

Por lo demás, el archivo del proceso y de las piezas de convicción que no tengan dueño conocido, no sucederá en el caso de la segunda parte del artículo 436: sobreseimiento provisional.

Las diligencias necesarias para la ejecución de lo mandado, no son otras que las medidas que con motivo del sobreseimiento definitivo hubiere acordado el juez: en primer término la libertad inmediata del procesado.

ARTÍCULO 441

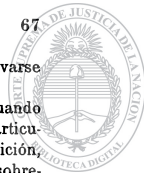
Antes de decretarse el sobreseimiento serán oídos el acusador particular y el Ministerio Fiscal, quienes deberán expedirse dentro de tercero día.

El auto que ordene el sobreseimiento será apelable en relación.

El término para apelar será el de tres días.

Creemos que el beneficio de la vista debería alcanzar al reo ó su defensor, pues siendo la igualdad la base de las leyes de procedimientos, negarle al reo aquel mismo derecho importa desconocer dicho principio de igualdad, que es también consagrado, en otros términos, por este Código en el artículo 203.

El término para evacuar dicha vista, debe entenderse



que es perentorio dada la celeridad con que debe llevarse el proceso en estado de sumario (1).

Se ha dicho siempre y se sostiene aún, que cuando el juez manda correr vista del proceso al acusador particular y al ministerio fiscal, á los efectos de esta disposición, ese solo acto anuncia ó hace presumir que va á sobreseer é importa un sobreseimiento *á priori*. Es un error, y tanto más grande, cuanto que el juez ignora entonces qué es lo que aquéllos pedirán como conveniente á su derecho; p. ej., si fuera la práctica de nuevas diligencias ó las ampliaciones de otras que hayan de servir para ilustrar mejor el proceso.

No determinándose la forma en que se concederá el recurso de apelación, debe entenderse, de acuerdo con lo que dispone el artículo 505, que será al efecto devolutivo; es decir, que el auto de sobreseimiento se cumplirá en seguida de dictado, en el sentido de la libertad del reo si estuviere privado de ella, que es lo que también determina el artículo 440 al referirse á *la ejecución de lo mandado*.

—La omisión de la vista al acusador, al dictarse el auto de sobreseimiento provisional, no es causa de nulidad. Cám. Crim., t. 13, p. 357.

—Adolece de nulidad el sobreseimiento dictado sin audiencia del acusador particular y del ministerio fiscal. Cám. Crim., t. 15, p. 211.

—El agente fiscal está obligado á relacionar los antecedentes del proceso y fundar sus peticiones. Cám. Crim., t. 24, p. 269.

—No procede el sobreseimiento si el delito es acusable de oficio, aun cuando desista el acusador. Cám. Crim., t. 31, p. 214.

—Revocado el auto de sobreseimiento, el inferior debe decretar la prisión preventiva del acusado. Cám. Crim., t. 65, p. 288.

—La supresión de la audiencia al querellante antes de resolver la acusación, vicia de nulidad el sobreseimiento. Cám. Crim., t. 46, p. 33; t. 52, p. 414; t. 66, p. 105 y t. 95, p. 122.

(1) Véase la Acordada que publicamos al ocuparnos del art. 463.



—Sólo puede darse vista del sumario el querellante, en la oportunidad que la ley determina. Cám. Crim., t. 69, p. 319.

—La vista, que la ley confiere al querellante y ministerio fiscal, termina el secreto del sumario. Cám. Crim., t. 75, ps. 168 y 326.

—La audiencia que se confiere al acusador particular, según el art. 441, no lo es tal en el sentido gramatical sino jurídico de la voz; es decir, que cuando se le corra vista, se le permitirá el estudio de las constancias del proceso. Cám. Crim., t. 77, p. 58.

—El hecho de asumir ambas partes el carácter de acusador y acusado, no impide que se le dé la vista que la ley acuerda al acusador, antes de terminar el sumario. Cám. Crim., t. 77, p. 58.

—El auto que manda se oiga al fiscal antes que al acusador particular, es inapelable. Cám. Crim., t. 80, p. 10.

—Atento lo que dispone el artículo 442 del C. de P. en lo Criminal, no es prorrogable el término para que el querellante evacúe la vista. Cám. Crim., t. 80, p. 68.

—El Código no ha incluido en la audiencia al sumariado ni á su defensor, y refiriéndose expresamente al acusador particular y al ministerio fiscal, debe concluirse, en buena lógica, que lo ha excluido: *inclusio unius, exclusio alterius*. Cám. Crim., t. 93, p. 84.

—El auto que declara provisional el sobreseimiento, no causa agravio al ministerio fiscal que lo ha pedido definitivo. Cám. Crim., t. 97, p. 75.

ARTICULO 442

El sumario no deberá durar más de treinta días en la Capital y sesenta en las demás secciones, no computándose en dichos términos las demoras por articulaciones maliciosas del procesado ó por diligenciamiento de oficios ó exhortos, cuando el retardo fuese independiente de la voluntad del Juzgado.

Transcurridos dichos términos, el Juez sobreseerá ó elevará la causa á plenario, conforme á las disposiciones de este Código.

Concuerda con el artículo 206, que da reglas para el caso de que el sumario no termine dentro de los treinta días (en la capital).

De modo, que por sólo el transcurso del término de treinta días (de sesenta en los territorios), no termina el período de instrucción: por los motivos que expone el presente artículo ó por otros, puede el juez seguir con la instrucción. La Cámara, en su oportunidad (artículo 206), puede fijar un término, y transcurrido, llegar el caso del artículo 695: imposición de multa.

Pero las demoras á que se refiere el precepto, articulaciones maliciosas y exhortos no diligenciados, serán siempre una excusa para el juez, aun en el caso de que se tocare el límite extremo de los dos años, que son el máximo normal de todo juicio según el artículo 699.



TÍTULO VIGÉSIMOTERCERO

De los artículos de previo y especial pronunciamiento

ARTÍCULO 443

Las únicas excepciones que podrán oponerse en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento, serán las siguientes:

- 1.º Falta de jurisdicción.*
- 2.º Falta de personalidad en el acusador ó sus representantes.*
- 3.º Falta de acción en el mismo.*
- 4.º Cosa juzgada sobre los mismos hechos que dan origen al procedimiento.*
- 5.º Amnistía ó indulto.*
- 6.º Litis-pendencia.*
- 7.º Condonación ó perdón del ofendido en los delitos que no dan lugar á la acción pública.*
- 8.º Prescripción de la acción ó de la pena.*

Estas cuestiones tienen de común con las prejudiciales, que reclaman una resolución anterior á la del asunto principal, pero se diferencian:





1.º En que las del presente artículo, como incidentes que son de un asunto principal, no tienen valor propio ni existencia independiente; en cambio, las prejudiciales los tienen y son materia de procedimiento separado é independiente.

2.º En las prejudiciales, después de resueltas, continúa el inculpado sometido al proceso hasta que en él se dicte sentencia condenándole ó absolviéndole; en las del presente artículo, el juez, al resolverlas, puede sobreseer desde luego, quedando libre y exento de toda persecución el inculpado.

3.º Las de este artículo deben ser decididas siempre por el mismo tribunal que conociere del asunto principal, mientras, las prejudiciales, se resuelven en otra jurisdicción: la civil.

Todas las excepciones que comprende el presente artículo son de orden público. No será menester, pues, que sólo oponiéndolas las partes, hayan de prosperar: advertidas de oficio, el juez debe resolverlas, porque todas descansan en el derecho público, dado el carácter social de los asuntos criminales.

Tratémoslas en el orden que se presentan:

Falta de jurisdicción. En esta excepción se niega al juez el derecho de entender en el asunto por no llegar hasta él las facultades que le atribuye la ley. Recordando éstas tal como se describen en los artículos 19 y siguientes del presente Código, aparecen con claridad las distintas maneras de producirse la excepción presente, desde la distinta clase de jurisdicción por la especialidad del juzgado ó tribunal, hasta la mayor ó menor extensión de sus facultades por razón de la cantidad de pena, etc.

Tóngase presente que esta excepción es una de las dos formas con que pueden plantearse las cuestiones de competencia. Véase art. 45 y siguientes, y en particular, el 69.



—La irresponsabilidad que en juicio de carácter penal invoca á su favor el demandado, por no ser el acusador persona de existencia visible, no es cuestión de jurisdicción, sino de fondo sobre procedencia ó improcedencia de la acción deducida. S. C. N., t. 83, p. 150.

—La incompetencia fundada en la inexistencia del delito, no puede ser resuelta como excepción dilatoria. Cám. Crim., t. 45, p. 153.

—La excepción de incompetencia fundada en no ser un delito el hecho acusado, debe rechazarse como dilatoria. Cám. Crim., t. 52, p. 37 y t. 57, p. 192.

—Corresponde la excepción si el delito ha sido cometido fuera de la jurisdicción del juzgado, aunque los delitos medios comprendan á su jurisdicción. Cám. Crim., t. 77, p. 47.

—No procede la excepción de incompetencia por sostener el procesado la existencia de una cuestión civil. Cám. Crim., t. V., p. 96.

Falta de personalidad en el acusador ó sus representantes. En el primero de éstos, ó sea en el acusador, sólo significa la carencia de aptitud legal que pueda llevar consigo en virtud de alguna de las circunstancias prohibitivas que la ley establece para que ciertas personas puedan estar por sí mismas en juicio. En cuanto á sus representantes, la falta de responsabilidad puede producir la un mandato insuficiente en aquel que lo invoque ó la misma insuficiencia legal inherente á la persona que lo ha otorgado.

Resultarían, pues, dos clases de falta de personalidad: directa é indirecta.

Directa, es decir, propia á la insuficiencia legal en el particularmente ofendido; indirecta, cuando recaiga sobre sus representantes. Las directas serían, entre otras: *a)* que una mujer casada fuera acusadora (con carácter de parte querellante, no denunciante) sin la venia de su esposo, ó, en su caso, 'de juez competente; *b)* que se tratara de un menor de veintidós años no emancipado; de un sordo-mudo ó de un demente, etc. Las indirectas, es decir, las que recaigan sobre el representante, podrían ser, entre muchas otras: *a)* la insuficiencia del poder que le



otorgó el mandante; *b*) que estuviera representando á un ausente declarado tal en juicio; *c*) que el mandante hubiere fallecido; *d*) que siendo tutores ó curadores, estuvieran en el caso del artículo 61 del Código Civil; *e*) que siendo hombre casado en pleito de divorcio con su mujer, quisiera asumir la representación de ésta por delito contra ella, etc. En resumen: la falta de personalidad no es otra cosa que la insuficiencia legal de que pueden estar afectadas ciertas personas, que aun siendo parte legítima en juicio, esto es, damnificadas ú ofendidas, no pueden intervenir, sin embargo, en el proceso de un modo personal y directo; y en el caso de sus representantes, aquella que les inhabilita como tales por carencia de mandato ó de facultades dentro del que se les ha conferido. (Véase el artículo 14, su comentario y jurisprudencia).

—El representante legal de los herederos del querellante, tiene personería para continuar la acción sin necesidad de poder especial. Cám. Crim., t. 15, p. 47.

—El poder general para los pleitos no es suficiente para instaurar acciones criminales, aun cuando contenga facultad especial para intervenir en causas criminales. Se necesita poder especial para acusar un hecho determinado: cada delito constituye una especialidad, crea un espíritu diverso de individuo á individuo y se acusa ó no se acusa según las circunstancias. No puede aplicarse á esto, por analogía, la ley civil que trata de poderes generales para negocios. Cám. Crim., t. 18, p. 213.

—La excepción de falta de personería puede ser opuesta en el plenario antes de contestar la acusación, aun cuando en el sumario se haya admitido sin discusión. Cám. Crim., t. 35, p. 240.

—La excepción de falta de personería es improcedente si se funda en la falta de derecho. Cám. Crim., t. 55, p. 275.

—Dadas las responsabilidades á cargo del acusador, su voluntad de acusar debe constar de una manera positiva y auténtica en el poder que para acusar confiera á un tercero. Cám. Crim., t. 62, p. 207.

—El acusador de una herencia vacante tiene personería para intervenir en los juicios criminales formados por la desaparición de los bienes de la testamentaria. Cám. Crim., t. 78, p. 140.



—La menor emancipada tiene personería para querellarse contra el esposo sin necesidad de tutor especial. Cám. Crim., t. 85, p. 425.

—El querellante á quien se desconoce personería, tiene derecho á justificar su estado civil ante el juez de la querella. Cám. Crim., t. 88, p. 409.

--El menor emancipado puede asumir el carácter de querellante sin intervención del Ministerio de Menores. Cám. Crim., t. 99, p. 6.

—Procede la excepción de falta de personería contra el cesionario de un crédito en la causa por quiebra al deudor. Cám. Crim., t. 46, p. 180 y t. 5, p. 114.

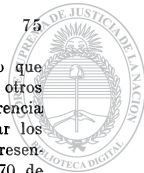
—La mujer casada en pleito de divorcio con su esposo, puede deducir acciones criminales en forma de querella por delitos en su perjuicio, sin la vénia de su esposo ni del juez en lo civil. (Fallo no publicado, de Diciembre de 1909 de la Cám. Crim.).

—El derecho de un menor emancipado para intervenir en juicio criminal, con la calidad de querellante, está consagrado por el art. 133 del Código Civil. Cám. Crim., t. 99, p. 6.

—La falta de personalidad en el acusador solo puede referirse á la capacidad civil para estar en juicio, nó al derecho que se demanda. «Es evidente—dice el Fiscal Dr. E. Quesada—que si se juzgara sobre el derecho mismo que se discute, no se dilataría la entrada al juicio, sinó que se resolvería definitivamente sobre el fondo de la cuestión». Cám. Crim., 99, p. 372.

—La circunstancia de que un Juez de Paz ejerza la procuración, podrá ser motivo para su recusación, pero no para limitar le el derecho que las leyes generales consagran para poder ser mandatario. La disposición de la Ley 8.ª Tít. 5.ª, Partida 3.ª, no es aplicable á los miembros de la Justicia de Paz cuando litigan ante distinta jurisdicción. Cám. Crim., t. 40, p. 303 á 305.

Falta de acción en el mismo. Esta excepción es confundida á menudo con la de falta de personalidad, no obstante ser esencialmente diversa: la falta de personalidad entraña, como hemos dicho, la carencia de aptitud legal en la persona damnificada; la falta de acción sólo se atiene á desconocer en la persona el derecho para estar legítimamente en juicio por no afectarle legalmente la causa (delito) que lo motive. De manera, que lo único que puede admitirse como discusión en esta clase de incidentes, es el derecho que tenga una persona para intervenir en ca-



lidad de parte acusadora en un proceso, que es lo que constituiría el ejercicio de la acción de su parte; en otros términos: la falta de acción no es otra que la carencia de derecho que solo tienen para acusar ó querellar los particularmente ofendidos ó damnificados ó sus representantes legales, consagrado por los artículos 14 y 170 de este Código. La falta de acción, pues, sólo puede ser determinada por la falta de aquel derecho, no porque el hecho acusado no pueda importar un delito, pues esto es lo que el proceso principal está llamado á resolver: si fuera también de admitirse la falta de acción como medio para demostrar que el hecho acusado no reviste caracteres de delito, resultaría una dualidad de juicios, algo así como una *litis pendencia* ante el mismo juez: el proceso principal y el incidente.

Como ejemplos de falta de acción, podemos presentar los siguientes: que el ofendido ó damnificado hubiere renunciado expresamente á la acción civil á que le daba derecho el delito, ó hecho convenios con el reo sobre los pagos del daño (artículo 1097 del Código Civil), ó que el mismo hubiere cedido sus derechos á la acción criminal, porque sólo son inherentes á su persona é intransferibles en lo que á la parte objetiva del proceso se refieren (artículo 1445 del Código citado), ó que el que promueve la acción en nombre de la víctima, v. gr., en un caso de homicidio, no sea su heredero forzoso (artículo 3592 del Código citado y 14 del presente), ó que fallecido el damnificado, sus herederos forzosos no se presenten á sostener la acción, si estaba ya iniciada, dentro del término á que se refiere el artículo 175, ó que el marido sin comprobación previa de su estado de casado, interviniera como acusador de delito contra su esposa, etc.

—La excepción de falta de acción no puede oponerse al ministerio fiscal sino en las causas en que la ley reserva á los damnificados ó interesados la iniciativa de la acusación. S. C. N., t. 46, p. 36.



—Los herederos carecen de acción para deducir querrela por delitos cometidos contra su causante. Cám. Crim., t. 15, p. 436.

—Los empleados de una repartición pública (la Policía) á la que en general se imputen delitos, tienen personería individual ó colectivamente para acusar por calumnia. No es necesario que la acción se deduzca á nombre de la entidad abstracta, ni que el jefe de ella asuma su representación. Cám. Crim., t. 16, p. 123.

—Los arreglos sobre daños causados por un delito, importan la renuncia de las acciones criminales. Cám. Crim., t. 32, p. 75.

—Al resolver el juez sobre esta excepción, no procede que resuelva la existencia ó inexistencia de los delitos comprendidos en la querrela. Cám. Crim., t. 40, p. 229.

—La calificación de delictuoso del hecho, no puede ser resuelta como excepción. Cám. Crim., t. 44, p. 174.

—El apoderado carece de personería para querrellarse por delitos cometidos en el expediente en que interviene. Cám. Crim., t. 53, p. 278.

—La delincuencia del acto no puede resolverse como excepción dilatoria. Cám. Crim., t. 44, p. 205; t. 52, p. 37 y t. 57, p. 192.

—Admitida como querellante la viuda por sí y por sus hijos menores, la madre de la víctima carece de personería para acusar. Cám. Crim., t. 78, p. 252.

—No procede la excepción de falta de acción fundada en la falta de intención criminal. Cám. Crim., t. 87, p. 221.

—La excepción de falta de acción no procede, justificada la existencia de un delito acusable por el ministerio fiscal. Cám. Crim., t. 88, p. 391 y t. 93, p. 36.

—Se declara procedente la excepción de falta de acción, cuando en una acusación por injurias, resulta que las palabras imputadas constituían el delito de calumnia. Cám. Crim., t. 2, p. 404.

—La acción penal no puede ser objeto de una cesión de derechos; es eminentemente personal; está fuera de comercio (art. 1.441 del Código Civil). Procede, en consecuencia, la excepción de falta de acción respecto del cesionario. Cám. Crim., t. 67, p. 373.

—La acción penal no pasa á los herederos del ofendido, salvo los casos siguiente: 1.º, que hubiere sido intentada por el causante; 2.º, que por razón del mismo delito el ofendido se hubiere encontrado impedido de ejercerla; 3.º, que en los delitos de calumnia ó injurias, las ofensas sean trascendentales á los herederos; y 4.º, que estos mismos delitos se dirijan contra la memoria del causante. Cám. Crim., t. 42, p. 167 á 171.

(Véanse también los casos de los artículos 14 y 170).



Cosa juzgada sobre los mismos hechos que dan lugar al procedimiento.

Cosa juzgada, en su acepción legal, no es otra que la sanción judicial que ha merecido un proceso por resolución definitiva dictada por juez competente, firme, ya por consentimiento expreso ó tácito de las partes ó en virtud de sentencia confirmatoria. Lo que la ley prohíbe, es que el asunto que ha sido ya materia de una resolución definitiva é irrevocable ó que esté pendiente de ella, pueda servir de fundamento para un nuevo juicio.

Según Faustin Hélie, la excepción descansa: 1.º, en el derecho público: la justicia ha cumplido su misión cuando el procesado ha sufrido la prueba del juicio: su decisión es la verdad; 2.º, en el interés de la defensa: si el acusado era culpable y escapó al castigo, encontró una manera de expiación en la lentitud y en las angustias del procedimiento; si era inocente, sería inhumano hacerlas soportar dos veces.

Sin embargo, la excepción de cosa juzgada tiene también la suya en el sentido de la revocabilidad ó falta de fijeza legal, en los casos de revisión que autorizan los artículos 551 y 552 de este Código.

—El sobreseimiento sin acusación, por no resultar cargos contra los detenidos, no hace cosa juzgada; evidenciada la existencia del delito y sus autores, debe continuarse el proceso por todos los trámites. Cám. Crim., t. 11, p. 25.

—El sobreseimiento provisional no hace cosa juzgada. Cám. Crim., t. 19, p. 125.

—La resolución del Jefe de Policía que pone en libertad al reo de lesiones, no puede fundar la excepción de cosa juzgada en la que-rella deducida ante juez competente. Cám. Crim., t. 46, p. 117.

—No hay cosa juzgada por una sentencia pronunciada en causa civil. Cám. Crim., t. V, p. 150.

Amnistía ó indulto.—Se admiten también como excepciones legítimas. La amnistía constituye el acto, pri-



vativo del Congreso, á que lo autoriza el art. 67 inc. 17.º de la Constitución Nacional respecto de delitos políticos que deben ser ó han sido ya definitivamente juzgados. El indulto es un acto reservado á otro poder, al Ejecutivo, y supone un caso de crimen común, averiguado, discutido y definitivamente juzgado, esto es, libre ya de la acción del poder judicial.

«La amnistía—como dice F. Hélie—es una medida política que introduce la ficción legal de que ni los hechos incriminados ni el procedimiento han existido nunca». El indulto, en cambio, no dá la misma ficción: como dice Obarrio «es la condonación de la pena; condonación que responde á las circunstancias especiales del caso que la determina, y en el que entran, como principales factores, los antecedentes y la conducta del culpable». Concuerdan la amnistía y el indulto—agrega el mismo autor—«en que ambos producen un efecto análogo: libertan de la responsabilidad penal».

Una ley general de amnistía deja sin efecto la sentencia condenatoria y determina el sobreseimiento de los procesos pendientes y la libertad de los acusados; pero deja subsistentes las acciones civiles contenidas en la sentencia. S. C. N., t. 59, p. 190; t. 16, p. 268 y 277.

—El indulto no exime al condenado del pago de las costas procesales. S. C. N., t. 71, p. 40 y Cám. Crim., t. 95, p. 153.

Litis pendencia.—Supone dos juicios exactamente iguales, bajo simultánea tramitación, proponiéndose el mismo fin y conociendo en ellos jueces distintos. La coexistencia de dos juicios en semejantes condiciones, importaría la violación del principio que encierra el artículo 7 de este Código.

Habrà pues, *litis pendencia*:

a) Cuando en los dos juicios aparezcan como querrelante y acusado las mismas personas.



b) Cuando los dos juicios encierran identidad de causa y fin.

No habría, pues, litis, si la demanda es fundada en otro juicio sobre la misma causa, pero con propósito distinto; p. ej., que demandándose una rendición de cuentas en lo civil, por separado se hubiere deducido acción de defraudación en lo criminal, en virtud del mismo hecho. Una y otra acción se proponen distintos fines: la primera la reintegración de valores, y la otra, el castigo de la apropiación fraudulenta.

—El proceso iniciado por defraudación con motivo de haberse otorgado un contrato simulado, puede intruirse independientemente de la cuestión civil promovida por el mismo acto, por no ser ésta una cuestión prejudicial. Cám. Crim., t. V, p. 94.

Condonación ó perdón del ofendido en los delitos que no dan lugar á la acción pública.—Para el mejor entendimiento de cuáles son los delitos que no dan lugar á la acción pública, trasladamos al lector á nuestro comentario sobre el artículo 16. En el presente inciso, la ley no se refiere á los delitos que sólo pueden perseguirse á instancia de parte, sino á los delitos que no dan lugar á la acción pública. No hay otros que los de adulterio, injuria y calumnia: los demás, los «que sólo pueden perseguirse á instancia de parte», dan lugar á la acción pública; y aunque sólo se produce ésta después que la privada la ha suscitado, ella puede luego continuar sola: le es ya indiferente que la privada la acompañe ó nó: que haya habido ó no condonación de parte del que la tenía, el procedimiento sigue su curso.

—Cuando se dice que los delitos de estupro y rapto son privados, no significa que no perjudiquen á la moral y al orden público, ó que la sociedad no está interesada en su castigo. Se quiere decir solamente que la ley, mirando los intereses de la familia á la cual puede



convenir ocultar el hecho, no permite que se proceda de oficio á la averiguación, exigiendo la denuncia ó acusación del agraviado; pero, una vez producidas éstas, la acción ya no pertenece al particular, sino que la ley prescribe también la intervención del ministerio fiscal.

La persona agraviada podrá desistir de la acusación ó perdonar el delito—mas esto en lo que concierne á el'a, pero de ninguna suerte en lo que respecta á la vindicta pública. (Vista del fiscal Dr. Cortés). Cám. Crim., t. 15, p. 385.

—«La filosofía de la ley al dar la facultad de promover la acción por delito privado, solo á la persona ofendida, no es otra que la de hacerla juez único de la conveniencia ú oportunidad del esclarecimiento de hechos que afectan ante todo el honor de la familia ó las relaciones privadas. Cuando la parte ofendida no ejercita el derecho que la ley le acuerda, la sociedad no tiene interés en que esos hechos se hagan públicos....pero, una vez promovida la acción, la renuncia ó desistimiento á la misma por la persona damnificada, no obsta á que el Ministerio Fiscal pueda continuarla hasta obtener el castigo del culpable».

De un dictámen del agente fiscal doctor Arturo Seeber, aceptado por el Superior revocando una sentencia de primera instancia que admitió la condonación ó perdón de la víctima en un delito de violación: año 1909, proceso contra Ramón Arzoaga por violación.

(Véanse también los casos del artículo 16).

Prescripción de la acción ó de la pena.—La ley de fondo usa otra terminología. El artículo 89 del Código Penal se refiere á la prescripción del «derecho de acusar» que se produce á los quince años para delitos que tengan pena de muerte y presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado; á los diez por delitos de pena de presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado; á los tres los que merezcan pena de prisión; y al año los de multa ó arresto.

En cambio, el artículo 90 se refiere á la prescripción de las «penas» que se produce por regla general por un tiempo igual al de la condena, más dos años, con la excepción de las tres más graves antes expresadas, que prescriben á los veinte años, y la multa, que se prescribe al año.



La prescripción de la acción se cuenta desde el día en que el delito se cometió. En los delitos sucesivos, desde el día de la consumación del último acto.

Para el artículo 93 del Código Penal (interrupción de la prescripción), puede ser útil la enumeración que hace Faustino Hélie de actos interruptores: mandatos de comparecer, de traer, de detener y de prisión, citación del acusado para comparecer ante el tribunal, requisiciones del ministerio público, autos, pericias, audiencia de testigos, interrogatorios.

—En los delitos sucesivos, la prescripción empieza sólo después de haber cesado el estado que constituye la infracción. S. C. N., t. 23, p. 109.

—Es de aplicación en materia criminal, la regla *contra non valentem agere non currit prescriptio*, en los casos en que los llamados á ejercitar la acción penal y sostener los procesos, no incurrer en negligencia, y la iniciación ó tramitación de las causas se posterga ó paraliza por motivos ajenos á su voluntad. S. C. N., t. 96, p. 189.

—La prescripción ha sido introducida no solamente en beneficio de la sociedad, sino también en el del delincuente... La ley ha presumido que la sociedad perdona y olvida el delito, si ha transcurrido un término sin gestionar los procedimientos necesarios que conducirían á la regularidad del juicio, ó á su terminación. Cám. Crim., t. 2, p. 277 y t. 3, p. 528.

—La paralización del procedimiento, por causas imputables sólo al actor, no interrumpe la prescripción. Cám. Crim., t. 4, p. 554.

—Si bien la prescripción del derecho de acusar empieza desde la comisión del delito, la de la pena sólo empieza á contarse desde la fecha de la sentencia. Cám. Crim., t. 8, p. 342.

—La acción civil sobre rendición de cuentas no interrumpe el término que la ley fija para la prescripción del derecho de acusar por defraudación al mandatario. Cám. Crim., t. 27, p. 155.

—El término para la prescripción del derecho de acusar un delito, debe computarse según la pena que le corresponde por la ley y no por la que haya pedido el ministerio fiscal, ó haya aplicado la sentencia del inferior. Cám. Crim., t. 54, p. 73.

—Transcurrido el término legal, la prescripción debe declararse de oficio y sobreseerse definitivamente. Cám. Crim., t. V, p. 250.



—La prescripción de dos años para pedir la nulidad de los actos jurídicos por causa de dolo, empieza á correr desde el día en que se ha tenido conocimiento del dolo y no desde la conclusión de la acción criminal. El Dr. Velez Sarsfield, apartándose del Código de Napoleón, de las legislaciones romana y española, de los tratadistas franceses y de Goyena, etc., admite, que el dolo cometido por terceros, anula los actos jurídicos, y por lo tanto, en este punto, necesariamente hay que dejar de lado las teorías corrientes para aplicar los preceptos del Código. Cám. Crim. (Proceso Herran-Alonso, año 1906).

—«El Ministerio público—enseña Garraud—no debe perseguir una infracción prescripta, y el juez, si ella es perseguida, debe declarar inadmisibile la acción pública, sin poder examinar la culpabilidad del procesado ó acusado. Todo tribunal de represión, antes de pasar al exámen de fondo, está obligado á asegurarse que el hecho de que conoce no está cubierto por la prescripción». Cám. Crim., t. 96, p. 223.

—El condenado en rebeldía, debe ser considerado como un procesado, y la prescripción se interrumpe por la diligencia en que se solicita su extradición. Cám. Crim. Fed. Cap. 1906.

—El «acto directo» á que se refiere el art. 93 del Código Penal, existe independientemente de la eficacia ó éxito con que se hubiese hecho. Cám. Crim., t. 47, p. 159.

ARTICULO 444

Las excepciones expresadas en el artículo anterior, podrán oponerse en cualquier estado del sumario.

Las excepciones son de orden público, como hemos ya dicho, por lo cual la ley admite que puedan ser deducidas en cualquier estado del sumario.

—El defensor de un procesado ausente puede oponer durante el sumario la prescripción del derecho de acusar á su defendido. Cám. Crim., t. 24, p. 219.

—El incidente sobre excepciones debe tramitarse, aun cuando el sumario se encuentre en apelación. Cám. Crim., t. 75, p. 155.



ARTÍCULO 445

Si concurrieren dos ó más de las excepciones mencionadas, deberán proponerse conjuntamente.

Las que no se hubiesen deducido como previas, sólo podrán alegarse al contestar la acusación.

El primer inciso concordante con la ley civil procesal, tiende á evitar dilaciones maliciosas.

El segundo permite alegarlas en el plenario, paralizando ó no la causa, según lo que se dispone en el artículo 456.

ARTÍCULO 446

El escrito de oposición de excepciones, deberá acompañarse con los documentos justificativos de los hechos que las fundaren. Si no estuviesen á disposición del procesado, habrá de designarse, clara y determinadamente, el archivo, oficina ó lugar donde se encuentren, salvo que manifieste ignorar por el momento estos antecedentes y ofrezca producirlos durante el término de prueba.

ARTÍCULO 447

Opuestas las excepciones sin presentarse los documentos justificativos, ó sin hacerse la designación ó manifestación anteriormente expresadas, no podrá más tarde admitirse documento alguno.

Sin embargo, podrán admitirse si fueran de fecha posterior, ó de fecha anterior, bajo juramento de haber recién llegado á su noticia.



Son disposiciones también tomadas del procedimiento civil, que en el criminal aumentan su razón de ser con la necesidad de cortar dilaciones injustificadas y paralizaciones tendenciosas.

ARTÍCULO 448

Del escrito en que se propongan excepciones previas, se correrá vista al Ministerio Fiscal y acusador particular, quienes deberán expedirse dentro del término de tres días.

Se trata de un simple traslado del escrito de excepciones, no de la vista del proceso, que si está en sumario sigue siendo reservado.

El traslado podrá darse cuando hay tercero responsable civilmente, á éste. Véase artículo 48.

—La omisión de la audiencia fiscal en las excepciones de incompetencia, afecta de nulidad la resolución. Cám. Crim., t. 25, p. 34.

ARTÍCULO 449

Si las excepciones opuestas dieran sólo lugar á una cuestión de derecho, el Juez, sin otra tramitación, resolverá lo que legalmente corresponda.

En el caso de no recaer conformidad de las partes, podrá celebrarse, con el objeto de acordarlas, el juicio verbal que el procedimiento civil autoriza.

En la duda, siempre se abrirá á prueba el incidente: á la razón general de procedimiento que así lo aconseja, se une en este caso la doctrina de los artículos 12 y 13.



ARTÍCULO 450

En el caso en que esas excepciones se funden en hechos que no estén justificados en el proceso, se recibirá el incidente á prueba por un término que no podrá exceder de la mitad del señalado en este Código como máximo en el juicio plenario.

Treinta días señala á la prueba del plenario, como máximo, el artículo 471.

Por la razón expuesta en el artículo anterior, creemos que corresponderá, en su caso, la concesión del extraordinario.

ARTÍCULO 451

Vencido el término de prueba, el Juez mandará agregar al proceso las que se hubieren producido, previo certificado del Secretario, y convocará á las partes á una audiencia verbal.

ARTÍCULO 452

Realizada ésta con los que concurrieren, aun cuando fuere sólo una de ellas, se hará constar sus exposiciones ó alegatos en acta levantada por el Secretario y firmada por los concurrentes.

En seguida se pondrá la causa al despacho, y el Juez deberá resolver el incidente dentro de los tres días siguientes al de la vista.

La vista es el juicio verbal en el que las partes podrán presentar para su agregación alegatos en forma sobre el resultado de la prueba producida.



ARTÍCULO 453

Cuando una de las excepciones opuestas fuera la de declinatoria de jurisdicción, el Juez la resolverá antes que las demás.

En caso de declararse competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás excepciones dilatorias.

Si se considerase incompetente, mandará remitir el proceso al Juez á cuya jurisdicción corresponda, y se abstendrá de resolver sobre las otras.

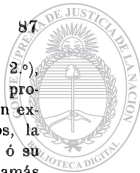
La preferencia que se establece en favor de la excepción de falta de jurisdicción, tiene como fundamento el contenido del artículo 19, pues lo previo que debe resolverse en toda clase de juicio, son las cuestiones de competencia y jurisdicción.

—El desistimiento por el Fiscal de Cámaras del recurso interpuesto por el agente fiscal sobre la competencia, no basta para fundar un sobreseimiento. Cám. Crim., t. 55, p. 161.

ARTÍCULO 454

Cuando se declare haber lugar á cualquiera de las excepciones perentorias enumeradas en el artículo 443, se sobreseerá definitivamente, mandándose que se ponga en libertad al procesado ó procesados que no estuviesen presos por otras causas.

Al disponerse el sobreseimiento definitivo cuando se han aceptado las excepciones, no es precisamente para todos los casos enumerados en el artículo 443 como dice el presente artículo, sino sólo en los de los incisos 1.º y 4.º á 8.º, porque, en los otros, el proceso ha de continuar,



bien declarándose la falta de personalidad (inciso 2.º), bien la de falta de acción (inciso 3.º), salvo que el proceso se refiera á delitos que sólo dan lugar á la acción exclusivamente privada. Tratándose de delitos públicos, la circunstancia de la falta de personería en el acusador ó su representante y la de falta de acción, no podrían jamás provocar un sobreseimiento provisional ni definitivo en la causa, porque ellas no obstarían á la tramitación del proceso principal, de oficio.

Es de advertirse que cuando se pronuncie sobreseimiento en virtud de la procedencia de cualquiera de las excepciones que permite oponer el artículo 443, no corresponderá hacer la salvedad de «buen nombre y honor» que exige el artículo 437 en los casos del 434, pues el juez al admitirlas, no ha tenido oportunidad de apreciar si hubo falta de responsabilidad criminal en el reo, que es la única que puede determinar aquella declaración en su favor según dicho artículo 437.

—Tratándose de delitos perseguibles de oficio, aun cuando se admita la excepción de falta de personería en el querellante, debe proseguir el proceso. Cám. Crim., t. 13, p. 152.

—La procedencia de la excepción de falta de personería en el acusador, hasta para la libertad del acusado. Cám. Crim., t. 14, p. 138.

ARTÍCULO 455

El auto resolviendo el artículo será apelable en relación dentro de tercero día.

La apelación que puede interponerse contra el auto, admitiendo ó rechazando las excepciones, es al solo efecto devolutivo (véase el artículo 505); es decir, que si se ordena la libertad del procesado, habrá que hacerla efectiva inmediatamente, pero sólo en los casos de los incisos 1.º,



4.º, 5.º, 6.º, 7.º y 8.º del artículo 443, en mérito de las razones dadas en el artículo anterior.

—Declarándose incompetente el juez de la Capital, y competente el provincial, no debe pasársele el expediente ni los presos: estos deben ser puestos en libertad. S. C. N. 48, 151.

ARTÍCULO 456

El incidente á que dé lugar la oposición de excepciones se substanciará y fallará en juicio separado, sin perjuicio de continuarse las diligencias del sumario.

En el caso en que las excepciones se opusiesen después de concluído el sumario, se suspenderá la substanciación de la causa principal. Exceptúase el caso en que fuesen varios los procesados y sólo alguno ó algunos dedujesen excepciones, en cuyo caso se formará pieza separada, en que se discutirán y resolverán, continuando la causa principal con los demás procesados.

La substanciación por cuerda separada del incidente, se explica. En derecho procesal los antecedentes acumulados deben constituir un conglomerado homogéneo; así, por ejemplo, acumular los debates y probanzas de cuestiones de previo y especial pronunciamiento á los autos principales, significaría alterar la hilación armónica que debe mantenerse sobre lo principal, que ha de ser siempre un resumen solamente de hechos en estado de sumario y de discusión en el plenario sobre los mismos hechos.

En cuanto á que el sumario proseguirá no obstante las excepciones, se consagra con ello el mismo principio del Código en casos semejantes, esto es, que cualquier incidente de hecho ó de derecho, como la fuga del procesado, su locura sobreviniente al delito, pedidos de excarcelación, mandamientos de embargo, etc., no detendrán nun-



ca la acción judicial de investigación, que, como objetivo fundamental del proceso que es, nada podrá entorpecerlo.

Por lo que hace al estado de plenario, la suspensión de la causa tampoco es absoluta y rige al respecto lo dispuesto en el artículo 69. En efecto, la comprobación de un hecho urgente y necesario, no equivaldría nunca á poner en movimiento el proceso en menoscabo del derecho de las partes, sino en el interés de la realización de la verdad que ellas mismas se supone van buscando, y para llegar á la cual todo momento deberá ser considerado útil. Casos de urgencia ó necesarios serían, v. gr.: la partida al exterior de un testigo, su grave estado de salud capaz de hacer presumir un próximo fallecimiento, la autopsia de la víctima habiendo fallecido pasado ya el proceso al estado de plenario, la ocupación y secuestro de efectos procedentes de robos, etc.

No otro alcance debe darse al concepto «suspenderá la substanciación», en atención á los serios inconvenientes que sobrevendrían, á veces, en presencia de cualquiera de las situaciones supuestas.

—La interposición de excepciones, durante el plenario, suspende la tramitación del juicio principal. Cám. Crim., t. 39, p. 249.



LIBRO TERCERO

DEL PLENARIO



Así como no escasa parte de la materia contenida en el libro anterior, consagrada al sumario, tiene aplicación en el estado de plenario, del mismo modo contiene este tercer libro, á pesar de su título, disposiciones que son de aplicarse también durante el sumario, en particular lo referente á recursos.

Por lo demás, la disposición de materias en el presente libro, es sencilla, siguiendo paso á paso el desarrollo del plenario, cuya fisonomía, parecida á un juicio civil, desde que la contradicción de las partes es su esencia, permite considerar los tres períodos de éste: discusión, prueba y sentencia. La doctrina de los recursos se complementa con las disposiciones que rigen en segunda ó última instancia, terminando el libro con un título destinado á tratar la ejecución de las sentencias.



TÍTULO PRIMERO

DE LA ELEVACIÓN DE LA CAUSA Á PLENARIO, DISCUSIÓN Y PRUEBA



CAPÍTULO I

De la elevación de la causa á plenario y su discusión

ARTÍCULO 457

Recibido el proceso, el Juez de sentencia correrá vista de lo actuado por seis días sucesivos al Ministerio Fiscal y al acusador particular, para que se expidan sobre el mérito del sumario.

Es decir, para que formulen su acusación (véase el artículo 463), ó para que pidan aquellas medidas que juzguen necesarias para ampliar el sumario (1).

El juez las concederá y ordenará que se ejecuten siempre que entienda que son indispensables para completar los fines del sumario (artículo 178). Cuando se trate de

(1) Véase la acordada de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, en el artículo 463.



diligencias substancialmente preparatorias (la distinción será muy útil en algunos casos, pero toda la discreción del juez deberá ejercitarse), sólo las concederá en los casos en que según la ley civil se conceden medidas de prueba antes del período así llamado. (Artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles).

La razón del artículo—el carácter ya público del sumario—no debería alcanzar al fiscal, dada la constante intervención que á éste la ley le acuerda en el proceso, pero no se puede negar que la ley ha sido previsora al equipararlo al acusador, permitiéndole suplir las deficiencias de su anterior actuación.

—No es apelable el auto por el cual se manda que el fiscal indique las diligencias que juzgue convenientes á la ampliación del sumario, ni el que, á la presentación de un documento hecho por él, manda se agregue, no obstante referirse á una emergencia extraña al objeto fundamental del juicio. S. C. N., t. 56, p. 408.

—Siempre se consideró, antes y después de la nueva ley de procedimientos, dividido el juicio criminal en sumario y plenario, sin que le fué lícito al juez de la causa durante este último retrogradar arbitrariamente y reabrir el sumario, pero sin que tampoco le fuera prohibido completarlo y perfeccionarlo, subsanando cualquier deficiencia que llegare á notar, especialmente á solicitud del ministerio fiscal, encargado de promover la averiguación de los delitos. Una doctrina contraria, conduciría frecuentemente on daño de la causa pública, á la impunidad de los delitos. (Vista fiscal del Dr. Cortés). Cám. Crim., t. 12, p. 107.

—La resolución del juez de instrucción dando por terminado el sumario, no hace cosa juzgada: el agente fiscal puede pedir ampliación del sumario ante el juez de sentencia, antes de entablar la acusación. Cám. Crim., t. 12, p. 107.

—El agente fiscal puede pedir ampliación del sumario ante el juez de sentencia antes de entablar la acusación. El auto cerrando el sumario, no tiene otro alcance que el desprenderse de su jurisdicción el juez sumariante, pasando la causa al juez del plenario. Cám. Crim., t. 12, p. 114.

—El fiscal pidió diligencias al juez de sentencia antes de expedirse en la acusación. Este las denegó, pero la Cámara revocó por no ob-



servarse por el juez que las diligencias solicitadas fuesen inoficiosas ó inútiles. Cám. Crim., t. 13, ps. 89 y 95.

—Antes de expedirse el ministerio fiscal puede pedir las diligencias de prueba que considere convenientes al esclarecimiento del delito. Cám. Crim., t. 14, p. 139.

—El auto por el cual se manda acusar al ministerio fiscal antes que el querellante particular, no es apelable por el primero. Cám. Crim., t. 80, p. 118.

—Cerrado el sumario, su ampliación corresponde al juez de sentencia, aun cuando se denuncie la existencia de otro acusado. Cám. Crim., t. 88, p. 336.

—Elevada la causa á plenario, al juez del crimen corresponde ampliar las diligencias que considere omitidas por el juez sumariante. Cám. Crim., t. 92, p. 427.

ARTÍCULO 458

El Juez, á petición del Ministerio Fiscal ó del querellante particular, ordenará que se ponga á su disposición en el modo y lugar que considere conveniente, la correspondencia, libros, papeles y demás piezas de convicción, á efecto de que sean examinados.

ARTÍCULO 459

El proceso original no pasará al acusador particular. Este deberá examinarlo en la Secretaría del Juzgado. Sin embargo, el Juez podrá, según la gravedad de la causa y el volumen de los autos, permitir que éstos se entreguen al abogado del acusador, bajo su responsabilidad, por el término correspondiente.

La entrega del proceso al abogado, resulta entonces una cuestión de confianza librada al criterio del juez. No así el examen de todo el proceso y piezas de convicción,



libros, etc., que será libremente permitido al acusador ó á su letrado.

Para el fiscal no rige en ningún caso la prohibición de extracción del expediente.

ARTÍCULO 460

Cuando el Ministerio Fiscal y el acusador particular opinaren que la causa no debe pasar al estado de plenario, el Juez, si estuviere de acuerdo con sus conclusiones, decretará el sobreseimiento en la forma que correspondá.

Si el Juez, por el contrario, creyere que hay mérito bastante para llevar adelante los procedimientos, mandará pasar la causa al Procurador General de la Corte, si fuere el Juez de Sección de la Capital, y al Fiscal de la Cámara de Apelaciones, si fuera de los del Crimen ó de lo Correccional del mismo distrito, á fin de que dictaminen sobre la procedencia ó improcedencia de la elevación de la causa al estado de plenario.

Los Jueces de las otras secciones judiciales, en los mismos casos, pasarán la causa á un Fiscal especial, que nombrarán al efecto.

ARTÍCULO 461

Cuando el Procurador General de la Corte, el Fiscal de la Cámara y el Fiscal especial, se manifestasen de acuerdo con la opinión del funcionario del Ministerio Fiscal que emitió primero su juicio, el sobreseimiento será obligatorio para el Juez.

En el caso contrario, el Juez ordenará que se formule la acusación en el término de seis días.



Hay, pues, sobreseimiento en el plenario. El auto del artículo 429, clausura el proceso para el juez de instrucción, que desde entonces queda desligado de él.

El sobreseimiento, en los casos que corresponda, será el definitivo, pero no hay imposibilidad de que se produzca cualquiera de los dos casos del provisional del art. 435.

Estos artículos establecen un procedimiento especial que viene á suplir la falta de articulación y jerarquización del Ministerio Público, pues, existiendo éstas, el fiscal de primera instancia no procedería sino de acuerdo con su superior, siendo entonces inútil la especie de apelación que se establece.

Si el querellante no desiste, acusará derechamente sin que se pasen los autos al fiscal superior, que sólo conoce cuando las dos acusaciones están conformes en el sobreseimiento y el juez disiente; por esto en el artículo 461, no se hace mención del acusador particular.

—La falta de acusación por parte del fiscal, no autoriza el sobreseimiento cuando existe acusador particular. S. C. N. t. 11, p. 423.

—No es causa legal de recusación ó excusación, la intervención que el Procurador General tenga en las causas criminales en los casos prescritos por el art. 460. S. C. N., t. 57, p. 395.

—Cualquiera que sea la opinión del agente fiscal, debe presentar acusación, si así lo resuelve el fiscal de Cámara. (En el caso, era oya el segundo agente fiscal que pedía la absolución). Cám. Crim., t. 41, p. 279.

—No habiendo acusación, falta la base esencial de todo juicio. Si el juez del crimen considera que la causa debe seguir adelante, á pesar de la opinión del agente fiscal, debe adoptar el procedimiento marcado por el art. 460 y siguientes y no proseguir el proceso en la forma ordinaria. Cám. Crim., t. 57, p. 277.

—Cuando el juez manda llevar adelante los procedimientos, á pesar de la opinión del agente fiscal, no prejuzga: se limita á cumplir un deber impuesto por la ley. Cám. Crim., t. 78, p. 398.

—La designación de otro agente fiscal para deducir acusación, no importa un prejuzgamiento que pueda fundar una recusación. Cám. Crim., t. 78, p. 398.



—Declarada la pérdida del derecho de acusar del querellante, procede el sobreseimiento si el ministerio fiscal lo solicita. (En el caso, el acusador particular dejó correr el término sin evacuar la vista que se le confería). Cám. Crim., t. 78, p. 193.

—Es aplicable el artículo, en el caso de que el fiscal en causa por lesiones, sólo pide el arresto del art. 82 del Cód. Penal por no haberse presentado el reo á la autoridad. Cám. Crim., t. V, p. 131.

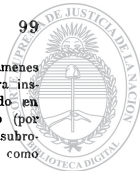
—Si el fiscal se abstiene de dictaminar respecto de un procesado y acusa respecto de otro, el juez del plenario, debe, si estuviera de acuerdo, decretar el sobreseimiento definitivo (había semiplena prueba para elevar la causa á plenario, pero faltaba la prueba plena para la acusación). Cám. Crim., t. V, p. 216.

ARTÍCULO 462

En el caso previsto en el artículo anterior, el Juez de la causa deberá hacer reemplazar al Agente Fiscal ó Fiscal especial que hubiere pedido el sobreseimiento en la forma establecida para los casos de inhabilidad ó impedimento del Ministerio Fiscal.

La acusación es obligatoria para el nuevo funcionario, como hemos visto en el artículo anterior y en los casos de jurisprudencia citados con motivo del mismo.

Desde el punto de vista de la convicción íntima que sobre el delito se hubiere formado el fiscal reemplazante, si fuere la misma que tuvo el reemplazado, es indudable que su situación es molesta, pero debe observarse que ya en ese caso desaparece la opinión personal, que es reemplazada por la institucional, es decir, la del Ministerio Público, representado, en primer término, por el Procurador General de la Corte y el Fiscal de Cámara (artículos 116 y 117 de este Código y 116 y 117 de la Ley de Organización de los Tribunales). No obstará esto, por otra parte, á que acusándose en nombre del Ministerio que representan, salven sus convicciones propias.



—Importa menoscabar la autoridad de la ley y de los dictámenes del ministerio fiscal, el hecho de que el agente fiscal de primera instancia deje de formular la acusación que se le ha ordenado en el caso del art. 461, opinando, en cambio, del mismo modo (por el sobreseimiento) como lo hizo el agente fiscal al que ha subrogado. (Dictámen del Fiscal de Cámaras Dr. L. Segovia, adoptado como resolución por la Cámara). Cám. Crim., t. 75, p. 55.

—Debe conocer en el plenario la jurisdicción correccional, si de la acusación fiscal resulta que el delito acusado corresponde á esa jurisdicción. Cám. Crim., t. 77, p. 118.

ARTÍCULO 463

Presentada la acusación por el acusador particular, si lo hubiere, y por el Ministerio Fiscal, se conferirá traslado al procesado ó procesados ó sus defensores y á las personas responsables civilmente, para que presenten sucesivamente sus defensas dentro del mismo término concedido á cada uno de los acusadores, si aquéllos no tuviesen un mismo defensor.

De un modo algo obscuro quiere expresar la ley que si los procesados tienen un solo defensor, éste tendrá para expedirse un término igual al concedido á los acusadores, que es de seis días, según hemos visto en el artículo 457 (1).

(1) La Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital, dictó en 18 de Julio de 1895, una Acordada disponiendo: «Que siendo un deber de los Juzgados velar por la observancia de los términos, para que la justicia se administre con la brevedad que la ley prescribe, los Secretarios cuiden de dar cuenta á sus respectivos Jueces del vencimiento del término en que hayan debido expedirse los agentes fiscales, al siguiente día de vencido, si no lo hubieren verificado; y que los fiscales cuiden, á su vez, de acusar rebeldía á los defensores de oficio y particulares que no hicieren uso de su derecho, dentro de los términos legales».



ARTÍCULOS 463, 464 Y 465

Queda entendido que todos estos términos (lo mismo que aquél) son prorrogables, siempre que se pida la prórroga dentro del término.

—Si la acusación se limitó á la responsabilidad penal del acusado (sin hacerle cargo de los daños y perjuicios emergentes del delito que so impute), no pueden intervenir en el proceso los terceros responsables civilmente. Cám. Crim., t. V, p. 91.

ARTÍCULO 464

El proceso será examinado en la Secretaría por el procesado ó su defensor, en su caso, y por las demás personas responsables. El defensor del procesado y los abogados de estos últimos, podrán, sin embargo, solicitar la entrega de los autos en la forma determinada en el artículo 459.

Y el juez concederlo según la gravedad de la causa y el volumen de los autos.

Desde luego, mientras los juzgados tengan mezquinas instalaciones, el juez que se acuerde de que es abogado, deberá conceder al compañero todas las facilidades de estudio que importa la extracción del expediente y de las que carecen las oficinas judiciales.

ARTÍCULO 465

Si cualquiera de los interesados ó el Ministerio Fiscal, no devolviera el proceso dentro de los términos señalados, el Secretario, luego de vencido, dará cuenta al Juzgado y éste ordenará su entrega inmediata.

Esa entrega podrá exigirse por apremio personal, en el caso de que no se cumpliera la orden del Juzgado.



Todo ello sin perjuicio de lo demás que proceda.

Si es el acusador particular el moroso, se le declarará decaído el derecho de acusar.

Si es el fiscal, podrá ser objeto de una amonestación y aun de medidas administrativas.

Si es el defensor, se intimará al procesado que lo substituya, bajo apercibimiento de ser nombrado el de pobres.

—El ministerio fiscal, cuando ejerce sus funciones como parte principal en un proceso, está sujeto á todas las obligaciones impuestas á los litigantes; por lo mismo, se halla sujeto á los términos establecidos por la ley de Procedimientos. S. C. N., t. 17, p. 399.

ARTÍCULO 466

Vencido el término para la presentación de la defensa, el Secretario pondrá el proceso al despacho para proveer lo que corresponda.

Será lo que se ha dicho en el artículo anterior, en el caso de que el moroso sea el defensor.

En otro caso, unidos los escritos de acusación y defensa al expediente, ha terminado el período de discusión y empieza el de prueba.

CAPÍTULO II

De la prueba

ARTÍCULO 467

El Juez ordenará en todos los casos la recepción de la causa á prueba, á menos que las partes la renuncien expresamente, lo que podrán hacer al expedirse en la acusación y la defensa.



No hay causas criminales de puro derecho, pero si las partes: fiscal, querellante y defensor, consideran que no hay más prueba que producir, harán la correspondiente manifestación, para que el juez, sin más trámites ni alegaciones, llame *autos* para sentencia.

El pedido se hará en un *otroso* del mismo escrito de la parte que lo solicita y de él se dará vista á las demás por si se produce el caso de conformidad.

—No es apelable el auto del inferior, por el que, concluido el sumario y deducida la acusación fiscal, se manda abrir la causa á prueba, no obstante el pedido de sobreseimiento formulado por el defensor del procesado. S. C. N., t. 92, p. 348.

—El auto de prueba no es apelable en materia criminal. Cám. Crim., t. 27, p. 137.

—«El artículo 467 del C. de P. en lo Criminal dispone que la causa será recibida á prueba en todos los casos, y este precepto, que marca la diferencia existente entre las causas civiles y las criminales, está revelando, con toda claridad, que la prueba debe producirse sin tener en cuenta la conformidad ó disconformidad de las partes sobre los hechos pertinentes; y si es verdad que el mismo artículo autoriza la renuncia del trámite de prueba, esto no importa otra cosa que la conformidad de que la causa se falle con arreglo á las constancias del sumario, que, en tal caso, se toman como elementos de prueba suministrados por las mismas partes». (Del Camarista Doctor Saavedra).

En el caso, el defensor del reo sostenía que se abstuvo de producir la prueba de la beodez completa é involuntaria de su defendido, por razón del reconocimiento formulado al respecto por el agente fiscal, circunstancia que le impidió considerar como hecho controvertido el referente al grado de la ebriedad. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal, establece, con tal motivo, que los jueces pueden desconocer los hechos aceptados por el Ministerio Fiscal. t. 37, p. 338 á 358.

ARTÍCULO 468

En todos los casos incumbe á la acusación la prueba de los hechos para justificar la criminalidad del procesado.



Como el artículo 6.º del Código Penal encierra un principio completamente diverso, «en la ejecución—dice aquel precepto—de hechos calificados de delitos, se presume la voluntad criminal á no ser que resulte una presunción contraria de las circunstancias particulares de la causa», la antinomia legal deberá destruirse limitando el texto de la ley de fondo á la intención criminal como uno de los elementos de responsabilidad y dar al precepto de la ley de forma toda la amplitud que exige el concepto moderno penal.

Deberían grabarse en letras de oro en las puertas de la justicia del crimen, las nobles palabras que comentando una disposición italiana parecida, escribe Framarino. «La experiencia—dice—nos muestra que son, afortunadamente, mucho más numerosos los hombres que no cometen delitos que los que los cometen: la experiencia nos afirma de este modo, que el hombre no comete ordinariamente actos criminosos, que el hombre es de ordinario inocente; y como lo ordinario se presume, de ahí que se presume la inocencia y he aquí á qué se reduce la indeterminada é inexacta presunción de bondad, cuando se quiere encerrar en un límite razonable. No se trata, pues, de presunción de bondad; hablamos de presunción de inocencia, presunción negativa de acciones y de omisiones criminosas. El hombre, en el mayor número de casos, no comete actos criminales; el hombre es de ordinario inocente; por tanto, la inocencia se presume. La presunción de inocencia no es, según esto, más que una especialización de la gran presunción general, por la que lo ordinario se presume. Y como según el principio ontológico, presumiéndose lo ordinario, lo extraordinario es lo que debe probarse, infiérese, que abierto el debate judicial penal, á la acusación corresponde la obligación de la prueba».

—«La tentativa de homicidio (por disparo de arma ó por lesiones causadas por otra arma), debe resultar, ó de la confesión del acu-



sado, ó demostrada por otros elementos probatorios que así lo determinen, porque, para resolver tal problema, se hace necesario inquirir los movimientos íntimos de la conciencia, y ésta no se presta á ser escrutada ni deja sorprender sus secretos con la pasividad inerte de los organismos materiales. Hay que atenerse á la intención é inducir la por la apreciación de los actos externos, mediante los cuales se exterioriza». (del Fiscal Dr. Marengo). Cám. Crim., t. 22, p. 331 y t. 23, p. 77.

—En las causas criminales, cuando exista acusador, la prueba es de incumbencia del acusado, siempre que se haya probado en abstracto el hecho que motiva la acción. Cám. Crim., t. 4, p. 96.

—Corresponde al querellante probar los hechos y fundamento de la querella, sin que tenga vicio de nulidad la resolución judicial que absuelve al querellado, no habiéndose producido pruebas en la estación correspondiente. Cám. Crim., t. 24, p. 205.

ARTÍCULO 469

Rigen respecto de los medios de prueba en el plenario, las disposiciones de los títulos respectivos.

Los medios de prueba son:

La confesión, para el procesado; las posiciones para el querellante: para éstas rige el artículo 470; para aquélla, lo que se ha dicho en el Título respectivo.

La prueba testifical, para la cual rige lo que se ha dicho en los artículos 272 y siguientes y lo que luego se dirá en los artículos 483 al 489.

La prueba pericial: Título XIII del Libro II.

La prueba documental: Títulos XIV y XVI del Libro II.

La prueba indiciaria, para la cual habrá que tener presente el Título XV del mismo Libro II.

—La prueba que evidentemente recaiga sobre hechos no articulados, debe ser rechazada antes de su recepción. Cám. Crim., t. 17, p. 390. C.



ARTÍCULO 470

El acusador no podrá dirigir posiciones al acusado para obtener su confesión; pero éste podrá hacerlo respecto del acusador particular, desde que la causa sea recibida á prueba, hasta la citación para sentencia.

No debe el acusado absolver posiciones por la disposición del art. 18 de la Constitución Nacional: «nadie puede ser obligado á declarar contra sí mismo.»

El acusador particular, asimilado en esto al litigante en lo civil, está obligado á absolver posiciones (con la excepción que luego se dirá referente al querellante por calumnia). Pero ¿cúal es la sanción penal que tiene si no las absuelve ó si perjura?

En derecho civil hay la confesión ficta en virtud de la cual, el que citado en forma dejare de comparecer á absolver posiciones, sin justa causa, será tenido por confeso en el contenido del pliego, lo mismo que el que compareciendo rehusase responder ó respondiere de una manera equívoca.

Hay además, siempre en derecho civil, una pena (civil) especial para el perjurio. La contienen las antiguas leyes castellanas, vigentes según el artículo 814 del Cód. de Procedimientos Civiles.

Son ellas la ley 2.^a, tít. 4.^o, de la Nov. Rec. y ley 11, título 10, libro 11, de la Nov. Rec. «Por oítar los perjurios—decían aquellas sabias leyes—que muchas veces se cometen en las respuestas que se dan en las posiciones, mandamos que si después el respondiente fuere convencido claramente del perjurio por los actos del proceso, de manera que parecía que á sabiendas se perjuró en la respuesta que dió, que allende de las otras penas si fuere el actor, pierda la causa é si fuere el reo sea habido por confeso.»

¿Habrá en lo criminal confesión ficta y cuáles serán sus efectos?



Debiendo declararse su existencia en el mismo fallo que termina el juicio y no antes, sería ridículo pensar que por la mera confesión ficta del querellante, se declarase inculpable al procesado. Las posiciones pueden servir para aclarar ciertos hechos que convenga á la defensa establecer, pero siempre contando con la buena voluntad ó con la ingenuidad reconocida del querellante, puesto que si éste no comparece ó no quiere contestar, no se le puede aplicar un apercibimiento que la ley no establece de un modo expreso.

La excepción á que antes nos referimos, la del querellante por calumnia, se funda en la citada prescripción constitucional, puesto que el querellante es en realidad el acusado de un delito (el mismo que se le imputa) y si la imputación resulta ser cierta y serlo de un delito acusable de oficio, será por él condenado.

—Si los documentos acompañados al pliego de posiciones tienden á comprobar el delito del absolvente, no procede su agregación. Cám. Crim., t. 80, p. 247.

—Pueden agregarse documentos en el acto de la absolución de posiciones, si se refieren á los hechos en ellas consignados. Cám. Civil, t. 80, p. 428.

—Al absolvente se le exigía *explicara los motivos que lo habían llevado á determinada casa*. No se aceptó la pregunta porque no tenía la forma requerida para exigir la confesión en juicio por medio de posiciones, *«pues estas son simple aserciones de hechos pertinentes á la causa, sobre los cuales el litigante pide en juicio que su adversario declare bajo juramento para relevarse de probarlos»*: (Caravantes, núm. 849). Cám. Crim., t. 27, p. 197.

—El juez, en el acto de las posiciones, no puede interrogar al absolvente acerca del culto que profesa. Cám. Crim., t. 2, p. 348.

—El acusador por calumnia está obligado á absolver posiciones si éstas no se refieren al delito imputado. Cám. Crim., t. 30, p. 196.

—El denunciante no es parte en el juicio y no está obligado á absolver posiciones. Cám. Crim., t. 32, p. 210.

—La falta de comparecencia del querellante de adulterio á la absolución de posiciones, no importa el desistimiento de la acusación. Cám. Crim., t. 40.



—No pueden ponerse posiciones al que ha desistido de ser parte querellante. Cám. Crim., t. 90, p. 44.

—El perjurio en causa propia no puede ser considerado delito. Cám. Crim., t. 96, p. 315.

ARTÍCULO 471

El término ordinario de prueba no excederá de treinta días, si ella hubiere de producirse en el distrito de la Capital, ó dentro del Municipio ó pueblo donde tenga su asiento el Juzgado, aumentándose un día por cada siete leguas, si hubiese de darse fuera de él, pero en el territorio de la República.

El término será común y prorrogable dentro de los treinta días.

El juez lo fijará, entendiéndose que lo mismo debe ser de diez días, atento lo prevenido en el art. 483.

—Los días feriados no deben incluirse en el término de prueba en materia criminal. Cám. Crim., t. 5, p. 566.

—El incidente sobre revocatoria de un auto, durante el término de prueba, no lo suspende; la parte debe pedir las demás diligencias que crea necesarias á su derecho. Cám. Crim., t. 30, p. 151.

ARTÍCULO 472

Cuando la prueba haya de rendirse fuera de la República, se dará el término extraordinario que el Juez considere suficiente, atendidas las distancias y la facilidad de la viabilidad.

ARTÍCULO 473

Para obtener el término extraordinario se deberá:

1.º Designar el lugar donde residen los testigos y



nombrarlos, ó los documentos, cuyas fechas ó contenido, registro ó archivo, deberán indicarse siendo posible.

2.º Pedir ese término dentro de diez días, contados desde la recepción de la causa á prueba.

ARTÍCULO 474

Del escrito en que se pida el término extraordinario se dará traslado á la otra parte por tres días improrogables, transcurridos los cuales se resolverá el artículo.

Esta resolución será sólo apelable en relación cuando se deniegue el término extraordinario.

ARTÍCULO 475

El término extraordinario correrá conjuntamente con el ordinario, y ni uno ni otro podrán suspenderse, sino mediante alguna causa que haga imposible la ejecución de la prueba propuesta.

ARTÍCULO 476

La parte que dejare de producir la prueba indicada fuera del territorio nacional, deberá abonar todas las costas que por su causa se devengaren, incluso los gastos en que incurriere la otra parte, para hacerse representar donde hubieren de practicarse las diligencias.

Estos artículos son calcados sobre los de la ley civil que establecen la materia del término extraordinario.

**ARTÍCULO 477**

Toda diligencia de prueba debe ser pedida, ordenada y practicada dentro del término concedido. A los interesados incumbe urgir para que tales diligencias sean practicadas oportunamente; pero si no lo fueren, por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas ó por caso fortuito ó fuerza mayor, podrán los interesados exigir que se practiquen hasta antes del llamamiento de autos.

A este efecto responde lo prevenido en el artículo 490.

—La ampliación de las declaraciones de los testigos del sumario, debe pedirse dentro del término que la ley determine para la prueba testimonial. Cám. Crim., t. 98, p. 100.

ARTÍCULO 478

El decreto en que se ordenen diligencias de pruebas, será notificado dentro de veinticuatro horas.

Para conocimiento de todos los que intervienen en el juicio y mejor control de la prueba.

ARTÍCULO 479

Las actuaciones de prueba se practicarán en audiencia pública, salvo cuando la publicidad sea incompatible con las buenas costumbres, en cuyo caso el Juez deberá declararlo así por medio de un auto, y ordenar la reserva conveniente.



El principio de la publicidad, no sólo de las audiencias sino de lo actuado, no puede limitarse más que por auto fundado.

Hay en esto un más y un menos: lo que la ley quiere, no es la satisfacción de curiosidades malsanas, sino la garantía de que los procedimientos no permanezcan ocultos ni secretos; quiere que el juicio le acompañe el consenso público en todos sus actos, no que se le imponga la opinión condensada de cualquier modo ó excitada por interesados en levantarla.

ARTÍCULO 480

El Juez asistirá á las diligencias que deban practicarse fuera del Juzgado, pero dentro de la ciudad ó del pueblo donde tenga su asiento. En los Tribunales colegiados la diligencia será practicada por uno de sus miembros.

En lo civil algunas diligencias pueden cometerse á los secretarios; en lo criminal, nunca.

ARTÍCULO 481

Cuando la prueba haya de practicarse fuera del lugar del asiento del Juzgado, las órdenes ó exhortos serán librados dentro de veinticuatro horas á más tardar.

Las órdenes, tratándose de funcionarios de otra jurisdicción, se librarán por medio de exhortos á sus superiores, jueces de clase igual al que los libra.

—Los interrogatorios á los testigos que declararán por medio de exhorto ú oficio, deben ser conocidos por la parte contraria á fin de que pueda formular las preguntas que crea convenientes á su derecho. Cám. Crim., t. 12, p. 36.



ARTÍCULO 482

Para toda diligencia de prueba se señalará el día en que debe tener lugar, citándose al efecto á todos los interesados en el juicio, con un día al menos de anticipación.

Para que puedan intervenirla y controlarla.

—Para que puedan admitirse testigos de la acusación, el defensor del reo debe ser citado con un día de anticipación. Cám. Crim., t. 72, p. 112.

ARTÍCULO 483

La prueba testimonial será ofrecida necesariamente dentro de los primeros diez días del término de prueba, á cuyo efecto la parte á quien interese presentará una lista de los testigos, con expresión de sus nombres, profesión y domicilio, y el interrogatorio á cuyo tenor hayan de ser aquéllos examinados.

La recepción de la prueba de testigos, tendrá lugar después del término señalado para su ofrecimiento, en el día y hora que el Juez determine.

Es decir, que la prueba testifical sólo se practicará después de los primeros diez días del término reservado para ser propuesta.

—El art. 483 del Cód. de Proc. en lo Criminal, no prescribe que sean nulas las declaraciones de testigos presentados después de los primeros diez días del término de prueba; por consiguiente, consentidos por la contraparte el auto que las ordena y la diligencia de las declaraciones, éstas subsisten y el auto es válido. S. C. N., t. 49, página 316.



—En lo criminal, la prueba de testigos debe ofrecerse con la lista é interrogatorios correspondientes dentro de los siguientes días del término probatorio. S. C. N. 53-260.

—El hecho de no acompañar los interrogatorios al presentar los testigos, no es un requisito esencial de la sustanciación de la prueba que anule lo actuado. Cám. Crim., t. 16.

—El acusador tiene derecho para conocer los interrogatorios de los testigos del acusado y la omisión de ese derecho anula las declaraciones prestadas. Cám. Crim., t. 13, p. 168.

—La pedida por la parte acusadora después del término es válida, si el acusado consintió su recepción. Cám. Crim., t. 17.

TÍTULO SEGUNDO

De la ratificación de las declaraciones de los testigos del sumario

ARTÍCULO 484

Durante el término de prueba, el Juez ordenará la ratificación de los testigos del sumario, cuyas declaraciones fueran observadas por alguna de las partes, ó cuando lo considere necesario para el mejor esclarecimiento de los hechos.

Los acusadores particulares ó sus representantes, los procesados y sus defensores y el Ministerio Fiscal, pueden concurrir á la ratificación de los testigos y hacerles por intermedio del Juez las preguntas que estimaren pertinentes.

En caso de que la ratificación sea solicitada por una de las partes, deberá esta exponer que es lo que observa de las declaraciones, á efecto de que los demás interesados lo conozcan y pueden intervenir con más eficacia.

—La ratificación de testigos de un sumario formado ante autoridad competente, no es esencial y su falta no lo invalida, si no





hubiese sido pedida en la estación oportuna del juicio. Cám. Crim., tomo 2, p. 294.

—La falta de ratificación en el plenario de los testigos que han declarado en el sumario, no es causal de nulidad del procedimiento. Cám. Crim., t. 8, p. 298.

—El juez del plenario no puede negar la ratificación de las declaraciones observadas por el defensor. Cám. Crim., t. 94, p. 84.

ARTÍCULO 485

En el caso de que alguno de los testigos examinados en el sumario haya muerto, ó esté ausente en términos que sea difícil su ratificación y alguna de las partes no se hubiere conformado con su declaración, deberá practicarse de oficio la información de abono, la que consiste en la justificación de dos ó más personas de probidad, las cuales depondrán sobre el concepto de veracidad que les merecía el testigo muerto ó ausente.

En el caso de que la ratificación haya sido pedida, la justificación será ofrecida por la parte, presentando los testigos que puedan dar fe de lo que dice el artículo.

En el caso de que la ratificación haya sido dictada de oficio, el juez intimará á la parte interesada que presente testigos que puedan abonar la declaración.

TÍTULO TERCERO

De las tachas

ARTÍCULO 486

Los testigos podrán ser tachados cuando concurra cualquiera de las circunstancias mencionadas en el Título IX del Libro II.

Son, por tanto, tachables las personas que no pueden ser admitidas como testigos: artículo 275,—como las que no pueden ser llamadas como testigos: artículo 278.

En cuanto á los testigos del artículo 276 (que sólo pudieron serlo á los efectos de la indagación sumaria), no puede referirse á ellas el presente título, que sólo alude á los testigos del plenario: su tacha no tendría ya objeto.

—La tacha por enemistad del testigo, en causas criminales, sólo es procedente cuando se funda en los hechos exigidos por las leyes de Partida. La malquerencia, el odio ó las diferencias que no interesan la vida ó el honor, no son fundamentos bastantes. Cám. Crim., t. 4, p. 172.

—La tacha de testigos en materia criminal, sólo es admisible cuando se trata de enemistad capital por haber atentado á la vida, al honor ó á la fortuna del individuo. Cám. Crim., t. 5, p. 525.

—La calidad de empleo no es tacha bastante en materia criminal. Cám. Crim., t. 3, p. 572.





—El hecho de ser apoderado del querellante en otros asuntos es tacha legal. Cám. Crim., t. 76, p. 385.

—La declaración del damnificado sólo puede tomarse como prueba cuando se trata de una persona de notoria honradez y que además, por su estado, ha podido estar en posesión de las cosas robadas. En el caso, se declara no haber mérito para calificar de robo el delito, sino de violación de domicilio. Cám. Crim., t. 33.

ARTÍCULO 487

Las tachas serán alegadas y probadas dentro del término de prueba señalado para lo principal.

Si se dedujeren contra testigos que hubieren de examinarse fuera del lugar del juicio, ofreciendo probarlas donde la diligencia tenga lugar, podrán insertarse en las órdenes y despachos los interrogatorios correspondientes.

Probadas dentro del término en cuanto según el artículo 477 el juzgado no señale día fuera de él.

—Para que las tachas de los testigos invaliden sus declaraciones, los motivos han de ser anteriores á la declaración. Cám. Crim., t. 28, p. 222.

ARTÍCULO 488

La prueba testimonial de tachas será ofrecida en un solo acto, designando el nombre y calidad de los testigos.

Y su domicilio. Rige en esto también el art. 483.

ARTÍCULO 489

Las pruebas de las tachas serán consideradas en la sentencia juntamente con lo principal, apreciándose con arreglo á lo dispuesto en el artículo 305.



Es decir, según las reglas de la sana crítica.

Si la apreciación del juez se hiciese antes que la sentencia, sería el caso de prejuzgamiento.

—Los testigos presentados en el plenario, que dicen haber presenciado el suceso no obstante no haber sido mencionados por el reo ni aparecer en el sumario, no forman prueba en cuanto contradigan las constancias de la causa. *Cám. Crim.*, t. 16, p. 261.

—Se hace valor para desvirtuar la responsabilidad del procesado, cierta divergencia de detalles, en que los testigos han incurrido, pero esto, que ocurre diariamente por la diferencia de las facultades perceptivas de cada individuo y la rapidez con que los hechos criminales se desarrollan, no destruye ni modifica el hecho principal que consiste en que fué el procesado el que asestó el golpe homicida. *Cám. Crim.*, t. 28, p. 111.

TÍTULO CUARTO

De la conclusión de la causa para definitiva

ARTÍCULO 490

Vencido el término de prueba, el Secretario pondrá la nota correspondiente. Desde este momento el proceso se conservará en la Secretaría por seis días, notificándose á las partes, para que tanto el acusador ó acusadores, como el procesado ó su defensor, puedan instruirse de las pruebas producidas, que se agregarán á los autos y foliarán.

Agregada la prueba se substituirá su foliación, pero sin borrarla (cruzándola), por la correlativa de todo el expediente que le corresponda.

El artículo no prohíbe la extracción del expediente, pero como no la autoriza, este es uno de los casos de pequeña tiranía que hay que dejar á algunos funcionarios, que si no mostraran su superioridad en estos detalles menudos, se enfermarían. Por esto las partes tendrán, por regla general, que estudiar de cualquier modo, en una oficina por lo común destartada, toda la prueba, sus contradicciones y concordancias, lo que á veces modifica todo el sentir de una causa.





ARTÍCULO 491

Al día siguiente de vencidos los seis días de que habla el artículo precedente, el Secretario pondrá el proceso al despacho con la correspondiente nota.

La nota no expresa sólo el vencimiento del término, sino que tácitamente expresa que no se ha hecho uso del derecho del artículo 477 *in fine*.

ARTÍCULO 492

El Juez dictará la providencia de autos y señalará un día, con el intervalo de cinco cuando menos, para que informen ante él in voce, el acusador particular, el Fiscal y el defensor del procesado, los que podrán hacer entrega al Juez en el mismo acto, de los escritos ó apuntes que juzgasen conveniente.

En esta oportunidad las partes pueden modificar las conclusiones que produjeron en el momento marcado en el artículo 463. No lo prohíbe el presente artículo y lo autoriza implícitamente el siguiente (Véase su comentario sobre la Regla tercera).

Por cierto que pocas veces se hace uso de esta facultad, cuando son muchas las ocasiones en que el resultado de la prueba lo aconseja. El Ministerio Fiscal sobre todo, tiene ahí la oportunidad para adoptar una actitud que le evite más tarde apelaciones de puro compromiso que prolongan el procedimiento inútilmente.

En la práctica importa la presentación de los alegatos de bien probado. Se labra un acta en la cual se hace constar su entrega por las partes.

—Llamados *autos* para sentencia, el juez no puede declarar su incompetencia pasando los autos al juez correccional. Cám. Crim., t. 78, p. 181.

ARTÍCULO 493

Desde entonces quedará cerrada toda discusión en la misma instancia y no podrá presentarse más escritos, ni producirse más prueba, salvo la que el Juez creyese oportuno para mejor proveer.

No se limitan al juez, como en lo civil, sus facultades para mejor proveer (documentos, confesión judicial, reconocimiento ó peritaje y vista de otros autos), sino que podrá hacer uso de todas las medidas probatorias, desde la prueba testifical, por ejemplo.

El Dr. Jofré, una de las mayores autoridades en materia de procedimientos, estableció para el Código de la Provincia de San Luis un agregado á la doctrina del presente artículo, concebido así: «Las pruebas que se recibían en tal caso (para mejor proveer), no pueden empeorar la condición del acusado», y explica así su innovación: «No conozco legislación alguna que autorice lo que en la terminología de nuestro derecho procesal se llama «diligencias para mejor proveer». De lo que sí estoy seguro, porque lo he palpado en el estudio de numerosos expedientes, es de que por medio de esas medidas el juez puede burlarse de la defensa, de la sociedad y de sus superiores. Las providencias para mejor proveer, se dictan después de cerrada la discusión y los términos de prueba, y tienen por objeto ilustrar al juez que no encuentra en los autos los elementos necesarios para condenar ó absolver. Sucede, no pocas veces, que el juez manda practicar en esa forma una prueba importante contra el acusado, sin que la defensa tenga los medios de combatirla por otra contraria, de donde resulta que á ésta se le coloca en un verdadero estado de inferioridad. Las diligencias para mejor proveer, contrarían dos principios fundamentales del derecho procesal: el que prohíbe proceder de oficio después





de cerrado el sumario, y el que prescribe que la prueba ha de ser contradictoria. En esa clase de diligencias el juez se substituye al fiscal ó á las partes con todos los inconvenientes que tal proceder trae consigo. No es esto sólo. Los malos jueces tienen en las diligencias para mejor proveer, una arma terrible mediante la cual pueden mandar á presidio al acusado más inocente y tienen el medio de burlarse de la ley demorando indefinidamente el fallo. Es sabido que mientras se practican esta clase de diligencias, no corre el término para fallar.»

—Las diligencias para *mejor proveer*, no pueden fundar una recusación por presunto prejuzgamiento. Cám. Crim., t. 43, p. 83.

—Es obligatoria la intervención del ministerio fiscal y de las partes, en las diligencias decretadas para *mejor proveer*: adolece de nulidad la sentencia fundada en diligencias decretadas para *mejor proveer*, cumplidas sin intervención de las partes. Cám. Crim., t. 98, p. 326.

—Las declaraciones recibidas para *mejor proveer*, deben ser con audiencia del defensor, bajo pena de nulidad de sentencia. Cám. Crim., t. V, p. 190.

ARTÍCULO 494

Terminada esta audiencia, el Juez examinará el proceso, y pronunciará su sentencia dentro de veinte días.

Con la sanción penal de los artículos 514 y 697 y siguientes.

Véase el acuerdo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, págs. 176 á 178 del tomo I, sobre la preferencia que se dará á ciertas causas para su pronto despacho.

TÍTULO QUINTO

De la sentencia

ARTÍCULO 495



Los Jueces dictarán sus sentencias con sujeción á las siguientes reglas:

Primera: Se principiará expresando el lugar y la fecha en que se dictare el fallo, los hechos que hubieren dado lugar á la formación de la causa, los nombres y apellidos de los actores particulares, si los hubiere; y de los procesados, consignando los sobrenombres ó apodos con que éstos sean conocidos, su estado, nacionalidad, domicilio, oficio ó profesión, y todas las demás circunstancias con que hubiesen figurado en la causa.

Segunda: Se consignarán los hechos que se consideren probados y que estuviesen relacionados con el punto ó puntos que debe abrazar el fallo.

Tercera: Se expresarán las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa.

Cuarta: Se consignarán en párrafos, también numerados, los puntos siguientes:

1.º La calificación legal de los hechos que se hubieren estimado probados.



2.º La calificación legal de la participación que en los referidos hechos hubiese tenido cada uno de los procesados.

3.º La calificación legal de las circunstancias atenuantes y agravantes.

4.º La calificación legal de los hechos probados con relación á la responsabilidad civil en que hubiesen incurrido los procesados, ó las personas sujetas á ella, á quienes se hubiere oído en la causa, y la que corresponda á las resoluciones que hubieren de dictarse sobre costas y á la declaración de querrela calumniosa.

5.º En seguida se citarán las disposiciones legales que se consideren aplicables, y se pronunciará el fallo condenando ó absolviendo al procesado ó procesados por el delito ó delitos que hayan sido materia del proceso, imponiendo la pena que corresponda.

Regla primera.—Se trata de un documento público, por lo cual son indispensables todos los adminículos que se citan, encabezando la sentencia, como también al final de ella la firma del juez y la del secretario autorizante.

Regla segunda.—Los hechos que dieron lugar á la formación de la causa se habrán *expresado* antes: aquí se consignarán los probados, pero no todos, sino los relacionados con el fallo. Esta parte de la sentencia equivale á los antiguos «Resultandos», forma del discurso que convendrá á veces seguir para mayor claridad. Es la apreciación de la prueba de lo que se trata, de modo que en esta parte de la sentencia, el juez no sólo resolverá las cuestiones que expresamente la ley le ha reservado para esta oportunidad (apreciación de la prueba de testigos y su tacha: artículos 303, 305 y 489; valor de la confesión: artículos 316 y 321; mérito de las pericias: artículo 346; falsedad de un testigo: artículo 304, etc.), sino que, á la par de esta labor que puede llamarse formal ó extrínseca, hará el rigu-



roso trabajo de encadenamiento lógico; de inducción y deducción; de confrontación y de análisis; de comparación, penetración psicológica y de síntesis, que ha de ser la resistente base sobre que levante la construcción legal de su decisión definitiva.

Regla tercera.—Sobre el mérito del sumario y en forma de acusación se expedirán fiscal y querellante en la oportunidad del artículo 463, y en la misma formularán los defensores sus conclusiones. Pero en la del 492, informe *in voce*, unos y otros han podido arribar á nuevas conclusiones, ó porque la prueba producida durante el plenario así les ha determinado, ó porque del conjunto del proceso ello se deduce. Por esto se refiere la presente regla á las conclusiones definitivas de una y otra parte. Sería útil que la *expresión* no fuera tan concisa como se acostumbra, con mengua de la claridad del discurso y aun del desarrollo del criterio judicial que aparece trunco ú obscuro.

Regla cuarta.—Abarca los puntos que forman la verdadera resolución del caso. (Se indica que sean *también* numerados, lo cual supondría la obligación de numerar los párrafos anteriores de la sentencia, si ello se hubiese exigido expresamente en alguna de las reglas anteriores). Los puntos que se estudiarán en los párrafos, numerados, que sean necesarios, son:

1.º Calificación legal de los hechos probados; es decir, su definición jurídica y su clasificación dentro del texto del Código ó ley que los prevé y castiga.

2.º Calificación legal de la participación de cada procesado, arribando á su clasificación como autor, cómplice, encubridor ó ajeno al delito por falta de prueba ó por haberse probado su inculpabilidad ó por estar exento de pena por alguna circunstancia eximente.

3.º Circunstancias atenuantes y agravantes para cada procesado ó declaración de no mediar en el caso.



4.º Cuestiones accesorias como son: *a*, las de responsabilidad civil de los procesados ó de terceros; *b*, costas; y *c*, declaración de calumniosa para la querrela. (Véanse artículos 173 y 177).

5.º Disposiciones legales que se citarán brevemente (su estudio podrá haberse hecho al aplicar la regla segunda ó los puntos anteriores de la presente), y *el fallo*.

—Los jueces carecen de facultad para modificar sus sentencias, aclarándolas ó aumentándolas, después de ser notificada á una de las partes. Cám. Crim., t. 15, p. 144 y t. 22, p. 257.

—En el plenario sólo puede resolverse la culpabilidad ó la absolución del acusado; el sobreseimiento es especial del sumario. Cám. Crim., t. 48, p. 24.

—El sobreseimiento no es procedente después de la acusación y defensa; la sentencia que no absuelve ó condena al acusado adolece de nulidad. Cám. Crim., t. 61, p. 51.

—Si el juez de sentencia considera que debe formarse sumario á otro que también aparezca con responsabilidad criminal, debe enviarle los datos pertinentes al juez de instrucción en forma de testimonio de ellos, pero no el proceso original. Cám. Crim., t. 84, p. 398.

—Si la acusación se limitó á la responsabilidad penal del acusado, sin hacerle cargo de los daños y perjuicios emergentes del delito que se le impute, no pueden intervenir en el proceso los terceros responsables civilmente. Cám. Crim., t. V, p. 91.

—El primer deber de los jueces, consiste en la imparcialidad. Esta desaparece cuando se considera al hombre con sus pasiones y debilidades y no al litigante que defiende lo que considera su derecho. (del juez correccional Dr. T. R. Cullen). Cám. Crim., t. 78, p. 155.

—Los jueces no deben, ni pueden, al resolver un proceso, bajo pretexto alguno, hacer afirmaciones depresivas para los Poderes Públicos y salirse de la materia del asunto. Cám. Crim., resol. de 20 de Noviembre de 1909, proceso contra José Mazza y otros por atentado á la autoridad.

(Véase además la jurisprudencia al artículo 509).

ARTÍCULO 496

La sentencia resolverá igualmente:

1.º *Todas las cuestiones referentes á la responsabilidad civil, que hubieren sido objeto del juicio.*



2.º *El pago de las costas procesales.*

3.º *La calificación del carácter de la acusación, declarándola calumniosa, si lo hubiere pedido el acusado.*

Inciso 1.º La sentencia debe resolver todas las cuestiones que á manera de *litis contestatio* se hayan sometido al juez. Es cierto que el artículo 1096 del Código Civil establece que la indemnización del daño causado por el delito sólo puede ser demandado por acción civil independiente de la criminal; pero es evidente, y así se ha declarado por la Corte Suprema Nacional y por la Cámara Criminal, que el Congreso no ha podido legislar sobre materia de procedimientos que se han reservado las provincias. Con arreglo á esta doctrina está el inciso.

Inciso 2.º Véase el artículo 143.

Inciso 3.º Se refiere á la acusación particular. La declaración judicial puede ser invocada en un juicio criminal por calumnia, ó directamente tomada en cuenta para pedir una indemnización.

—Las sumas embargadas á los procesados, deben imputarse á las penas de multa impuesta. S. C. N., t. 57, p. 177.

—En las causas seguidas contra varios reos, la condenación en costas debe repartirse equitativamente. Cám. Crim., t. 1, p. 413.

—El juez absolvió, absteniéndose de declarar calumniosa la acusación. El defensor se presentó (después del plazo concedido en lo civil para interponer el recurso de aclaración) pidiendo dicha declaración que el juez hizo; pero la Cámara revocó porque no proceden otros recursos que los consignados en el Cód. de Proc. Cám. Crim., t. 15, p. 415.

—La ausencia de dolo por parte del querellante, hace improcedente la declaración de ser calumniosa la acusación. Cám. Crim., t. 23, p. 124.

—Atento lo dispuesto en el artículo 567, no puede desconocerse la jurisdicción de los tribunales del crimen para resolver sobre la responsabilidad civil que surge del delito, ni la competencia del juez para llevar una condenación á debido efecto. Si bien el artículo 1096 del Cód. Civil establece que la indemnización del daño causado por



un delito, *solo* puede ser demandada por acción civil independientemente de la criminal, tal disposición no puede considerarse subsistente, en presencia de las leyes de procedimientos que son las que determinan la competencia de los tribunales y la manera de hacer efectivos los derechos y acciones conferidos por las leyes de fondo. De modo, que si dicho artículo 1096 debe entenderse como que excluye al juez del crimen del conocimiento de la acusación civil proveniente de un delito del derecho penal, legisla sobre materia que es de particular incumbencia de la legislación provincial, es decir, sería inconstitucional.

De los antecedentes legislativos del actual Cód. de Proc., resulta que no quiso establecerse como obligatoria la acumulación de ambas acciones, la civil y la criminal, lo cual no obsta á que se halle admitida como facultativa de la parte á quien se dan. Cám. Crim., t. 43, p. 180.

—Para que pueda considerarse como calumniosa una denuncia judicial, es necesario, no solamente que el denunciado haya esclarecido su inocencia, sino que, además, se haya demostrado que el acusador que lo denunció, tenía conocimiento de tal inocencia. (Carrara: *Programma*, § § 2.614, 2.617 y 2.623). Cám. Crim., t. 56, p. 22.

—La acumulación de la acción civil con la criminal que la ley confiere al damnificado por el delito, se halla virtualmente autorizada por los artículos 463, 495 y 496 del Cód. de Proc. Cám. Crim., t. 61, p. 19.

—El juez conserva jurisdicción para dictar medidas de seguridad emergentes de la sentencia apelada. Cám. Crim., t. 66, p. 179.

—No debe declararse calumniosa la acusación, si de autos no resulta que se haya iniciado y perseguido con el propósito de perjudicar por medio de la falsa imputación de un delito. Cám. Crim., t. III, p. 451.

—Los fundamentos de la sentencia no causan agravio: siendo la parte dispositiva absolutoria, no puede apelar el procesado del contenido de aquellos fundamentos. Cám. Crim., t. V, p. 110.

ARTICULO 497

*La absolución se entenderá libre en todos los casos.
Queda absolutamente prohibida la simple absolución
de la instancia.*



«A veces—dice Febrero—acontece que en el ánimo del juez se produce la convicción moral, es decir, que llega á convencerse de que un hecho es cierto, mas no halla en el proceso motivos explícitos para apoyar ese mismo convencimiento, de modo que pugnan, por decirlo así, la convicción moral y la convicción legal. En este caso se absuelve de la instancia al reo. Se diferencia este pronunciamiento—sigue diciendo el práctico—del de la libre absolución, en que por ésta se impone perpetuo silencio, se termina el juicio para siempre y se produce la excepción de cosa juzgada, y por el contrario, la absolución de la instancia permite la posibilidad de un nuevo juicio sobre un mismo objeto.»

El procedimiento era bárbaro y por esto se le ha suprimido, aunque el sobrecimiento provisional muchas veces le equivale.

Cuando la sentencia no ha sido recurrida ó no es susceptible de recurso, se encuentra consentida: pasa en autoridad de cosa juzgada. Esta se define por Escriche: «lo que se ha decidido en juicio contradictorio por una sentencia válida, de que no hay ó no puede haber apelación, sea porque la apelación no es admisible ó se ha consentido la sentencia, sea porque la apelación no se ha interpuesto dentro del término prescripto por la ley, ó habiéndose interpuesto, se ha declarado por desierta». Pudiera añadirse un último término, que comprendería la segunda instancia: «ó interpuesta la apelación y sostenida ante el Superior, éste ha confirmado la sentencia»; bien es verdad que este último término por nosotros propuesto, se confunde con el principio «porque la apelación no sea admisible».

«Ejecutoria—dice también Escriche—es el despacho que se libra por los tribunales de las sentencias que no



admiten apelación ó pasan en autoridad de cosa juzgada, á fin de que pueda llevarse á efecto. *Ejecutoriar* es obtener á su favor la sentencia que causa ejecutoria ó que confirma de un modo irrevocable el derecho que se tiene».

Con arreglo á esto, con la sentencia termina la jurisdicción del juez. Su sentencia será desde luego firme si es de las que no pueden ser recurridas, y si siéndolo, no se ha deducido contra ella ningún recurso.

Pero no será firme aunque no se haya deducido contra ella recurso alguno, en los casos del artículo 690.

—Los jueces del crimen carecen de jurisdicción para conocer de demandas por daños y perjuicios, promovidas por el absuelto contra el denunciante del delito. *Cám. Crim.*, t. 87, p. 163.

TÍTULO SEXTO

De los recursos en general

Recurso es la acción ó facultad concedida por la ley al que se cree perjudicado por una resolución judicial, para pedir la reposición, reforma, nulidad ó revocación de la misma (Reus). A veces se da al perjudicado por la inacción del juez. (artículo 514 inciso 2.º). Cuatro tiene en vista el presente título: el de *reposición*, el de *apelación*, el de *nulidad* y el de *queja*.

Creemos que puede también admitirse el de *aclaración*, por analogía con las leyes de procedimiento en lo civil: «Puede el juez, si se le pidiere por alguna de las partes dentro del día siguiente á la notificación (de la sentencia), corregir cualquier error material, aclarar algún concepto obscuro sin alterar lo substancial de la decisión, y suplir cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio» (artículo 222 del Código de Procedimientos Civiles). Véase en contra una sentencia en el art. 495.

Conoce además nuestro Código en el recurso de *inconstitucionalidad* de los artículos 22 incisos 2.º y 3.º, y el de *revisión* en los cuatro casos del artículo 551.





CAPÍTULO I

Del recurso de reposición

ARTÍCULO 498

El recurso de reposición tiene lugar contra los autos interlocutorios, á efecto que el mismo Juez que los haya dictado los revoque por contrario imperio.

Auto, es todo decreto judicial dado en alguna causa criminal ó civil (Escriche). Es interlocutorio cuando no decide definitivamente la causa, sino que sólo recae sobre algún incidente ó artículo del pleito ó dirige el orden ó la serie del juicio. Trae el nombre de los casos en que el juez resuelve sobre alguna alegación mutua de las partes, pero comprende toda resolución judicial, haya sido dictada de oficio ó á pedido de una parte y en este último caso haya habido ó no traslado á la contraria.

Sin embargo, equivaliendo el sobreseimiento definitivo á la misma sentencia definitiva, según el artículo 436, pues deja cerrado el juicio «de una manera absoluta»—según allí se dice—es también considerado por nuestro Código como auto interlocutorio, dada la forma como ha de concederse la apelación que contra él se interponga: en relación (artículo 441). Sucede otro tanto cuando el sobreseimiento proceda de alguna de las causas enumeradas en el artículo 443, según el artículo 454.

Contra esta clase de autos, puede la parte que se crea perjudicada, entablar el recurso de reposición, á resolverse por el mismo juez que dictó la resolución recurrida. En esto se distingue el recurso de los demás del presente Título, que son resueltos directamente por el Superior.

El recurrente puede fundar el recurso, es decir, exponer en qué consiste lo que supone error del juez.



Procede también la revocatoria de oficio, es decir, sin que se haya deducido el recurso de reposición. La ley castellana, que se cita de continuo en el foro para fundar la revocación, es la 2.^a del Título XXII, Partida 3.^a, en la que se lee «... ó quando el Juez da juyzio sobre alguna cosa nueva que acaesce en el pleyto é non sobre la demanda principal, assí como si fuesen contiendas sobre la carta del personero, si era valedera ó non; ó quando alguna de las partes aduxesse testigos en juizio, ó mostrasse cartas ó privilegios para probar su intención é la otra parte dixesse algunas razones por que quisiera dessechar aquellos testigos ó contradizeir aquellas cartas. Ca en qualquiera destas razones ó de otras semejantes dellas, que el Judgador diesse juyzio ante que fuesse librado el principal; a tal juyzio, como este dizen en latín, interlocutoria, que quiere tanto dezir como palabra ó mandamiento de Judgador que faze sobre alguna dubda que acaesce en el pleyto. E puede dar el Judgador este juyzio por escrito ó por palabra si assí quisiere é otrosí lo puede toller, e enmendar por alguna razón derecha, quando quier, ante que dé juyzio acabado sobre la demanda principal.»

Por cierto que Gregorio López, comentando esta ley, recuerda la frase de un comentarista: «*Judex qui sine causa revocat, facit litem suam*» (el juez que revoca sin causa, hace suyo el pleito).

—No procede el recurso tratándose de autos que resuelven excepciones dilatorias. S. C. N., t. 2, p. 162.

—No procede contra el auto de la Corte declarando mal concedido el recurso de apelación. S. C. N., t. 85, p. 202.

—No procede contra las sentencias definitivas. S. C. N., t. 97, p. 39.

—No procede contra providencias que solo importan el cumplimiento de una resolución ejecutoriada. Cám. Crim., t. 1, p. 140.

—Puede fundarse el recurso aunque se pida conjuntamente con el de apelación. Cám. Crim., t. 3, p. 607.



ARTÍCULO 499

Debe interponerse este recurso dentro de tercero día, resolviéndolo el Juez sin substanciación alguna.

Los tres días, á contar, naturalmente, desde el siguiente inclusive al de la notificación de la parte que recurre. A diferencia del Código de Procedimientos en lo Civil: artículo 294, en el nuestro no hay traslado á las otras partes del escrito de deducción del recurso.

ARTÍCULO 500

La resolución que recaiga hará ejecutoria para el recurrente, á menos que el recurso de reposición fuese acompañado del de apelación en subsidio, y la providencia reclamada reuniera las condiciones establecidas en el artículo siguiente, para que la interlocutoria sea apelable.

Debe entenderse que no es apelable tampoco el auto denegando la revocatoria que se ha interpuesto sin recurso de apelación conjunto. El caso se ha planteado alguna vez en nuestros tribunales en la siguiente forma: la parte que pudo deducir los dos recursos conjuntamente, como autoriza este artículo, sólo dedujo el de reposición; lo denegó el juez y entonces la parte apeló, no de la primera resolución (que es de la que pudo haber apelado, en su tiempo), sino de la segunda, ó sea de la denegación de la revocatoria. No se hizo lugar á la interposición del recurso.

—El auto confirmando ó revocando las providencias de que se ha pedido reposición, es inapelable. S. C. N., t. 7, p. 354 y t. 18, p. 411.



—No procede recurso de revocatoria del auto que concede ó no hace lugar á la reposición. Cám. Crim., t. 78, p. 328.

—No procede el recurso de apelación contra un auto que deniega la revocatoria, cuando es deducida fuera del término y no se ha interpuesto conjuntamente con ésta. S. C. N., t. 46, p. 244.

—Se refiere este artículo á la parte que pidió la revocatoria y no á la que sostiene la procedencia del auto revocado que puede siempre apelar. S. C. N., t. 92, p. 351.

CAPÍTULO II

Del recurso de apelación

ARTICULO 501

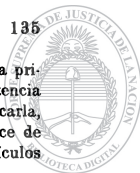
El recurso de apelación sólo se otorgará de las sentencias definitivas y de las interlocutorias que decidan algún artículo ó causen gravámen irreparable.

Así como el recurso de reposición se plantea ante el juez que ha dictado una resolución para que él mismo la reconsidere y modifique, el de apelación se formula ante el juez de cuya resolución se recurre para que someta el caso al superior, á fin de que lo falle en definitiva.

Procede este recurso:

1.º Contra las sentencias definitivas, es decir, que terminen el asunto que después de ellas no tiene ya nada que resolver, fuera de la ejecución de la misma sentencia.

2.º Contra los autos interlocutorios (pueden llamarse también sentencias interlocutorias en algunos casos), pero sólo de los que deciden algún artículo, interlocución, debate, cuestión, ó que causen gravámen irreparable, es decir, que de ejecutarse, producen tal alteración en las cosas ó en las relaciones jurídicas de las personas, que sería difícil ó imposible restituirlas al estado anterior.



En la jurisdicción federal hay dos apelaciones: la primera ante la Cámara Federal que conoce de la sentencia del juez federal para confirmarla, reformarla ó revocarla, y la segunda para ante la Corte Suprema, que conoce de la sentencia dictada por la Cámara. (Véanse los artículos 20, 21, 22 y 23).

—Cuando el Ministerio Fiscal ha acusado por dos delitos y no apela de la sentencia que declara solamente la existencia de uno, la Suprema Corte no puede juzgar del otro del cual el procesado ha sido absuelto. S. C. N., t. 63, p. 111.

—En las causas criminales en que por enfermedad del defensor se proceda al nombramiento de otro en su reemplazo, deben concederse á éste los términos legales, á contar desde la aceptación del cargo. S. C. N., t. 28, p. 425.

—El denunciante, siendo particularmente ofendido, tiene el derecho de apelar de todos los autos dictados en la fecha en que asumió el carácter de acusador, pues, para él, no hacen cosa juzgada. Cám. Crim., t. 34, p. 242.

—El fiador carece de personería para apelar de la sentencia consentida por el reo ó su defensor. Cám. Crim., t. 55, p. 199.

—«No es permitido apelar de agravio futuro. El recurso de apelación requiere la preexistencia de la resolución contra la cual se interpone, á fin de que el Superior repare los agravios inferidos por ella al derecho del apelante» (del Camarista Dr. Esteves). Cám. Crim., t. 78, p. 168.

—Cuando se ha concedido el recurso de apelación, si de él se desiste posteriormente, debe serlo ante el Superior, nó ante el juez ante el cual se había interpuesto. (Caravantes, núm. 1336; y Ley 26, Tít. 23, Part. 3.ª). Resol. de la Cám. Crim., de 15 de Marzo de 1910, proceso Quesada Jansens.

ARTÍCULO 502

El término para apelar, no habiendo disposición expresa en contrario, para casos especiales, será el de cinco días.

Cuando se interpone conjuntamente con el de reposición, debe hacerse dentro de los tres días de éste (ar-



tículo 499). Interpuestos conjuntamente el cuarto ó quinto día, no se admitirá el de reposición y sí el de apelación.

Los casos especiales á que alude el artículo son:

El del artículo 105, apelación de la denegación de la prueba en el incidente de recusación: veinticuatro horas.

El del 395, apelación de resoluciones sobre excarcelación: tres días.

El del 441, apelación del auto de sobreseimiento: tres días.

El del 455, apelación de excepciones: tres días.

El del 582, apelación de sentencia del Juez Correccional: tres días.

El del 587, apelación en el juicio de faltas: veinticuatro horas.

El del 639, apelación en el *habeas corpus*: veinticuatro horas.

—Corre desde la notificación: no puede tenerse por tal la nota de incomparecencia en la oficina. S. C. N., t. 12, p. 518.

—No procede prueba sobre los motivos que impidieron interponer en tiempo el recurso. Cám. Crim., t. 60, p. 17.

—Corre el término individualmente para la parte que se sintiese agraviada. S. C. N., t. 69, p. 280.

ARTÍCULO 503

La apelación podrá deducirse por diligencia ó por escrito. En este último caso el escrito de apelación deberá limitarse á la mera interposición del recurso, salvo que fuese conjuntamente deducido con el de reposición ó con el de nulidad, y si esta regla fuese infringida, se mandará devolver el escrito, previa anotación que el Secretario pondrá en autos, determinando el recurso y la fecha de su interposición.

El Juez proveerá lo que corresponda sin más trámite.



Por diligencia: al notificarse la resolución, extendiéndola el mismo funcionario que la hace.

Por escrito: en la forma expresada, es decir, que no puede fundarse (como en la reposición) sin enumerarse los fundamentos de la oposición (como en la nulidad).

El juez provee sin traslado ni vista, sin más que el escrito ó diligencia ó anotación, á la vista.

Cabe una tercera forma: la de adhesión (véase el artículo 522).

—La adhesión al recurso por el Ministerio Fiscal ante el Superior, tiene los mismos efectos que la apelación interpuesta ante el inferior. Cám. Crim., t. 28, p. 425; t. 25, p. 405; (en contra t. 12, p. 439.

—Procede la adhesión por la parte á la apelación interpuesta por el Fiscal. Cám. Crim., t. 13, p. 348.

ARTÍCULO 504

La apelación de sentencia definitiva se otorgará libremente y en ambos efectos, á no ser que el interesado pida que se le conceda sólo en relación. Si la sentencia fuese absolutoria, el Juez, sin perjuicio del recurso, concederá la libertad bajo caución con audiencia fiscal.

La apelación es *libre* ó en *relación*, según el trámite que ella deberá tener en segunda instancia. (Véase artículo 518 y siguientes para el recurso concedido libremente, y el 538 y siguientes para el concedido en relación).

Es en *ambos efectos* (y es la que considera este artículo), porque *suspende* la jurisdicción del juez de primera instancia y *devuelve* ó transfiere la causa al juez ó tribunal superior. Son los dos efectos: suspensivo y devolutivo.

El único caso de este Código en que tratándose de sentencia definitiva sólo ha de concederse el recurso en rela-



ción, es el de la sentencia definitiva pronunciada por el Juez Correccional (artículo 582). No hay otro.

—Pendiente la apelación concedida en ambos efectos, el juez no puede conocer en la que es materia del juicio ni en sus incidentes. S. C. N., t. 16, p. 467.

—El juzgado sólo se desprende de su jurisdicción con la remisión de los autos. Las providencias dictadas en ellos después de concedida la apelación, no adolecen de nulidad. Cám. Crim., t. 6, p. 351.

—El querellante no es parte cuando la excarcelación se concede por haberse pronunciado sentencia absolutoria. Cám. Crim., t. 83, p. 128.

ARTÍCULO 505

La de autos interlocutorios se concederá en un solo efecto, á excepción de los casos en que, por disposición de este Código, deba otorgarse en ambos.

En un *solo efecto*, quiere decir *devolutivo*; de modo que, cuando se concede la apelación en un *solo efecto*, ó en *el efecto devolutivo* (se puede decir de los dos modos, pues son equivalentes), no se suspende la ejecución de lo mandado, sino que se hace efectivo, y además se envía al Superior un testimonio de lo actuado para que resuelva en definitiva (véase el artículo 507).

Lo que en procedimiento civil constituye una regla, esto es, que el recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias se concederá siempre en ambos efectos, es decir, suspendiendo la jurisdicción del juez sobre el asunto é impidiendo el cumplimiento de lo que hubiese ordenado, «á excepción de los casos en que, por disposición de la Ley, deba otorgarse en un solo efecto» (artículo 230 del Código de Procedimientos en lo Civil)—en procedimientos criminales, la regla es que la apelación se admitirá en *un solo efecto*; en otros términos: habrá resolución y ejecución inmediatas, á pesar del recurso que



pueda interponer ó haya efectivamente interpuesto la parte agraviada.

Tratándose de autos interlocutorios, nuestro Código no admite á esta regla sino dos excepciones: la del artículo 431 en que el juez declarándose incompetente manda pasar el proceso á conocimiento del juez correccional, y la del artículo 396 inciso 3.º, en que para cancelar la fianza carcelaria es condición que se haya dictado auto de sobreseimiento *irrevocable*.

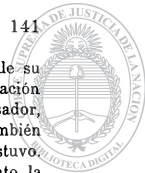
Estableciendo nuestra legislación procesal en lo criminal, como sistema, el inmediato cumplimiento de lo que el juez hubiere resuelto, sin perjuicio de la apelación, no ha hecho otra cosa que colocarse sobre tal punto en perfecta armonía con otras disposiciones suyas en favor de la mayor amplitud de facultades que deben acompañar al juez. El mismo principio existe en otras legislaciones, ó ha sido sostenido por la jurisprudencia y la doctrina. En Francia, un fallo de la Corte de Casación de 11 de Enero de 1881, estableció que en materia criminal «las apelaciones formuladas á los mandatos de los magistrados no son suspensivas». Dalloz, Mangin, Reus y otros autores, enseñan igual cosa.

Nuestra Cámara de Apelaciones en lo Criminal ha resuelto lo mismo en 31 de Mayo de 1909, confirmando un auto del juez de instrucción doctor D. J. Frias, en el cual este magistrado, afirmando su opinión en la de aquellos autores, decía: «Que la oposición de la parte acusadora no debe considerarse como obstáculo para la libertad del acusado cuando ésta hubiere sido ordenada. Por regla general, la apelación hecha contra la resolución de un juez de instrucción, no tiene carácter suspensivo; no interrumpe ni impide la ejecución de la orden atacada ni la marcha de la instrucción». (En el caso, dicho juez hizo efectiva la libertad bajo fianza del procesado, á pe-



sar de haber sido apelado el auto en que la declaraba procedente).

No es difícil hallar y explicar la razón por la cual en materia criminal las apelaciones en ambos efectos traerían como resultado, frecuentemente, una sanción de injusticia y trabas á veces irreparables para el mejor esclarecimiento de los delitos, especialmente en el período de instrucción, donde la acción del juez, como se ha dicho en otra parte, requiere, como base, determinación y ejecución inmediatas. Al no admitir el Código, como regla general los recursos de apelación con efecto suspensivo, sienta con ello una presunción provisional sobre acierto y justicia de parte del juez en la medida que él haya adoptado, lo cual se concilia con la naturaleza especial de los juicios criminales, en los que cualquier suspensión de los mandatos del juez, por oposición de las partes, daría de continuo resultados contrarios al interés público que supone esa clase de juicios y también al individual. Como ejemplo típico, tal vez el que entre nosotros ha provocado más discusiones sobre el alcance de la ley y de las facultades del juez, tenemos el caso en que éste, mandando libertar al reo por auto de sobreseimiento, hace efectivo en seguida su mandato sin esperar la oposición de la parte que por efecto de tal medida pueda considerarse agraviada. Y es justo que no sea de otro modo: ¿Acaso el reo, cuando el juez resolvió dictar su prisión preventiva había logrado suspender los efectos de tal medida por su oposición contra ella? Es claro que nó, porque si ello fuera permitido por la ley, ésta misma facilitaría así un recurso que continuamente sería empleado con eficacia para burlar su propósito principal: el castigo del delincuente. ¿Por qué entonces, cuando á la inversa, ese mismo juez deja sin efecto por auto de sobreseimiento aquella prisión preventiva y dispone la libertad inmediata del reo, ésta ha de depender de la conformidad de la parte acusadora? ¿No



son en rigor situaciones semejantes? Si en el caso de su prisión, el reo ha debido sufrirla á pesar de la apelación que interpuso contra ella, es lógico que el acusador, en la situación que favorezca al reo, aparezca también colocado en el mismo plano en que aquél antes lo estuvo. No hay que olvidar que en materia de procedimiento la igualdad de derechos para la parte acusadora y la acusada, debe aparecer siempre equilibrada; es el principio que sienta el artículo 203, aunque en otros términos.

Las facultades del juez, como base de buena justicia, deben siempre ser armónicas en situaciones semejantes, como serían las dos que hemos puesto de ejemplo; si han de asistirle para producir un acto capaz de turbación sobre la vida normal de una persona—la restricción de su libertad—cuando así lo entienda en razón de un juicio *á priori*, esto no excluye que por razón de otro juicio que deba considerarse *á fortiori*, determinado por hechos sobrevivientes, deban decidirlo al acto contrario: la libertad, tan inmediata, como inmediata fué la detención, para lo cual su juicio no había exigido previamente conformidad de las partes, ni debe exigirlo.

Véase también el artículo 507.

* * *

Como casos típicos y principales de autos interlocutorios que admiten su inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la apelación, pueden citarse los siguientes:

1.º El del artículo 366 (declarado apelable por la jurisprudencia en virtud del principio del artículo 501), que resuelve la prisión preventiva del reo.

2.º El del artículo 395, concediendo la excarcelación bajo fianza.

3.º El del artículo 423, sobre embargo de bienes del procesado.



4.º El del artículo 428, sobre embargo de bienes de personas que, extrañas al delito criminalmente, son, sin embargo, responsables civilmente por el mismo.

5.º El del artículo 441, que comprende al sobreseimiento, cualquiera que sea su forma.

6.º El del artículo 455, aceptando ó rechazando excepciones de previo y especial pronunciamiento.

7.º El del artículo 474, en que se deniega el término extraordinario de prueba.

8.º El del artículo 639 sobre recursos de *habeas corpus*.

9.º El del 650 denegando la extradición.

—En los juicios criminales, la apelación de autos interlocutorios sólo procede el efecto devolutivo; el suspensivo se encuentra tácitamente derogado. Cám. Crim., t. 12, p. 233.

—La forma de concederse la apelación sólo en el efecto devolutivo, se explica por el peligro que habría en demorar—con especialidad en el estado del sumario—la ejecución de diligencias que pueden ser urgentes y necesarias para la investigación criminal. Cám. Crim., t. 20, p. 135.

—Los incidentes deben sustanciarse aun cuando el proceso principal se hallare en apelación; el juez, para el caso, conserva jurisdicción. Cám. Crim., t. 75, p. 155.

ARTÍCULO 506

Quando se otorgue el recurso en ambos efectos, por la misma diligencia se mandarán remitir los autos originales á la Suprema Corte ó Cámara de Apelaciones, según corresponda.

La remisión se hará de oficio, por el primer correo ó á lo más por el segundo siguiente á la apelación, bajo la responsabilidad del Juez, tratándose de sentencias expedidas por los Jueces que funcionan fuera de la Capital.

Tratándose de las sentencias de los Jueces de la Capital, la remisión se efectuará dentro de las veinticuatro horas siguientes á la última notificación, pasando el actuario el expediente al Secretario del Tribunal que haya de conocer del recurso. En ningún caso la falta de reposición de sellos será causa para demorar la remisión de los autos.

El recurso otorgado en ambos efectos, suspensivo y devolutivo, implica la suspensión de jurisdicción del juez inferior, como lo hemos visto antes.

Se exige la remisión inmediata para que no esté en el aire la acción judicial más que el tiempo materialmente necesario para que aquélla se efectúe.

La reposición de sellos será objeto de una tramitación especial cuando vuelva el expediente al juzgado de su procedencia: por vía de acción ejecutiva.

ARTICULO 507

Si sólo se concediere la apelación en el efecto devolutivo, se mandará sacar testimonio de lo que el apelante señalare de los autos, con las adiciones que el colitigante hiciere y las que el Juez estimare necesarias, y ese testimonio será remitido al superior dentro de tercero día.

Porque la jurisdicción del juez no se ha suspendido por el efecto devolutivo. Véase la razón que exponemos en el comentario al artículo 505.

Es de advertirse también que los autos pueden enviarse originales al Superior, cuando la resolución dictada en ellos, por su naturaleza, sea de aquellas que una vez cumplidas dejan desligado al juez de la prosecución del





proceso, v. gr.: cuando se ha sobreseído definitivamente; cuando encontrándose el proceso en estado de plenario, se ha hecho lugar ó denegado á cualquiera de las excepciones que permiten este Código en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento, etc. Sacar testimonios en tales casos, sería á expensas de un recargo innecesario de trabajo y de pérdida de un tiempo útil para la pronta resolución del punto apelado.

ARTICULO 508

Transcurridos los términos expresados sin interponerse la apelación, quedarán consentidas las sentencias, salvo que fuese el caso de consulta, en que el Juez remitirá de oficio los autos al superior en los términos señalados en el artículo 506.

La sentencia queda en el primer caso ejecutoriada.

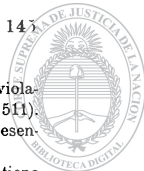
En el segundo no causa ejecutoria hasta la resolución del Superior.

CAPÍTULO III

Del recurso de nulidad

ARTICULO 509

El recurso de nulidad sólo tiene lugar contra resoluciones pronunciadas con violación de las formas substanciales prescriptas á su respecto por este Código, ó por omisión de formas esenciales del procedimiento, ó por contener éste defectos de los que, por expresa disposición del derecho, anulen las actuaciones.



Son tres casos distintos:

1.º Contra autos ó sentencias pronunciadas con violación de las formas substanciales prescriptas (artículo 511).

2.º Por notar la parte que se han omitido formas esenciales del procedimiento (artículo 512).

3.º Por entender la parte que el procedimiento contiene defectos de los que por disposición expresa del presente Código, ó por los artículos 1044 y 1045 del Código Civil, anulan las actuaciones (artículo 513).

Se plantea ante el juez inferior para que resuelva el superior en definitiva, y en esto se parece al de apelación.

Cabe la declaración de nulidad (por el superior) de oficio, y esto tiene de común con la revocatoria.

Véase también el artículo 696.

—Si el recurso no ha sido interpuesto por el juez *a quo*, no puede conocer de él el juez *ad quem*. S. C. N., t. 5, p. 64 y t. 11, p. 240.

—La sentencia condenatoria dictada en virtud de una confesión y declaraciones de testigos ante juez incompetente, es nula. S. C. N., t. 7, p. 312.

—Es nula la sentencia pronunciada sin acusación previa y sin la audiencia del condenado. S. C. N., t. 56, p. 186.

—No es procedente de una sentencia que sólo se tacha de injusta. S. C. N., t. 12, p. 299.

—La supresión de la forma de resultandos y considerandos en la sentencia, no es causa de nulidad, siempre que en ella se encuentren especificados claramente los hechos y el derecho aplicado. Cám. Crim., t. 4, p. 366.

—La falta de intervención del defensor del reo, hace procedente la nulidad de todo lo actuado. Cám. Crim., t. 14, p. 343.

—La sentencia dictada por juez incompetente, debe ser declarada nula por la Cámara, aun cuando el acusado no haya interpuesto la excepción. Cám. Crim., t. 18, p. 213.

—La sentencia dictada por juez incompetente debe ser declarada nula, aun cuando el acusado no haya interpuesto la excepción. Cám. Crim., t. 18, p. 276.

—Aun en los casos en que la ley prescribe un procedimiento breve y sumario, la audiencia del acusado es ineludible, y debe declararse la nulidad de la sentencia dictada omitiendo esa formalidad. Cám. Crim., t. 20, p. 121.



—La falta de apelación del defensor no puede fundar la anulación de la sentencia, si el reo también fué notificado. Cám. Crim., t. 23, p. 142.

—Procede la nulidad del procedimiento si el reo carecía de defensor. Cám. Crim., t. 29, p. 227.

—La falta de pronunciamiento sobre la indemnización civil, no puede fundar la nulidad de la sentencia recaída en la causa criminal, si sólo el reo ha interpuesto recurso. Cám. Crim., t. 54, p. 393.

—Aun cuando el recurso de nulidad no haya sido interpuesto en tiempo y forma, el superior, por excepción, puede conocer y resolver sobre la nulidad de diligencias determinadas, alegadas por el defensor al expresar agravio. Cám. Crim., t. 56, p. 119.

—Es nula la sentencia dictada sin intervención del defensor nombrado por el reo. Cám. Crim., t. 59, p. 265.

—Adolece de nulidad la sentencia si el agente fiscal pide sobreseimiento y se omite la audiencia del fiscal de Cámara. Cám. Crim., t. 59, p. 277.

—Debe declararse nula la sentencia que sólo toma en consideración y castiga uno de los delitos acusados, omitiendo su pronunciamiento sobre los demás. Cám. Crim., t. 60, p. 160.

—La omisión de resultandos y considerandos en la sentencia, no puede fundar la nulidad, si existe en cualquier forma la relación de las constancias de la causa y se resuelven todas las cuestiones que se hayan planteado por la acusación y la defensa. Cám. Crim., t. 76, p. 11.

—El fallecimiento del defensor, después de consentida la providencia de autos, no puede viciar de nulidad la sentencia notificada en tiempo y forma al nuevo defensor. Cám. Crim., t. 81, p. 438.

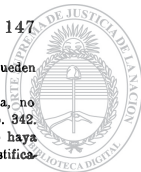
—Adolece de nulidad la sentencia que acepta la excepción de prescripción sin audiencia del querellante. Cám. Crim., t. 83, p. 104.

—La omisión de diligencias solicitadas por el defensor, no puede fundar la nulidad de la sentencia, si no son de las que la ley declara necesarias. Cám. Crim., t. 83, p. 379.

—La falta de intervención del reo en las diligencias para *mejor proveer*, no puede fundar la nulidad de la sentencia. Cám. Crim., t. 88, p. 52.

—Si para el pronunciamiento de la sentencia se han omitido formas sustanciales del juicio, debe declararse la nulidad de oficio, aun cuando sólo se haya interpuesto recurso de apelación. Cám. Crim., t. 89, p. 5.

—Adolece de nulidad la sentencia, si la retractación de la confesión del acusado no ha sido sustanciada en forma. Cám. Crim., t. 98, p. 324.



—La admisión y agregación indebidas de un escrito, no pueden fundar el recurso de nulidad. Cám. Crim., t. 98, p. 438.

—El desistimiento del Ministerio Fiscal después de la prueba, no puede fundar la nulidad de la sentencia. Cám. Crim., t. 99, p. 342.

—El recurso de nulidad no puede fundarse en que el juez no haya considerado la prueba con recto criterio, prescindiendo de justificativos presentados por los interesados. Cám. Crim., t. II, p. 200.

—No fundándose (ni en 2.ª instancia) el recurso de nulidad, se induce que se ha renunciado al recurso. Cám. Crim., t. V, p. 264.

(Véanse también los casos del artículo 513).

ARTÍCULO 510

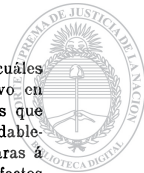
Sólo podrá deducirse el recurso de nulidad contra las resoluciones de que pueda interponerse apelación, deduciéndole conjuntamente con ésta, y en el término para ella concedido.

Es decir, de las resoluciones definitivas y de las interlocutorias que decidan algún artículo ó causa gravamen irreparable.

Y dentro del término ordinario de cinco días ó del más breve en los casos exceptuados. (Véase artículo 502).

No rigen para la interpretación del recurso las disposiciones del artículo 503, no habiendo sido fundado.

El doctor García Reynoso, de la Cámara de San Nicolás, uno de los jueces más ilustrados y ecuanímenes de la República, propone la siguiente innovación: «El recurso de nulidad deberá fundarse siempre, al ser deducido, si el recurso procede en relación, y al expresar agravios si procede libremente, teniéndose por no interpuesto ó desistido en caso omiso». Y la funda del siguiente modo: «Casi siempre los defensores y acusadores particulares, al interponer el recurso de apelación, agregan el de nulidad sin tomarse el trabajo de fundarlo, sino en los raros casos en que piensan que realmente procede; en los demás,



dejan al tribunal de apelación la tarea de inquirir cuáles serán los vicios de nulidad que el interponente tuvo en cuenta, ó acaso confían en que aquél encontrará los que aquéllos no encontraron. Este temperamento, indudablemente cómodo para los apelantes, obliga á las Cámaras á substituirse al criterio del recurrente, á inquirir defectos que aquél no encontró, porque no existen, y á hacer el pronunciamiento correspondiente; en todo lo cual pierde un tiempo que le sería forzoso emplear de otra manera más provechosa. A 'cortar este abuso tiende la disposición propuesta».

—Este recurso, interpuesto al expresar agravios, no es admisible. S. C. N., t. 23, p. 719.

—No puede concederse el de nulidad si se deniega el de apelación. S. C. N., t. 84, p. 405.

—Debe rechazarse el recurso de nulidad cuando no se expresan las causas en que se funda. S. C. N., t. 93, p. 396 y Cám. Crim., t. 1, p. 145.

—Para que procedan los recursos de apelación y nulidad, es indispensable la existencia de una sentencia ó pronunciamiento que decida algún artículo ó cause gravamen irreparable. Cám. Crim., t. 3, p. 259.

—Dentro del término deben ser concedidos, aun cuando se deduzcan separadamente. Cám. Crim., t. 60, p. 5.

—Pueden ser deducidos los dos recursos en escritos distintos. Cám. Crim., t. 96, tp. 31.

ARTÍCULO 511

Si el procedimiento estuviere arreglado á derecho y la nulidad consistiese en la forma de la sentencia, el Tribunal así lo declarará, y mandará pasar la causa á otro Juez de 1.^a Instancia para que sentencie.

La nulidad de la sentencia, por su forma, es decir, por no estar dictada con arreglo á los artículos 495-497,



libra al superior del estudio de su fondo ó justicia con que ha sido dictada.

El artículo considera la primera hipótesis de las tres del artículo 509.

—Debe ser declarada la nulidad de la sentencia que no contiene decisión positiva y precisa sobre la cuestión deducida en la demanda, aun cuando con ulterioridad no haya sido materia de discusión. Cám. Crim., t. 33, p. 405.

—No debe declararse nula la sentencia porque haya prescindido de analizar pruebas que el juez cree improcedentes; en todo caso, al hacer esta apreciación, puede haber incurrido en error, en cuyo caso la sentencia será injusta, pero no nula. Cám. Crim., t. 42, p. 21.

—La nulidad de la sentencia no puede sustanciarse en incidente por cuerda separada. Cám. Crim., t. 58, p. 367.

—La nulidad de la sentencia puede declararse de oficio. Cám. Crim., t. 60, p. 230.

—Adolece de nulidad la sentencia que se pronuncia sobre los daños y perjuicios reclamados al contestar la demanda, si no ha sido sustanciada la acción como corresponde. Cám. Crim., t. 60, p. 211.

ARTÍCULO 512

Cuando la nulidad provenga de vicio en el procedimiento, se declarará por nulo todo lo obrado que se relacione con la actuación nula, y se devolverán los autos al Juez, para que volviendo á substanciar el proceso, desde aquella misma actuación en adelante, pronuncie sentencia, con arreglo á derecho.

Este artículo ya no considera la nulidad de la forma de la sentencia, sino cualquiera causal de nulidad que durante todo el curso del procedimiento observe el tribunal superior.

En tal caso es el mismo inferior el que tomando el procedimiento desde la actuación inmediatamente anterior á la nulidad, lo endereza y lleva hasta la conclusión.

Son la segunda y la tercera hipótesis del artículo 509.

ARTÍCULO 513

La nulidad por defectos de procedimiento quedará subsanada, sin embargo, siempre que no se reclame la reparación de aquéllos en la misma instancia en que se hayan cometido.

Este artículo limita al anterior exigiendo la reclamación del interesado en la instancia en que se cometió la nulidad, es decir, ante el juez que la consintió ó la cometió. La reparación debe exigirse bajo forma de reposición ó de reposición y apelación, según proceda.

Para la consideración de nulidad, debe tenerse presente lo establecido por el Código Civil (artículos 1037-1065) en punto á nulidad completa ó parcial, actos nulos y anulables y nulidades absolutas y relativas.

La subsanación á que se refiere el artículo, debe entenderse en cuanto á la parte que pudo reclamar y no reclama.

El artículo debe entenderse como refiriéndose sólo á la pérdida del derecho que se habrá producido, para reclamar de ellas, en cualquiera de las partes que habiéndolas antes notado no interpusieron, no obstante, recurso alguno ante el juez inferior que las cometió ó consintió.

Cuando una nulidad es absoluta, debe declararse de oficio: Ley 5.ª, Tít. 26, Partida 32. Los defectos de procedimiento, cuando entrañan la esencia y forma sustancial del juicio, ni son renunciables por las partes ni deben ser tolerados por los jueces, aunque éstas no los observaren, y menos en procesos criminales que envuelven siempre un interés más social que particular. Esto mismo ha movido á Faustin Hélie á expresarse del siguiente modo: «Las formas del procedimiento criminal deben ser bastante poderosas para hacer brotar la verdad del seno de los hechos: bastante sencillas para que sirvan de apoyo y no





de obstáculo; bastante flexibles para que se ajusten á las necesidades de las distintas causas; bastante firmes para resistir á las violencias, tanto de los jueces como de las partes: se confunden con la justicia misma, que en realidad no es otra cosa que complejo de formas. El legislador ha podido en ciertas épocas dejar la pena al arbitrio de los jueces, nunca ha abandonado á los caprichos de éstos las formas de los juicios».

La violación de disposiciones legales categóricas, lleva siempre consigo la presunción del desconocimiento de la pérdida de un derecho irrenunciable ó de un vicio sin el cual la situación de las partes podría ser otra en el momento de advertirse la nulidad; por ello, repetimos, debe entenderse que el precepto del artículo 513 sólo tiende á privar á los interesados del derecho de reclamar sobre las nulidades cuando no lo han hecho en la instancia en que ellas se produjeron y que no impide que, por acción directa de la justicia, se declaren las nulidades de oficio cuando sean percibidas y entrañen un vicio insanable, nulo, pues el desconocimiento de sus derechos por las partes en punto á cuestiones de orden público, como deben ser consideradas las nulidades, debe ser siempre suplido por acción directa de la justicia, declarando nulos por sí misma los actos realizados en contravención á disposiciones legales expresas.

Así, tendríamos: que un proceso fuera elevado á plenario sin que contra el reo se hubiese dictado antes auto de prisión preventiva; ó que se hubiere tramitado sin la audiencia que le corresponde al acusador particular, habiendo éste antes asumido tal carácter; ó que una cuestión de competencia ó jurisdicción, fuera resuelta sin audiencia del Ministerio Fiscal; ó que al procesado no se le hubiese hecho conocer la causa de su detención; ó al tomársele declaración indagatoria, el derecho que tenía de nombrar defensor; ó que el reo hubiese sido condenado



sin ser oído, ó defendido, etc., porque todas estas circunstancias, son consagradas como esenciales por las disposiciones respectivas.

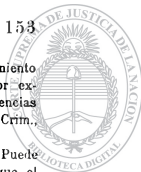
El Fiscal de Cámaras Dr. Cortés (tomo 2.º, página 294, Fallos de la Cámara Criminal), ocupándose de esta cuestión, se expresaba en los siguientes términos: «No se le oculta al fiscal que tratándose de trámites importantes del juicio criminal, que pueden estimarse como disposiciones de orden público, el defensor no podría renunciarlos», y agrega en seguida: «En tal caso, aquel principio legal no puede tener aplicación alguna, prevaleciendo la doctrina de que en los juicios el consentimiento tácito ó expreso de las partes, subsana cualquier defecto de forma, cuya observancia no se haya reclamado en tiempo oportuno, *por lo menos mientras su omisión no perjudique al esclarecimiento de la verdad de los hechos, la cual resulte suficientemente constatada en términos que pueda pronunciarse sentencia sin el más ligero temor de error*».

También la Cámara de Apelaciones en lo Civil: tomo 42, página 47, anulando una sentencia en mérito de haberse violado un precepto de puro procedimiento, decía en síntesis, como fundamento de su fallo, lo siguiente: «que las reglas que rigen los procedimientos, son de riguroso derecho y deben guardarse por las partes y por los jueces, pues su observancia es para las primeras garantía recíproca de igualdad en el debate, y para los segundos, de mejor acierto en la expedición de sus fallos».

—Adolece de nulidad el sobreseimiento dictado sin audiencia del acusador particular y del Ministerio Fiscal. Cám. Crim., t. 55, p. 211.

—La anulación del sumario, formado indebidamente ante el juez de sentencia, no basta para anular las actuaciones válidas para otros procesados: debe dictarse sentencia. Cám. Crim., t. 84, p. 398.

—La falta de intervención del Ministerio Fiscal en el sumario, no basta para declarar la nulidad, si, notificado de su terminación, consiente el auto. Cám. Crim., t. 99, p. 356.



—Aun cuando el recurso de nulidad por defectos de procedimiento no se haya interpuesto en tiempo y en forma, el superior—por excepción—puede conocer y resolver sobre la nulidad de diligencias alegada por el defensor del procesado al exponer agravios. Cám. Crim., t. 56, p. 119.

—El secretario recibió las declaraciones sin poder hacerlo. Puede entonces decirse que la prueba no ha existido en el juicio y que el juzgado ha prescindido de un trámite esencial del mismo. Se trata de una nulidad absoluta que puede y debe ser declarada de oficio por el tribunal, con arreglo á los artículos 1,038 y 1,017 del Cód. Civil y leyes 12 y 15, título 22, partida 3.ª. Cám. Civil, t. 50, p. 199.

—Consentidas por las partes las providencias dictadas, el recurso es improcedente. Cám. Crim., t. 4, p. 14.

—Si para el pronunciamiento de la sentencia se han omitido formas sustanciales del juicio, debe declararse de oficio la nulidad, aun cuando solo se haya interpuesto recurso de apelación. Cám. Crim., t. 41, p. 5.

(Véanse también los casos del artículo 509).

CAPÍTULO IV

Del recurso de queja

ARTÍCULO 514

El recurso de queja podrá interponerse:

1.º Cuando el Juez deniegue los recursos de apelación y nulidad, ó solo el primero, debiendo acordarlos.

2.º Cuando deje transcurrir los términos legales sin pronunciar la resolución que corresponda.

En el primer caso, como se ve en el artículo siguiente, este recurso se distingue de los tres anteriores en que no se plantea ante el juez inferior, sino ante el superior directamente.

En el segundo no se plantea ante el superior sin el requerimiento de que habla el artículo 517.



Téngase presente que la ley de creación de las Cámaras Federales, ha reservado á la Suprema Corte (artículo 5.º) el «conocimiento de los recursos que se promuevan por retardo ó denegación de justicia» en los casos en que (según el artículo 4.º), la Corte conoce por apelación y nulidad. (Véanse en nuestro comentario al artículo 550 los dos casos de orden penal en que conoce la Corte en última instancia; véanse también nuestros artículos 518 y 550, el primero para el procedimiento en la Corte).

ARTÍCULO 515

En los casos del inciso 1.º del artículo anterior, la parte que se sintiere agraviada, podrá ocurrir directamente en queja al Superior, pidiendo que se otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión de los autos.

La queja directa debe contener la doctrina que el juez ha violado al no conceder el recurso y aun la materia de este mismo, es decir, el punto que fué objeto de la resolución apelada, para que el superior pueda expedirse en la forma prevenida en los artículos 540 y siguientes.

—No procede el recurso de hecho si no hay denegación de recurso. S. C. N., t. 45, p. 307; t. 55, p. 398; t. 71, p. 159, etc.

—No procede si la resolución del inferior ha sido consentida. Cám. Crim., t. 13, p. 258.

ARTÍCULO 516

Esta queja deberá interponerse dentro de tres días después de notificada la denegación, aumentándose con un día más por cada siete leguas, si se recurriese de providencias de los Jueces de fuera de la Capital.



Se refiere siempre al recurso de queja del primer inciso del artículo 514. El aumento de un día por cada siete leguas, no se refiere á la jurisdicción ordinaria de la capital, ni á la federal de la misma.

—El superior fijará un término para que se dicte sentencia. S. C. N. t. 57, p. 42.

—No procede el recurso de hecho si no hay denegación de recursos. S. C. N., t. 72, p. 193; t. 45, p. 307; t. 55, p. 398 y t. 71, p. 159.

—El incidente queda terminado por el fallo expedido durante su tramitación. S. C. N., t. 53, p. 417.

ARTÍCULO 517

La queja por retardo de justicia no podrá deducirse ante el Superior, sin que previamente los interesados hayan requerido del Juez de la causa el despacho, y éste dejare por cinco días sin expedir resolución.

Se refiere á los casos del inciso 2.º del artículo 514.

Después de haber surtido la ineficacia del requerimiento al inferior, la deducción ante el superior se hace ya directamente.

—Debe acompañarse copia del escrito en que se requirió el despacho del inferior. S. C. N., t. 90, p. 114.

—No procede el recurso cuando la demora procede de la existencia de causas de resolución preferente. S. C. N., t. 90, p. 231.

—La providencia recaída en el pedido de pronto despacho, declarando que la causa será resuelta en el turno que le corresponda, no importa retardo de justicia. S. C. N., t. 90, p. 190.

—La Suprema Corte no tiene jurisdicción para conocer en los recursos por retardada justicia, contra los tribunales locales. S. C. N. t. 92, p. 35.

TÍTULO SÉPTIMO

Del modo de proceder en segunda instancia

CAPÍTULO I



Este Capítulo comprende las siguientes partes:

A.—Apelación concedida libremente: del artículo 518 al 537.

B.—Apelación concedida en relación: arts. 538 y 539.

C.—Recurso de queja por recurso denegado: artículos 540 al 543.

D.—Recurso de queja por retardada justicia: artículos 544 y 545.

E.—Recurso de nulidad: artículo 546.

Para los casos de apelación en última instancia ante la Corte Suprema, véase lo dicho en los artículos 514, 550 y 551 del presente Código, y además el 8 de la ley sobre creación de Cámaras Federales, que establece que «en los casos en que la Suprema Corte conozca en grado de apelación, recibido el expediente, se dictará la providencia de autos y las partes podrán, dentro de los diez días comunes é improrrogables, siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar una memoria sobre las causas, que se mandará agregar á los autos y sin más trámite quedará la causa conclusa para definitiva».



A.—DEL RECURSO DE APELACIÓN CONCEDIDO LIBRE-
MENTE.

ARTÍCULO 518

Cuando el recurso se hubiere concedido libremente, el mismo día en que los autos lleguen al Tribunal Superior, el Secretario dará cuenta, poniendo la correspondiente anotación.

Este artículo encierra una disposición de mero trámite reglamentario dentro del Tribunal.

ARTÍCULO 519

El Tribunal Superior mandará inmediatamente poner el proceso en la Secretaría para que las partes hagan uso de su derecho; debiendo el apelante ó apelantes expresar agravios dentro de nueve días, á contarse desde el siguiente al de la notificación de esa providencia y en la que se designarán los días de la semana en que los interesados deban comparecer á la oficina del Ujier para ser notificados.

La expresión de agravios ha venido á substituir á la antigua mejora del recurso. (Véase el artículo 523).

No hay en segunda instancia extracción de expediente como en primera.

En los casos en que proceda la recepción de la causa á prueba (véanse artículos 529 y 530), debe pedirse al expresarse agravios, pero podrá solicitarse también por escrito aparte, hasta el momento de la presentación del escrito del apelado respondiendo á la expresión de agravios.



El apelante puede desistir del recurso, y si él solo fué quien apeló, es evidente que el superior se queda sin materia apelada y no puede ya conocer del asunto, salvo que el caso sea de consulta. Si el apelante fué el Ministerio Fiscal y había también acusador privado que apeló, la Cámara seguirá conociendo. Si el apelante fué solo el Ministerio Fiscal, es decir, el Agente Fiscal ó el Procurador Fiscal y llevado el asunto á segunda instancia, el representante en ésta del Ministerio Público desiste expresamente del recurso, ¿qué autoridad tiene la Cámara para seguir entendiendo en el negocio?

En el comentario al artículo 523 estudiamos los efectos del desistimiento tácito, que consistiría en dejarse el fiscal acusar rebeldía no expresando agravios; aquí corresponde hablar de la manifestación expresa que haga el fiscal de estar conforme con el fallo recurrido, y que por lo mismo no expresa agravios (y aun pida se devuelva la causa al inferior considerándose ejecutoriada su sentencia).

La doctrina de los autores europeos es contraria á considerar que el Ministerio Fiscal sea dueño de la acción pública. «La sociedad—dice Dalloz—no delega más que su ejercicio en los magistrados del Ministerio Público, sin cederles el poder de disponer de la acción». Haus establece «que el abandono de la acción pública pertenece á la sociedad y forma el objeto de las leyes de abolición y de amnistía». Saluto dice que «los oficiales del Ministerio Fiscal no pueden transigir ni desistir de la acción intentada; sus actos, apenas realizados, pertenecen á todos y el tribunal de primera ó segunda instancia, no puede dejar de pronunciarse cualquiera que sea, el pedido ó la retractación de aquel Ministerio; éste puede concluir en favor del acusado, aun puede pedir que no se haga lugar al procedimiento ó que se absuelva al imputado, pero corresponde siempre al tribunal, resolver sobre el mérito



definitivo de la causa». Faustin Hélie dice: «Cada uno de los actos del Ministerio Público, en seguida de realizado, se convierte en un acto público que no puede retractar y que sólo los jueces pueden apreciar».

Siguiendo la doctrina de los anteriores tratadistas, al fundar un fallo de la Suprema Corte más abajo citado, el Ministro doctor Bazán decía: «teniendo la misma representación del Estado, tanto el Procurador Fiscal como el señor Procurador General, con sólo la diferencia de las instancias en que respectivamente actúan, no puede admitirse que este último, sin que haya ley alguna que lo autorice, tenga la facultad de anular y dejar sin efecto actos ejecutados por el primero en pleno y legítimo ejercicio de sus funciones, como es la apelación interpuesta para ante el Superior; puede *opinar* en contra, pero este derecho no tiene más alcance que ilustrar el juicio de la Suprema Corte sobre la cuestión debatida, pero sin arrebatarle la facultad de juzgar el caso».

Se ha invocado en contra de esta teoría la facultad que tiene el fiscal de primera instancia de no apelar del fallo. El argumento es fuerte, porque en realidad, ello equivale á desistir de la acción pública que ya había surgido desde que hubo acusación. En el fallo de la Excelentísima Cámara (causa contra Salustiano Frías), que luego se registra, se ha combatido el argumento diciendo que «no hay derecho contra derecho y que si el Agente Fiscal tiene el derecho indiscutible de apelar, el Fiscal de Cámara no puede despojarle de una atribución que le ha sido expresamente conferida».

Podría decirse en contra de esto, que al no apelar el Agente Fiscal, la atribución de la Cámara tampoco surge, por lo cual aquél hace más que dar impulso ó iniciación á la acción pública: la ejercita como cosa propia, desde que puede destruirla ó estrangularla en lo mejor de su



ejercicio (como ocurre en el caso de que habiendo pedido pena, se conforma con la sentencia absolutoria).

En realidad la cuestión no está resuelta y lo demuestran las vacilaciones de la jurisprudencia. La doctrina de los autores de países en que la magistratura fiscal está rigidamente organizada y la jerarquización de la misma impide disonancias de criterio, no podrá ser invocada entre nosotros válidamente, mientras haya en el Ministerio Fiscal la falta de articulación y de comunicación de partes que no se nota en Europa y que aquí se lamenta. (Véanse artículos 460 y 461, que consideran una situación análoga á la estudiada).

—La manifestación del Procurador General de no adherirse al recurso deducido por el Procurador Fiscal, importa un desistimiento. S. C. N., t. 28, p. 170; p. 30, p. 276 y t. 87, p. 321.

—El fiscal puede y debe concluir en el sentido de la absolución, siempre que entienda que así corresponde en justicia; no puede sin embargo, desapoderar á los tribunales, por su solo hecho, del conocimiento y prosecución de dicha acción una vez intentada, ni están aquellos obligados, en consecuencia, á aceptar su renuncia ó desistimiento, si el interés de la justicia les exige á su fuero continuar conociendo en la causa. S. C. N., t. 41, p. 139.

—El defensor del acusado no está obligado á entregar copias de su expresión de agravios. S. C. N., t. 57, p. 315.

—Puede admitirse el desistimiento en las causas en que la pena impuesta no es de las del artículo 690. S. C. N., t. 71, p. 292.

—Procede el desistimiento por el procesado del recurso deducido por su defensor. S. C. N., t. 84, p. 337.

—La conformidad del fiscal de Cámara con la sentencia, importa un desistimiento del recurso interpuesto por el Agente fiscal y hace procedente la devolución de los autos. Cám. Crim., t. 21, p. 362.

—El desistimiento del Fiscal de Cámaras, exime al tribunal de resolver el recurso interpuesto por el agente fiscal. Cám. Crim., t. 53, p. 325; t. 46, p. 40; t. 48, p. 95 y t. 70, p. 325.

—Es inadmisibles el desistimiento formulado por el Sr. Fiscal de Cámara del recurso deducido por el Agente Fiscal, debiendo dictar la Cámara la resolución que corresponda sobre el fondo del asunto, á cuyo efecto debe terminarse la tramitación del recurso; procede dar

traslado al defensor de la vista del Sr. Fiscal. Cám. Crim., 1906 (Causa Frías).

—No obstante el desistimiento del Sr. Fiscal de Cámara, la instancia debe seguir su curso. Cám. Crim., t. V, p. 371.



ARTÍCULO 520

En la misma providencia nombrará el Tribunal defensor al procesado que no lo tuviere. Si éste fuere el apelante, el término para expresar agravios correrá desde la aceptación del defensor.

Si el apelante fuese el defensor del procesado y renunciare dentro del término, no correrá éste sino desde la aceptación del nuevo defensor, tanto si lo designa el procesado como si se le nombra de oficio.

ARTÍCULO 521

El término para expresar agravios será común, á menos que el Ministerio Fiscal hubiese sacado los autos con tal objeto.

El artículo 525 autoriza la extracción del expediente al fiscal; cuando ella se verifica, el término correrá para este funcionario, pero no empezará á correr para las demás partes hasta la devolución de los autos.

ARTÍCULO 522

Del escrito de expresión de agravios se dará traslado al apelado ó á su representante, por el mismo término de nueve días. En este escrito el apelado po-



drá adherirse al recurso, en cuyo caso se dará traslado de la adhesión al apelante por seis días.

De este artículo se desprende que la apelación puede deducirse:

Por diligencia, en primera instancia.

Por escrito, también ante el inferior.

Y por la adhesión en segunda instancia, ante el mismo tribunal superior.

En el escrito de responde, el apelado deberá pedir que la causa se reciba á prueba cuando proceda. (Véanse artículos 529 y 530).

—Quedando sin efecto el recurso de apelación, queda también sin efecto la adhesión á él. S. C. N., t. 14, p. 468.

—Cuando se apela adhiriéndose á la apelación de la contraparte, la deserción de ésta trae la ineficacia del recurso de adhesión. S. C. N., t. 37, p. 118.

—Deben imponerse las costas del recurso al apelante que desiste del mismo. Cám. Crim., t. 2, p. 322.

—Procede la adhesión al recurso por el Ministerio Fiscal. S. C. N., t. 79, p. 388. Cám. Crim., t. 25, p. 405; t. 28, p. 425 y t. 13, p. 348.

—Sólo procede la adhesión del fiscal, si la causa ha sido elevada por apelación, (no en consulta). Cám. Crim., t. 14, p. 193.

—La adhesión al recurso por el Fiscal de Cámara, equivale á la apelación que hubiese deducido ante el inferior el agente fiscal. (El Fiscal de Cámara es el apelado del artículo 522.) Cám. Crim., t. 28, p. 428.

—Si el querellante por delito privado no expresa agravios de la sentencia que absuelve al acusado, debe declarársele desistido. Cám. Crim., t. 80, p. 73.

—Aun cuando el defensor de uno de los procesados se adhiera al recurso interpuesto por el deensor de otro apelante, el tribunal no puede conocer de la sentencia en la parte referente á aquel que se considera consentida. Cám. Crim., t. 96, p. 192.

—En los casos de consulta el fiscal no puede adherirse á la apelación porque ésta no existe, ni por tanto apelado. Cám. Crim., t. III, p. 134.



ARTÍCULO 523

Si el apelante no expresare agravios en el término competente, acusada la rebeldía, se despachará ésta en el término de veinticuatro horas, y pasadas éstas, se declarará decaído su derecho para expresar agravios, siguiendo su curso la instancia.

La sanción legal de los términos antes señalados está en la doctrina de este artículo.

Pero se deduce de sus términos una prórroga de veinticuatro horas, ya que sólo puede declararse decaído el derecho para expresar agravios, transcurridas éstas.

La consecuencia de la declaración de rebeldía, no habiendo más apelación que la del declarado rebelde, es la devolución del expediente al inferior (salvo caso de consulta: artículos 690 y 693). El superior no puede ya conocer de aquello en que no hay materia apelada.

Esto, que resulta muy claro cuando el que apela es el querellante ó el defensor, ¿debe aplicarse al Ministerio Público?

Parece evidente (véase el comentario al artículo 519) que podrá acusársele rebeldía, pero de esta declaración no surgirá un desistimiento tácito de la apelación, sino que seguirá su curso la instancia, como dice el presente artículo, es decir, que el tribunal seguirá conociendo en el asunto.

—El término para contestar la expresión de agravios no es fatal, sino después de vencidas las veinticuatro horas que debe concederse acusándose rebeldía. S. C. N., t. 6, p. 342.

—No expresando agravios el apelante y acusada la rebeldía, procede la deserción del recurso. S. C. N., t. 7, p. 34.

—Debe declararse desierto el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, si se ha acusado rebeldía al Procurador General después de vencido el término para expresar agravios, aunque se hayan mandado traer los autos que se hallaban en su poder y con el expediente haya venido la expresión de agravios. S. C. N., t. 71, p. 306.



ARTÍCULO 524

Si el apelado no contestase el escrito de agravios dentro del término señalado, no podrá hacerlo en adelante, y previa anotación del Secretario, la instancia seguirá su curso.

En este caso la rebeldía no se declara y el tribunal sigue conociendo de la apelación.

ARTÍCULO 525

No rige respecto de los funcionarios del Ministerio Fiscal, la prohibición de sacar el proceso de la oficina, para expedirse en la expresión de agravios ó su contestación.

ARTÍCULO 526

El orden en que deberá oírse al Ministerio Fiscal en la discusión de la causa en segunda instancia, será el siguiente:

En primer término, cuando la apelación haya sido interpuesta por el funcionario que representare al Ministerio en primera instancia.

En segundo término, cuando el recurso fuere promovido por el acusador particular.

En último término, cuando el apelante fuera el defensor del procesado.

Estos artículos fijan las prerrogativas del Fiscal de Cámara, que, por el primero, puede extraer el expediente, y por el segundo, debe ser oído en primer término cuando el agente fiscal dedujo el recurso en primera instancia.



ARTÍCULO 527

Con los escritos de expresión de agravios y contestación, quedará concluída la causa para prueba ó definitiva, según corresponda.

En el caso de quedar conclusa para definitiva, rige el procedimiento de los artículos 534 y siguientes.

En el caso de estar abierta á prueba, el de los que van en seguida.

ARTÍCULO 528

Los interesados podrán presentar, bajo juramento, antes de notificarse la providencia de autos para la definitiva, los documentos de que no hubiesen tenido conocimiento hasta entonces, ó que no hubiesen podido proporcionárselos en tiempo oportuno.

De los que cada parte presente, se correrá traslado á la contraria, la cual deberá evacuarlo dentro del tercer día.

ARTÍCULO 529

Podrá también el procesado ó su defensor dirigir posiciones al acusador particular antes de la citación para sentencia, siempre que no versen sobre los mismos hechos que hayan dado lugar á la presentación de otras en la primera instancia.

ARTÍCULO 530

Podrán igualmente los interesados pedir que la causa se reciba á prueba:



1.º Cuando se alegare algún hecho nuevo que pueda tener importancia para la resolución del recurso, ignorado antes ó posterior al término de prueba de la primera instancia.

2.º Cuando no se hubiere practicado la prueba ofrecida por el solicitante, por causas completamente ajenas á su voluntad.

ARTÍCULO 531

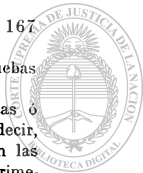
En cuanto al término de prueba, medios probatorios de que pueda usarse, formalidades con que han de hacerse las probanzas, discusiones y conclusiones de la causa, regirán las mismas disposiciones establecidas para la primera instancia.

ARTÍCULO 532

En todos los actos de prueba que hubieren de practicarse ante el Tribunal, llevará la palabra el Presidente; pero los demás vocales, con su venia, podrán hacer las preguntas que estimen oportunas.

ARTÍCULO 533

Cuando alguna diligencia de prueba hubiere de practicarse fuera de la Sala del Tribunal, si éste no considerase necesario asistir á ella en cuerpo, podrá comisionar al efecto á uno de sus miembros. Si fuese fuera del distrito de la Capital, la comisión será conferida á la autoridad judicial de la localidad.



Estos artículos resumen toda la materia de las pruebas en segunda instancia.

Documental.—Con la limitación de ser conocidas ó halladas posteriormente á la primera instancia, es decir, del término de prueba en la misma. Con más razón las que se hayan producido ó extendido después de la primera instancia (después de vencido su término de prueba).

Posiciones.—En los casos que proceda este medio de prueba (véase artículo 470), con la limitación de referirse á hechos distintos de los que fueron objeto de posiciones en primera instancia.

Otras pruebas.—Tanto el hecho nuevo como la imposibilidad de haberlas antes ofrecido, serán objeto de una resolución del superior.

Formalidades.—Regirán los artículos 467 á 483, con las limitaciones aquí establecidas.

—No se admite la ofrecida por el querellado (por calumnia):

1.º Porque si no se produjo en primera instancia la testifical, fué por no haber presentado el querellado los interrogatorios, por estar enfermo, lo cual no es causal bastante, pues tenía apoderado.

2.º Porque los hechos nuevos á probarse, deben tener importancia para la resolución del recurso y los que se alegan no la tienen. Cám. Crim., t. 43.

—No procede la prueba en segunda instancia si es de hechos anteriores que no han podido ser ignorados por el interesado antes del término probatorio de primera instancia. Cám. Crim., t. VI, p. 378.

—Cuando la comprobación de un delito nuevo no puede tener influencia en la resolución del proceso, es improcedente la recepción de la prueba en segunda instancia. Cám. Crim., t. VI, p. 196.

ARTÍCULO 534

Luego que la discusión de la causa esté concluida con el pronunciamiento de la providencia de autos, pasará á Secretaría.



Consentida la providencia de *Autos*, no puede reclamarse la práctica de diligencia alguna de prueba.

Pasan los autos á secretaría por tres días, que equivalen á los seis que con el mismo objeto se conceden á las partes en primera instancia. (Véase artículo 490).

ARTÍCULO 535

Dentro de tercero día, contados desde la notificación de la providencia de autos, ó al practicarse esta notificación, y en la misma diligencia, manifestarán las partes si van á informar in voce. Si no lo verifican se resolverá sin dichos informes.

El término de los tres días no es común, sino que si las partes han sido notificadas en días distintos, corren los tres para cada una individualmente.

Pueden informar las partes ó sus abogados.

—Señalado día para el informe *in voce* pedido por una de las partes, su no comparecencia no impide á la otra informar. S. C. N., t. 12, p. 64.

—La presencia del procesado en el informe *in voce* de su defensor, no es necesaria, y el haberla pedido no es motivo para suspender la audiencia. S. C. N., t. 72, p. 429.

ARTÍCULO 536

Los miembros del Tribunal se instruirán cada uno privadamente del proceso, antes de celebrar acuerdo para pronunciar sentencia, y sólo podrán tener aquél en su poder durante el término que el Presidente debe señalar á cada uno, dentro del fijado por este Código para pronunciar sentencia.



ARTÍCULO 537

El Tribunal que conozca del recurso dictará sentencia dentro de treinta días, desde que la causa se halle en estado, salvo los casos en que está fijado expresamente un término más corto en este Código.

Es inútil el comentario á disposiciones que no siendo objeto de recursos, no tienen más sanción que la recta voluntad de las mismas personas que deben cumplirlas (1).

—Puede la Cámara, para *mejor proveer*, ordenar la presentación de toda prueba que crea conveniente para ilustrar su criterio. Cám. Crim., t. 16, p. 152.

—La conformidad del Fiscal de Cámara con la sentencia, importa el desistimiento de la apelación interpuesta por el agente fiscal. Cám. Crim., t. 18, p. 364.

(1) Deben tenerse presente los siguientes artículos de la Ley de Organización de los Tribunales de la Capital:

Art. 85. Para juzgar en definitiva en juicio ordinario, las Cámaras procederán con el número íntegro de sus miembros, pero podrán hacerlo también con tres ó cuatro miembros en caso de impedimento ó recusación, siempre que las partes no pidiesen integración ó el Tribunal no lo ordenase.

Art. 86. Las sentencias definitivas deberán fundarse cuando menos en la opinión conforme de la mayoría del Tribunal, aunque los motivos de esas opiniones sean diversos.

Art. 87. En las causas criminales en que pudiera imponerse penas por más de diez años, la Cámara respectiva sólo podrá conocer y resolver con el número íntegro de sus miembros.

Art. 88. Cuando en las causas á que se refiere el artículo anterior, hubiese de confirmarse meramente, con ó sin costas, la sentencia del juez inferior, bastará la opinión uniforme de tres miembros, aunque difieran en sus motivos; pero, si por esta sentencia hubiera de elevarse el tiempo de la pena impuesta por el juez inferior á más de diez años, será necesario la uniformidad de los cinco miembros en la decisión.



—No puede pronunciarse la Cámara en un delito de lesiones, sobre la existencia de deformación, si sólo el procesado interpuso recurso de la sentencia que declara que ella no existe. Cám. Crim., t. 19, p. 5.

—Las diligencias para *mejor proveer* decretadas por el Superior, deben ser practicadas ante el juez de primera instancia. Cám. Crim., t. 20, p. 173.

—Si el reo, al serle notificada la sentencia, manifiesta su conformidad, la apelación del defensor no autoriza á agravar la pena. Cám. Crim., t. 35, p. 274.

B.—DEL RECURSO DE APELACIÓN CONCEDIDO EN RELACIÓN.

ARTÍCULO 538

Cuando el recurso se conceda en relación, se llamará autos inmediatamente, pasando el expediente á Secretaría.

Las partes manifestarán en el término y en la forma del artículo 535, si van á informar in voce, siendo entendido que si no lo verifican, se resolverá sin dicho informe.

Del procedimiento anterior se elimina el período de discusión y posibilidad de prueba. Unicamente, dentro de los tres días las partes podrán ver el expediente, si está en estado, pues tratándose del sumario, no terminado, los tres días serán un término vacío, es decir, sólo concedido para hacer uso del pedido de informe oral.

—En los recursos en relación no debe ser oído por medio de escrito el Ministerio Fiscal. S. C. N., t. 21, p. 76.

—En los recursos en relación no procede la adhesión de la apelación por el apelado. S. C. N., t. 30, p. 452 y t. 80, p. 25.

—Si no existe parte con quien sustanciar el recurso, se considera que es en relación. Cám. Crim., t. 97, p. 98.



ARTÍCULO 539

Si el apelante pretendiese que el recurso ha debido otorgársele libremente, podrá solicitar dentro de tercero día de notificada la providencia de autos, que así se declare y se le dé término para expresar agravios.

El Tribunal resolverá sobre esta petición sin tramitación alguna, accediendo ó negando. En el primer caso, se substanciará el recurso, según queda prevenido para el de apelación libremente concedida.

Para el caso de que la apelación se haya concedido sólo en relación, procediendo concederse libremente, véanse los artículos 504 y 505.

En caso de concederse libremente, los términos del período de discusión—artículo 519 y siguientes—empezarán á contarse desde que se dicta por el tribunal la resolución, es decir, «á contarse desde el siguiente al de la notificación de esa providencia», como allí se dice.

C.—DEL RECURSO DE QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO.

ARTÍCULO 540

Cuando se interpusiere el recurso de queja, por recurso denegado, el Tribunal ordenará al Juez que informe en un breve término, que al efecto le señalará.

ARTÍCULO 541

Recibido dicho informe, el Tribunal, si lo considerase necesario, podrá ordenar para mejor proveer la remisión del proceso.



ARTÍCULO 542

El Tribunal pronunciará resolución dentro de cinco días, contados desde que se recibiere el informe ó se pusiere el proceso á su disposición.

ARTÍCULO 543

La resolución del Tribunal deberá desechar la queja ó proveer lo que corresponda, según que el recurso haya debido concederse libremente ó en relación, ó en uno ó en ambos efectos.

Cuando el recurso haya debido acordarse sólo en el efecto devolutivo, el Tribunal ordenará la remisión de los autos al Juez de 1.^a Instancia, si lo hubiera pedido para mejor proveer, dejando las compulsas necesarias.

Estos cuatro artículos consideran la hipótesis del inciso 1.º del artículo 514, cuando el juez ha denegado los recursos de apelación y nulidad ó el de apelación, debiendo acordarlos.

La resolución del tribunal puede ser:

1.º Desechar la queja, en cuyo caso se devuelve todo al inferior, sin más trámite.

2.º Declarar mal denegado el recurso ó los recursos y concederlos libremente, empezando sin más trámite á contarse los nueve días del artículo 519, desde el siguiente al de la notificación de esa providencia.

3.º Declarar mal denegado el recurso ó recursos y concederlos en relación, en cuyo caso se procederá como dice el artículo 538.

Esto, cuando la apelación es en ambos efectos, porque si sólo es concedida en uno solo, que es el devolutivo,



se procederá como dice el artículo 543 inciso 2.º, que equivale á lo ordenado en el artículo 507.

—El informe pedido por la Corte en los recursos de hecho, debe expedirse con la relación de los antecedentes y no remitiendo meramente los autos. S. C. N. 47-277.

—La queja por retardada justicia queda terminada por el fallo expedido durante su tramitación. S. C. N., 53-417.

—No procede el recurso de hecho cuando no resulta que se haya interpuesto ante el inferior apelación del auto reclamado y éste lo haya denegado. S. C. N. 58-382; 52-344; 56-257, etc.

—En los recursos de hecho el inferior no debe remitir los autos como mejor informe, sino cuando se le pida. S. C. N. 68-155.

—No procede el recurso de retardada justicia cuando la demora procede de la sentencia de causas de resolución preferente. S. C. N. 90-231.

—El fugado de la prisión carece de derecho para interponer recurso de queja contra el juez de la causa. Cám. Crim., 48-102.

D.—DEL RECURSO DE QUEJA POR RETARDADA JUSTICIA.

ARTÍCULO 544

El recurso de queja por retardo de justicia, se inscribirá acompañando copia certificada del escrito en que se hubiere requerido el despacho, cuya copia deberá darse por el Secretario sin mandato judicial.

Este artículo es correlativo con el 517 y comprobación de lo que éste exige.

ARTÍCULO 545

Si el recurso fuera procedente, el Superior señalará al Juez un término prudencial para que administre justi-



cia, ó que se comunicará por oficio y bajo apercibimiento de costas y perjuicios (1).

Téngase presente la jurisprudencia del 517.

—Siendo justificada la demora, no procede la fijación de término para que se dicte providencia. S. C. N., t. 56, p. 259.

E.—DEL RECURSO DE NULIDAD.

ARTÍCULO 546

Si al recurso de apelación se hubiere unido el de nulidad, el Tribunal conocerá de ambos al mismo tiempo y por los mismos trámites.

Como van aparejados en su deducción, lo irán en su sustanciación, sirviendo para sostener el recurso de nulidad, todo lo que se haga para el de apelación.

En cuanto á la resolución, variará según sea el caso del artículo 511 ó del 512.

—Si el recurso de nulidad se interpusiere al expresar agravios en el de apelación, debe ser rechazado por la Cámara, porque debe ser interpuesto conjuntamente con el de apelación. Cám. Crim., t. 49, p. 235.

—La Cámara no puede conocer del recurso de nulidad, si, denegado por el inferior, no se interpuso recurso de hecho. Cám. Crim., t. 52, p. 200.

—Aun cuando el recurso de nulidad por defectos de procedimiento no haya sido interpuesto en tiempo y forma, el superior, por excepción, puede conocer y resolver sobre la nulidad de diligencias alegada por el defensor al expresar agravios. Cám. Crim., t. 56, p. 119.

(1) Hay error en el texto oficial, fácil de ser percibido: debe leerse *lo que se comunicará*, en vez de *ó que se comunicará...*

—No puede ser tomado en consideración el recurso de nulidad, si no fué interpuesto conjuntamente con el de apelación y las causales en que se funda no permiten declararla de oficio. Cám. Crim., t. 84 p. 161.



ARTÍCULO 547

Siendo la sentencia confirmatoria en todas sus partes de la de 1.ª instancia, las costas del recurso serán á cargo del apelante, á menos que fuese el Fiscal, si éste no hubiere procedido con notorio desconocimiento de las leyes.

Aplicación de la doctrina de los artículos 144 y 145.

CAPÍTULO II

Recursos contra las providencias y fallos de la Corte Suprema y de la Cámara de Apelaciones

ARTÍCULO 548

Las providencias interlocutorias dictadas por la Corte Suprema ó por la Cámara de Apelaciones, son susceptibles del recurso de reposición.

A efecto de que el mismo tribunal, por contrario imperio, revoque su resolución. Esta, para poder ser objeto del recurso, debe ser un auto interlocutorio. (Véase el artículo 498).

—Del auto dado por la Cámara sobreuyendo definitivamente, no procede el recurso de apelación. Cám. Crim., t. 27, p. 180.



ARTICULO 549

El recurso á que se refiere el artículo precedente, deberá interponerse dentro del término y en la forma establecida en el artículo 499.

Es decir, dentro de tercero día de notificada la parte y resolviendo la Corte ó la Cámara sin traslado ni ningún otro trámite.

ARTICULO 550

De las sentencias definitivas de la Cámara de Apelaciones sólo habrá recurso á la Suprema Corte Federal en los casos del artículo 22, inciso 2.º

Además del recurso de inconstitucionalidad (por cierto resistido) á que alude el artículo, tenemos hoy, con referencia á las Cámaras Federales de Apelaciones, el recurso de apelación introducido por la ley de 11 de Enero de 1902 sobre creación de las Cámaras Federales:

«Art. 3.º La Corte Suprema conocerá también en última instancia por apelación y nulidad, en las sentencias definitivas de las Cámaras Federales de Apelación en los siguientes casos:.....

4.º De las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros.

5.º De las dictadas en cualquier causa criminal, por los delitos de traición, rebelión, sedición y en las de homicidio, incendio ó explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar á bordo de buques nacionales ó por piratas extranjeros; y en todos aquellos casos en que la pena impuesta excediera de diez años de presidio ó penitenciaría».

Véanse nuestros artículos 514, 518 y 551.



—De las sentencias de la Cámara no procede recurso ante la Suprema Corte Federal.

En disidencia el doctor Esteves, porque el procesado alegó un precepto constitucional, dándolo como infringido: artículo 22, inciso 2.º, subinciso 3.º del Cód. de Proc. igual al inciso 3.º, artículo 14 de la ley de 1863. Cám. Crim., t. 28, p. 240.

ARTÍCULO 551

Habrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, aunque hayan sido pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, en los casos siguientes:

1.º Cuando consta de un modo indudable que el delito fué cometido por una sola persona, y habiendo sido juzgado por dos ó más jueces, aparecen como reos, en las respectivas sentencias ejecutoriadas, diversas personas.

2.º Cuando se haya condenado á alguno como autor, cómplice ó encubridor del homicidio de otro cuya existencia se acredite después de la sentencia.

3.º Cuando se haya condenado á alguno por resolución cuyo fundamento haya sido un documento, que después se ha declarado falso por sentencia ejecutoriada en causa criminal; ó cuando el condenado hallase ó cobrase documentos decisivos ignorados, extraviados ó detenidos por fuerza mayor ó por obra de la parte acusada (1).

4.º Cuando una Ley posterior haya declarado que no es punible el acto que antes se consideraba como tal ó haya disminuído su penalidad.

Es otro de los recursos no incluídos en el Título VI.

(1) El texto de la edición oficial dice así, pero, es fácil advertir el error que contiene: no es «parte acusada», sino *parte acusadora*.



La santidad de la cosa juzgada es una presunción de conveniencia social y de innegable utilidad, pero la posibilidad del error judicial, que tan cauto ha hecho al legislador al tratar de la pena de muerte, por ejemplo, y considerar su irreparabilidad, aconseja también que aquel útil principio pueda ser corregido en casos excepcionales en que la injusticia del fallo aparece manifiesta.

Obsérvese que la revisión no procede en el caso de que un procesado haya sido absuelto y luego aparezca, aunque sea de un modo indudable, que no debió absolversele y sí condenársele. La cosa juzgada, le amparará sin excepción alguna, como ampararía á un condenado, por ejemplo, á una pena que luego (en otro proceso más ó menos relacionado con el ya resuelto) se viera que había sido inferior á la que realmente merecía, por la averiguación de una agravante. Y es que la sociedad tiene el derecho de defenderse, pero también el individuo puede tener derechos adquiridos que deban primar sobre aquél; hay además sobre uno y otro derecho una necesidad social que llamaríamos de reposo, de tranquilidad, de poner punto final á los distintos accidentes que van formando la trama de la vida, y esto se relaciona con el criterio de la utilidad que no es seguramente el fundamento del derecho de penar, pero es á veces la medida de su ejercicio y uno de los prismas bajo el que debe considerarse la pena. Y ¿qué ventaja reportaría á la sociedad de tener siempre abiertos los procesos? Por esto sólo se admite la revisión en algunos de los casos que pueden beneficiar á los reos. (Véase también la opinión de Hélie, pág. 77 del presente tomo).

Para nuestro artículo la revisión sólo procede:

A.—Cuando la injusticia se ha hecho manifiesta por una sentencia contradictoria con la que se revisa, en cuanto á la persona (incisos 1.º y 2.º).

B.—Cuando una sentencia haya declarado falso el do-



cumento en que se fundó la que se pretende revisar (inciso 3.º, primera parte). Tal declaración debe haber sido hecha en causa criminal. Una sentencia civil no podría tener el mismo efecto: artículo 1105 del Código Civil.

C.—Cuando aparecieren documentos decisivos antes ignorados, extraviados ó detenidos por la parte acusadora ó por fuerza mayor (inciso 3.º, segunda parte). En esto nuestra ley es más restrictiva que otras extranjeras: la italiana, por ejemplo, que permite la *revocazione* «si la sentencia es efecto de un error de hecho que resulte de actos y documentos de la causa» (artículo 497 del Código de Procedimientos); la española, que admite la revisión por la falsificación de prueba que aparezca después evidentemente (artículo 1796 de la ley de Enjuiciamiento Civil); la ginebrina, que la declara procedente si los testigos han sido luego condenados por falso testimonio (C. de P., artículo 319).

D.—En caso de ley posterior. Es la doctrina del artículo 48, inciso 2.º del Código Penal: «Si durante la condena se dictase una ley más benigna, la pena debe limitarse á la establecida por esa ley».

Debe tenerse presente el artículo 4 de la ley sobre creación de Cámaras Federales que dice:

«En los casos que con arreglo á lo establecido en el artículo 551 del Código de Procedimientos en lo Criminal, procede el recurso de revisión contra las sentencias de las Cámaras Federales, la Corte Suprema conocerá de dicho recurso por apelación».

—De las resoluciones de la Suprema Corte, dictadas en causa en que conoce originariamente, no hay más recurso que el de revisión. S. C. N., t. 26, p. 61 y t. 12, p. 134.

—No cabe revisión de sentencias pronunciadas en recurso de revisión. S. C. N., t. 66, p. 50.

—Los documentos que no han sido ignorados por el procesado ó que no conducen á variar lo establecido por el fallo, no pueden fundar el recurso. S. C. N., t. 84, p. 247.



—No procede por el inciso 4.º si la ley posterior, lejos de disminuir, ha aumentado la pena aplicable al delito cometido. S. C. N., t. 95, p. 81.

—La circunstancia de no haberse abierto la causa á prueba, no puede servir de fundamento al recurso. S. C. N., t. 96, p. 158.

—La errónea apreciación que el recurrente atribuye á la sentencia, no puede fundar el recurso. S. C. N., t. 97, p. 419.

—Habiéndose declarado por sentencia firme que determinado individuo es el único autor de un crimen dado, la confesión de un tercero, declarándose autor, no surte efectos legales si no se apoya en otras pruebas que, destruyendo las del primer proceso, demuestren la verdad de la confesión. Cám. Crim., t. 96, p. 405.

—Si la ley nueva establece para el mismo delito un minimum de pena mayor que la impuesta al reo, no procede el recurso de revisión. Cám. Crim., t. V, p. 195.

—Procede la revisión si la nueva ley es más favorable al procesado, no sólo por la naturaleza de la pena, sino por ser menor el tiempo (por la ley antigua le faltaban dos años y diez meses de presidio y por la nueva le faltaban dos años, un mes y diez días de penitenciaria). Cám. Crim., t. V, p. 248.

ARTÍCULO 552

El recurso de revisión podrá promoverse por el condenado ó por su cónyuge, descendientes, ascendientes ó hermanos y por el Ministerio Fiscal.

La muerte del condenado no impide que se deduzca, para rehabilitar su memoria, ó procurar el castigo del verdadero culpable.

Este segundo inciso no hace más que explicar un tanto prácticamente la razón de ser del primero. En realidad el recurrente no intervendrá en el castigo del verdadero culpable, pues en el juicio que se siga contra éste, no puede ser querellante.



ARTÍCULO 553

La Suprema Corte ó la Cámara de Apelaciones, según los casos, conocerán de este recurso, oyendo al Ministerio Fiscal y procediendo en los demás como queda establecido para los casos de apelación libre.

Es decir, con arreglo al artículo 518 y siguientes y con la importante ampliación del artículo 555.

—Los mismos jueces que han conocido de la causa ~~en vista~~, deben conocer del recurso de revisión. S. C. N., t. 26, p. 270.

ARTÍCULO 554

En el caso del inciso 1.º del artículo 551, anulará las sentencias, si existiese efectivamente contradicción en la designación de las personas que han sido declaradas delincuentes, y dispondrá que se instruya de nuevo la causa por el Juez á quien corresponda el conocimiento del delito.

En el caso del inciso 2.º, anulará la sentencia y ordenará que se ponga inmediatamente en libertad al condenado, si resultase acreditada la identidad de la persona por cuya muerte se le hizo cargo.

En los casos del inciso 3.º, anulará también la sentencia, y resolverá que se instruya de nuevo la causa por el Juez competente.

Y en el caso del inciso 4.º, decidirá que se ponga en libertad al condenado ó que se le disminuya la pena, según corresponda.

En el primer caso, vuelve el juez de instrucción á formar sumario.



En el segundo, con la decisión del tribunal acaba el recurso.

En el tercero, se abre de nuevo el sumario.

Y, en el cuarto, es el mismo tribunal quien aplica el derecho y con su resolución termina la materia del recurso.

ARTÍCULO 555

El Tribunal podrá, para mejor proveer, decretar las diligencias que juzgue necesarias.

De este artículo parece deducirse que en la tramitación del recurso de apelación, no caben autos para mejor proveer. De haber allí, sobraría este artículo, pues al decir el 553 que se tramitará la revisión como la apelación libre, comprende el 531 en que efectivamente nada se dice de tales autos en segunda instancia.

Sin embargo, en la apelación se suele dictar autos para mejor proveer.

ARTÍCULO 556

Para que sea admisible el recurso, deberá acompañarse al deducirse testimonios de la sentencia, los documentos y pruebas correspondientes. En caso contrario, será desechado de plano.

La restricción que introduce este artículo, no impedirá que, si llega el caso, se produzca prueba con toda la amplitud que sea necesaria.

TÍTULO OCTAVO

De la ejecución de las sentencias

ARTÍCULO 557

La ejecución de las sentencias corresponde al Juez que haya conocido en el juicio en 1.ª instancia.

Aun la parte que corresponda á la segunda instancia, como sería la ejecución de las costas de la apelación, debe ser sometida al juez de primera instancia.

—La providencia en que el inferior se limita á ordenar el cumplimiento de lo resuelto por el Superior, es irrecurrible. «Lo contrario—dice la Cámara—importaría una subversión de los principios que rigen el orden de las instancias y de la gerarquía judicial». Càm. Crim., t. 99, p. 397.

ARTÍCULO 558

Cuando el Juez á quien corresponda la ejecución de la sentencia no pudiere practicar por sí mismo todas las diligencias necesarias, comisionará en la forma que competa al Juez del distrito en que deban tener efecto, para que las practique.





ARTÍCULO 559

Cuando se trate de la ejecución de la pena capital, se facilitará al reo lo necesario para que pueda otorgar testamento, y se le prestarán los demás auxilios que pidiere.

Se le permitirá también recibir las visitas de su familia y amigos, procediéndose en lo demás, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 56 á 59 del Código Penal.

ARTÍCULO 560

Todo condenado á muerte será fusilado.

Concuerda con los siguientes artículos del Código Penal:

«56. La ejecución de la pena de muerte tendrá lugar dentro del establecimiento en que se encuentre el condenado, quien será asistido por el sacerdote ó ministro del culto cuyo auxilio hubiera solicitado ó aceptado. El juez de la causa hará constar la ejecución de la pena en una acta que se unirá al proceso. Esta acta y la sentencia se publicarán por dos diarios ó periódicos de la localidad.

57. La ejecución de la pena de muerte tendrá lugar al día siguiente de la notificación de la sentencia irrevocable. La notificación no podrá hacerse en víspera de domingo ni de fiesta religiosa ó nacional.

El cadáver del ejecutado será entregado á sus parientes si lo pidiesen al juez de la causa; pero no podrán enterrarlo con pompa, incurriendo de lo contrario en la pena de arresto de un mes á un año».



ARTÍCULO 561

Las penas de presidio, penitenciaria, prisión ó arresto, se harán saber á las autoridades encargadas de la dirección del establecimiento en que deban cumplirse esas condenas, con inclusión de un testimonio literal de la sentencia, á los efectos determinados respecto de cada una de ellas en el Código Penal.

Concuerda con los siguientes artículos del Código Penal:

«Art. 61. Los condenados á presidio no podrán ser empleados en obras de particulares, ni en públicas que se ejecuten por empresas ó contratos con el Gobierno.

Si por falta de establecimiento donde deban sufrir la pena de presidio, ó por falta de trabajo en que deban ocuparse, no pudiesen cumplir su condena, serán destinados á obras públicas de cualquier género, con tal que no sean contratadas por particulares.

Art. 62. Los hombres débiles ó enfermos, los menores de edad, los mayores de sesenta años y las mujeres que mereciesen pena de presidio, sufrirán la condena en penitenciaria.

Art. 64. La pena de presidio puede ser agravada con reclusión solitaria que no exceda de treinta días, en los aniversarios del crimen.

Art. 65. Los sentenciados á penitenciaria sufrirán las penas en las penitenciarías, y en donde no las hubiere, en establecimientos distintos de los presidios, con sujeción á trabajos forzosos dentro de ellos mismos.

Si el condenado á presidio ó á penitenciaria no tuviese medios propios para satisfacer la responsabilidad civil en que hubiese incurrido por el delito cometido, el producto de su trabajo se destinará íntegro á este objeto y al sostén de su familia, si la tuviese.



Satisfecha la responsabilidad civil, el producto del trabajo se aplicará á satisfacer los gastos que cause en el establecimiento, y á formarle un fondo propio que se le entregará á su salida.

Lo que se aplique á gastos del penado no excederá de las dos terceras partes del producto de su trabajo.

Art. 66. La pena de penitenciaría puede agravarse con reclusión solitaria que no pase de veinte días, en los aniversarios del delito.

Art. 67. Es aplicable á los condenados á penitenciaría lo dispuesto para los presidiarios, respecto á inhabilitación, interdicción y vigilancia de policía, pero deduciéndose una tercera parte de tiempo á la inhabilitación y vigilancia, concluida la condena.

Art. 68. La pena de prisión se sufrirá en cárceles que no sean presidios ó penitenciarías».

Téngase además presente la ley 3335 sobre Reincidencia:

«Art. 1. Las penas correccionales ó de prisión que los jueces de la capital y territorios federales impongan á los reincidentes, por segunda vez, serán cumplidas en los Territorios Nacionales del Sud, que el Poder Ejecutivo designe al efecto.

2. Fijado que sea el punto ó puntos á que se refiere el artículo precedente, el Poder Ejecutivo procederá á la traslación de los condenados, cuyas penas puedan ser debidamente cumplidas en las instalaciones que prepare.

3. Los reincidentes por segunda vez, no gozarán de los beneficios acordados por el artículo 49 del Código Penal, y serán sometidos á trabajos de talleres ú otros, con exclusión de los determinados en el artículo 60 del mismo Código.

4. Autorízase al P. E. para hacer los gastos que demande el cumplimiento de esta ley.

5. Comuníquese al Poder Ejecutivo».



ARTÍCULO 562

La pena de destierro se hará saber al Ministerio de Justicia para que, por intermedio de las autoridades que corresponda, haga salir al condenado del territorio nacional.

Concuerda con los siguientes del Código Penal:

«71. El condenado á destierro será expulsado de la República y conducido por orden del Gobierno hasta ponerlo fuera del territorio de la Nación.

72. A los desterrados que entrasen de nuevo al territorio de la República, sin haber cumplido su condena, se les reagrarará la pena con la mitad más del tiempo de la primera condenación. En caso de nueva violación del destierro, sufrirá la pena de prisión por la parte de tiempo que le faltare para completarlo».

ARTÍCULO 563

Si la pena fuere la de inhabilitación general, deberá publicarse la sentencia en dos periódicos del lugar en que tenga su asiento el Juzgado que haya resuelto el caso en primera instancia y en la Capital de la República..

Si el procesado estuviere ejerciendo algún empleo ó cargo público, aunque proceda de elección popular, se comunicará al cuerpo, autoridad ó feje respectivo.

Concuerda con el artículo 75 del Código Penal, ampliado por el artículo 14 de la ley 4189, que le añadió el inciso 4.º

«Art. 75. La pena de inhabilitación absoluta importa:

1. La pérdida del empleo ó cargo público que ejercía el penado, aunque provenga de elección popular;



2. La privación de todos los derechos políticos, activos y pasivos, durante el tiempo de la condena;

3. La incapacidad para obtener cargos y empleos públicos, igualmente por el tiempo de la condena.

4. La pérdida de toda jubilación, pensión, ó goce de montepío de que disfrutase ó pudiese corresponderle, salvo que tuviera familia que sostener».

ARTÍCULO 564

Si la inhabilitación fuera especial, se hará solo la comunicación de que habla el artículo anterior, haciéndose presente que el condenado ha quedado privado del empleo que desempeñaba, é incapacitado para obtener otros empleos del mismo género dentro del tiempo de la condena.

Concuerda con el artículo 76 del Código Penal:

«La inhabilitación especial para el empleo ó cargo público, produce la privación del cargo ó empleo sobre que recae y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena.

La inhabilitación especial para derechos políticos, produce la incapacidad de ejercer, durante la condena, aquellos sobre que recae».

ARTÍCULO 565

Las penas de destitución ó suspensión se comunicarán á las autoridades superiores del condenado, á los efectos legales.

Se refiere á la inhabilitación especial del artículo 76, antes citado. No hay en el Código Penal otras penas que importen destitución ó suspensión.



ARTÍCULO 566

La pena de sujeción á la vigilancia de la autoridad, se pondrá en conocimiento del Jefe del Departamento General de Policía, ó de las autoridades del lugar en que residiere el penado, para que velen por el estricto cumplimiento de la sentencia durante el tiempo de la condena.

El artículo 78 del Código Penal establece que la sujeción á la vigilancia de la autoridad produce en el penado las siguientes obligaciones:

- 1.º No variar de domicilio sin consentimiento de la autoridad encargada de su vigilancia;
- 2.º Observar las reglas de inspección que aquélla le prefije.
- 3.º Adoptar oficio, arte, industria ó profesión, si no tuviere medios propios y conocidos de subsistencia.

ARTÍCULO 567

La condenación al pago de multas ó cantidades pecuniarias, reparación de daños, indemnización de perjuicios y satisfacción de costas, se hará efectiva según las reglas establecidas por las leyes de procedimientos civiles para la ejecución de las sentencias.

Véase el artículo 496.

Las reglas establecidas por el Código de Procedimientos civiles, son las de los siguientes artículos:

«536. Si la sentencia contuviese condena al pago de cantidad líquida y determinada, se procederá siempre, á instancia de parte, al embargo de bienes en la forma y orden prevenidos para el juicio ejecutivo.



537. A los efectos de la disposición contenida en el artículo anterior, se entenderá que hay condenación al pago de cantidad líquida, siempre que de la sentencia misma se infiera el monto de la liquidación, aun cuando éste no estuviese expresado numéricamente.

538. Hecho el embargo en la forma prevenida para el juicio ejecutivo, se citará al deudor para la venta de los bienes embargados, si dentro de tercero día no opusiere y probare excepción legítima contra la ejecución.

539. Sólo se consideran legítimas las siguientes excepciones:

- Falsedad de la ejecutoria;
- Prescripción de la misma;
- Pago;
- Quita, espera ó remisión.

La prueba de las excepciones mencionadas en los tres últimos incisos del artículo anterior, se hará precisamente por documentos que se acompañarán al deducir la excepción, con exclusión de todo otro medio probatorio. Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción sin más recurso.

540. Vencidos los tres días, si no se hubiese deducido oposición, se mandará continuar la ejecución, sin recurso de ningún género.

Si se hubiese deducido oposición, se agregarán las pruebas producidas, y el juez, en su vista, mandará continuar la ejecución, ó, declarando probada la excepción opuesta, mandará levantar el embargo.

De esta resolución habrá los mismos recursos y en la misma forma que de la sentencia de remate en el juicio ejecutivo.

541. Consentida y ejecutoriada la providencia que mande llevar adelante la ejecución, se procederá en todo según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor; pudiendo exi-



girse fianza á las resultas del juicio ordinario, que en tales casos puede promover el deudor.»

—Por la ley penal se entiende siempre ordenada la reparación de daños y perjuicios en los casos en que ella puede tener lugar. S. C. N., t. 5, p. 285.

—Por la reparación del delito hay acción civil independiente de la criminal, debiendo estimar la indemnización el prudente arbitrio del juez. S. C. N., t. 29, p. 148.

—Los jueces del crimen son competentes para entender en la fijación de daños y perjuicios emergentes del delito en que han dictado sentencia. Cám. Crim., t. 43, p. 167.

—Los jueces del crimen son los únicos competentes para ejecutar las sentencias en que por razón de daños y perjuicios hayan sido condenados los reos á una indemnización pecunaria. Cám. Crim., t. 4, p. 166.

—La indemnización de los daños causados por lesiones, deben ser fijados teniendo en cuenta los días de imposibilidad para el trabajo y los gastos de curación. Cám. Crim., t. 80, p. 12.

—El juez del delito debe conocer de las acciones que sobre la responsabilidad civil deduzca el querellante. Cám. Crim., t. 54, p. 378.

—El juez que ha entendido en el proceso criminal, no puede ser recusado por el que pretende indemnización civil por daños y perjuicios. Cám. Crim., t. 79, p. 447.

—Para la fijación del monto de la indemnización á que ha sido condenado el reo, debe observarse el procedimiento fijado en la ley civil. Cám. Crim., t. 90, p. 14.

—Los jueces correccionales no son competentes para entender en la demanda civil por daños y perjuicios, si se deduce separada de la acusación. Cám. Crim., t. 92, p. 421.

ARTÍCULO 568

Si el condenado á la pena de multa no pudiere ó rehusare pagarla, se dictarán las órdenes necesarias para la aplicación de la pena equivalente, según el Código Penal.

El artículo 79 del Código Penal establece que sufrirá arresto equivalente, que no podrá pasar de nueve meses. La equivalencia es la del artículo 49: cuatro pesos de multa.



LIBRO CUARTO

DE LOS JUICIOS CORRECCIONALES Y SOBRE FALTAS, Y DE ALGUNOS

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES



En una primera sección de este Libro, se comprende la materia procesal correspondiente á juicios correccionales y de faltas, éstas en segunda instancia, que es la que corresponde á funcionarios del orden judicial. Por cierto que el primer título «De los juicios correccionales» consta de un Capítulo único, que se llama, sin embargo, primero; debió sin duda pensarse en un segundo capítulo, quizá destinado á la segunda instancia, idea que luego se abandonó quedando como rastro de ella este Capítulo Primero, que se confunde con el Título también primero.

La sección segunda del presente Libro, encierra juicios especiales, ciertamente, pero no podría llamarse exactamente tales á la materia de los títulos segundo, tercero y sexto, y mucho menos al título final que encierra disposiciones complementarias, no de la sección ni del libro, sino de todo el Código.



SECCIÓN PRIMERA

DE LOS JUICIOS CORRECCIONALES Y SOBRE FALTAS

TÍTULO PRIMERO

DE LOS JUICIOS CORRECCIONALES

CAPÍTULO I

Procedimientos en materia correccional

ARTÍCULO 569

El procedimiento ante el Juez Correccional será verbal y actuado.

Concuerda con los artículos 28 y 29 y con los siguientes de la Ley Orgánica de tribunales de la Capital:

«Art. 66. Los jueces de lo correccional conocerán en primera instancia de los delitos en que la pena no exceda de un año de prisión ó mil pesos de multa.

Art. 67. Las sentencias y resoluciones en las causas que conozcan originariamente, son apelables en segunda y última instancia para ante la Cámara de lo Criminal».





Hay, pues, una justicia penal de menor cuantía como la hay en lo civil, disfrazadas una y otra bajo la máscara de la celeridad en los juicios, ya que la pequeñez de la infracción ó de la relación jurídica alterada, no podrían justificarlas. La jurisdicción correccional es muchas veces rápida (si son muchas las partes también sabe eternizarse), pero no puede asegurarse que realice todos sus fines, quizá el primero, hacerse respetar y aun amar del elemento social con quien se ejerce principalmente.

Así tenemos que la presente disposición parece no admitir escritos de las partes; algunas veces se admiten, sin embargo, con todos los caracteres de tales, otras se exige que los escritos revistan la forma de acta, lo cual, cuando ellos están hechos á máquina, que no usan tales juzgados, resulta irónico. Las actas de los juicios verbales ó comparendos, se suelen hacer con borradores que las partes dejan en la secretaría. En resumen, la ley se burla porque es imposible de cumplir. Un magistrado de gran ilustración y á quien no asustaban las innovaciones, el malogrado doctor Francisco Astigueta, estudió con uno de los autores de este libro la posibilidad de hacer de los juicios correccionales algo moderno, práctico y rápido que permitiera al juez—como evidentemente ha intentado hacer el legislador—que se fallaran las causas por el conocimiento personal del juez mismo, con la garantía de la publicidad de los juicios y dando á la prueba testifical (la verdadera, viva, contradictoria), la importancia que merece. Tropezóse con el inconveniente de que siendo apelables las sentencias, el tribunal superior exigiría que de cada juicio oral se extendiera un acta tan minuciosa como necesaria, para comprender cómo había llegado á formar su conciencia el magistrado. Y para esto se necesitaría un personal inferior numeroso, muy preparado y dispuesto á tomar los juicios con un empeño que hoy no se podría exigir, dado los sueldos ínfimos con que se le



remunera, á pesar de lo cual se ha formado un grupo de funcionarios hábiles, laboriosos y dignos de mejor procedimiento que el que les ha tocado en suerte.

El procedimiento oral, el tribunal colegiado (para suprimir las apelaciones) y una ley por el estilo de la francesa de Beranger, que libra de pena al que comete una primera infracción, mejorarían indudablemente el actual estado de cosas.

Ultimamente uno de los jueces correccionales, el ilustrado doctor Obligado, ha planteado una interesante cuestión de competencia negándose á aplicar el artículo 11 de la ley 4189, que introduce la pena perpetua de deportación como accesoria de los que hayan sufrido seis condenaciones á arresto. Parece á primera vista que tal pena— aun llamándola accesoria—va más allá del poder que la ley ha dado á los jueces correccionales.

—El procedimiento escrito no es causa de nulidad en los juicios correccionales. Cám. Crim., t. 4, p. 554.

—No deben admitirse en estos juicios exposiciones escritas. Cám. Crim., t. 69, p. 249.

ARTICULO 570

Luego que el Juez Correccional tuviere noticia por denuncia, querella, aviso de la Policía, ó cualquier otro medio, de haberse cometido alguno de los delitos que caen bajo su jurisdicción y que den lugar al ejercicio de la acción pública, mandará convocar á juicio verbal al Agente Fiscal, al querellante, si lo hubiere, al procesado ó su defensor y á los testigos que pudieren dar razón de los hechos, señalando día y hora para la celebración del juicio, y haciéndose saber á los interesados que deben concurrir al acto con las pruebas que tuvieren.



También se dispondrá la celebración del juicio verbal, pero sin convocar al Agente Fiscal, cuando el delito sólo pudiere perseguirse á instancia de parte legítima y ésta solicitara su castigo.

El juicio verbal á que se refiere este artículo, se celebrará dentro del término de tres días, pudiendo sólo prorrogarse por causa bastante, que se hará constar en el expediente.

De los tres juicios verbales en que se resuelve el procedimiento correccional, este artículo se ocupa del primero, del que con la indagatoria que forma un acto aparte (artículo 572), equivale al sumario del procedimiento ordinario.

Del artículo resulta que el procedimiento correccional puede iniciarse por denuncia, querella, aviso de la policía ó por cualquier otro medio de conocimiento que tenga el juez de haberse cometido un delito que suscite la acción pública.

En cuanto á los delitos que sólo pueden iniciarse («perseguirse»---dice el texto---pero está mal expresado, véanse los artículos 14, 15 y 16), darán lugar al primer comparando con exclusión del Fiscal. No podría negarse la posterior intervención de éste.

* * *

El presente artículo y los dos que le siguen, suponen que el Juez Correccional adquiere el conocimiento del delito mediante la entrega que le ha hecho la policía del sumario que lo ha motivado, en el que aparece privado de libertad el presunto autor del hecho.

Con tal motivo cabe formular la siguiente proposición: ¿debe dicho magistrado á los efectos del arresto del reo, tener en cuenta los principios que rigen sobre la prisión preventiva? Sin vacilar en la respuesta afirmativa, agre-



garemos que con más preferencia deberá tenerlos presente, en razón misma del menor interés que hacen suponer las infracciones correccionales.

Sin embargo, por una corruptela que no nos explicamos como ha podido mantenerse tanto tiempo, hasta hoy en la práctica se ha hecho otra cosa, produciendo á veces, como es natural, verdaderas injusticias de indebida y larga detención de las personas.

Según el artículo 6 que encierra un principio de carácter general que no excluye á ningún delito, sea cual fuere su importancia, el reo, una vez indagado, ó ha de ser puesto inmediatamente en libertad, ó convertida su detención al estado de prisión preventiva. Se propone así el precepto, que la indagatoria sea el elemento que también concurra á formar en el juez el criterio de la culpabilidad del reo ó el de la falta de ella, para que, de haberla, á su juicio, transforme la detención en prisión preventiva, y, en el caso contrario, la haga cesar con la libertad. Podemos afirmar, á lo menos en lo que hace á la justicia correccional del territorio de la Capital, que ninguna de ambas cosas se hace; no conocemos casos, uno sólo siquiera, en que el juez después de la declaración indagatoria, aún íntimamente convencido de la falta de responsabilidad del reo, haya decretado de seguido su libertad, y sí, en cambio, esperado para resolverla el momento de la sentencia, tardío casi siempre. Así resulta, de hecho, que el que aprecia realmente en cada caso la necesidad de la privación de la libertad, no es otro, en general, que el humilde vigilante que la hizo efectiva, si sucede que viéndola después improcedente el juez correccional, al informarse del sumario de policía, no la hace cesar de continuo.

El texto de los artículos 2 y 366 inciso 3.º, son los que en este Código dan la pauta sobre la procedencia ó nó de la prisión preventiva cuando se trata del presunto



culpable; el primero requiere «indicios vehementes de culpabilidad»; el segundo, reglamentario de aquél, deja librado al «juicio del juez» la apreciación sobre la concurrencia de esos indicios. Ahora bien; si el juez correccional ve en los antecedentes que se le hayan entregado y en los que por sí mismo hubiere reunido, motivos bastantes capaces de formar un juicio en favor de la falta de culpabilidad en el reo ¿qué razón legal podría impedir que le pusiera de inmediato en libertad? ¿considerará, acaso, que dicha medida haría presumir un prejuzgamiento de su parte? Razón legal prohibitiva, ninguna podrá invocar: no existe; en cambio, las hay en contrario, siéndolo las dos disposiciones citadas, únicas que dan las reglas generales á que ha de ceñirse la orden de privación de la libertad ó la de su cesación; y, por lo que hace al prejuzgamiento, tampoco ocurrirá si se atiende á que dicha libertad sólo será producida como medida natural de instrucción determinada por un juicio provisorio que no rechaza otro posterior contrario que nuevos elementos puedan llegar á crear, pues nunca la libertad sería definitiva hasta tanto se pronunciara el sobreseimiento (artículo 577) ó sentencia absolutoria (artículo 580).

Volvemos á repetir: es la justicia correccional la que, en primer término, no debe dejar de lado los principios que imperan acerca del goce de la libertad y de su supresión, pues la naturaleza leve de los delitos llamados correccionales, sólo debiera inducir á la medida de arresto cuando los antecedentes sobre la culpabilidad aparezcan de tal modo, que á primera vista hagan más bien presumir probabilidades de una condena que de un sobreseimiento ó absolución.

Puede también consultarse al respecto el título *De la detención y la prisión preventiva*, tomo I, páginas 447 y siguientes.



—No es competente para conocer en causas que puedan merecer mayor pena que un año de prisión. Cám. Crim., t. 1, p. 296.

—Conoce el juez correccional de las lesiones castigadas con un año de prisión. Cám. Crim., t. 18, p. 370.

—Corresponde á los jueces correccionales el juzgamiento de delitos que como máximo tienen un año de prisión ó mil pesos de multa. Cám. Crim., t. 18, p. 276.

—La declaración indagatoria prestada ante la policía en causas correccionales, es válida. Cám. Crim., t. 52, p. 493.

—El juez puede encomendar á la policía la sustanciación de diligencias probatorias. Cám. Crim., t. II, p. 357.

ARTÍCULO 571

Los testigos que hubieren declarado en el sumario de prevención formado en la Policía, deberán asistir al mismo juicio, siempre que el Juzgado considere necesaria su ratificación. Los interesados podrán solicitarla asimismo en el acto del comparendo, y en tal caso la diligencia se practicará en una nueva audiencia.

Aquí ya se prevé el caso de que hubiere sumario de prevención por la policía, que es natural que deberá sujetarse á lo dispuesto para tales diligencias en los artículos 181 y siguientes.

En la práctica (mala práctica), cuando el juzgado tiene conocimiento por denuncia ó por querella de un delito, confía á la policía el sumario de prevención.

—Pudiendo la policía instruir sumario de prevención, puede comunicar al reo. Cám. Crim., t. 15, p. 194.

—Siendo facultativo de la policía instruir sumario de prevención en las causas correccionales, no puede imputársele transgresión por la incomunicación del reo durante el tiempo que la ley permite á los jueces. Cám. Crim., t. 15, p. 194.



ARTÍCULO 572

Dentro de veinticuatro horas, contadas desde que el procesado se encuentre á disposición del Juez, se le tomará la declaración indagatoria, á la que podrá asistir el defensor.

Puede tomársele aun en el caso de no haber detención previa.

Las garantías y reglas de los artículos 236 y siguientes, son de rigor.

—La confesión prestada ante la policía, es válida en asuntos correccionales. El reo que alegue que le ha sido arrancada con violencia ó engaño, debe probarlo. Cám. Crim., t. 8, p. 535.

—Es válida la prestada ante la policía. Cám. Crim., t. 52, p. 493.

—La falta de ratificación ante el juez, de la indagatoria, hace procedente la nulidad del juicio. Cám. Crim., t. 97, p. 91.

ARTÍCULO 573

Cuando por justo motivo no pudiere celebrarse el juicio verbal en el día señalado, ó no pudiere concluirse en un solo acto, el Juez señalará el día más inmediato posible para su celebración ó continuación, haciéndolo saber á los interesados.

La disposición es aplicable no sólo al primer comparendo, sino á todos.

—En causas correccionales no pueden admitirse testigos presentados después de la audiencia fijada para la presentación de prueba. Cám. Crim., t. 75, p. 134.

ARTÍCULO 574

El juicio será público, dando principio por la lec-



tura de la querella, si la hubiere, siguiendo á esto el examen bajo juramento de los testigos convocados y la agregación de la prueba instrumental producida. En seguida se examinarán los testigos que presentare el acusado en su descargo.

Y también los que presentare el acusador, además de la ratificación, cuando proceda, de los testigos del sumario de prevención.

—Los testigos pueden ser ofrecidos y admitidos sin individualizarlos. Cám. Crim., t. 95, p. 121.

—La ausencia del defensor, es causa legal para fijar nueva audiencia. Cám. Crim., t. 96, p. 294.

ARTÍCULO 575

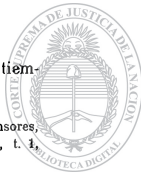
Terminado este acto, el Juez señalará una nueva audiencia para oír la acusación y la defensa.

Este es el segundo comparendo y equivale al período de discusión del plenario que para el procedimiento en general marcan los artículos 457 y siguientes.

ARTÍCULO 576

Si se pidiese prueba por alguna de las partes, el Juez señalará con ese objeto una nueva audiencia dentro de un término que no excederá de diez días, salvo que fuese prueba que debiese producirse fuera de su jurisdicción, debiendo entonces observarse lo prescripto para este caso.

La prueba debe pedirse en el segundo comparendo, es decir, á continuación de las acusaciones y defensas.



La audiencia de prueba, de hecho, dura todo el tiempo que las diligencias requieren.

—Las diligencias practicadas (ó propuestas) por los defensores, deben hacerse constar por nota en el expediente. Cám. Crim., t. 1, p. 374.

—El término para la presentación de pruebas es perentorio. Cam. Crim., t. 37, p. 162.

—En juicios correccionales, la prueba testimonial debe ser pedida y producida dentro de los diez primeros días del término. Cám. Crim., t. 41, p. 133.

—Los testigos deben solicitarse en tiempo para que depongan dentro del término. Cám. Crim., t. 99, p. 344.

ARTÍCULO 577

Si no hubiere acusador particular y el Ministerio Fiscal no hallare causa bastante para acusar, se decretará el sobreseimiento en la forma que corresponda.

Es decir, provisional ó definitivo, total ó parcial.

Del artículo no se desprende que el juez correccional tenga, como el de sentencia, el derecho de no conformarse con el pedido fiscal de sobreseimiento, ni por tanto dar lugar al procedimiento establecido en los artículos 460 á 462.

—No es lo mismo el caso en que el fiscal retira la acusación por falta de prueba. V. art. 580. Cám. Crim., t. 19 p. 6.

—Una vez decretado el sobreseimiento definitivo en causas que pueden substanciarse de oficio, no puede ser tenido como parte querellante el damnificado. Cám. Crim., t. 46, p. 124.

—Producida la acusación y defensa, no procede la aplicación de este artículo. (Véase artículos 580 y 582). Cám. Crim., t. 61, p. 40.

—No procede el sobreseimiento si la acusación fiscal se ha producido. Cám. Crim., t. V, p. 188.



ARTÍCULO 578

Si se opusieren tachas á alguno de los testigos, deberán justificarse éstas en una audiencia inmediata, pudiendo los interesados hacer las peticiones que convengan á sus propósitos.

Nueva audiencia que se injerta en la del artículo 576 y puede hacer inacabable el juicio.

Para el juicio de tachas rigen los artículos 486 y siguientes.

ARTÍCULO 579

Producida la prueba y puesto el proceso por tres días á disposición de los interesados en la Secretaría del Juzgado, para el examen y estudio de sus constancias. el Juez señalará otra audiencia para que las partes aleguen sobre la prueba.

Tercer comparendo, equivalente á las actuaciones del artículo 492.

ARTÍCULO 580

Dentro de diez días de celebrada la anterior audiencia, el Juez dictará sentencia fundada y por escrito.

Sin necesidad de sujetarse á las prescripciones del artículo 495, pero sí á las del 496.

—No está obligado el juez á absolver porque el Ministerio Fiscal encuentra que no hay culpabilidad en razón de la prueba producida. Cám. Crim., t. 19, p. 6.



—Deben citarse las disposiciones de la ley en que se funde la sentencia condenatoria. Cám. Crim., t. 29, p. 249.

—El juez puede sobreseer (después de la acusación y defensa). Cám. Crim., t. 61, p. 40.

—No es causa de nulidad que las sentencias no reunan los requisitos del artículo 495. Cám. Crim., t. 50, p. 404.

—La falta de notificación de la sentencia al defensor, la anula, si la notificación del procesado adolece también de vicios que la invalidan. Cám. Crim., t. 95, p. 178.

—Debe declararse nula de oficio la sentencia del juez correccional en un juicio por lesiones que incapacitan para el trabajo por más de treinta días. Cám. Crim., t. V, p. 159.

ARTÍCULO 581

Si la sentencia absolutoria fuese apelada por el acusador ó Fiscal, se pondrá al procesado en libertad, sometiéndolo á la vigilancia de la autoridad.

Sin necesidad, por tanto, de fianza, como para los demás juicios exige el artículo 504.

ARTÍCULO 582

De la resolución definitiva del Juez Correccional, podrá apelarse sólo en relación dentro de tres días.

El recurso de nulidad se interpondrá conjuntamente y se resolverá en la misma forma del recurso de apelación.

La apelación es en ambos efectos, con la limitación del artículo anterior.

Proceden en el juicio correccional, además del recurso de apelación y del de nulidad, todos los que admite el tercer libro del presente Código.



—No es nula la sentencia que no reuna los requisitos del artículo 495. Cám. Crim., t. 50, p. 404.

—La falta de recepción de prueba no puede fundar la nulidad de la sentencia dictada con audiencia del defensor y agente fiscal. Cám. Crim., t. 60, p. 5.

—Es nula la sentencia que después de la acusación y defensa sobresee definitivamente en vez de absolver ó condenar al acusado. Cám. Crim., t. 61, p. 40.

—Adolece de nulidad la sentencia correccional recaída sobre un delito no acusado por el agente fiscal. Cám. Crim., t. 88, p. 382.

—Adolece de nulidad el sumario si del informe médico resulta la competencia del Juez de Instrucción. Cám. Crim., t. 91, p. 296.

—Es causa de nulidad la falta de la firma del defensor en el acta. Cám. Crim., t. 95, p. 152.

—La falta de notificación de la sentencia al defensor, habiendo vicios que invalidan la hecha al procesado, es causa de nulidad. Cám. Crim., t. 95, p. 178.

—Es causa de nulidad la falta de ratificación de la indagatoria ante el juez. Cám. Crim., t. 95, p. 178.

—Es nulo el juicio, si resultan omitidos trámites esenciales. Cám. Crim., t. 97, p. 91.

ARTICULO 583

Cuando vista la causa por el Superior, entendiera que debieran practicarse diligencias y recibirse pruebas, que no se hayan recibido ó practicado, las mandará practicar para formular su juicio, dentro de un término que no exceda de quince días.

Prueba en segunda instancia, que puede, por tanto, ser más amplia que la que para el procedimiento ordinario establecen los artículos 528 á 530.

ARTICULO 584

El Juez Correccional cuidará de que todas las diligencias del sumario se practiquen á la mayor brevedad,

dictando las órdenes y requerimientos necesarios para la efectividad inmediata de las diligencias que ordenare en la instrucción de la causa.

Artículo meramente decorativo, que puede tener aplicación en la práctica de las diligencias que á los funcionarios de policía encomiende el juez correccional.



TÍTULO SEGUNDO

Del procedimiento en los juicios sobre faltas

ARTÍCULO 585

El procedimiento ante el Jefe de Policía y las autoridades municipales, será verbal y actuado. Su carácter es breve y sumario.

Se legisla sobre esta materia en este Código, principalmente por la apelación de que conocen los jueces correccionales, de las resoluciones que dicten los funcionarios administrativos en materia de faltas. Véanse artículos 27, 28 inciso 1.º, y 30.

De este modo ambiguo se resuelve en nuestra legislación la materia de contravenciones, que no quisiéramos tener tan tupida como la francesa, p. ej., en que forma una desmesurada parte del derecho, pero que no es bien que sea tan breve y diminuta.

El carácter de verbal y actuado, se combina aquí con el de breve y sumario, tanto para la primera instancia á que se refiere este artículo, como para la segunda ante el juez correccional.





ARTÍCULO 586

Concluída la investigación, el Jefe ó la autoridad municipal, en su caso, dictará la resolución que corresponda dentro del término de veinticuatro horas.

El término es, por lo mismo, de la duración que quiere el funcionario, único que decide el momento en que ha concluído la investigación.

ARTÍCULO 587

El recurso de apelación de las resoluciones sobre faltas, dictadas por la Policía ó Municipalidad, se interpondrá dentro del término de veinticuatro horas para ante el Juez Correccional.

Artículo teórico, en cuanto pocas veces se notifica en forma la resolución, ó por lo menos no se precisa el momento desde el cual puede apelar el condenado.

Procede también el recurso de queja ó de apelación denegada de los artículos 514 á 517.

ARTÍCULO 588

El Juez Correccional resolverá el recurso previa audiencia del apelante, á la que podrá asistir el Asesor de la Policía ó Municipalidad, y en presencia de las actuaciones producidas sin perjuicio de tomar otros antecedentes que creyere indispensables.

Implica un comparendo y la posibilidad de pruebas, pedidas ó de oficio.



ARTÍCULO 589

La resolución del Juez Correccional debe dictarse dentro de tercero día, después de practicadas las diligencias de que habla el artículo anterior.

Es inapelable, por constituir la última instancia.

ARTÍCULO 590

El tiempo que dure el procedimiento se descontará siempre de la pena.

Cuando la pena es de privación de la libertad... y no la ha cumplido el procesado.

SECCION SEGUNDA

DE LOS JUICIOS ESPECIALES

TÍTULO PRIMERO

Procedimientos en los delitos de calumnia é injuria

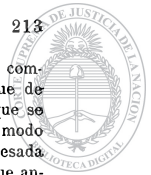
El Título no comprende todo el procedimiento en estos delitos, sino aquella parte en que él se distingue del general. Y la nota característica, la de que no instruyéndose sumario sólo conocen de los delitos de calumnia é injurias graves los jueces de sentencia, y de los de injurias leves los correccionales, no se da expresamente en ningún artículo. Se deduce de los dos primeros del presente Título.

ARTÍCULO 591

No se dará curso á querella alguna por calumnia ó injuria sin convocar previamente al acusado y acusador á un comparendo de conciliación.

El comparendo debe ser personal, no por apoderado, á no ser que éste tenga poder especial para el mismo. Se ha entendido que tratándose de un poder «para un jui-





cio de calumnia ó 'de injuria» no es bastante para el comparendo que es anterior al juicio. El argumento, que de puro sutil se quiebra, revela la mala voluntad con que se siguen generalmente estos juicios que se consideran á modo de pleitos, cuando en realidad la sociedad está interesada en el castigo de la difamación... á no ser que haya que andar á tiros por esas calles.

—Puede ser rechazada la acusación por el juzgado sin substanciarla y sin dar audiencia al acusado, si conceptúa que no existe injuria en el hecho ó escrito acusado. Cám. Crim., t. 6, p. 599.

—No declarándose satisfecho el injuriado con las explicaciones del injuriante, debe continuarse el juicio. Cám. Crim., t. 7, p. 172.

—El juez competente para seguir en el juicio de calumnia por la prensa, es el del lugar donde se ha hecho la publicación, aunque el acusado resida fuera de él. Cám. Crim., t. 12, p. 115.

—El editor sólo puede ser responsabilizado en caso de no presentar al autor del artículo acusado. Cám. Crim., t. 12, p. 57.

—El editor presentó á una persona como verdadero autor de la publicación acusada, pero lo hizo después del vencimiento del término de prueba. Se ordenó seguir la causa contra el editor. Cám. Crim., t. 12, p. 213.

—Las injurias dirigidas en juicio á «la parte adversa», no autorizan al procurador de ésta á deducir querrela, por no ser parte interesada en el juicio. Cám. Crim., t. 14, p. 334.

—La excusación del que acusa injurias para comparecer al juicio, no permite darlo por desistido de la acción. Cám. Crim., t. 15, p. 58.

—Todo ataque hecho al honor ó á la consideración de una persona, sea por hechos ó por gestos, por imágenes ó expresiones aunque no encierren la importancia de un hecho preciso, es una injuria propiamente dicha. Cám. Crim., t. 15, p. 184.

—El acusador por calumnia no está obligado á absolver posiciones, porque el artículo 18 de la Constitución impide que á una persona se le hagan absolver bajo juramento posiciones tendientes á probar que ha cometido un delito. Cám. Crim., t. 16, p. 115 y t. 18, p. 233.

—Uno ó más miembros del Directorio de un Banco, tienen personería para acusar por calumnia al autor de una publicación en que se imputen delitos al Directorio. Cám. Crim., t. 16, p. 346.

—Las publicaciones sin firma, se suponen hechas por el editor del periódico, si no existe salvada su responsabilidad. Cám. Crim., t. 17, p. 115.



—La excepción en juicio por calumnia, fundada en que el querellante no es el aludido en la imputación, no puede tramitarse como previa porque hace el fondo de la causa. Cám. Crim., t. 18, p. 200.

—La presentación del original firmado por el autor del escrito acusado, exime de responsabilidad al director ó editor del diario en que se ha hecho su publicación. Cám. Crim., t. 19, p. 87.

—El acusado por calumnia no puede nombrar representante en el juicio con arreglo á la ley 6.^a, título 1.^o, partida 7.^a. En disidencia el Dr. Aguirre, por tratarse de un juicio especial equiparable al ordinario civil. Esta es la doctrina que luego ha prevalecido. Cám. Crim., t. 19, p. 131.

—Aun cuando el editor no sea el autor del suelto acusado, debe responsabilizársele si así lo exige el acusador. Cám. Crim., t. 20, p. 161.

—Siendo comunes estos delitos, (los de calumnia é injuria), cabo que en ellos haya autores principales y cómplices. En el caso, asumiendo N. la responsabilidad de la publicación, (un boletín), la intervención atribuida á X, en el hecho material de la repartición, no consta probada.

(En disidencia los doctores Aguirre y Barra, niegan que conocido el autor pueda castigarse á los cómplices). Cám. Crim., t. 21, p. 376.

—El apoderado general, con facultad de intervenir en causas criminales, puede representar al acusado, si el poder es de fecha posterior á la querella. Cám. Crim., t. 25, p. 65.

—No puede calificarse de calumniosa la acusación, si por la clase de los hechos y constancias de autos, han existido decisiones judiciales que han conceptuado la imputación verosímil. Cám. Crim., t. 25, p. 278.

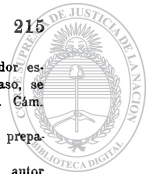
—El acusado por calumnia puede constituir apoderado. Basta el poder general otorgado después de la iniciación del juicio con la cláusula de representarlo en todos los asuntos judiciales de cualquier clase y naturaleza que al presente tenga. Cám. Crim., t. 27, p. 190.

—El sumario instruido contra los hoy querellantes por calumnia, por denuncia del hoy acusado, en que éste funda la excepción, terminó por sobreseimiento definitivo, no pudiendo sostenerse que exista pendencia de causa. Cám. Crim., t. 27, p. 236.

—Un mismo hecho no puede fundar la acusación de calumnia y de injuria. Cám. Crim., t. 33, p. 251.

—El acusador por calumnia está obligado á absolver posiciones si éstas no se refieren al delito imputado. Cám. Crim., t. 30, p. 202.

—La retractación en el comparendo de reconciliación, determina la aplicación de costas. Cám. Crim., t. 36, p. 115.



—Las injurias á la esposa son acusables por un procurador especial del marido, sin poder directo de la ofendida. (En el caso, se la trataba de prostituta, lo cual denigra también al esposo). Cám. Crim., t. 36, p. 222.

—No procede manifestación del acusado como diligencia preparatoria. Cám. Crim., t. 37, p. 81.

—No procede que determinada persona manifieste si es autor de la publicación, como diligencia preparatoria del juicio por calumnia (era una persona objeto de un reportaje). Tampoco puede aquélla ser considerada como autora del delito (sin la prévia manifestación del director del diario en que se publicó el reportaje acusado). Cám. Crim., t. 37, p. 81.

—La negativa del delito de injuria y las explicaciones satisfactorias, hacen procedente el sobreseimiento. Cám. Crim., t. 38, p. 364.

—Comprende esta especie de delitos la injuria por medio de grabados. Para la existencia de desacato, no es indispensable que el desacatado esté presente, y cometen desacato los que por medio de la prensa, escrita ó de grabado, imputen determinadamente á un magistrado participación en crímenes de pública notoriedad. Cám. Crim., t. 39.

—La excepción de falta de personería por no ser el acusador la persona aludida en la publicación acusada, es improcedente. Cám. Crim., t. 40, p. 164.

—La persona á quien se imputa la publicación acusada, en el juicio de calumnia iniciado contra el editor, no puede ser acusada, en tanto el querellante no compruebe la acusación. Cám. Crim., t. 40, p. 365.

—El editor del diario es responsable, en tanto no presente al autor de la publicación acusada. Cám. Crim., t. 40, p. 420.

—Los tribunales de la Capital son competentes para conocer de la querrela por calumnia por un diario de la capital, cualquiera que sea el domicilio de las partes. Cám. Crim., t. 41, p. 17.

—Si hay avenencia de partes no procede la imposición de costas. Cám. Crim., t. 52, p. 469 y 470; t. 64, p. 15; t. 71, p. 46; t. 96, p. 238, etc.

—La ratificación del mandante basta la acusación por calumnia fundada en hechos que no fueron enunciados en el poder. Cám. Crim., t. 57, p. 5.

—La negativa y el simple reconocimiento de la honorabilidad del querellante por injurias, no hacen procedente el sobreseimiento. Cám. Crim., t. 57, p. 217.



—El retiro de las frases injuriosas equivale a una retractación. Cám. Crim., t. 12, p. 49 y t. 75, p. 59.

—No procede condenación en costas cuando sin obtener retractación, el querellante se da por satisfecho con las explicaciones. Cám. Crim., t. 75, p. 245.

—El acusado puede hacerse representar en el juicio. Cám. Crim., t. 85, p. 175.

—Si el acusado reconoce la honorabilidad del querellante y niega haber cometido el delito, es pasible de costas. Cám. Crim.: tomo 88, p. 280.

—La prueba que el querellante por injurias ofrezca, no puede versar sobre la verdad de sus afirmaciones injuriosas. Cám. Crim., t. 5, p. 148.

ARTÍCULO 592

En caso de que el acusado no concurriere a la citación, se seguirá la causa por los trámites legales. Si no compareciese el querellante sin justa causa, se le tendrá por desistido con costas.

Es una excepción a la doctrina del artículo 151 sobre rebeldía del procesado.

En la práctica se cita nuevamente al querellado que no asiste la vez primera, bajo el apercibimiento del presente artículo.

—La imposibilidad de asistir el abogado del acusador, hace procedente nuevo día. Cám. Crim., t. 15, p. 58.

—La falta de comparecencia de las partes a un juicio verbal, no puede autorizar su conducción por medio de la fuerza pública. Cám. Crim., t. 49, p. 264.

—La presentación después de la hora no basta para dar por desistido al querellante. Cám. Crim., t. 52, p. 113.

—Si la causal de inasistencia se alega después del día señalado, debe darse por desistido al querellante. Cám. Crim., t. 65, ps. 204 y 292.

—Alegada antes la ausencia del querellante, procede señalar nuevo día, Cám. Crim., t. 66, p. 106.



—Alegada justa causa para no asistir, debe recibirse á prueba. Cám. Crim., t. 97, p. 92.

—Los escritos pidiendo nuevo día deben presentarse antes de la hora señalada. Cám. Crim., t. 99, p. 18.

ARTÍCULO 593

Cuando la querella se dedujere por injuria ó calumnia, inferida en juicio, deberá acompañarse un testimonio del escrito ó acta en que se hubiere vertido, expedido por orden del Juez que conociere de la causa.

Debe tenerse presente el inciso *e* del artículo 21 de la ley 4189.

«Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados ó defensores, en los escritos, discursos ó informes y actuaciones producidas ante los tribunales, serán corregidas disciplinariamente de acuerdo con las leyes de procedimientos, á menos que se les diera á la publicidad, en cuyo caso será responsable como autor de la injuria, el que lo sea de la publicación. Cuando las injurias fuesen reciprocas, el tribunal podrá declarar, según las conclusiones, exentas de pena á las partes ó alguna de ellas».

De hecho, el artículo presente 593 está derogado.

ARTÍCULO 594

La querella por injuria ó calumnia escrita ó impresa es improcedente si no se acompaña el instrumento que las contenga.

Salvo el caso de proporcionarlo la autoridad que lo tiene, á quien deberá pedirse por intermedio del juez.

—Las injurias contenidas en carta privada son acusables: no es necesaria la publicidad. Cám. Crim., t. 6, p. 600.



—Puede acompañarse con posterioridad á la deducción de la querella. Cám. Crim., t. 30, p. 393.

—Resultando de actos judiciales, basta solicitar copia al deducir la querella. Cám. Crim., t. 67, p. 398.

ARTÍCULO 595

En cualquier estado del juicio en que el acusado ofreciera retractación de una manera pública de la calumnia ó injuria que ha dado lugar á la acusación, se sobreseerá en la causa, debiendo satisfacerse por él mismo todas las costas originadas.

El sobreseimiento en este caso no extingue la acción civil.

Concuerda con el artículo 186 del Código Penal:

«El culpable de calumnia ó injuria contra un particular queda exento de pena:

1.º Si lo perdona el ofendido.

2.º Si media provocación en las injurias verbales y en las escritas leves.

3.º Si en las mismas consiente en hacer una retractación pública».

—La retractación no basta si la querella se funda en injurias de hecho. Cám. Crim., t. 25, p. 370.

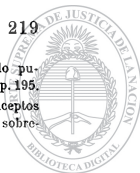
—La retractación, aun antes de entrar al juicio, produce costas. Cám. Crim., t. 36, p. 115.

—Si el acusado se retracta aun después de la sentencia condenatoria, procede el sobreseimiento. Cám. Crim., t. 44, p. 200.

—El que se retracta no está obligado á publicar el hecho si no fué acusado por calumnia impresa. Cám. Crim., t. 36, p. 115 y t. 72, p. 187.

—Tratándose de calumnia encubierta, bastan las explicaciones; no es necesaria la retractación. Cám. Crim., t. 55, p. 323.

—Este artículo ha derogado la excepción de la ley penal que no admitía retractación tratándose de hechos imputados á funcionarios públicos. Cám. Crim., t. 95, p. 11.



—Si los hechos en que se funda la acusación no han sido publicados, tampoco debe serlo la retractación. Cám. Crim., t. 95, p. 195.

—Aun no reconociendo el acusado haber proferido los conceptos calumniosos, si su explicación es satisfactoria, corresponde el sobreseimiento. Cám. Crim., t. V, p. 248.

ARTÍCULO 596

En las causas de calumnia ó injuria no se decretará nunca la detención ó prisión preventiva del procesado, salvo el caso en que hubiere motivos fundados para presumir que trata de ausentarse del país.

Quiere decir, durante la tramitación del proceso. Constituye además el precepto una excepción al principio que autoriza el arresto de una persona, con sólo mediar contra ella indicios de culpabilidad: en calumnias é injurias no impera.

—El procesado puede ausentarse sin arraigar el juicio. Cám. Crim., t. 8, p. 579.

—No procede la paralización de la causa por rebeldía del acusado sino la intervención del defensor de ausentes. Cám. Crim., t. 12, p. 122 y t. 50, p. 428.

—Determinando el artículo 596 que en el juicio de calumnia no puede ordenarse la prisión ó detención del reo, implícitamente resuelve que en caso de no querer presentarse, seguirá el juicio en rebeldía, porque de otro modo nada sería más fácil al acusado de calumnia que evadir su responsabilidad con no presentarse y dejar que se le declare rebelde. Cám. Crim., t. 12, p. 125.

—No procede embargo contra el acusado antes de decretarse la prisión. Cám. Crim., t. 66, p. 140.

—Ausente, debe paralizarse. Cám. Crim., t. 19, p. 379.

—Debe constar plenamente la intención del acusado de ausentarse. Cám. Crim., t. 78, p. 121.

—Procede la excarcelación bajo fianza. Cám. Crim., t. 84, p. 315.

TÍTULO SEGUNDO

De la falsificación de documentos públicos y privados

Comprende este Título algunas disposiciones que consideran una clase especial de delitos, tendientes casi todas á establecer debidamente la comprobación del hecho punible. Pudieran perfectamente haberse encuadrado en el título IV del libro II.

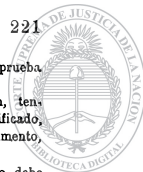
ARTÍCULO 597

Las querellas y denuncias por falsificación de documentos públicos ó privados, deberán recibirse aún cuando esos documentos hayan servido de base á actos judiciales ó jurídicos y aún cuando existan sentencias á su respecto, pronunciadas en las jurisdicciones civiles.

Concuerda con el artículo 1105 del Código Civil, según el cual la sentencia pronunciada en el juicio civil, no impedirá ninguna acción criminal posterior, intentada sobre el mismo hecho ó sobre otro que con él tenga relación.

—Con arreglo al artículo 1105 del Cód. Civil y salvo en los dos casos del artículo 1104, la declaración hecha en sentencia civil,





de ser falso ó adulterado un documento privado, no forma prueba en el juicio criminal. Cám. Crim., t. 27, p. 95.

—La prueba testimonial en un proceso por falsificación, tendiente á probar la existencia del documento que se dice falsificado, no prueba la existencia del delito si no existe en autos el documento, que, en este caso, es el cuerpo del delito. Cám. Crim., t. 31, p. 27.

—La acusación criminal por falsedad de un documento, no debe suspenderse por la ejecución del mismo iniciada ante la jurisdicción civil. Cám. Crim., t. 34, p. 243.

—En un caso en que la persona acusada adulteró el conforme de una cuenta, agregándole fecha para su pago, se declaró no haber delito y sí que se había procedido con el dolo civil definido en el artículo 931 del Código Civil. «Tres condiciones—decía sobre dicho caso el Camarista doctor D. Saavedra—son indispensables para la existencia del delito de falsificación: 1.º, alteración de la verdad; 2.º, perjuicio ó posibilidad de causarlo; y, 3.º, propósito de dañar: concurriendo sólo el primero, no existe el delito.» Cám. Crim., t. 98, p. 315.

ARTÍCULO 598

El documento agüido de falso será rubricado en el acto de su presentación, en cada una de sus páginas, por el Juez ó funcionario encargado de la instrucción, por el Secretario y por la persona que lo haya presentado, si supiere escribir.

Se exigen tales precauciones como una manera de asegurar ó evitar una suplantación posterior, pero no bastará el hecho simple de la rúbrica, sino también la constancia en autos de que así se hizo.

ARTÍCULO 599

El Juez hará levantar inmediatamente un acta en la que se hará referencia al estado material del docu-



mento, de las raspaduras, interlineaciones, adiciones ó cualesquiera otras circunstancias que puedan indicar la falsedad ó alteración.

Esta acta será depositada en la Secretaría del Juzgado.

Responde al mismo propósito del artículo anterior. El gran recurso de la fotografía podría coexistir con el acta de descripción.

ARTÍCULO 600

Si la escritura argüida de falsa ó de haber sido alterada, se encontrara en un estado que no permitiere la subscripción de que habla el artículo 598, se observará lo que se establece en el artículo precedente.

El estado que no permita la subscripción (léase rúbrica), deberá considerarse que existe cuando cualquier trazado de rúbricas hagan presumir que resultará una alteración sensible en el documento, por ejemplo: si fuera alguno que habiendo sufrido la acción del fuego, estuviera en estado de quebrarse, ó que no hubiera espacios en blanco que permitieran las firmas, etc.

ARTÍCULO 601

Cualquiera que, como depositario público ó privado, tenga en su poder las escrituras argüidas de falsas, está en la obligación de presentarlas siempre que el Juez se lo ordene, bajo pena de apremio personal en caso de no hacerlo, oído el Ministerio Fiscal.

La orden judicial y el recibo que se le dará por la entrega de los documentos, le servirá de descargo respecto de los interesados en el mismo documento.

Como se ve, esta disposición rige para simples guardadores particulares y para los públicos, debiendo comprenderse entre estos últimos á los establecimientos públicos de cualquier género que hubieren recibido el documento argüido de falso por cualquier concepto, pues la ley, al hablar de *depositario*, alude al simple tenedor ó guardador, no al depositario en su acepción legal.

El apremio personal, en caso de negativa al mandato judicial, sólo procederá previa audiencia fiscal á los efectos de la acción que éste deberá ejercer por desacato en caso de que la desobediencia no la justificara algún impedimento legal de carácter absoluto.

Sobre este precepto debe regir la regla según la cual el funcionario público deberá ser requerido á la entrega por conducto de la autoridad superior de la que dependa, salvo casos de urgencia, pues mediando ésta, el interés mismo de la investigación aconsejaría un pedido directo, sin perjuicio de que el funcionario requerido, ó el mismo juez requirente, dieran cuenta en seguida al superior que corresponda. La investigación criminal, dado el fin que persigue, disculpa cierta clase de cumplidos.

—Cuando se ejercita la acción penal por ser argüido de falso un documento que se encuentra agregado á un expediente de juicio civil, el Juez de Instrucción debe pedir ese documento original para que obré en autos como pieza de convicción, y el Juez Civil se lo debe mandar, porque á efecto de la jurisdicción de éste, le basta un testimonio del mismo. Cám. Crim., t. 17, p. 179.

ARTÍCULO 602

Corresponde al Juez que practica la instrucción procurarse las escrituras que deban servir para el cotejo.





Si estas escrituras se hallasen en poder de notarios ú otros depositarios públicos, se observará lo dispuesto en el artículo precedente.

La mente de la ley no es otra que la de que el juez pueda comprobar la existencia del delito de falsificación sin exteriorizar la investigación en que esté empeñado, de tal modo, que pueda llegar á conocimiento de aquel á quien el hecho pueda afectar criminalmente.

ARTÍCULO 603

Las escrituras que deban servir de tipo de comparación, serán rubricadas conforme á lo dispuesto en el artículo 598.

Las escrituras—se dice—no excluyéndose de la fórmula de las rúbricas á las que sean públicas, porque este artículo es un complemento del anterior que habla de escrituras en general; de manera que no sólo proceden las rúbricas para los documentos dubitados, sino también para los indubitados, aunque sean públicos, por la misma razón que hemos expuesto sobre el artículo 598.

ARTÍCULO 604

Cuando sea necesario extraer del lugar en que se encuentre un instrumento auténtico, el Secretario del Juzgado dejará al depositario una copia exacta, que será concertada y firmada por ambos, dándole el recibo correspondiente para la constancia del hecho. En el proceso se consignará la anotación respectiva, que deberá ser firmada por el Juez, por el Secretario y por la



persona que hace la entrega. Si ésta se hallase fuera del lugar de la residencia del Juzgado, el documento se pedirá por medio de exhorto ú oficio al Juez territorial, quien concertará ó hará concertar por un Escribano subalterno suyo, la copia que debe dejarse en poder del depositario. La anotación que en este caso se haga en el proceso, se firmará únicamente por el Juez y el Secretario de la causa.

Sin embargo, si la escritura forma parte de un registro de que no puede separarse ni por poco tiempo, el Juez ordenará la presentación del mismo registro, á efecto de verificar ó establecer el hecho denunciado.

Practicada esta diligencia, el Juzgado devolverá el registro, pudiendo pedirlo cuantas veces le fuera necesario para la investigación criminal.

Podrá también dejarse testimonio exacto de las observaciones que haya requerido el examen del documento.

Siendo la escritura auténtica ó indubitada un elemento de juicio no sólo para los peritos, sino para la misma justicia, debe procurarse siempre que ella se agregue al proceso. Concuerdá con el artículo 201 de la Ley Orgánica: «Los Registros no podrán ser extraídos de la oficina sino en caso de fuerza mayor, ó para su traslación al Archivo general. Las escrituras matrices sólo podrán ser desglosadas del Registro por orden del juez competente, cuando se trate de la comprobación de un delito, dejando el correspondiente testimonio».

La segunda y tercera parte de esta disposición, está en consonancia con la del artículo 202, última parte, de aquella misma ley: «Los Registros deben conservarse en reserva, sin que sea permitido consentir que persona alguna se imponga de ellos; pero los interesados en una ó más escrituras, sus representantes ó sucesores, podrán imponerse de su contenido en presencia del escribano. Tam-



bién podrán inspeccionarse una ó más escrituras con orden de juez competente á objeto de cotejos, reconocimientos caligráficos, confrontación de firmas ú otros análogos».

ARTÍCULO 605

Los instrumentos privados pueden también presentarse como tipo de comparación, si las partes interesadas los reconocieran.

Estos documentos no podrán, sin embargo, admitirse para el cotejo, sino cuando sea imposible ó difícil al Juez procurarse instrumentos ó escrituras públicas. Se preferirán siempre los instrumentos de fecha más inmediata á la del instrumento argüido de falso.

Los particulares que tuvieren en su poder los instrumentos mencionados, no podrán ser compelidos inmediatamente para que los presenten; pero si después de habérseles citado al lugar de la instrucción á fin de que verifiquen la entrega ó expongan los motivos en que fundan su negativa, fuesen éstos desestimados, el Juez podrá compelerlos con apremio personal.

Supone este artículo, en su primera parte, una situación inversa á la del 602, es decir, que el imputado de falsificación ya ha tenido ingreso como parte interesada en el asunto y que en el proceso existen agregados documentos que ha reconocido como suyos.

Al preferirse en seguida como elementos de cotejo los documentos públicos sobre los privados, se tiene en cuenta que en los primeros es donde más difícilmente—si ellos se han relacionado con negocios lícitos—se habrá disimulado el carácter de la letra por las partes otorgantes. La preferencia, por otra parte, de documentos de fecha próxima á la del argüido de falso, tiene como causa



la inestabilidad del carácter caligráfico en muchas personas.

El párrafo tercero tiene su explicación, en una parte, en lo dispuesto en el artículo 356 y además en el precepto constitucional sobre inviolabilidad de la correspondencia; de manera que si no se alegara la propiedad de un tercero ó su falta de consentimiento á la entrega de los documentos que el juez le pidiera, ó que siendo del mismo solicitado éste reclamara para ellos el derecho de exigir su inviolabilidad, no habría ante la ley otro caso que sirviera para excusar legalmente su mandato de entrega de documentos de cotejo.

Véase también el artículo 352 y su comentario: tomo I, página 425.

—Los documentos privados de autenticidad discutible, no sirven.

Las firmas de un expediente judicial se conceptúan (presumen) auténticas y pueden servir de base para el cotejo. Cám. Civil, t. 29, p. 108.

ARTÍCULO 606

Los reconocimientos periciales en los casos de falsedad, serán practicados por calígrafos ú otras personas competentes, de acuerdo con lo establecido en este Código.

Concuerda con el artículo 324. Consúltese además el artículo 346, su comentario y jurisprudencia: tomo I, páginas 412 á 414.

—No obstante la prueba pericial, si el acusado explica la forma en que incurrieron los hechos que han inducido al dictamen sobre adulteración de documentos, debe declararse la inexistencia del delito. Cám. Crim., t. 12, p. 111.



—El informe caligráfico terminantemente asertivo corroborado por otras circunstancias de autos, hace prueba de que no existe el delito de falsedad de firmas. Cám. Crim., t. 29, p. 160.

—La prueba pericial producida en el juicio civil para declarar la adulteración de un documento privado, no basta en el juicio criminal para justificar quién ha sido el autor del delito. Cám. Crim., t. 54, p. 148.

ARTÍCULO 607

El instrumento argüido de falso se le presentará al inculpado en el acto de la indagatoria para que declare si lo reconoce y será requerido para que lo rubrique en todas sus páginas. Si no puede ó no quiere rubricarlo, se hará mención de ello en el proceso.

La misma mención se hará en caso de negarse á practicar el reconocimiento.

La presentación al reo del documento argüido de falso y su reconocimiento, se impone desde luego para que él á su vez alegue lo que mejor viere en interés de su defensa.

En cuanto á la negativa á su reconocimiento, sus efectos son los mismos del artículo 239, segunda parte; es decir, que la falta de confesión de su parte de no ser autor de la falsificación, ó simplemente de negarse al reconocimiento, no constituirá una presunción en su contra.

ARTÍCULO 608

Podrá igualmente el procesado ser requerido para que presente un escrito cualquiera de su mano, y también para que forme un cuerpo de escritura bajo el dictado del Juez de instrucción.

En caso de rehusarse á hacerlo, se hará constar por diligencia.



Todos los prácticos en materia de procedimientos criminales y más especialmente la experiencia diaria, enseñan que lo previo al reconocimiento de un documento, debe ser el cuerpo de escritura que formará el reo, pues así se hará más difícil que trate de desfigurar el carácter de su letra.

Es fácil suponer—y es lo que siempre ocurre—que si el reo ha cometido la falsificación que se le imputa, no sólo la niegue, sino que procure variar la fisonomía de su letra en el momento de formar el cuerpo de escritura bajo el dictado del juez; es claro que así el trabajo de cotejo de parte de los peritos ofrecerá mayores dificultades; y como en caligrafía experimental—no en todos los casos, por supuesto—las afirmaciones de aquéllos sólo son de un valor relativo por su mismo carácter experimental, no basado en principios científicos, convendrá, siempre que el juez dificultado como estará, por la misma acción obstructora del reo, para hacerse de *un elemento material* de convicción, cual sería dicho cuerpo de escritura, procure otro *moral* que surgirá de este mismo, y el cual lo constituiría su forma desde el punto de vista gramatical.

En efecto, la ortografía y sus signos, constituyen una idiosincrasia propia en cada sujeto; ciertas palabras, de un modo maquinal, inconsciente, una misma persona siempre las escribe de igual modo, y en tales casos, como es fácil comprender, el indicio de pertenecer ambos documentos á la misma persona, será tanto mayor cuanto más coincidencias de aquella especie aparezcan de la compulsión del documento falso con el cuerpo de escritura redactado por el reo bajo el dictado del juez.

Es indudable que estas consideraciones son las mismas que se tuvieron en cuenta para el precepto que nos ocupa, al establecer, como lo hace, que el procesado forme el cuerpo de escritura bajo el «dictado del juez», es decir, empleando las sílabas, palabras y frases que él juzgue convenientes, no las que al procesado se le ocu-



rieran, y menos, por lo tanto, haciéndolo en forma de copia por la falta de espontaneidad de que entonces adolecería el documento á usarse como base para el cotejo.

Debemos añadir que aun en el caso de que el reo hubiere reconocido la falsedad del documento é inculpádosela á sí mismo, su confesión no tendría más efecto que la de un simple dato indicador; nada probará por sí sola. Ha de regir entonces el principio según el cual la confesión no eximirá al juez de practicar las averiguaciones cual si ella no se hubiese producido, es decir, lo mismo se le exigirá al reo el cuerpo de escritura que se menciona y se hará el cotejo pericial que corresponda. Véase al respecto el artículo 235, su comentario y la opinión de Mittermaier que allí se cita: tomo I, página 253.

ARTÍCULO 609

Cuando los instrumentos públicos sean declarados falsos en todo ó en parte, el Juez que hubiere conocido del delito, ordenará que estos actos sean reconstituídos, suprimidos ó reformados.

ARTÍCULO 610

Si el instrumento ha sido extraído de un archivo, será restituído á él, agregándosele la copia de la sentencia que haya establecido la falsedad total ó parcial.

Si estuviese protocolizado, se anotará la declaración hecha en la misma sentencia, al margen de su matriz en los testimonios que hubiesen presentado, y en el registro respectivo.

Aquella orden y esta declaración sólo podrá conte-



nerla la sentencia definitiva y su ejecución deberá llevarse á cabo una vez que aquélla hubiera pasado en autoridad de cosa juzgada.

ARTÍCULO 611

Si la falsedad ó alteración de los instrumentos no ha sido establecida, el Juez ordenará su restitución.

El querellante y cualquiera que haya tomado parte en el juicio para sostener la acusación en su interés civil será condenado en las costas del juicio, sin perjuicio de la acción del acusado para formar querrela ó acusación calumniosa en los casos que compete.

Es decir, que establecida la existencia de la falsificación, los documentos se conservarán en el proceso como parte integrante de él.

Respecto de la segunda parte, es el mismo principio que rige para los demás delitos cuando la calumnia ha sido el móvil que ha inspirado la acusación. Véase el artículo 177 y su comentario (tomo I, página 167).

ARTICULO 612

Los instrumentos que hayan servido para el cotejo, serán devueltos á quien corresponda dentro de los tres días siguientes á la fecha de la sentencia ejecutoriada.

Sin que medie requerimiento de los interesados, dueños ó depositario de los instrumentos de cotejo de oficio; la disposición es imperativa.

TÍTULO TERCERO

Del procedimiento en el caso de fuga de presos

ARTÍCULO 613

En el caso de evasión de algún procesado ó condenado, los directores del establecimiento en que se hallare detenido ó estuviere cumpliendo su condena, ó cualquier otro encargado de su custodia ó traslación, deberá dar cuenta de la evasión sin demora al Juez de la causa, si ésta se hallare pendiente, ó al Juez de instrucción que corresponda, cuando la misma hubiere terminado.

El Juez de la causa pasará en el primer caso, inmediatamente, todos los antecedentes al Juez de instrucción, para la confirmación del hecho y proceder en forma legal contra los responsables de la fuga.

Obsérvese, desde luego, que el único que debe y puede instruir sumario con motivo de la fuga de reos condenados ó simplemente procesados, es el juez de instrucción, que será requerido:

1.º Por el juez que conozca en la causa, si ésta se hallare pendiente.

2.º Por el director de la cárcel ó encargado de la conducción ó custodia del reo prófugo, tratándose de reos ya condenados.





La instrucción no tendrá otro objeto que el reunir los antecedentes que sirvan para fijar la responsabilidad criminal que pueda existir en terceros por el hecho de la fuga, es decir, de aquellas previstas y penadas en los artículos 255 á 257 del Código Penal, y también á fin de disponer, previo mandamiento de prisión contra el fugado, que éste sea reintegrado á su estado de arresto.

Ahora, en lo que atañe al juez que conociere en la causa pendiente contra el fugado, sus procedimientos deben regirse por lo dispuesto en los artículos 139 y 148 de este Código, pues tratándose de condenados, es decir, de reos libres ya de la acción judicial, por sentencia ejecutoriada, la formalidad de publicación de edictos no reza para con ellos.

—La evasión del procesado exime al tribunal de entender en la apelación interpuesta en la parte de la sentencia que se refiera al prófugo. Cám. Crim., t. 31, p. 356.

ARTÍCULO 614

Si el fugitivo es detenido, será trasladado á la prisión donde se encontraba cuando se verificó su fuga ó á otra que ofreciere mayor seguridad, debiendo ser puesto al mismo tiempo á disposición del Juez competente.

El artículo está bien redactado si se refiere á un fugitivo procesado, pero, para un condenado, se entiende que debería agregarse: *ó á disposición de la autoridad de la cual dependía el reo si se trataba de un condenado*, pues los condenados sólo dependen del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 615

El Juez procederá con toda brevedad á su interroga-



torio, á fin de verificar la identidad de la persona y descubrir los cómplices de su evasión.

Es natural que la comprobación de la identidad del reo deba ser previa á su entrega cuando sea negada por él.

ARTÍCULO 616

Si de la investigación resultare que á la evasión del preso han concurrido otras personas, ó que de cualquier manera han favorecido su fuga, se procederá para la investigación de su culpabilidad y aplicación de la pena en su caso en la forma ordinaria.

Esta disposición está ya comprendida en la del artículo 613 cuando se habla de «proceder en forma legal contra los responsables de la fuga», que sólo podrían revestir el carácter de empleados públicos, pues los simples particulares, exceptuando el único caso del artículo 257 del Código Penal, concordante con el 370 segundo párrafo, de este Código, están libres de responsabilidad criminal cuando de cualquier manera han favorecido la fuga de un procesado ó condenado.

TÍTULO CUARTO

Del modo de proceder en los casos de detención, arresto ó prisión ilegal de personas

ARTÍCULO 617.

Contra toda orden ó procedimiento de un funcionario público tendente á restringir sin derecho la libertad de una persona, procede un recurso de amparo de la libertad para ante el Juez competente.

Procede también el recurso de habeas corpus, cuando una autoridad provincial haya puesto preso á un miembro del Congreso ó cualquier otro individuo que obre en comisión ó como empleado del Gobierno Nacional.

El recurso de amparo de la libertad, que no debe perder su nombre glorioso de *habeas corpus*, que también le da nuestra ley, es la suprema garantía del derecho individual en los países que han sabido dar en las leyes y en las costumbres, tan soberano poder á los jueces. Por el respeto que tienen los funcionarios de un país á este recurso, puede medirse su grado de educación política. Nunca fué más grande Inglaterra que cuando un simple juez de una ciudad marítima intimó al comandante del buque que lle-



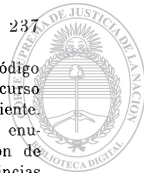


vaba á su bordo á Napoleón á Santa Helena, á que le presentara á éste en virtud de un recurso de *habeas corpus* (presentarás ese cuerpo ó á ese hombre); el comandante zarpó al saber que se había librado la orden que no hubiese tenido más remedio que cumplir, á pesar de que la orden de prisión y destierro del Emperador emanaba del Gobierno mismo!

El *habeas corpus* tiene entre nosotros origen constitucional; lo consagra la Constitución entre las declaraciones, derechos y garantías que enumera; pero eso no quita que—como lo observa el doctor Joaquín V. González en su obra *Manual de la Constitución Argentina*—«la ley pueda completar el pensamiento constituyente incorporando á sus preceptos los progresos necesarios de la jurisprudencia y los adelantos de la ciencia política».

Comentando esto, dice el Dr. Tomás Jofré: «La Constitución norteamericana no contiene ningún precepto que importe una declaración afirmativa del *habeas corpus*; no hay en ella otra enunciación al respecto, que la del artículo 1, sección 9, cláusula 2.ª, según la cual «el privilegio del auto no será suspendido, excepto cuando en los casos de rebelión ó invasión, la seguridad pública lo requiera». Sin embargo, es en aquel país donde este instrumento de la libertad ha alcanzado un perfeccionamiento que no tiene en la misma Inglaterra, la tierra de su origen, como lo hace notar Livingstone en su Memoria del plan de un Código penal para Luisiana, debiéndose los progresos del *habeas corpus*, puramente á la acción legislativa».

Efectivamente la Constitución (artículo 18) sólo prueba las órdenes de detención que se den verbalmente ó que se expidan por autoridad incompetente, y el precepto ha sido ampliado por ley federal la que se ha encargado de definir el recurso, expresando qué debe entenderse por autoridad competente y declarando que el juez puede investigar el origen de la prisión.



Respondiendo al mismo principio, el presente Código hace la declaración general de la procedencia del recurso que se expone en este artículo y se completa en el siguiente. No era necesario, y quizá no hubiese sido posible, enumerar todos los casos en que procede la deducción de *habeas corpus*; aún los mismos Códigos de provincias que algo parecido han hecho, no han citado los casos más que como ejemplificativos. Es el de San Luis, sobre ésto, el más moderno y también el más favorable al derecho individual; los casos de su artículo 466, van realmente, un poco más allá de lo que hasta ahora se había tenido como doctrina del *habeas corpus*: su ilustrado autor, el antes citado doctor Jofré, justifica tal extensión con que: «el expediente de las apelaciones, de las nulidades, de las quejas, dado nuestro sistema procesal, no es un remedio eficaz: media una enorme diferencia entre que se vaya en alivio del detenido por un auto de *habeas corpus* y que la reparación se busque por la vía de los recursos ordinarios del procedimiento».

Loable es la intención que ha movido al jurisconsulto encargado de proyectar el código puntano, pero el *habeas corpus* inglés tiene su mayor eficacia en la limitación de su objeto. No es un *cúralo todo*; los ingleses no conocen esos medicamentos generales á que tan afectos somos los demás (hicieron una revolución y todavía están pidiéndose unos á otros disculpa por haberse salido de sus métodos en apariencia restringidos y suaves). El *habeas corpus* inglés arranca su fuerza de limitarse al amparo de la libertad individual, restringida, como dice nuestro artículo, sin derecho por un funcionario público, que no sea un juez, salvo el de provincias (segunda parte del mismo) ó un Juez de Paz de la Capital (Véase el artículo 518). Hay otros derechos tan respetables como el de la libertad, pero el *habeas corpus* sólo protege á ésta; hay detenciones tan irritantes é injustas como las dictadas por un funcionario



no judicial, pero la ley de amparo sólo prevé éstas últimas (con más las dos expresadas excepciones). Para la protección de las demás garantías individuales que no son la libertad, hay otros remedios en las leyes; para impedir la injusticia de las detenciones judiciales, hay en este mismo Código recursos; apelar para aquello y para esto á un recurso que vale por ser extraordinario, revelará una gran preocupación por la integridad de la personalidad humana, pero es expuesto á que por querer abarcar mucho, el *habeas corpus* apriete poco.

El presente artículo tiende, como se observará con el análisis de sus propios términos, no sólo á amparar el goce de la libertad estando ya suprimida, sino también cuando pudiese serlo. No supone sólo el arresto ya consumado, y presume, asimismo, que él puede llegar á verificarse sin derecho; en él se habla «de orden ó procedimiento *teniente* á restringir sin derecho la libertad», es decir, la admite como un suceso ya verificado ó á realizarse. Cabrá entonces el recurso, no sólo en presencia del arresto, sino ante la amenaza de poderse producir: á los efectos del artículo 18 de la Constitución Nacional, una y otra situación resultan semejantes por identidad de efectos, tanto el perjuicio causado como su inminencia. Es razonable, por tanto, que cualquiera de las dos sea suficiente para mover el mismo natural sentimiento de un pedido de amparo á la libertad requerido ante autoridad competente, en oposición á la orden injusta de otra autoridad que es considerada incompetente. Dejar que el acto de la injusta detención se produzca, para consagrar recién en favor del perjudicado el derecho de interponer su queja, es entender de un modo mezquino lo que en países donde el derecho individual tiene más garantías, se considera como una parte del patrimonio público nacional. Y así como antes dijimos que la medida de la cultura jurídica de un país se encuentra en el respeto



que en él se tiene por las garantías individuales, podemos añadir ahora que también se encuentra en el grado extensivo de la interpretación de los preceptos que las amparan. Desgraciadamente, hay, en contra, jurisprudencia extractada más abajo.

—La ley que acuerda ese derecho (el de *habeas corpus*) y rige su ejercicio, es solamente de procedimiento y responde exclusivamente al objeto de hacer cesar la restricción que indebidamente sufre en su libertad una persona en un momento dado, estando excluidos los hechos pasados aún cuando puedan vervir de fundamento á una acusación si constituye delito, y con mayor razón los hechos futuros, pues no pueden dictarse resoluciones judiciales para el caso que lleguen á producirse ciertos hechos, ó prohibiendo su ejecución, pues esas prohibiciones las hace la ley..... Otra condición requerida para que sea procedente el recurso, es, que los actos en que se funde, los ejecute sin derecho un funcionario público.....» (De un auto del Juez del Crimen doctor E. French). Cám. Crim., t. 59, p. 393.

—La Cámara de Diputados puede ordenar la prisión de un ciudadano por desacato, no procediendo contra ella el recurso de *habeas corpus*. S. C. N., t. 19, p. 231.

—La vigilancia de la policía con objeto de conocer el domicilio de una persona y los cambios que en él pudieran operarse, no autoriza el recurso. S. C. N., t. 53, p. 331.

—No procede cuando la restricción de la libertad es el resultado de un contrato de enganche. Pero sí procede si el resultado fué forzoso, S. C. N., t. 46, p. 83 y t. 55, p. 362.

—No procede el recurso si resulta que la vigilancia ha sido puesta por la policía por negarse el recurrente á declarar en un sumario de prevención. S. C. N., t. 71, p. 365.

—No procede cuando el solicitante no está detenido ni preso. S. C. N., t. 19, p. 190 y t. 77, p. 237, y Cám. Crim., t. 46, p. 34.

—No procede si la persona que ha sido detenida en caso de corrección, lo fué por su padre. La reclamación debe hacerse por intermedio de la justicia civil ordinaria. Cám. Crim., t. 95, p. 143 y t. 96, p. 307.

—No procede en favor de un expulsado en virtud de la Ley de Residencia. Cám. Fed., t. 4, p. 180.

—No procede el recurso contra la vigilancia de la policía en cuanto no ataque la libertad de la persona. Cám. Crim., t. 47, p. 148.



—El hecho de vigilar la policía una casa, no importa una restricción á la libertad de sus habitantes. Cám. Crim., t. 59, p. 393.

—Procede contra la vigilancia de la policía si resulta infundada. Cám. Crim., t. 94, p. 366.

ARTÍCULO 618

A los efectos del artículo precedente, los Jueces Federales, del Crimen de la Capital y los de Territorios Nacionales, conocerán del mencionado recurso en todos los casos, con excepción de los siguientes:

1.º Cuando la orden de detención, arresto ó prisión emanase de un superior en el orden judicial.

2.º Cuando fuese expedida por alguno de los Jueces Correccionales ó del Crimen de la Capital en ejercicio de sus funciones.

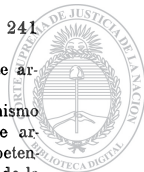
3.º Cuando emane de alguna de las Cámaras del Congreso.

Este artículo establece quien es el juez competente para entender de un pedido de *habeas corpus*.

A.—En la Capital, un Juez Federal ó uno del Crimen (tanto de Instrucción como de Sentencia). No hay nada que impida que la Cámara Federal ó la ordinaria de Apelaciones, conozca de un recurso de *habeas corpus*.

Para la Capital, los tres casos de excepción del presente artículo, son de tenerse en cuenta. En cambio, no regirá en ella la segunda parte del artículo 617.

B.—En las provincias, ya que en ellas este Código sólo rige para la jurisdicción federal, serán los jueces federales los competentes para conocer del recurso (del que nuestro Código legisla; los provinciales conocerán del recurso que sus respectivos Códigos establecen y reglamentan). Los jueces federales, en tales casos, no tendrán para



que preocuparse de la excepción núm. 2 del presente artículo y posiblemente tampoco de la núm. 3.

¿Los jueces de Territorios se encuentran en el mismo caso que los de la Capital? El límite del presente artículo se halla en el 621 donde se prevé la otra competencia, la de la autoridad que dictó la orden de privación de la libertad.

—No corresponde á la Suprema Corte el conocimiento originario del recurso de *habeas corpus*. S. C. N., t. 44, p. 375 y t. 94, p. 291.

—El juez del domicilio del recurrente es competente para conocer del hecho que se reputa atentatorio á la libertad de éste. S. C. N., t. 91, p. 55.

—En un recurso de *habeas corpus* en la Capital, son igualmente competentes los jueces federales de la misma, sin distinción de su jurisdicción respectiva. Cám. Fed., t. 3, p. 339.

—Son competentes los jueces de instrucción para entender en estos recursos: porque son jueces del crimen. Además, las disposiciones que tienen por objeto amparar la libertad de las personas ilegalmente detenidas, deben ser aplicadas extensivamente. Cám. Crim., t. 37, p. 147.

ARTÍCULO 619

En todo caso, el Juez competente para conocer del recurso, solicitará inmediatamente del funcionario autor de la orden de detención, el informe sobre los motivos de que ésta procede, para resolver en su vista.

Es el auto de *habeas corpus*.

Este artículo debería haber venido en el orden del procedimiento, después del 622, pero se ha puesto aquí como definición general de aquello en que consiste la acción del juez, que en forma indirecta y suave, que revela su origen inglés, resulta en el fondo irresistible.

ARTÍCULO 620



El auto de habeas corpus, debe ser obedecido inmediatamente, siempre que de sus términos conste claramente cuál es el funcionario autor de la orden de detención y la persona objeto de dicha orden.

La desobediencia del autor de la orden de detención al auto de habeas corpus, podrá ser castigada, según los casos, con arresto que no pasará de un mes, ó multa que no excederá de doscientos pesos nacionales, aplicable al tesoro de las Escuelas del distrito en que resida el multado.

Se refiere á la desobediencia del auto; el artículo 641 y el 642 tienen otras penas para otros casos de desobediencia.

Tampoco implica la sanción contenida en este precepto dejar relegada la de la ley de fondo que prevé y castiga como delito de abuso de autoridad, el acto de un empleado público reteniendo á un «detenido ó preso cuya soltura ha debido decretar ó ejecutar» (artículo 243 inciso 1.º del Código Penal). Una pena no excluye la otra: la del presente artículo es de carácter disciplinario; la de la ley de fondo es puramente penal, con las demás consecuencias que lleva consigo. Discutido el punto en un caso concreto, el camarista doctor L. López Cabandillas se expresó así: «Si tan celosa y severa se muestra la ley para los simples trámites del recurso de amparo, á la libertad, *no podía quedar indiferente dejando impunes á los funcionarios que frustraren sus efectos..., comete abuso de autoridad, el empleado que debiendo ejecutar una orden de soltura, prolonga arbitrariamente la detención que se le ordenó hacer cesar*» (1).

(1) Fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital: tomo 99, página 69 á 76.



ARTÍCULO 621

No hay derecho para pedir el auto de habeas corpus cuando la privación de la libertad fuese impuesta como pena por autoridad competente.

Hay autoridades, judiciales ó nó, que pueden imponer legalmente como pena la privación de la libertad: las policiales y municipales (Véase el artículo 27); desde luego y dentro de ciertos límites, tienen potestad que alcanza hasta imponer penas de arresto. No procedería nunca en tales casos el recurso de *habeas corpus*.

ARTÍCULO 622

La petición de habeas corpus puede ser deducida por la misma persona detenida ó por otra á su nombre, y expresará substancialmente:

1.º *Que la persona que hace la petición ó en favor de quien se hace, se halla bajo orden de detención ó detenida, presa ó restringida en su libertad; el funcionario, empleado ú oficial público autor de la orden de detención; el individuo que pide ó en cuyo favor se hace la demanda; mencionando los nombres de dichos funcionarios, empleados ú oficial público, si dichos nombres fuesen conocidos.*

2.º *Que la persona detenida no lo esté en virtud de pena impuesta por autoridad competente.*

3.º *La causa ó pretexto de la detención ó prisión, según el mejor conocimiento ó creencia de ella, que tenga la parte demandante.*

4.º *Si la detención ó prisión se hubiere ejecutado en virtud de algún mandamiento ó providencia, deberá agregarse una copia, ó manifestarse por lo menos que la*



copia de la orden, mandamiento ó providencia no se agregará á causa de haber sido removida ú ocultada la persona detenida ó presa, ó porque se ha rehusado á dar la copia, aun cuando se ha hecho la demanda de ella y se han ofrecido al empleado que debiera darla los derechos ú honorarios que le correspondían por expedirla.

5.º La petición debe expresar en qué consiste la ilegalidad.

6.º El que haga la demanda del auto de habeas corpus debe afirmar bajo juramento lo que expresa en ella.

El recurso de *habeas corpus* puede ser planteado de oficio (artículo 623) ó á instancia de parte, como indica el presente artículo.

No es preciso en este último caso poder en forma, ni siquiera consentimiento ó noticia del detenido.

Y si alguna de las circunstancias del artículo no fuera conocida del recurrente, no por ello no se hará lugar al recurso. Bastará que resulte afirmado el hecho principal: el de la detención que se sostenga ser improcedente ó injusta; los demás detalles accesorios, aun siendo suprimidos á sabiendas, por razón de mayor celeridad, no podrían obstar á los trámites del recurso, pues el *habeas corpus* no sólo tiende á proteger derechos particulares, sino que, asimismo, se encamina á velar por los intereses de la sociedad, por constituir también un ataque y una amenaza contra ella, toda privación ilegal de la libertad. El artículo que sigue señala dicho último interés cuando admite hasta de oficio la deducción del recurso.

Consideramos también que aun verbalmente podría hacerse el pedido, labrándose la oportuna acta. (Véanse artículos 640 y 645).



ARTÍCULO 623

Cuando un Tribunal ó Juez de jurisdicción competente tenga conocimiento por prueba satisfactoria, de que alguna persona es mantenida en custodia, detención ó confinamiento por funcionario de su dependencia, ó inferior administrativo, político ó militar, y que es de temerse sea transportada fuera del territorio de su jurisdicción, ó que se le hará sufrir un perjuicio irreparable antes de que pueda ser socorrida por un auto de habeas corpus, pueden expedirlo de oficio, ordenando á quien la detiene ó á cualquier comisario, agente de policía ú otro empleado, que tome la persona detenida ó amenazada y la traiga á su presencia para resolver lo que corresponda según derecho.

Es el caso de oficio.

El Tribunal ó juez del artículo 618, tiene conocimiento por denuncia aún verbal, por petición que no esté de acuerdo con las exigencias del artículo 622, por cualquier medio que en su opinión satisfaga su conciencia, de que una dilación reglamentaria ó formulista podría imposibilitar en adelante la acción judicial, hace entonces lo que el artículo indica.

Claro es, que éste ha tenido que ser limitativo y un tanto estrecho en sus términos y condiciones, porque, lo repetimos, el recurso arranca su eficacia de su propia limitación al caso típico: privación injusta de libertad fundando un pedido sobre el cual pueda un juez proceder. Los casos de oficio, son la excepción y en ellos la ley ha querido ser más rigurosa y precavida.

ARTÍCULO 624

Cuando la prueba mencionada en el artículo precedente sea también suficiente para justificar el arresto



del funcionario mencionado, que ha privado ilegalmente de su libertad á otro, el auto que se expida deberá también contener orden para el arresto de la persona que haya cometido tal delito.

A efecto de ponerlo á disposición del juez competente, que no sería otro que el de instrucción, como autor del delito previsto y castigado en el artículo 243 inciso 1.º del Código Penal.

ARTICULO 625

El empleado ó la persona encargada de la orden mencionada en los tres artículos precedentes, la ejecutará trayendo ante el Tribunal y Juez, la persona detenida, y también la del que la detiene, si así se le ordena en el auto, devolviéndolo en seguida con informe.

El término es apurado: «en seguida» dice el artículo, lo que no admite más dilación que la material precisa para cumplir el auto.

ARTICULO 626

Si el funcionario que detuviere una persona es traído ante el Tribunal ó Juez como sindicado de un delito, será examinado, constituido en prisión, si procede, ó admitido á dar fianza en los casos que la ley lo permita.

La hipótesis del artículo, es que el juez no ha dictado previamente la orden de arresto como en el caso de los dos artículos anteriores, sino que se dicta después á los fines expresados en el comentario al artículo 624.



ARTICULO 627

La orden de habeas corpus se notificará por copia legalizada del original al funcionario á quien se dirige, ó á aquél bajo la guarda ó autoridad de quien se encuentre el individuo en cuyo favor haya sido expedida.

ARTICULO 628

Si el detentador rehusa recibirla, se le informará verbalmente su contenido; si se oculta ó impide la entrada á la persona encargada de la ejecución, la orden será fijada exteriormente en un lugar aparente de su morada ó de aquella en que la persona detenida se encuentre, por ante dos testigos.

Concuerdan con los artículos 128 y 129.

Entendiéndose que siempre hay la habilitación de días y horas aunque el juez expresamente no la decrete, pues para frustrar cualquier atentado contra la libertad, todo momento debe considerarse hábil: ni habría sido necesario que la ley lo expresara.

ARTICULO 629

Si el funcionario ó corporación autor de la orden de detención fuese de aquellos que tienen por razón de su cargo facultad para expedir tales órdenes, el Juez competente para conocer del recurso se limitará á pedir inmediatamente el informe del caso y en su vista procederá á resolver el recurso.

Concuerda con el artículo 618.

No es el caso de procedimiento de oficio, sino que



deducido á petición de parte, aparece, *prima facie*, que no corresponde, por tener el funcionario ó la Cámara de Diputados, por ejemplo, derecho á decretar la detención. Sin embargo, se estudiará la justicia de la orden en cada caso (Ver artículo 634, inciso tercero).

ARTÍCULO 630

En los demás casos el funcionario autor de la detención reclamada devolverá la orden de habeas corpus presentando la persona en ella designada, si se encuentra bajo su guarda y autoridad, y escribiendo al dorso ó agregando por separado un informe en que clara é inequívocamente se exprese:

1.º Si se tiene ó no en custodia, detenido ó restringido bajo su poder, el individuo que se le ordena presentar.

2.º Si tiene á dicho individuo en su poder ó restringido bajo su custodia, cuál es la autoridad con que le impone tal detención, prisión ó restricción y la verdadera causa de ella, explicándola claramente.

3.º Si la parte está detenida en virtud de auto, orden ó mandamiento escrito, debe agregarse original ó en copia al informe.

4.º Si el funcionario á quien se ha dirigido y notificado el auto, ha tenido en su poder ó custodia al individuo requerido en cualquier tiempo y si ha transferido dicha custodia á otro, el informe debe expresar con particularidad á quién, por qué causa, en qué tiempo y por qué autoridad tuvo lugar dicha transferencia.

El auto de *habeas corpus* suele contener el plazo—generalmente de horas—que se concede al funcionario requerido para expedir el informe del presente artículo.



La omisión de todas ó de cualquiera de las circunstancias enumeradas, se considera caso de desobediencia previsto en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 631

Si el funcionario á quien ha sido dirigido y notificado debidamente un auto de habeas corpus, rehusare ó descuidare cumplirlo, presentando la persona nombrada en él, é informando plena y explícitamente al devolverlo, sobre todos los puntos á que tal informe debe contraerse, según lo dispuesto en este título, dentro del tiempo requerido, y no alegase excusa suficiente para dicha desobediencia y descuido, el Tribunal ó Juez á quien debiere devolverse, desde que se justifique que el auto fué dirigido y notificado debidamente, tiene el deber de dar orden dirigida á cualquier comisario ó agente de policía ú oficial de justicia, para que aprehenda inmediatamente al funcionario culpable de la desobediencia ó descuido y sea detenido hasta que devuelva el auto con el informe debido y obedezca las órdenes que se le hayan dado con respecto á la persona para cuyo socorro se expidió el auto.

En caso de depender el funcionario desobediente de una autoridad superior, que no sea directamente responsable de su mala conducta ante los Jueces, se solicitará de ésta el concurso necesario para que la orden mencionada se cumpla, sin perjuicio de la responsabilidad en que el funcionario hubiese incurrido por su desobediencia.

En caso de ineficacia de tal requisición, el Juez procederá como lo prescribe el artículo 634.

Es decir, decretará la libertad inmediata de la persona presa ó detenida.



ARTÍCULO 632

Siempre que por enfermedad ó impedimento de la persona que se ordene presentar, no pueda ser traída sin peligro ante la autoridad competente á quien ha de volverse el auto, el funcionario que la tiene en custodia debe expresarlo así en el informe con que lo devuelva, acompañando certificado médico donde fuera posible; y si se quedare satisfecha de la verdad de tal afirmación y por otra parte el informe fuere suficiente, procederá á resolver el caso sin necesidad de que se halle presente el interesado.

El Tribunal ó Juez podrá además en este caso, si lo cree necesario, transportarse al lugar en que se encuentra el detenido, para adoptar la resolución que corresponda.

En el caso de este artículo la orden de *habeas corpus* ha sido virtualmente cumplida y el juez está habilitado para resolver.

Sólo en el caso de que entienda ser necesario oír al interesado, procederá como indica el inciso segundo, resolviendo luego si continuará el enfermo donde está ó si deberá resolverse su traslación á un hospital ú otro lugar donde dependa directamente de la autoridad judicial.

ARTÍCULO 633

Para la ejecución de la orden de arresto, y para traer á custodiar la persona para cuyo alivio se expidió el auto de habeas corpus, el empleado ó persona que haya sido encargado de tal ejecución puede llamar en su auxilio la fuerza pública del lugar, como en los demás casos semejantes.

Generalmente los jueces federales de las provincias requieren en tales casos fuerzas nacionales (soldados de la Prefectura, tropas de línea, etc.), pero, como jueces de la Constitución, podrían requerir lo mismo á las fuerzas provinciales que no podrían negarse á prestarle auxilio.

ARTÍCULO 634

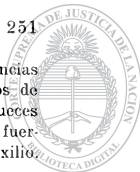
Traída á presencia del Juez la persona detenida y producido el informe del detentador, ó solamente esto, según el caso, el Juez procederá á examinar los hechos contenidos en él y la causa de la detención, prisión ó restricción de la libertad.

Si no se manifestase causa legal para la detención ó restricción de la libertad, ó para la continuación de ella, se decretará la libertad inmediata de la persona presa ó detenida.

En los casos del artículo 629, el Juez requerirá en términos respetuosos al funcionario respectivo para que ponga en libertad en el acto al detenido, y si fuere desobedecido, dará cuenta inmediatamente al Poder Público ante el cual por la Constitución ó por la Ley, dicho funcionario sea justiciable por actos de inconducta ó faltas en el cumplimiento de sus deberes, para que proceda según corresponda.

La orden de libertad que es una de las dos salidas del procedimiento (el artículo siguiente considera la otra), se dictará en auto motivado.

El inciso último se refiere á los casos en que no apareciendo del estudio del asunto que el funcionario ó la corporación hayan dictado legalmente la orden de detención, la de libertad requiere términos de respeto para la autoridad á quien se dirige.





—El juez debe resolver sobre las causas que se invocan para la detención de una persona.

En tanto no exista un pedido de extradición en forma legal, la detención debe anularse. Cám. Crim., t. 17, p. 440.

ARTICULO 635

El preso ó detenido será devuelto á su estado de detención si del examen del caso resultare algunas de las circunstancias siguientes:

1.^a Que se hallaba detenido en virtud de orden, auto ó decreto de autoridad competente.

2.^a Que la detención ó prisión sea el resultado de una sentencia definitiva.

3.^a Que se halle preso ó detenido por desacato contra Tribunal, Juez, autoridad ó corporación con derecho para castigarlo, siempre que dicha facultad resulte de la orden ó mandamiento.

Es el caso segundo con que puede terminar el juicio; la orden de detención aparece haberse dictado legalmente.

Hay que notar que el inciso 2.º no es una excepción del 1.º, es decir, que si la sentencia en que se funda la detención ó prisión no es definitiva, sino que se halla pendiente de algún recurso, no por esto se decretará la libertad, sino que el caso estará comprendido en el inciso 1º.

La terminología del inciso 3.º no es muy precisa, porque el caso que considera no es de delito de desacato, sino la aplicación de las facultades que tienen los jueces para mantener su decoro y el buen orden en los juicios.

ARTICULO 636

Mientras se dicte la resolución, se encomendará el preso á la custodia del empleado del lugar que pueda

tener este encargo y con los cuidados que su edad u otras circunstancias aconsejen.

Es potestativa del juez la resolución de lo que este artículo indica, y en algunos casos puede continuar con la custodia del detenido el mismo funcionario requerido.

ARTÍCULO 637

No se podrá dictar resolución alguna, tratándose de una acción criminal, sin intervención del Ministerio Fiscal.

No se requerirá esta intervención cuando al detenido no se le considere por el funcionario informante, sujeto á procedimiento criminal.

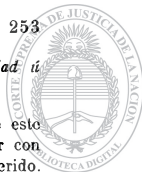
Por tanto, la intervención fiscal sólo procederá (fuera del caso de excesiva timidez de los jueces) después que el funcionario requerido haya producido su informe, del cual resulte ó no que se alega la existencia de una acción criminal.

ARTÍCULO 638

La persona presentada en virtud de un auto de habeas corpus, puede negar los hechos afirmados en el informe, ó alegar otros para probar que su prisión ó detención es ilegal, ó que es acreedora á que se le ponga en libertad.

En este caso, el Juez acordará un término breve para la prueba.

Este artículo determina los casos en que se dará al detenido traslado del informe del funcionario que lo detiene. La prueba será sumaria y contraída únicamente á la de los hechos sobre que se ha producido el informe.





ARTÍCULO 639

La sentencia pronunciada en el recurso de habeas corpus será apelable, y sólo se concederá en el efecto devolutivo cuando sea absolutoria, debiendo interponerse el recurso dentro del perentorio término de veinticuatro horas.

Es decir, que la deducción del recurso no impedirá el cumplimiento inmediato de la libertad de la persona que fué objeto del recurso. (Véase al respecto el artículo 505).

Cabrá también el recurso de nulidad, según los términos del artículo 509.

—En los recursos resueltos por la Suprema Corte como tribunal de apelación, corresponde al Juez de Sección ordenar el cumplimiento de la sentencia y dictar las medidas necesarias para su cumplimiento. S. C. N., t. 54, p. 481.

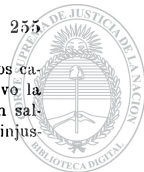
—El jefe de policía local que hizo arrestar á un Senador, no tiene personería para apelar del auto del Juez Federal que manda ponerlo en libertad. S. C. N., t. 59, p. 434.

ARTÍCULO 640

El procedimiento á que dé lugar el recurso de amparo de la libertad será verbal y sumario, y tramitado separadamente de la cuestión de fondo con que pudiere tener relación.

Quiere decir que no se admitirán discusiones ni más alegaciones que las precisas para establecer los únicos puntos planteados por el auto de *habeas corpus*.

Llamándose en este artículo al procedimiento verbal, puede aceptarse la posibilidad de casos en que se deduzca verbalmente el pedido del artículo 622.



En la historia del *habeas corpus* inglés abundan los casos en que todo el procedimiento ha sido verbal, salvo la orden lacónica de: «Traiga al hombre». Y así se han salvado algunas vidas y se han deshecho rápidamente injusticias.

ARTÍCULO 641

Cualquier empleado de los que habla el artículo 623 que tenga detenida una persona y rehuse dar copia á todo el que la pida de la orden, auto, providencia ó disposición origen de la detención referida, aun cuando se le ofrezcan los derechos ú honorarios que por ello le correspondan, incurrirá en una multa de doscientos pesos nacionales á favor de la persona detenida.

ARTÍCULO 642

Es pasible de una multa de quinientos á mil pesos, ó de arresto por cuatro á ocho meses, ó de una y otra, todo el que teniendo en custodia algún individuo que con arreglo á las disposiciones de este Código sea acreedor á un auto de habeas corpus para averiguar la causa de su detención, transfiera el preso á la custodia de otra persona, ó lo ponga bajo el poder ó autoridad de otro, ó lo oculte, ó cambie el lugar de su detención, con el designio ó propósito de eludir la expedición, notificación ó efectos del auto.

La imposición de estas penas se efectuará en auto fundado por el funcionario judicial ó en la sentencia del artículo 639.



—Es pasible de la pena señalada, el jefe de policía local que pendiente el recurso de *habeas corpus* (á favor de un Senador) pasa el proceso al juez del crimen provincial y alega esta razón para no cumplir el auto del Juez Federal. S. C. N., t. 59, p. 434.

ARTÍCULO 643

El cumplimiento de todo auto de habeas corpus debe siempre tener lugar en un término que no pase de veinticuatro horas, si el preso ó detenido no se encuentra á mayor distancia que siete leguas del punto en que se encuentra el Juez ó Tribunal que lo ha expedido.

Si estuviese á mayor distancia se acordará un día más por cada siete leguas que se tuviera que recorrer.

Se refiere tanto á la orden de libertad (artículo 634), como al pedido de informes (artículo 630), si bien en éste el juez puede en casos especiales conceder un plazo mayor.

ARTÍCULO 644

Las costas del recurso, en caso de ser negado, serán á cargo del peticionante, y siendo otorgado, á cargo del funcionario autor de la detención ilegal.

Concuerda con el artículo 144, del cual es una aplicación, considerando al funcionario autor de la detención ilegal como parte vencida.

—No puede condenarse en costas al que impartió la orden de prisión, sin haberlo oído. S. C. N., t. 74, p. 390.



ARTÍCULO 645

La falta de sellos ó reposiciones necesarias, no obstará en caso alguno á la tramitación y resolución del recurso de amparo de la libertad.

Este artículo acentúa el carácter que la ley concede al recurso de *habeas corpus*, de extrema liberalidad y eximiéndolo de formulismos que son ajenos á su esencia.

Por esto es de sentirse que en la práctica se tenga el recurso de amparo por un remedio político, como si la ley lo hubiere sólo creado para impedir que los partidos en sus luchas atropellen el derecho del individuo. En realidad es más amplio y si ha contribuído á la grandeza de Inglaterra, no ha sido sólo por la parte que ha tenido en sus luchas políticas, sino porque la tiranía administrativa, la prepotencia militar, el orgullo del poderoso, han encontrado en el *habeas corpus* el freno más apropiado que poco á poco ha asentado en el alma del ciudadano una conciencia de gran *seguridad social*, por tener siempre un juez que la resguarde y defienda... con la seguridad de ser obedecido.

TÍTULO QUINTO

DEL PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE EXTRADICIÓN DE CRIMINALES



CAPÍTULO I

Del procedimiento para la extradición de criminales con países extranjeros

ARTÍCULO 646

La extradición de delincuentes, sea que se solicite por la República ó que se otorgue por ella á solicitud de otra Nación, sólo procede:

1.º En los casos que determinen los tratados existentes.

2.º A falta de tratados, en los casos en que sea procedente la extradición, según el principio de reciprocidad ó la práctica uniforme de las Naciones.

La extradición tiene por objeto restituir un delincuente al Estado que tiene competencia para juzgarle ó hacerle sufrir la pena que con la fuga hubiere eludido.



Se regula:

1.º Por tratados internacionales; 2.º A falta de ellos, por la legislación especial de cada Estado que establezca los casos en que se atenderá al pedido extranjero de entrega de un refugiado en el territorio de aquél, ó se formulará al estado extranjero el pedido de entrega de un nacional refugiado en su territorio. Para la República Argentina, según nuestro artículo, se atenderá, á falta de tratados, al principio de reciprocidad ó la práctica uniforme de las naciones.

Los tratados que ha celebrado la Nación Argentina, son los siguientes, por orden cronológico:

Con España, firmado el 7 de Marzo de 1881.

Con Italia, firmado el 16 de Junio de 1886.

Con Bélgica, firmado el 12 de Agosto de 1886.

Con Inglaterra, firmado el 22 de Mayo de 1889.

Con Holanda, firmado el 7 de Septiembre de 1893.

Con Chile (protocolo estableciendo la reciprocidad), en 15 de Marzo de 1894.

Con Estados Unidos de América, en 26 de Septiembre de 1896, modificado en 2 de Junio de 1900.

Con Bolivia, Paraguay, Perú y República Oriental del Uruguay, rige el Tratado de Derecho Penal Internacional firmado por sus representantes y los de la Argentina, en el Congreso de Montevideo de 23 de Enero de 1889.

No hay tratado (de las demás naciones relacionadas diplomáticamente con la Argentina): con Alemania, Austria, Brasil, Dinamarca, Francia, Méjico, Portugal, Rusia, Suiza y Suecia.

En resumen, y considerando en conjunto, por orden alfabético, á las naciones con las cuales la República Argentina ha celebrado pactos ó sostiene relaciones diplomáticas, tenemos:

Alemania.—No hay tratado.

Austria.—No hay tratado.

Bélgica.—Tratado de 12 de Agosto de 1886.



Bolivia.—Tratado de D. P. I. de Montevideo.

Brasil.—No hay tratado.

Chile.—Protocolo de reciprocidad de 15 de Marzo 1894.

Dinamarca.—No hay tratado.

España.—Tratado de 7 de Marzo de 1881.

Estados Unidos.—Tratado de 26 de Septiembre 1896.

Francia.—No hay tratado.

Holanda.—Tratado de 7 de Septiembre de 1893.

Inglaterra.—Tratado de 22 de Mayo de 1889.

Italia.—Tratado de 16 de Junio de 1886.

Méjico.—No hay tratado.

Paraguay.—Tratado de D. P. I. de Montevideo.

Perú.—Tratado de D. P. I. de Montevideo.

Portugal.—No hay tratado.

Rusia.—No hay tratado.

Suecia.—No hay tratado.

Suiza.—No hay tratado.

Uruguay.—Tratado de D. P. I. de Montevideo.

* * *

Es esta la oportunidad de indicar en qué casos, según los tratados respectivos, procede la extradición:

En primer lugar, y por lo que se refiere á los países sujetos al Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo, que son la Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, el sistema seguido es el de los artículos 21 y 22 del mismo.

Dice el artículo 21:

«Los hechos que autorizan la entrega del reo son:

1.º Respecto á los presuntos delincuentes, las infracciones que según la Ley Penal de la Nación requiriente, se hallen sujetos á una pena privativa de la libertad que no sea menor de dos años ú otra equivalente.

2.º Respecto de los sentenciados, los que sean castigados con un año de la misma pena como *mínimum*.»



Y el 22:

«No son susceptibles de extradición los reos de los siguientes delitos: El duelo, el adulterio, las injurias y calumnias, los delitos contra los cultos. Los reos de los delitos conexos con cualquiera de los anteriormente enumerados, están sujetos á extradición.»

Los países que han hecho tratados de extradición con la República Argentina son, como hemos visto: Bélgica, España, Estados Unidos, Holanda ó Países Bajos, Inglaterra é Italia. Los delitos que en ellos se comprenden, son los que agrupamos á continuación por orden alfabético de ellos y siguiendo el orden cronológico de los Tratados (1).

ABORTO

España.—Aborto voluntario (art. 2.º, inc. 6.º).

Italia.—No está incluido en el Tratado.

Bélgica.—Aborto voluntario (art. 2.º, inc. 9.º).

Inglaterra.—La administración de drogas ó el empleo de instrumentos con el propósito de procurar el aborto (art. 2.º, inc. 3.º).

Holanda.—Aborto voluntario (art. 2.º, inc. 6.º).

Estados Unidos de N. América.—No se ha previsto.

COHECHO

España.—Concusión cometida por funcionarios públicos (artículos 2.º inc. 18.º).

Italia.—No está incluido en el Tratado.

(1) Los cuales hemos extractado con toda fidelidad de la colección oficial de ellos publicada por el Ministerio de R. Exteriores y Culto el año 1901.



Bélgica.—Concusión cometida por funcionarios públicos ó depositarios, siempre que dé lugar á pena corporal según la legislación de ambos países (art. 2.º, inc. 17.º).

Inglaterra.—Véase lo que exponemos respecto á esta Nación en «Fraudes y Exacciones».

Holanda.—Concusión (art. 2.º, inc. 17.º).

Estados Unidos de N. América.—No aparece incluido.

DETENCION PRIVADA

España.—No está incluida en el Tratado.

Italia.—Ocultación, secuestros, substitución ó reducción de personas libres á la esclavitud (art. 6.º, inc. 5.º).

Bélgica.—Secuestro ilegal de personas (art. 2.º, inc. 26.º).

Inglaterra.—Robo y secuestro de un ser humano (art. 2.º inciso 7.º). Trata de esclavos, de manera tal que constituya una ofensa criminal contra las leyes de ambos Estados (idem, inc. 23.º).

Holanda.—No se ha incluido.

Estados Unidos de N. América.—Secuestro de una persona (artículo 2.º, inc. 9.º). Comercio de esclavos, siempre que este hecho sea declarado criminal por las leyes de ambos países (idem, inciso 12.º).

ENVENENAMIENTO

España.—Envenenamiento y su tentativa (art. 2.º, inc. 5.º).

Italia.—Envenenamiento (art. 6.º, inc. 1.º).

Bélgica.—Envenenamiento (art. 2.º, inc. 5.º).

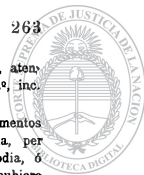
Inglaterra.—Envenenamiento y su tentativa (art. 2.º, inc. 1.º).

Holanda.—Envenenamiento y su tentativa (art. 2.º, inc. 5.º).

Estados Unidos de N. América.—Envenenamiento y su tentativa (art. 2.º, inc. 1.º).

ESTAFAS Y DEFRAUDACIONES

España.—Substracción fraudulenta de los fondos, dinero ó papeles pertenecientes á una compañía ó sociedad industrial ó comercial, ú otra corporación, por persona empleada por élla, siempre que esté legalmente establecida dicha compañía ó corporación, pero sólo



en el caso que estos delitos merecieran pena *corporis afflictiva*, atendida la legislación del país en que se hubiera cometido (art. 2.º, inc. 18.º).

Italia.—Estelionato, substracción de dineros, fondos, documentos ó cualquiera clase de títulos, de propiedad pública ó privada, por parte de personas á quienes hubieren sido confiados en custodia, ó que sean socios ó empleados en el establecimiento en que hubiere sido cometido el delito (art. 6.º, inc. 8.º).

Bélgica.—Estafa (art. 2.º, inc. 21.º). Abuso de confianza y substracción fraudulenta de caudales, bienes, documentos, y de toda clase de títulos de propiedad pública ó privada por las personas á cuya guarda estuviesen confiados, ó que fuesen socios ó empleados en el establecimiento en que el hecho se hubiese cometido (art. 2.º, inc. 22.º).

Inglaterra.—Malversación de valores particulares (art. 2.º, inc. 15.º). Fraude cometido por un depositario, banquero, agente, comisionado, fideicomisario, director, miembro ó empleado público de cualquier compañía, siempre que sea considerado como crimen con pena no menor de un año, por una ley que esté en vigor (el mismo art. inc. 16.º). El obtener dinero, garantías de valor ó mercaderías, con pretextos falsos; recibir dinero, garantías de valor ú otros bienes, sabiendo que han sido robados ó habidos indebidamente y excedido su valor de mil pesos ó doscientas libras esterlinas (*idem*, inc. 17.º).

Holanda.—Estafa. Malversación de caudales, bienes, documentos y todas clases de títulos de propiedad pública ó privada, cometida por las personas á cuya guarda estuviesen confiados; ó substracción fraudulenta de dichos objetos por los que fuesen socios ó empleados en el establecimiento en que el hecho se hubiese cometido (art. 2.º, incs. 24.º y 25.º).

Estados Unidos de N. América.—Véase en «Malversaciones de caudales públicos»; además, el art. 2.º, inc. 7.º del Tratado, dice: Fraude ó abuso de confianza cometido por un depositario, banquero, agente, comisionado, fideicomisario, director, miembro ó empleado público de cualquier compañía, siempre que sea punible por las leyes de ambas Partes Contratantes y que la cantidad de dinero ó el valor de la propiedad falsamente apropiada, no sea menor de doscientos dollars.

EXTORSION

España.—No está incluido en el Tratado.

Italia.—Extorsión (art. 6.º, inc. 6.º).



Bélgica.—No se halla incluido en el Tratado.

Inglaterra.—Amenazas, ya sea por medio de cartas ó de otra manera, con la intención de sacar dinero ú otros objetos de valor (art. 2.º, inc. 12.º).

Holanda.—Ha sido omitido.

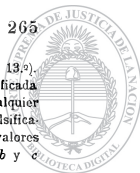
Estados Unidos de N. América.—No se ha incluido.

FALSEDADES EN GENERAL.

España.—Falsificación, alteración, introducción y emisión fraudulentas de moneda y papeles de crédito con curso legal; fabricación, importación, venta y uso de instrumentos destinados á hacer moneda falsa, pólizas ó cualesquiera títulos de la deuda pública; billetes de banco ó cualesquiera papeles de los que circulan como si fuese moneda; falsificación de sellos de correo, estampillas, timbres, cuños y cualesquiera otros sellos del Estado que pide la extradición; uso, importación y venta de estos objetos (art. 2.º, inc. 16.º). Falsificación de escrituras públicas, letras de cambio, y otros títulos de comercio, y el uso de estos papeles certificados (mismo art., inc. 17.º). Falso testimonio en materia civil ó criminal (el mismo, inc. 19.º).

Italia.—Falsificación, emisión, alteración de monedas y papeles de crédito con curso legal en los respectivos países, ó su importación ó introducción. Fabricación, importación, venta y uso de instrumentos destinados á hacer dinero falso, pólizas ó cualesquiera otros títulos de la deuda pública, billetes de banco ó cualesquiera papeles de los que circulan como si fuesen moneda; falsificaciones de diplomas ó documentos oficiales, sellos, estampillas de correos, timbres, punzones ó cualesquier otro sello del Estado; uso, importación y venta de estos objetos falsificados; falsificación de escrituras públicas ó particulares, letras de cambio, y otros títulos de comercio y uso de estos papeles falsificados (art. 6.º, inc. 9.º). Falso testimonio ó perjurio en materia criminal (mismo art., inc. 11.º).

Bélgica.—Falsificación y alteración de monedas y papeles de crédito de curso legal. Emisión ó circulación ó alteración de sellos de correo, estampillas, cuños, ó sellos del Estado y de las oficinas públicas. Uso de documentos ó instrumentos falsificados á dichos objetos (art. 2.º, inc. 15.º). Falsificación de escritura pública ó privada, de las letras de cambio y otros títulos de comercio y uso de estos documentos falsificados (idem, inc. 16.º). Falso testimonio, soborno de testigos ó juramento falso en materia civil ó criminal (idem, inc. 23.º).



Inglaterra.—Perjurio ó tentativas de conseguirlo (art. 2.º, inc. 13.º). Falsificación ó alteración de moneda, circulación de moneda falsificada ó alterada. Fabricación á sabiendas y sin autorización legal, de cualquier instrumento, herramienta ó aparato adaptado y destinado á la falsificación de la moneda nacional. Falsificación ó alteración de firmas ó valores ó circulación de lo falsificado ó alterado (art. 2.º, letras a, b y c del inc. 18.º).

Holanda.—Falsificación ó alteración de monedas ó de papel moneda, intentada con el designio de emitir ó de hacer emitir esas monedas ó ese papel moneda como no falsificados y alterados, emisión ó circulación de monedas ó de papel moneda falsificados ó alterados; falsificación ó alteración de timbres y cuños del Estado, en cuanto las leyes de los dos países permitan la extradición con tal motivo. Falsificación de escritura pública ó privada, en las letras de cambio, los papeles de crédito con curso legal, ú otros títulos de comercio y uso á designio de estos documentos falsificados, en cuanto las leyes de los dos países permitan la extradición con tal motivo. Falso testimonio, soborno de testigos ó juramento falso en materia civil ó criminal (art. 2.º, incs. 13.º, 14.º y 15.º).

Estados Unidos de N. América.—Falsificación de papeles, ó circulación de papeles falsos, falsificación de actos oficiales de Gobierno, de las autoridades públicas ó de tribunales de justicia, ó circulación de lo falsificado (art. 2.º, inc. 4.º). Adulteración ó falsificación de moneda, ya sea metálica ó de papel, ó de títulos de alguna deuda nacional, de Estado ó provincia ó municipal, ó de cupones de élla, ó de billetes de Banco, ó la emisión ó circulación de éstos, imitación, falsificación ó alteración de sellos de Estado (art. citado, inc. 5.º). Perjurio ó soborno para conseguirlo (idem inc. 8.º).

FRAUDES Y EXACCIONES

España.—No están incluidos en el Tratado.

Italia.—Tampoco lo están.

Bélgica.—Corrupción de funcionarios públicos (art. 2.º, inc. 25.º).

Inglaterra.—Están incluidos, pues el art. 2.º, inc. 23.º del Tratado, establece «que puede también concederse la extradición, según lo juzgue conveniente el Estado á quien se hiciese el pedido, *con motivo de cualquier otro crimen*, que según las leyes que estén vigentes á la sazón, dé lugar á élla.»

Holanda.—Corrupción de funcionarios públicos, en cuanto las leyes de los dos países permitan la extradición con tal motivo (art. 2.º, inc. 16.º).

Estados Unidos de N. América.—No han sido incluidos.



HOMICIDIO

España.—Asesinato; homicidio (salvo en legítima defensa ó por imprudencia); parricidio, y tentativas de los mismos delitos. (artículo 2.º, incs. 1.º, 2.º y 3.º).

Italia.—Homicidio voluntario, asesinato, parricidio (art. 6.º, inc. 1.º).

Bélgica.—Asesinato. Homicidio, á no ser que se hubiese cometido en legítima defensa, ó por imprudencia. Parricidio (art. 2.º, inciso 1.º al 3.º).

Inglaterra.—Asesinato (incluso el asesinato con violencia, parricidio), ó la tentativa ó conspiración para asesinar (art. 2.º, inc. 1.º). Homicidio (idem, inc. 2.º).

Holanda.—Homicidio, á no ser que se hubiese cometido en legítima defensa ó por imprudencia; asesinato; parricidio (artículo 2.º, incisos 1.º, 2.º y 3.º).

Estados Unidos de N. América.—Homicidio (comprendido el asesinato, el parricidio, envenenamiento, infanticidio, homicidio voluntario), ó la tentativa de cometer cualquiera de estos crímenes (artículo 2.º, inc. 1.º).

INCENDIOS, OTROS ESTRAGOS, Y DAÑOS

España.—Incendio voluntario; daños voluntarios á ferrocarriles y telégrafos, de los que resultan trabas á su marcha regular ó peligros para la vida de los pasajeros; asociación de malhechores. (artículo 2.º, incs. 11.º, 13.º y 14.º).

Italia.—Incendio voluntario, daños en los caminos de hierro, de que resulte ó pueda resultar peligro de la vida (art. 6.º, inciso 7.º).

Bélgica.—Incendio voluntario. Daños ocasionados voluntariamente á los aparatos telegráficos. Trabas á la circulación de los ferrocarriles con peligro para la vida de los viajeros (art. 2.º, incs. 10.º y 11.º).

Inglaterra.—Incendio voluntario (art. 2.º, inc. 14.º). Cualquier acto hecho con intención criminal y que tenga por objeto poner en peligro la seguridad de una persona que se encuentre viajando en un ferrocarril ó que se halle en él (mismo art., inc. 20.º). Daño hecho con intención criminal á la propiedad, siempre que la ofensa sea procesable (idem, inc. 21.º).



Holanda.—Incendio voluntario, cuando de él puede resultar un peligro común para bienes, ó un peligro de muerte para otro; incendio hecho con el designio de procurarse á sí mismo ó á tercero un provecho ilegal con perjuicio del asegurador ó del portador legal de un contrato á la gruesa (art. 2.º, inc. 18.º) Trabas voluntarias á la circulación de los ferrocarriles, de las que haya resultado el poner en peligro la vida de los pasajeros (art. citado, inciso 19.º). Actos de violencia cometidos en público, por agrupaciones de gente contra propiedades (idem, inc. 20.º).

Estados Unidos de N. América.—Incendio (art. 2.º, inc. 2.º). Cualquier acto hecho con intención criminal y que tenga por objeto poner en peligro la seguridad de una persona que viaje en un ferrocarril ó que se encuentre sobre una línea férrea (dicho art., inc. 10.º).

INFANTICIDIO

España.—Infanticidio y su tentativa (art. 2.º, inc. 4.º).

Italia.—Infanticidio (art. 6.º, inc. 1.º).

Bélgica.—Infanticidio (art. 2.º, inc. 4.º).

Inglaterra.—Infanticidio y tentativa del mismo (art. 2.º, inc. 1.º).

Holanda.—Homicidio ó asesinato cometido en un niño (artículo 2.º, inc. 4.º).

Estados Unidos de N. América.—Infanticidio (art. 2.º, inc. 1.º).

LESIONES CORPORALES

España.—Lesiones causadas voluntariamente en las que hubiese ó de las que resultare inhabilitación de servicio, deformidad, mutilación ó destrucción de algún miembro ú órgano, ó la muerte sin intención de darla (art. 2.º, inc. 12.º).

Italia.—Heridas voluntarias de las que resultare la muerte sin intención de darla, deformidades graves, privaciones, mutilaciones, inhabilitaciones, lesiones profundas en algún miembro ú órgano del cuerpo (art. 6.º, inc. 2.º).

Bélgica.—Lesiones voluntarias que causen la muerte sin intención de darla, ó de las que resulte mutilación grave y permanente de algún miembro ú órgano del cuerpo (art. 2.º, inc. 27.º).

Inglaterra.—Lesiones ó daño corporal grave hecho intencionalmente. Ataque á las personas del que resulte grave daño corporal (art. 2.º, incisos 10.º y 11.º).



Holanda.—Heridas voluntarias, que hayan causado la muerte sin intención de darla, ó la mutilación grave ó permanente de algún miembro ú órgano del cuerpo (art. 2.º, inc. 7.º).

Estados Unidos de N. América.—No están incluidos en el Tratado.

MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS

España.—Peculado ó malversación de caudales públicos (art. 2.º, inc. 18.º).

Italia.—Peculado ó malversación de caudales públicos (art. 6.º, inc. 8.º).

Bélgica.—Peculado ó malversación de caudales públicos (art. 2.º, inc. 17.º). Encubrimiento (idem, inc. 28.º).

Inglaterra.—Malversación de valores públicos (art. 2.º, inc. 15.º).

Holanda.—Peculado ó malversación de caudales públicos, concusión, cometidos por funcionarios ó depositarios públicos (art. 2.º, inc. 17.º).

Estados Unidos de N. América.—Peculado de caudales públicos cometido dentro de la jurisdicción de cualquiera de las Altas Partes Contratantes, por funcionarios públicos ó depositarios, malversación cometida por una ó más personas, jornaleras ó asalariadas, en perjuicio de sus patrones ó principales, cuando en cualquiera de estos casos la malversación exceda de doscientos dollars (art. 2.º, inc. 6.º).

MATRIMONIOS ILEGALES

España.—No está incluido en el Tratado.

Italia.—Poligamia y matrimonio simulado (art. 6.º, inc. 4.º).

Bélgica.—Bigamia (art. 2.º, inc. 6.º).

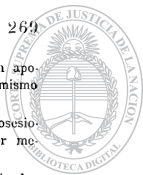
Inglaterra.—Bigamia (art. 2.º, inc. 9.º).

Holanda.—Bigamia (art. 2.º, inc. 10.º).

Estados Unidos de N. América.—No ha sido incluido.

PIRATERIA Y OTROS DELITOS EN ALTA MAR

España.—Baratería, siempre que los hechos que la constituyen y la legislación del país á que perteneciera la nave, haga responsable á sus autores de pena *corporis afflictiva* (art. 2.º, inc. 21.º). Insurrección del equipaje ó tripulación de un buque cuando los in-



dividuos que componen dicha tripulación ó equipaje, se hubiesen apoderado de la embarcación, ó la hubiesen entregado á piratas (mismo art., inc. 22.º).

Italia.—Baratería y piratería, comprendido el hecho de poseerse alguno del buque de cuya tripulación hiciese parte, por medio de fraude ó violencia (art. 6.º, inc. 12.º).

Bélgica.—Baratería y piratería, en los casos que sean castigados con pena corporal, según la legislación de ambos países (art. 2.º, inc. 19.º). Insurrección del equipaje ó pasajeros, cuando sus autores se apoderen del buque por fraude ó violencia, ó lo entreguen á piratas (idem, inc. 20.º).

Inglaterra.—Piratería, y otros crímenes ó delitos cometidos en el mar sobre las personas ó cosas, y que, según las leyes respectivas de los dos Altas Partes Contratantes, sean delitos de extradición y tengan más de un año de pena (art. 2.º, inc. 22.º).

Holanda.—El hecho ilegal, cometido á designio, de echar á pique un buque, ó de hacer varar, de destruir, de imposibilitar para el servicio, ó de deteriorar un buque, cuando de ello pueda resultar peligro para otro. Insurrección é insubordinación del equipaje ó pasajeros á bordo de un buque (art. 2.º, incs. 22.º y 23.º).

Estados Unidos de N. América.—a) Piratería, según las leyes de las naciones. b) Insurrección ó conspiración de dos ó más personas que se hallen á bordo de un buque en alta mar, para sublevarse contra las autoridades del mismo. c) Echar ilegalmente á pique ó destruir un buque en alta mar ó sus tentativas. d) Ataque contra las personas á bordo de un buque en alta mar, con la intención de inferir lesiones ó daño corporal grave (art. 2.º, inc. 11.º).

QUEBRADOS Y DEUDORES PUNIBLES

España.—Quiebra fraudulenta (art. 2.º, inc. 20.º).

Italia.—Quiebra fraudulenta (art. 6.º, inc. 10.º).

Bélgica.—Quiebra fraudulenta (art. 2.º, inc. 18.º). Encubrimiento de objetos de aquel delito (idem, inc. 28.º).

Inglaterra.—Crímenes contra las leyes de bancarrota (art. 2.º, inc. 19.º).

Holanda.—Quiebra fraudulenta (art. 2.º, inc. 26.º).

Estados Unidos de N. América.—Véase «*Estafas y Defraudaciones*».



RAPTO

España.—Rapto (art. 2.º, inc. 8.º).

Italia.—Rapto (art. 6.º, inc. 3.º).

Bélgica.—Rapto ó substracción de menores (art. 2.º, inc. 7.º).

Inglaterra.—Rapto (art. 2.º, inc. 8.º).

Holanda.—No se halla incluido.

Estados Unidos de N. América.—Rapto (art. 2.º, inc. 9.º).

ROBOS Y HURTOS

España.—Robo y particularmente con violencia á las personas ó á las cosas. (art. 2.º, inc. 15.º).

Italia.—Hurto calificado, robo, asociación de malhechores (art. 6.º, inc. 6.º).

Bélgica.—Asociación de malhechores (art. 2.º, inc. 12.º). Robo con circunstancias agravantes, y particularmente el cometido con violencia á las personas y á las propiedades (el mismo art., inc. 13.º). Robo con efracción en los caminos públicos (idem, inc. 14.º). Encubrimiento de objetos (idem, inc. 28.º).

Inglaterra.—Robo, ú otros crímenes ó sus tentativas cometidos con fractura, robo con violencia, hurto (art. 2.º, inc. 15.º). Encubrimiento de robo (el mismo art., inc. 17.º).

Holanda.—Robo cometido con violencia á las personas ó á las propiedades. (art. 2.º, inc. 21.º).

Estados Unidos de N. América.—Robo, violación de casas ó negocios, con fractura, robo con violencia ó intimidación, hurto, por un valor de doscientos dollars ó más (art. 2.º, inc. 3.º).

SUBSTRACCION DE MENORES

España.—Ocultación y substracción de menores (art. 2.º, inc. 10.º).

Italia.—Ocultación y secuestro de personas (art. 6.º, inc. 5.º).

Bélgica.—Substracción de menores (art. 2.º, inc. 7.º). Substracción, encubrimiento, supresión ó sustitución de niños (mismo art., inc. 9.º).

Inglaterra.—Substracción de niños (art. 2.º, inc. 7.º).

Holanda.—Substracción, encubrimiento, supresión ó sustitución de niños (art. 2.º, incs. 11.º y 12.º).

Estados Unidos de N. América.—Substracción de niños (art. 2.º, inc. 9.º).



USURPACION DE BIENES RAICES

España.—No está incluido en el Tratado.

Italia.—No está incluido en el Tratado.

Bélgica.—Tampoco lo está.

Inglaterra.—Véase lo que exponemos respecto de esta nación en «Fraudes y Exacciones».

Holanda.—No ha sido previsto.

Estados Unidos de N. América.—No ha sido incluido.

USURPACION DE ESTADO CIVIL

España.—No está incluido en el Tratado.

Italia.—Usurpación de estado civil (art. 6.º inc. 4.º).

Bélgica.—Sustitución de niños (art. 2.º, inc. 9.º).

Inglaterra.—Véase lo que exponemos respecto de esta Nación en «Fraudes y Exacciones».

Holanda.—Sustitución de niños (art. 2.º, inc. 11.º).

Estados Unidos de N. América.—No se halla incluido.

VIOLACION, ESTUPRO Y OTROS ATENTADOS AL PUDOR

España.—Violación, atentado con violencia contra el pudor (art. 2.º, incs. 6.º y 9.º).

Italia.—Estupro, y otros atentados contra el pudor, siempre que haya violencia (art. 6.º, inc. 3.º).

Bélgica.—Violación y otros atentados al pudor cometidos con violencia (art. 2.º, inc. 8.º). Atentado sin violencia contra el pudor cometido en niños de uno y otro sexo menores de catorce años (dicho art., inc. 24.º).

Inglaterra.—Estupro (art. 2.º, inc. 4.º). Conocimiento carnal ó la tentativa de tenerlo con una niña menor de diez y seis años, siempre que el testimonio aducido justifique el enjuiciamiento por esos crímenes, según las leyes de las dos Altas Partes Contratantes (mismo art., inc. 5.º). Atentado contra el pudor (idem, inc. 6.º).

Holanda.—Violación y demás atentados al pudor, cometidos con violencia; atentado, con ó sin violencia, contra el pudor, cometido en niños de uno ú otro sexo, menores de catorce años (art. 2.º, incs. 8.º y 9.º).

Estados Unidos de N. América.—Estupro (art. 2.º, inc. 9.º).



Habiéndonos propuesto no incluir en esta obra nada que sirviera para darle mayor extensión, concretándola sólo á lo útil, omitimos agregar al precedente trabajo, en detalle, cuáles son las reglas y régimen que deben seguirse en el cumplimiento de los Tratados que se dejan resumidos, porque, en general, no son otros que los que el Código señala en los artículos siguientes.

—Sin ley especial del Congreso ó Tratado, no puede entregarse á ningún asilado. S. C. N., t. 28, p. 31.

—Procede por quiebra fraudulenta y uso fraudulento de firmas, aunque no exista tratado. S. C. N., t. 45, p. 318 y t. 46, p. 228.

—Procede por el delito de homicidio premeditado. S. C. N., t. 48, p. 65.

—Procede por delito de falsificación de letras de cambio; pero á condición de imponerse la pena argentina, si fuere menor. S. C. N., t. 70, p. 442.

—Procede cuando se ha ofrecido reciprocidad. S. C. N., t. 76, p. 447.

—Siendo de un condenado en rebeldía, debe acordarse la extradición, no en calidad de condenado sino como imputado, para que ante los jueces del país requirente, pueda hacer valer las excepciones y defensas con que cuente. S. C. N., t. 90, p. 409.

—Las prescripciones del Cód. de Proc. sólo son aplicables cuando no hay tratado. S. C. N., t. 91, p. 49.

—Con arreglo al C. P. I. de Montevideo (de aplicación preferente á este Código), la nacionalidad del reo no impide su extradición. S. C. N., t. 97, p. 343.

—El adulterio no está comprendido en el Tratado con la R. O. del Uruguay. Cám. Crim., t. 11, p. 215.

—Un picapedrero no es comerciante y no se le puede aplicar la extradición (por reciprocidad) como fallido fraudulento. Juez Federal Dr. Astigueta, 1904.

ARTICULO 647

Sólo el Juez que conozca de la causa en que estuviere procesado el reo ausente en territorio extranjero,



será competente para conocer del incidente sobre extradición.

En caso de ser ésta solicitada por un gobierno extranjero, el Juez competente será el del domicilio de la persona reclamada.

ARTÍCULO 648

Habiendo tratados, la extradición será pedida ú otorgada en la forma y con los requisitos que aquéllos prescriban.

A falta de tratados, la extradición será pedida ú otorgada por la vía diplomática, con arreglo al procedimiento y condiciones que se establecen en este Código.

El primero de estos dos artículos define la competencia, que en el caso de extradición solicitada por la República Argentina, es del juez que conoce de la causa y no de ningún tribunal inferior ó ajeno á ella, y en el caso de ser solicitada por un país extranjero, deberá ser el del domicilio de la persona reclamada, es decir, el que ella tenga en esta República. En este caso el juez es el federal con arreglo al artículo 2 de la ley de 14 de Septiembre de 1863 y el 111 número 1 de la Ley de Organización de los Tribunales de la Capital.

El segundo artículo establece el principio general de la vía diplomática, pues él domina en los tratados, como en los siguientes artículos. Con arreglo al mismo, es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que debe dar curso á los pedidos de extradición formulados por los jueces de aquí y transmitidos por aquél á los respectivos representantes en el exterior, como es el mismo el que recibe y cursa los pedidos de los representantes diplomáticos extranjeros acreditados en Buenos Aires y los transmite al juez federal del domicilio del reclamado.



—Un cónsul extranjero debidamente autorizado por el ministro plenipotenciario de la nación á quien sirve, puede pedir legítimamente la extradición. S. C. N., t. 2, p. 21.

—La jurisdicción federal es privativa y excluyente de los jueces de Provincia. S. C. N., t. 20, p. 258 y t. 61, p. 351.

—La opinión emitida por el Juez Federal sobre la insuficiencia de los nuevos documentos, le inhibe para conocer en la reapertura de la instancia. S. C. N., t. 42, p. 409.

—Entenderá en las causas el Juez Federal á quien se le defirió primero su conocimiento. S. C. N., t. 59, p. 368.

—Si se declara que el juez requirente no tuvo jurisdicción para conocer en la causa que motiva el pedido, no procede la extradición. S. C. N., t. 88, p. 92.

ARTICULO 649

El Juez que conociere de la causa, acordará de oficio ó á instancia de parte, en resolución legalmente fundada, pedir la extradición, desde el momento en que por el estado del proceso y por su resultado fuese procedente.

Este artículo y el siguiente prescinden del caso de extradición pedida por países extranjeros, para comprender sólo el de la que debe pedirse al país extranjero donde se haya refugiado el delincuente.

Establece la materia de lo que se llama *auto de extradición* que:

1.º Debe pedirlo el fiscal ó el querellante ó dictarlo de oficio el juez;

2.º Debe fundarse legalmente, como se funda un auto de prisión preventiva, que es su equivalente; y

3.º En el momento del proceso que lo haga necesario. No es esto más que una ampliación de los artículos 366, 367, 373, etc., de este mismo Código.

—Los gastos de captura y extradición deben ser abonados por el reo si existen fondos secuestrados. Cám. Crim., t. 98, p. 41.



ARTÍCULO 650

Contra el auto acordando ó denegando la extradición, podrá interponerse el recurso de apelación, si lo hubiese dictado un Juez de 1.ª instancia.

El recurso será en un solo efecto, el devolutivo (véase el artículo 505).

El artículo prevé también el caso de que la extradición hubiese sido acordada ó denegada por un tribunal superior (que conociera en grado de apelación ú originariamente del delito). Es evidente que contra su resolución no cabe recurso.

ARTÍCULO 651

Con la nota ó comunicación en que se solicite la extradición, ya por las autoridades del país ó por las extranjeras, habrá de remitirse un testimonio literal del auto que decreta esta diligencia y además los siguientes documentos:

1.º La sentencia de condenación según la forma prescripta por la legislación respectiva, si se tratase de un condenado, ó el mandato de prisión expedido por Tribunales competentes con la designación exacta y la fecha del crimen ó delito que la motivara, si se tratase de un procesado ó presunto delincuente. Estos documentos se enviarán originales ó en copia auténtica.

2.º Todos los datos y antecedentes necesarios para justificar la identidad de la persona requerida.

3.º La copia autenticada de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado, según la legislación respectiva.



Este artículo establece la materia de los recaudos, en que debe haber prolijidad extrema.

En los casos en que haya tratados, se estará principalmente á lo que éstos dispongan, desde que los jueces tienen que aplicar en primer lugar la Constitución Nacional y los tratados, que son también la ley suprema.

—Sólo procede pedir la extradición cuando esté justificado el cuerpo del delito. Cám. Crim., t. 19, p. 179.

—No es necesario el despacho rogatorio de los tribunales requirientes. Basta el testimonio de la resolución ordenando la extradición. S. C. N., t. t. 45, p. 318.

—El auto que no hace lugar á la extradición por insuficiencia de los recaudos, no hace cosa juzgada; no impide que presentándose éstos, vuelva á tramitarse el juicio. S. C. N., t. 91, p. 140.

--En la extradición pedida por Italia, por el delito de quiebra fraudulenta, no es necesaria la copia de la sentencia comercial sobre calificación de la quiebra. Cám. Fed. de La Plata, t. 3., p. 303.

ARTÍCULO 652

Cuando el pedido de extradición no se hallase autorizado por tratados, el Poder Ejecutivo Nacional con vista del Procurador General, resolverá lo que corresponda.

Si la resolución fuese negativa, devolverá la requisición al Gobierno ó Juez de que proceda, con copia del dictamen del Procurador General, y resolución dictada.

En caso de creerse procedente la solicitud, se dirigirá inmediatamente al Juez de la sección donde se encuentre el refugiado, con todos los antecedentes, dando aviso al Gobierno extranjero interesado. Cuando la extradición fuese pedida por los Jueces de la República, el Poder Ejecutivo Nacional dirigirá la nota que corresponde al Gobierno de la Nación donde se encuentre refugiado el delincuente y lo avisará al Juez requirente.



Este artículo es una ampliación del inciso 2.º del 646 y comprende tanto el caso de extradición pedida del extranjero, como de extradición á pedir al extranjero.

Por él se confiere al Poder Ejecutivo la primacía en la extradición, que sólo se plantea á los tribunales como simple caso judicial (ó se acepta la solución de ellas para pedirla), por ser aquel Poder, según la Constitución Nacional, el único que representa á la Nación en sus relaciones con el exterior.

ARTÍCULO 653

Pasada la solicitud de extradición al Juez que debe conocer de ella en la República, procederá á ordenar la detención del refugiado y á tomarle declaración dentro del término de cuarenta y ocho horas, con el fin de comprobar la identidad de la persona, poniéndola inmediatamente en libertad si resultase haberse procedido contra ella por error.

El juez federal á quien el Gobierno Nacional ha pasado el pedido del ministro extranjero (y de no tener la Nación requirente acreditado ministro, directamente, por una potencia amiga ó por cualquiera de los recursos del derecho internacional), no debe tomar indagatoria, sino establecer por la declaración—y otros medios que crea necesarios—la identidad de la persona reclamada. No se refiere á otra cosa el término *declaración* empleado en el artículo.

ARTÍCULO 654

Si la identidad de la persona apareciere justificada por semiplena prueba, á lo menos, se intimará al arres-



tado que nombre un defensor letrado en el término de tres días, debiendo el Juez nombrarlo de oficio si aquél dejase transcurrir ese término.

Este artículo en su primera parte demuestra que no basta la declaración del detenido para establecer su identidad, sino que ésta puede ser comprobada por los medios generales especificados en las leyes, y singularmente en este Código, para constituir, por lo menos, la semiplena prueba.

El nombramiento de oficio debe recaer, en la generalidad de los casos, en el defensor de pobres del juzgado.

ARTÍCULO 655

En la discusión de un pedido de extradición, no será permitido poner en cuestión la validez intrínseca de los documentos producidos por el Gobierno requirente, debiendo el juicio limitarse á los siguientes puntos:

1.º Identidad de la persona.

2.º Examen de las formas extrínsecas de los documentos presentados.

3.º Si el crimen ó delito se encuentra comprendido en alguno de los casos mencionados en el art. 646.

4.º Si la pena aplicada pertenece á la categoría de pena que por las leyes del país requirente corresponda al crimen ó delito en cuestión.

5.º Si la acción penal ó la pena respectiva están prescritas, según las leyes de la nación requirente.

6.º Si la sentencia ó el auto de prisión, en su caso, han sido expedidos por los Tribunales competentes del país requirente.

La discusión á que este artículo se refiere es con el fiscal (véase el siguiente), y no la puede plantear el defen-



sor fuera de los puntos que aquí se establecen, de los cuales son meramente de forma el 2.º y el 6.º; el 1.º se contraerá á discutir la insuficiencia—con arreglo al artículo anterior—de la prueba de la identidad; el 3.º, habiendo Tratado, al examen del inciso correspondiente, y no habiéndolo, á la existencia de reciprocidad ó de uso internacional; el 4.º permite una comprobación sumaria de la justicia—exterior ó formal—de la sentencia; y el 5.º comprende el caso de la prescripción, para fijar la cual no es la ley argentina la que rige, sino la del Estado que pide la extradición. Hay que advertir respecto á este último punto: que según el artículo 9.º del Tratado con España (que tiene, por ser Tratado, preferencia sobre nuestro Código), es la ley argentina la que debe ser tomada en cuenta para fijar el alcance de la prescripción; que según el 5.º del Tratado con la Gran Bretaña, se atenderá á cualquiera de las dos legislaciones, la argentina ó la inglesa (es decir, la que favorezca en el caso al reo); que en el artículo 8.º del Tratado con Italia, se señala para el término de la prescripción la ley penal del Estado requirente; que el artículo 3.º del Tratado con Bélgica, señala como ley á seguirse la del Estado requirente ó la del Estado requerido; que el 7.º del Tratado con los Estados Unidos, atiende á la prescripción marcada en las leyes del Estado requerido; que el 3.º del Tratado con Holanda, señala indistintamente las de los dos países; y que el artículo 19 del C. P. I. de Montevideo (para la Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y R. O. del Uruguay), sólo permite la extradición cuando el delito no esté prescripto con arreglo á la ley del país reclamante.

—La excepción de haber estado el procesado en la República, cuando se cometió el delito, hace al fondo de la causa y no puede discutirse en el proceso de extradición. S. C. N., t. 49, p. 22.

—No puede ponerse en cuestión el delito mismo, su extensión y las probabilidades ó justificación de su existencia. S. C. N., t. 61, p. 129.



—El condenado en rebeldía debe ser considerado como un procesado y la prescripción se interrumpe por la diligencia del gobierno que solicita la extradición. Cám. Fed. Cap., 1906.

ARTÍCULO 656

El defensor del individuo reclamado tendrá seis días para presentar su defensa, de la cual se concederá vista por otros seis días al Procurador Fiscal de la sección, quien será necesariamente parte en todo incidente relativo á extradición.

Por analogía con la situación del artículo 459, parece que el abogado defensor puede solicitar la entrega de lo actuado—el expediente—bajo su responsabilidad.

ARTÍCULO 657

Si hubiere necesidad de comprobar algunos hechos, se recibirá la causa á prueba, siguiendo respecto á ésta y sus términos lo prescripto en este Código.

Para los términos, véase el artículo 471.

En general, rigen las prescripciones de los artículos 467 y siguientes, incluso lo referente á términos extraordinarios.

ARTÍCULO 658

Vencido el término probatorio y llamados los autos, el Juez fallará el incidente en el término de diez días, declarando si hay ó no lugar á conceder la extradición.



No hay señalamiento de día para el informe *in voce*, como en el caso del artículo 492, pero el juez, para mejor proveer, puede decretarlo.

—Ejecutoriada la sentencia por la que, manteniéndose la detención, se manda subsanar dentro del término de un mes el defecto de autenticación de los documentos acompañados, tiene aquélla que cumplirse, debiendo empezar el término señalado á contarse desde que se comunique la resolución de dicha sentencia al representante diplomático del gobierno requirente. S. C. N., t. 35, p. 241.

—Si por defecto de forma no se hace la extradición, no procede el sobreseimiento, sino que debe reservarse el sumario. Cám. Crim., t. 54, p. 254.

ARTÍCULO 659

Del fallo del Juez de Sección habrá derecho de apelación para la Corte Suprema, la cual, resolverá breve y definitivamente el punto, previa vista del Procurador General. El proceso original se pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores, dejando constancia suficiente, y esta resolución se transmitirá al Gobierno requirente.

El derecho al recurso de apelación será en ambos efectos (artículo 504), y se deducirá dentro de los cinco días (artículo 502).

La resolución breve á que se refiere el artículo, llega hasta prescindir del informe *in voce* que el 538 permite en las apelaciones en relación.

La «constancia suficiente» es la transcripción en los libros de sentencias.

Debe advertirse que por la ley de 11 de Enero de 1902, las Cámaras Federales de Apelaciones conocen de la apelación de la sentencia del juez nacional de primera instancia, y que contra sus resoluciones hay los recursos de ape-



lación y nulidad previstos por la misma ley, ante la Corte Suprema de la Nación.

—Ante la Suprema Corte, el procedimiento es sumario. S. C. N., t. 48, p. 573.

—No son aplicables los artículos 690 y 691 (sobre consulta). S. C. N., t. 88, p. 142.

—No procede el pedido de informar en derecho. S. C. N., t. 57, p. 309.

—La sentencia denegatoria por insuficiencia de recaudos y pruebas, no causa estado. Puede reabrirse la instancia. S. C. N., t. 97, p. 39 y t. 42, p. 409.

ARTÍCULO 660

Ningún reo extraído podrá ser juzgado por un delito anterior al que motivó la solicitud de extradición.

Si por causa del delito anterior al hecho de la extradición, pero descubierto con posterioridad, se pidiese autorización para procesar al individuo ya entregado, el pedido, que deberá venir acompañado de las piezas del proceso en que consten las observaciones del individuo acusado ó declaración firmada de no tener ninguna que hacer, será sometido al Juez de Sección que hubiere entendido en la demanda de extradición y su resolución será apelable.

Se refiere este artículo al caso de extradición pedida al Gobierno Argentino y á la extensión del pedido por delito anterior que deberá tratarse como un pedido ordinario de extradición.

Lo demás del artículo excede de las atribuciones ordinarias de nuestros tribunales, pues es evidente que en el caso de estar el reo extraído á la disposición de los tribunales del país requirente, cualquier exceso de éstos, vio-



lando el presente artículo, no podría ser objeto de una acción ó recurso ante nuestros tribunales, sino asunto de una reclamación diplomática.

ARTÍCULO 661

El Gobierno Argentino podrá autorizar el tránsito por el territorio de la República de un individuo extráido que no fuese ciudadano argentino, sin más requisito que la presentación por la vía diplomática de la sentencia condenatoria ó del mandato de prisión correspondiente.

El derecho de tránsito que algunos tratados regulan minuciosamente, no equivale á la extradición, desde que no son los tribunales los que tienen que resolver si procede, sino el Gobierno Argentino.

El artículo sobra, por tanto, en un Código de procedimientos judiciales. Todo lo más que podría ocurrir sería haber lugar á un procedimiento de *habeas corpus*, que, en virtud de lo dispuesto por el presente artículo, sería desechado por el juez ante quien se dedujera.

ARTICULO 662

Los Tribunales encargados de juzgar los casos de extradición, tendrán también la facultad para resolver si deben ó no entregarse en todo ó en parte al Gobierno requirente los papeles y otros objetos que se hubiesen tomado al presunto delincuente.

La importancia de esta disposición depende de la de los objetos ocupados ó embargados al delincuente, que



pueden ser, en caso de robo ó defraudación, las cantidades materia del delito.

La resolución que al respecto recaiga como formando parte de la sentencia de extradición, podrá ser objeto de los mismos recursos que ésta permite.

ARTÍCULO 663

Los exhortos emanados de una autoridad extranjera competente, en materia criminal, no política, se introducirán por la vía diplomática y serán transmitidos á las autoridades judiciales competentes.

ARTÍCULO 664

En caso de urgencia podrá dirigirse directamente á las autoridades argentinas, quienes deberán diligenciarlos sin demora, siempre que no estuviesen en desacuerdo con las leyes de la República.

El primero de estos dos artículos establece la regla general del conducto diplomático para los casos de extradición.

El segundo admite que en caso de urgencia y para los pedidos del extranjero, sean directamente los tribunales los que requieran una extradición al tribunal argentino ó al Gobierno argentino.

No hay, por tanto, posibilidad de que los tribunales argentinos se dirijan directamente al extranjero (tribunales ó gobiernos), solicitando una extradición.

ARTÍCULO 665

Las citaciones en causa criminal, no política, á testigos domiciliados ó residentes en la República, no serán



recibidas ni notificadas, sino bajo la condición que estos testigos no pudieran ser perseguidos ni presos por hechos ó condenas anteriores, ni como cómplices del delito encausado.

Este principio de asistencia internacional que prevén todos los Tratados, implica una excepción para el caso de que los testigos citados sean más tarde objeto de un pedido de extradición. No se explica de otro modo que en la mayor parte de los Tratados que ha celebrado la Argentina, se incluya aquel detalle sobre citación de testigos, tan ajeno como es á materias sobre extradición.

ARTÍCULO 666

Si el individuo reclamado se hallase enjuiciado ó condenado por crimen ó delito cometido en la República, la extradición será aplazada hasta que concluya el juicio ó termine su condena.

La regla de este artículo comprende también el caso de un delito posterior al pedido de extradición.

Con efecto, el artículo habla de la concesión de la extradición y no de su pedido, y establece que si al concederse la extradición hubiera un juicio pendiente, éste deberá ser preferido. Es el orden de prioridad que, como regla general, establece el artículo 41 del presente Código.

—La extradición sólo se hará efectiva después de terminado y satisfecho el proceso criminal seguido en la República. S. C. N., t. 95, p. 194.

—No se puede ordenar el embargo de los bienes del prófugo, que han sido secuestrados, por otro delito cometido por éste en la República. S. C. N., t. 55, p. 332.



ARTÍCULO 667

Cuando el delito que motiva la solicitud de extradición tenga una pena menor en la República, el encausado no será extraído sino á condición de que los Tribunales del país que lo reclama le impondrán la pena menor.

El cumplimiento de la condición deberá ser instado por la vía diplomática.

—Deberá al efecto, transcribirse los artículos pertinentes del Código Penal Argentino. Cám. Crim., t. 72, p. 101.

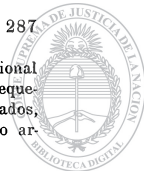
ARTÍCULO 668

Si el criminal fuese reclamado por más de un Estado al mismo tiempo, será atendido con preferencia aquél en cuyo territorio hubiese cometido el delito mayor, y siendo de igual gravedad aparente, el que lo hubiese reclamado primero.

Son los mismos principios establecidos por los artículos 37 y siguientes del presente Código.

ARTÍCULO 669

Si el reo fuese ciudadano argentino y prefiriese ser juzgado por los Tribunales Argentinos, el Gobierno de la Nación requirente, podrá suministrar á dichos Tribunales todos los antecedentes y pruebas del delito, á fin de que sea juzgado con arreglo á las leyes de la República.



Como según los derechos del principio internacional no procede la extradición de los naturales del país requerido, principio rigurosamente estipulado en los tratados, este artículo se refiere al caso de que un ciudadano argentino prefiriese ser aquí juzgado (1).

—Negada la extradición por ser ciudadano naturalizado (en el caso, no había, además, recaudos bastantes), no procede la libertad sino pedir el proceso al juez requirente. S. C. N., t. 57, p. 216.

—Debe concederse la extradición del naturalizado posteriormente al hecho que motiva el pedido de extradición. S. C. N., t. 91, p. 176.

ARTÍCULO 670

En la orden de extradición se comprende naturalmente la entrega de todos los objetos que el acusado hubiere hurtado en país extranjero y que se hallasen en su poder al tiempo de arrestarle, y los que puedan servir de prueba del delito que se le imputare.

Concuerda con el 662. (Véase su comentario).

—Los honorarios del defensor no pueden ser cobrados sobre los bienes secuestrados que han de ser entregados íntegros á la Nación S. C. N., año 1906.

ARTÍCULO 671

En caso de urgencia, los Tribunales de la República podrán ordenar el arresto provisorio de un extranjero,

(1) Tal principio no rige, sin embargo, en el Tratado de extradición con los E.E. U.U. de Norte América, pues en el artículo 3.º del mismo, se establece que «en ningún caso la nacionalidad del reo podrá impedir su entrega (al país requirente), en las condiciones estipuladas en el Tratado». Véase también el art. 1.º del Tratado de D. P. I. de Montevideo.



á solicitud directa de las autoridades judiciales de un país ligado con la República por tratado de extradición, siempre que se invoque la existencia de una sentencia ó de una orden de prisión y se determine con claridad la naturaleza del delito condenado ó perseguido.

El pedido podrá hacerse por medio del Correo ó del Telégrafo, debiéndose dar al mismo tiempo aviso por la vía diplomática al Ministro de Relaciones Exteriores.

Los Tribunales que hubieren practicado el arresto lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores por intermedio del de Justicia.

ARTÍCULO 672

El extranjero arrestado en virtud de las disposiciones del artículo anterior, será puesto en libertad, si en el término de quince días, tratándose de un país limítrofe, y de mes y medio tratándose de otros, no recibiese el Gobierno Argentino el pedido diplomático de extradición en debida forma.

ARTÍCULO 673

El arresto provisorio de un extranjero podrá ordenarse también á pedido de un Ministro diplomático, hasta tanto lleguen los documentos necesarios para presentar el pedido de extradición, y serán aplicables á este caso las disposiciones de los dos artículos precedentes.

Los casos de arresto provisorio, por la urgencia que requieren, importan una transgresión de algunas de las reglas generales antes establecidas. Así, no es exigida la vía diplomática, sino que los tribunales pueden pedir y recibir extradiciones.



Pueden hacerse los pedidos por el telégrafo.

Puede un ministro extranjero, aun en la ausencia de Tratados, solicitar el arresto provisorio, mientras llegan los recaudos.

Los plazos para que éstos se presenten, se cuentan sin distinción de días feriados ó no, dado el carácter permanente de la privación de la libertad.

La libertad del extranjero arrestado, por haberse vencido el plazo sin haber llegado los recaudos, no impide que se pida contra él la extradición en forma regular.

—Los términos del artículo 672 del Cód. de Proc. en lo Criminal, son perentorios é improrrogables. S. C. N., t. 55, p. 332.

—La detención mal decretada no autoriza una excepción dilatoria, sino la solicitud lisa y llana de libertad. S. C. N., t. 59, p. 53.

—Procede la detención preventiva solicitada por un ministro diplomático á título de reciprocidad (no habiendo tratados) y en vista de ulterior pedido de extradición. S. C. N., t. 91, p. 251.

—Corresponde á la Justicia Federal el conocimiento del pedido de arresto provisorio. S. C. N., t. 95, p. 114.

ARTÍCULO 674

Todo extranjero arrestado en virtud de un pedido de extradición, podrá solicitar su libertad provisional bajo fianza, en las mismas condiciones que si el delito imputado hubiese sido ejecutado en la República.

Es decir, según el artículo 376 y siguientes.

—No procede si el delito imputado merece por las leyes nacionales una pena superior á dos años de prisión. S. C. N., t. 59, p. 56.

—Declarada procedente en caso de año y medio de prisión y multa de 750.000 reis. S. C. N., t. 66, p. 319.

—Resultando que el requerido se halla á disposición del tribunal del país requirente, debe considerarse cumplida la obligación del fiador. S. C. N., t. 83, p. 111.

—Procede en los casos de arresto provisorio. S. C. N., t. 91, p. 120.



CAPÍTULO II

**De la extradición de los reos condenados ó procesados
por los Jueces de Sección ó de los
Tribunales de la Capital, asilados en otras Provincias**

ARTÍCULO 675

El Juez de Sección ó los de la Capital y Territorios Nacionales que estuviesen procesando ó hubiesen condenado á un reo que se asilare en el territorio de otra Sección, podrán pedir su extradición al Juez de la Sección respectiva, con los siguientes requisitos:

1.º Acompañando copia legalizada del auto de prisión, si se tratare de un procesado.

2.º Acompañando copia legalizada de la sentencia, si se tratare de un condenado.

Estos pedidos de extradición tienen el minimum de requisitos, por tratarse de tribunales sujetos á una misma ley (1).

—Sólo se negarán los jueces fundados en su propia competencia ó si tuvieren dudas sobre la identidad del procesado. Cám. Fed. de Córdoba, t. 1., p. 298.

—Procede la extradición pedida por un juez letrado de territorio nacional. Cám. Fed. Cap., t. 2, p. 110.

ARTÍCULO 676

El Juez de la Sección á quien la requisitoria se dirija, con los requisitos establecidos en el artículo ante-

(1) Véase en el tomo I, pág. 122, la ley sobre autenticación de actos públicos, de 26 de Agosto de 1863.

rior, ordenará inmediatamente la captura del procesado ó condenado cuya extradición se le pida.

Probada la identidad de la persona, lo remitirá sin más trámite á disposición del Juez requirente, á cuyo efecto se procederá como queda establecido para la extradición pedida por otra Nación.

Es decir, en cuanto no hay vía diplomática.

—El auto es apelable. Si la extradición importa una lesión á la jurisdicción del juez exhortado, no debe hacerse lugar á ella. Cám. Crim., t. 50, p. 336.



TÍTULO SEXTO

De las prisiones y de las visitas á los presos

ARTÍCULO 677

Ningún director ó jefe de presidio, penitenciaria ú otro establecimiento de condenados, ni ningún empleado ó alcaide de las cárceles de detención y seguridad, podrá, bajo las represiones establecidas en el Código Penal, recibir ni detener á persona alguna sino en virtud de orden de detención, arresto ó prisión, ó de sentencia condenatoria.

Establecido como regla general el principio constitucional según el cual nadie puede ser arrestado sino en mérito de orden escrita dictada por juez competente, se explica que ese precepto deba extenderse á los funcionarios que enumera la presente disposición, la cual, por otra parte, tiene conexión con la del artículo 243 incisos 6.º y 7.º del Código Penal, que califica de abuso de autoridad el caso en que los jefes de presidios, penitenciarias y demás establecimientos de condenados, como los que hagan sus veces, reciban algún reo sin testimonio de la sentencia ejecutoriada en que se les hubiera impuesto la pena, ó el



alcaide ó cualquier empleado de las cárceles de detención y seguridad, que reciba un preso sin orden de la autoridad competente, salvo el caso de *infraganti* delito.



ARTÍCULO 678

Los directores ó alcaides de las cárceles de detención ó de seguridad, cuidarán que la incomunicación de los procesados, en los casos de ser ordenada por el Juez ó funcionario que practica las diligencias de la instrucción, sea puntualmente observada.

Se les impone esta obligación por la responsabilidad criminal que lleva consigo su incumplimiento (art. 243 inciso 4.º, Código Penal).

ARTÍCULO 679

Cuidarán asimismo, que los presos se mantengan separados en cuanto sea posible, según sus antecedentes personales y la naturaleza y gravedad de los delitos que se les impute, velando especialmente porque los niños ó jóvenes que entren en las prisiones no estén en contacto inmediato con los presuntos criminales de otra edad.

Es fácil concebir las razones de orden moral y de higiene social que han determinado este precepto, pues la promiscuidad de clases y edades, daría como resultado que las cárceles que sólo son de seguridad y de regeneración, se convirtieran en «escuela de corrupción», como ha dicho el Dr. Obarrio.



ARTÍCULO 680

Los defensores de los procesados, luego de cesar la incomunicación, podrán conferenciar libremente con sus defendidos, sin que puedan obstar las disposiciones reglamentarias del establecimiento sobre las visitas á los detenidos.

Esta disposición tiene un doble concepto; primero, enseña que el objeto de la incomunicación del procesado se extiende hasta su defensor aunque éste lo hubiera acompañado ó deba acompañarlo en su indagatoria, y luego, que, cesada aquella interdicción momentánea, la libertad del reo para entenderse con su defensor, no debe reconocer límites, ni siquiera invocando definiciones reglamentarias (sobre horas de visita, que es punto muy tentador para todos los funcionarios noveles).

—Sólo los defensores pueden ampararse de las excepciones de la ley á los reglamentos que fijan día para visitar los presos. Cám. Crim., t. 73, p. 236.

ARTÍCULO 681

Los detenidos enfermos permanecerán en el lugar ó establecimiento en que se encontraren, si allí fuera posible, y prestarles toda la asistencia que la enfermedad requiera. De otro modo, deberán ser trasladados á un hospital ú hospicio en virtud de orden del Juez de instrucción, ó del que conociere de la causa, quienes deberán ordenar las medidas precaucionales necesarias para impedir la evasión.

Una excepción á este artículo es la del 70 del Código Penal, según el cual pueden ser arrestadas en sus propias



casas las mujeres honestas ó las personas ancianas ó enfermas, cuando la pena que corresponda al delito que se les impute sea sólo de arresto.

ARTÍCULO 682

Los directores y alcaides de cárceles ó establecimientos análogos, deberán informar sobre el estado de enfermedad, muerte ó evasión de presos al Juez de instrucción, si el sumario no hubiere terminado, y al Juez que conociere de la causa si ésta hubiere pasado al estado de plenario.

En el caso de haber mediado condenación, la comunicación deberá hacerse al Juez que dictó la sentencia.

Sin perjuicio de esa comunicación, los directores de las prisiones harán practicar todas las medidas necesarias para la asistencia de los enfermos y dar sepultura á los muertos.

Tiende con el art. 613 al mismo fin en lo que hace á las evasiones. (Véase lo dicho á propósito de tal artículo). Ahora, en cuanto al estado de salud del preso ó á su fallecimiento, es claro que de ello deba darse conocimiento al juez para que resuelva lo que más convenga, según el caso, lo que no obstará á que se proceda de acuerdo con lo que se dispone en el párrafo tercero.

—La muerte del acusado no exonera á su testamentaria de las responsabilidades civiles. Cám. Crim., t. 41, p. 327.

ARTÍCULO 683

Las autoridades judiciales y administrativas cuidarán de una manera especial en lo que respectivamente les concierne:



1.º De que los establecimientos destinados á la detención ó prisión de los individuos sospechados de delincuencia, y condenados como tales, sean no sólo seguros, sino adecuados é higiénicos.

2.º De que la salud de los presos sea debidamente atendida.

3.º De que su alimentación sea suficiente y sana.

4.º De que sean preservados del rigor de las estaciones.

5.º De que su tratamiento corresponda á los reglamentos dictados para los mismos establecimientos por la autoridad competente.

6.º De que no se use con los presos rigores no permitidos por esos reglamentos.

7.º De que bajo consideración ó pretexto alguno, se les causen mortificaciones más allá de las que entraña la pena á que hayan sido condenados y exija estrictamente su seguridad.

8.º De que se someta inmediatamente á juicio para su debida represión al empleado público que imponga á los presos que guarde, severidades, vejámenes ó apremios arbitrarios, ó los coloque en los lugares del establecimiento no destinados al efecto.

Responde este precepto al de la Constitución Nacional que dice: «Las Cárceles de la Nación serán sanas y limpias y nó para castigo de los reos detenidos en éllas, y toda medida que á pretexto de prevención conduzca á mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice».

Deja pues, librado la ley al celo de las autoridades judiciales y administrativas, el cumplimiento de aquella prescripción fundamental.



ARTÍCULO 684

Cada uno de los Jueces de instrucción podrá visitar las cárceles de los detenidos ó condenados existentes en el distrito en que tenga lugar su asiento el Juzgado. La visita tendrá por objeto conocer el estado de los presos y oír las reclamaciones que éstos hagan, sobre el tratamiento que reciban en el establecimiento, y las peticiones que directamente formulen sobre el estado de la causa.

ARTÍCULO 685

Los Jueces de instrucción darán cuenta al Superior toda vez que encontrando atendibles las reclamaciones ó pedidos de los presos, no estuviere en la órbita de sus atribuciones resolverlas por sí mismos.

Los jueces de instrucción, y su superior la Cámara de Apelaciones en lo criminal, quedan investidos en virtud del mandato expreso de estas dos disposiciones, de una tutela permanente sobre los procesados ó condenados, y debe entenderse que ello será como regla general, no en caso de que los presos ó condenados no estén ó no hubieren estado sometidos á su jurisdicción, porque no se establecen limitaciones. Por otra parte, el precepto no es imperativo, de manera que los jueces podrán cumplirlo por iniciativa propia ó á mérito de reclamos de los presos.

ARTÍCULO 686

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, todos los meses se hará una visita de Cárceles.



por el miembro de la Cámara de Apelaciones que ésta designe, y otra cada tres meses por la Cámara integral, á cuya visita deberán concurrir los Jueces del Crimen y Correccionales, el Ministerio Fiscal y los defensores de los procesados.

Estas disposiciones rigen para la Suprema Corte Nacional y Jueces de Sección cuando ocurra el caso que las motiva.

ARTICULO 687

Las visitas de que habla el artículo anterior, además del objeto que se señala á las visitas del Juez de instrucción en el artículo 684, tendrán el de averiguar el estado de las causas é indagar, sobre todo, la razón de las demoras que se noten en el procedimiento.

La primera de estas disposiciones es de carácter obligatoria para los funcionarios que en ella se determinan (1); su objeto además del determinado en el art. 684, es velar en casos de reclamos, por la marcha rápida que se exige en todos los procesos criminales, pues la Suprema Corte por el art. 11, inciso 4.º de la ley núm. 4.055 y la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, por mandato del art. 103, inciso 2.º de la Ley Orgánica de los Tribunales, están facultados á corregir disciplinariamente cualquier negligencia de los jueces en el cumplimiento de sus deberes.

(1) La Exma Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital, por Acordadas de 18 de Julio de 1895 y 3 de Agosto de 1906, recuerda á los Jueces, Agentes Fiscales y Defensores de pobres «que su asistencia á la visita de cárceles, no es facultativa sino obligatoria, con sujeción á los términos del artículo 686 del Código de Procedimientos en lo Criminal.»



ARTÍCULO 688

El Tribunal tomará las medidas necesarias para el pronto despacho de las causas, haciendo uso de sus facultades legales.

En primer término las que tiene como facultades de superintendencia.

ARTÍCULO 689

El Tribunal pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia, todas las faltas y defectos que note en la administración de las prisiones, para que sean corregidas debidamente.

El mismo Tribunal podrá invitar al Ministro del ramo para acompañarlo en las visitas generales.

En el fondo es correlativo del artículo 109 de la Ley Orgánica de los Tribunales, pero, en el caso especial de que advirtiéndose faltas y defectos en el modo de administrar las prisiones, se hará saber á sus efectos al Ministro del ramo (el de Justicia), es porque los establecimientos carcelarios, entre nosotros, dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo en punto á su administración, sin perjuicio de la visita é inspección de ellos á que tienen derecho y se ven obligados los funcionarios judiciales en los casos de los artículos 683 al 687.

TÍTULO FINAL

Disposiciones complementarias

ARTÍCULO 690

Es obligatorio para los defensores de los procesados, interponer los recursos de apelación ó nulidad de las sentencias en que se imponga la pena capital, presidio ó penitenciaria.

No se considerarán ejecutoriadas esas sentencias, aun cuando los defensores no deduzcan dentro del término los recursos correspondientes.

Este artículo y los tres sucesivos comprenden la consulta, un medio excepcional de llevar al conocimiento del Superior las causas de cierta gravedad, aunque no haya apelación.

La jurisdicción de la Cámara, sin embargo, es limitada en la consulta, pues no puede aumentar la pena impuesta por el inferior.

—El régimen de la ley número 4.055 (creación de nuevas Cámaras de Apelación), hace inaplicables los artículos 690 y siguientes del Cód. de Proc. en lo Criminal. S. C. N., t. 96, p. 148.

—No son aplicables los artículos 690 y siguientes del Cód. de Proc. en lo Criminal, á las sentencias dictadas por las Cámaras Federales de Apelaciones. S. C. N., t. 99, p. 91.





—Sólo procede la adhesión el recurso por el Fiscal de Cámara si la causa ha sido elevada por apelación.

En el caso, la causa había sido elevada sólo por ministerio de la ley. (artículo 690). Cám. Crim., tomos 14, 29 y 30.

—Cuando un reo consiente la sentencia de primera instancia y el fiscal desiste del recurso, la Cámara conoce en consulta del proceso Cám. Crim., t. V, p. 201.

ARTÍCULO 691

En los casos del artículo anterior, transcurrido el término legal, el Secretario de la causa la pondrá al despacho, y el Juez sin más trámite la elevará con oficio al Superior.

Este dará á la causa la tramitación establecida para los casos en que la apelación se interpone libremente.

El primer inciso reserva á la apelación el lugar preeminente para que, si ella se deduce, vaya la causa al Superior por su camino natural. Sólo por excepción, y no deduciendo el recurso dentro de su término, pasará la causa á la Cámara.

Esta la tramitará siguiendo la norma de los artículos 518 y siguientes, es decir, que el defensor, si le conviene, usará del término allí concedido para expresar agravios de la sentencia.

ARTÍCULO 692

En las causas comprendidas en el artículo 690, háyase ó no interpuesto en tiempo y forma los recursos, el Tribunal dictará el fallo que corresponda, aun cuando no se presentase por el defensor el escrito de expresión de agravios.



Si ha expresado agravios, la consulta es en realidad apelación; si no se han expresado agravios, la consulta tiene un verdadero carácter de examen de la sentencia del inferior; el trámite, en este segundo caso, será el de la apelación concedida libremente, pero suprimiendo todo lo que importe contienda y prueba.

ARTÍCULO 693

Quando el defensor no hubiere interpuesto el recurso en primera instancia, ó habiéndolo interpuesto no expresase agravios, tratándose de penas de presidio ó penitenciaria, la sentencia del Superior no podrá modificar la del inferior en un sentido desfavorable al procesado.

Esta disposición no se aplicará, cuando el Ministerio Fiscal ó acusador particular hubiere recurrido de la misma sentencia.

Producida la apelación por el defensor y no habiendo expresado agravios, caso igual al del consentimiento de la sentencia de primera instancia (y no habiendo apelación de las otras partes), el caso se transforma—trabándose de penas graves—en uno de consulta.

—No procede la adhesión del Fiscal de Cámara, de acuerdo con la interpuesta por el defensor del reo: debe el agente fiscal deducir la apelación en tiempo y forma, sin lo que el superior no puede modificar la sentencia en sentido desfavorable al reo, con arreglo al artículo 693. Cám. Crim., t. 12, p. 113.

—En virtud del artículo 693, la sentencia del Superior, tratándose de penas de presidio ó penitenciaria, no puede modificar la sentencia del inferior en sentido desfavorable al reo, si el defensor de éste no apeló. (Aplicado también á los casos de prisión). Cám. Crim., t. 12, p. 590.

—Procede que se eleve la pena, por adhesión del Fiscal de Cámara, de acuerdo con lo establecido en la segunda parte del artículo.



lo 693 del Cód. de Proc. y 552 del mismo (derecho al apelado para adherirse al recurso de apelación interpuesto por la contra parte), que quedaría sin sanción ni eficacia si fuera á interpretarse restrictivamente y se atendiese sólo á lo dispuesto en la primera parte del artículo 693, que sólo se refiere á las causas que no han sido apeladas por el Ministerio Fiscal ó acusador particular. Cám. Crim., tomo 14, página 315.

—Si el Ministerio Fiscal retira la apelación interpuesta, la sentencia debe considerarse como elevada en consulta, y en consecuencia, no puede ser modificada en sentido desfavorable al reo. Cám. Crim., t. 47, p. 61.

—En las causas elevadas en consulta, no procede adhesión del Ministerio Fiscal ni puede ser modificada la pena en sentido desfavorable al reo. Cám. Crim., t. 51, p. 295.

—En la consulta no puede el fiscal de Cámara pedir mayor pena que la impuesta en primera instancia; no cabe adhesión del apelado porque no hay apelación. Cám. Crim., t. III, p. 134.

—Consentida por el reo la sentencia de primera instancia y no apelando el fiscal, sólo conoce la Cámara en consulta y no puede elevar la pena. Cám. Crim., t. V, p. 209.

ARTÍCULO 694

Cuando no estuviere determinado un término, regirá el establecido para casos análogos, debiéndolo fijar el Juez previamente.

Esta disposición, de orden general, responde á la tendencia que limita los plazos para la más rápida tramitación de las causas, pero imponiendo al juez la obligación de fijarlos con anterioridad.

ARTÍCULO 695

Cuando los Jueces obligados á pronunciar sentencia interlocutoria ó definitiva hubiesen dejado vencer otra



tanto del término que la ley ó el Superior en su caso señalasen con tal objeto, á pesar de reclamo de parte interesada, incurrirán en una multa de doscientos á seiscientos pesos nacionales oro á favor del reclamante.

La acción para perseguir esta multa será personal y ejecutiva ante el Juez Civil contra la persona del autor ó autores de la demora, sin que contra ella puedan admitirse otras excepciones que la de imposibilidad física, ó recargo excesivo de trabajo, acreditado por los libros del Juzgado ó Tribunal á que perteneciese el demandado.

Artículos como el precedente son un adorno en un Código; tal carácter (en vez del de real y temida sanción), resulta de sus últimas palabras.

—La circunstancia de que el procesado hubiere requerido la aplicación de la multa á que se refiere el artículo 695, no le dá derecho de recusación contra el juez pasible de élla, ni éste, á su vez, debe inhibirse de conocer en el proceso. Cám. Crim., resol. de 21 de Marzo de 1907 (no publicada), proceso contra Mario y Gregorio García por lesiones.

ARTÍCULO 696

En materia de procedimiento penal no habrá más nulidades que las establecidas en este Código, ó las que resultasen de la violación de sus disposiciones expresas, ni serán apelables otros autos que aquellos expresamente declarados tales.

Sobre la parte relativa á las nulidades, trasladamos al lector á nuestro comentario sobre el artículo 513.

En cuanto al punto sobre las apelaciones, dejemos su explicación á una palabra más autorizada que la nuestra:



la del Fiscal de Cámaras doctor Marengo, digno sucesor del doctor Cortés en el desempeño del Ministerio Público.

Decía así en uno de sus siempre luminosos dictámenes: «Los términos del artículo 696 del Código de Procedimientos en lo Criminal, inducirían á creer que el Código se ha preocupado de especificar de una manera precisa los autos apelables, y si bien es cierto que los artículos 200, 431 y otros, parece que responden á tal propósito, el artículo 501 generaliza el recurso de apelación, disponiendo que él se otorgará no sólo de las sentencias definitivas, sino también de las interlocutorias que decidan algún artículo ó causen gravamen irreparable. Para juzgar si un auto es apelable, debe tenerse en cuenta, no sólo la mención especificada, sino también la de carácter general, es decir, si decide artículo ó causa gravamen irreparable».

Hemos dado un doble sitio en este libro á aquella opinión, que ha sido aceptada por la jurisprudencia, en virtud de la importancia que aparece teniendo en cada caso.

—El artículo 696 del Cód. de Proc. en lo Criminal, no establece que toda violación á las disposiciones del Código sea causa de nulidad. Sólo se refiere á aquellas que se relacionan á trámites substanciales del juicio; entonces, sí, pueden producir tal efecto. Cán. Crim., t. 56, p. 119.

ARTÍCULO 697

Quando se observaren los términos y no hubiere multa especialmente determinada para la inobservancia, se aplicará la de cincuenta á cien pesos.

ARTÍCULO 698

Las multas establecidas por demoras en la substanciación de las causas, deberán ser solicitadas por los



representantes del Ministerio Fiscal y aplicarse de oficio á falta de otra gestión, por los Jueces ó Tribunales, incurriendo en ella todos los funcionarios que no las hubiesen solicitado ó aplicado.

ARTÍCULO 699

Toda causa deberá terminarse completamente en el término de dos años, no computándose las demoras á que se refiere el artículo 442.

Son éstas, por el orden que allí se enumenran:

- 1.º Articulaciones maliciosas del procesado.
- 2.º Diligenciamiento de oficios ó exhortos.
- 3.º Retraso (?) independiente de la voluntad del juzgado.

Advertimos que si el artículo 442, aun con tales ensanches posibles, tiene una sanción en la obligación impuesta al juez de sobreseer ó elevar la causa á plenario, el presente artículo no tiene otra sanción que la muy teórica é improbable del artículo 695.

FIN DEL CÓDIGO

ÍNDICE



TÍTULO DÉCIMO OCTAVO

De la libertad bajo fianza.....	
---------------------------------	--

TÍTULO DÉCIMO NOVENO

De las visitas domiciliarias y pesquisas en los lugares cerrados..	26
--	----

TÍTULO VIGÉSIMO

De los embargos	36
-----------------------	----

TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO

De la responsabilidad de terceras personas.....	46
---	----

TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO

De la conclusión del sumario y del sobreseimiento.....	51
CAP. I.—De la conclusión del sumario.....	51
CAP. II.—Del sobreseimiento.....	58

TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO

De los artículos de previo y especial pronunciamiento.....	70
--	----



LIBRO TERCERO

DEL PLENARIO

TÍTULO PRIMERO

De la elevación de la causa á plenario, discusión y prueba.....	93
CAP. I.—De la elevación de la causa á plenario y su discusión...	93
CAP. II.—De la prueba.....	101

TÍTULO SEGUNDO

De la ratificación de las declaraciones de los testigos del sumario	113
---	-----

TÍTULO TERCERO

De las tachas.....	115
--------------------	-----

TÍTULO CUARTO

De la conclusión de la causa para definitiva.....	118
---	-----

TÍTULO QUINTO

De la sentencia.....	122
----------------------	-----

TÍTULO SEXTO

De los recursos en general.....	130
CAP. I.—Del recurso de reposición.....	131
CAP. II.—Del recurso de apelación.....	134
CAP. III.—Del recurso de nulidad.....	144
CAP. IV.—Del recurso de queja.....	153



TÍTULO SÉPTIMO

CAP. I.—Del modo de proceder en segunda instancia.....	156
CAP. II.—Recursos contra las providencias y fallos de la Corte Suprema y de la Cámara de Apelaciones.....	175

TÍTULO OCTAVO

De la ejecución de las sentencias.....	183
--	-----

LIBRO CUARTO

DE LOS JUICIOS CORRECCIONALES Y SOBRE FALTAS, Y DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS JUICIOS CORRECCIONALES Y SOBRE FALTAS

TÍTULO PRIMERO

De los juicios correccionales.....	195
CAP. I.—Procedimiento en materia correccional	195

TÍTULO SEGUNDO

Del procedimiento en los juicios sobre faltas.....	209
--	-----

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS JUICIOS ESPECIALES

TÍTULO PRIMERO

Procedimiento en los delitos de calumnia é injuria	212
--	-----



TÍTULO SEGUNDO

De la falsificación de documentos públicos y privados:.....	220
---	-----

TÍTULO TERCERO

Del procedimiento en caso de fuga de presos.....	232
--	-----

TÍTULO CUARTO

Del modo de proceder en los casos de detención, arresto ó prisión ilegal de las personas	235
---	-----

TÍTULO QUINTO

Del procedimiento en los casos de extradición de criminales.....	258
CAP. I.—Del procedimiento para la extradición de criminales con países extranjeros	258
CAP. II.—De la extradición de los reos condenados ó procesados por los Jueces de Sección ó de los Tribunales de la Capital, asilados en otras Provincias.....	290

TÍTULO SEXTO

De las prisiones y de las visitas á los presos.....	292
---	-----

TÍTULO FINAL

Disposiciones complementarias.....	300
------------------------------------	-----

APÉNDICE





ACUMULACIÓN DE PROCESOS

RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL (1)



Buenos Aires, mayo 18 de 1909.

Vistos y considerando: Que la disposición del artículo 85 del Código Penal, no puede entenderse en el sentido de que siempre y en todos los casos de reiteración de delitos, deba seguirse la regla que sanciona, sino cuando el conocimiento de ellos correspondiese al mismo juez y hubieren sido materia de la acusación y se hubieran perpetrado con anterioridad á ella. Que una interpretación más lata como la que se ha dado á dicho artículo por el Inferior,

(1) Ya en prensa este segundo tomo, hemos conocido la existencia del fallo que se transcribe (lo que nos ha impedido darle el lugar que le hubiere correspondido). La importante doctrina que sienta sobre el criterio, que, según la Excma. Cámara, debe regir para los casos de concurrencia de delitos imputables á una misma persona, cometidos en distinta época, habiendo ya proceso formado en virtud del primero, nos ha decidido á su publicación íntegra.

Se trataba, en el caso, de un procesado, que pendiente de un juicio por delito de jurisdicción criminal, perpetró otro, estando detenido, que



podría conducir á conclusiones inconstitucionales y hasta absurdas, porque si hubiera de entenderse el artículo 85 en sentido de que nunca podrían imponerse diferentes condenas á un reo de diversos delitos no juzgados aún, sinó que en todo caso una deberá ser la sentencia en que se acumulen las penas ó se agrave la del delito mayor por la del menor,— el Código Penal habría invadido las facultades que la Constitución Nacional reserva á las Provincias para determinar los límites de la jurisdicción y organización de su administración de justicia, ó bien, quedarían por ello impunes aquellos delitos que no cayeran bajo la jurisdicción del juez á quien corresponde el juzgamiento del más grave. Que por otra parte, los artículos 37 á 42 del Código de Procedimientos en lo Criminal, prevén los casos en que un mismo delincuente cometa delitos cuyo conocimiento corresponda á distintas jurisdicciones, y fijan las reglas que han de seguirse para juzgarlos, en términos tales, que la aplicación del artículo 85 sería imposible. Que, si bien el artículo 40 prevé el caso de que todos ellos correspondan á los jueces que ejercen la jurisdicción ordinaria de la Capital ó Territorios Nacionales, estableciendo que deberá conocer de ellos el juez á quien corresponda el conocimiento del más grave, tal disposición no es de aplicarse sinó en aquellos casos en que la causa no ha quedado definitivamente radicada ante el juez que conoce en ella. Que una interpretación contraria, conduciría al caos y á la pro-

resultaba ser de jurisdicción correccional. El juez de ésta, fundado en la disposición del artículo 40 del Código Penal, le pasó el proceso al del Crimen á los efectos de la acumulación, pero éste, declarándose incompetente para conocer del nuevo delito, suscitó así la cuestión de la no acumulación, siendo resuelta por el Superior en los términos contenidos en dicho fallo.

(Proceso contra Jaime Miara por lesiones. Juzgado del Crimen del doctor E. Madero, secretaria del doctor Espinosa).



longación indefinida de los procesos, puesto que una causa que estuviera ya substanciada por todos sus trámites legales ante el juez competente, podría ser paralizada y sacada del poder de dicho juez para serle llevada á otro á quien correspondiera al conocimiento de un nuevo delito más grave cometido por el mismo delincuente. Que ni el Código Penal ni el de Procedimientos en lo Criminal, legislan sobre la acumulación de procesos, y las razones que autorizan tal medida en las causas civiles, no concurren en el caso de juzgamiento de delitos diversos cometidos por un mismo delincuente, antes de iniciarse causa contra él y después que ésta se halla radicada por la acusación y defensa. Que admitir, en tal caso, la acumulación de procesos, podría conducir á la impunidad del delito y duración de las causas con mengua de la justicia y burla de la ley. Que, finalmente, la doctrina corrobora tal interpretación como puede en Tejedor: *Curso de Derecho Criminal*, tomo II, capítulo V y en Faustin Hélie: *Instruction Criminelle*, diciendo éste lo siguiente: «Pero si la Cámara debe, en un interés de justicia, operar la acumulación de los procedimientos instruídos por razón de hechos conexos, esta regla no es absoluta en su aplicación, por así decir, facultativa: depende de la apreciación que la Cámara pueda hacer de las circunstancias que autoricen ó rechazen la acumulación. Esto es así, sobre todo, porque la reunión de los procedimientos es considerada, no como un derecho de la defensa, sino como un acto de administración de justicia, que á este título queda abandonada á la soberana decisión de los jueces del hecho.—Que por lo demás, si el procesado ve empeorada su condición, á él sólo debe imputársele, desde que ello resulta de la perpetración del segundo delito, después que había quedado concluída la discusión de la causa formada con motivo del que ó de los que fueron materia de la acusación. Que, finalmente, el fallo de un proceso con prioridad al de otro, nunca podría conducir á la con-



clusión que se supone por el Inferior, convirtiendo en reincidencia la agravante que sólo era reiteración, porque si el delito posterior se cometió antes de haber sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, la que se pronunciara con posterioridad, no podría surtir efecto retroactivo para convertir una circunstancia, la reiteración, en otra de reincidencia, que requiere como condición esencial condena preexistente.

(En virtud de tales consideraciones el auto declara que no es caso de acumulación y que cada proceso debe substanciararse por separado. Lo subscriben los Camaristas doctores Pérez, Esteves y Méndez).

CARACTER DE LA LEY PROCESAL EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA



El error que mueve á considerar al Congreso como una especie de legislatura provincial cuando dicta leyes para la Capital de la República, es el mismo error que se comete cuando se hace de la justicia ordinaria de ésta una cosa aparte, algo híbrido, como un poder judicial que no se armoniza con ningún poder público de su misma esfera.

La realidad constitucional es otra y las razones que han mediado para dejar libre á la Capital de la República, de cualquier otra soberanía que no sea la de la Nación, deben hacer considerar aquélla como regida por una ley de excepción, y como tal, derogatoria de cualquier otra general.

Contrayéndonos á lo judicial, el fuero, para la capital, con sus tribunales y sus procedimientos, es de privilegio, es excepcional y así debe primar sobre cualquier otro. No se habla de la jurisdicción nacional que se extiende—para las cosas y las personas comprendidas en la ley federal—sobre todo el territorio argentino y por tanto, como una parte de éste, también sobre la capital como regida por aquel fuero privilegiado por razón de ser tal territorio y con prescindencia de que dentro de él se pro-



duzca, como puede producirse en el territorio de una provincia, casos de derecho, de procedimiento y de juez federales.

Se habla del territorio de la capital, como regido por la ley de la Nación, por los procedimientos que ésta le fija y por los jueces que en nombre de ella y con su autoridad entenderán.

Así, cuando en el artículo 39 del Código de Procedimientos Criminales, en caso de conflicto entre la jurisdicción provincial y los tribunales de la capital, se da la preferencia á éstos, el Congreso no ha hecho más que ejercer la facultad que le atribuye el inciso 27 del artículo 67 de la Constitución Nacional, legislando de modo que las jurisdicciones provinciales tienen que acatar sus preceptos que reconocen á la capital su carácter esencialmente nacional, de modo que en su territorio la soberanía de la Nación se ejerza sin reatos ni limitaciones. (Véase artículo 108, C. N., cláusula 1.ª).

La confusión ha nacido de haberse respetado la antigua organización provincial sobre la cual pareció ingerirse la justicia que sigue llamándose ordinaria como si su origen y su razón de ser no fueran exactamente iguales á la federal.

JOAQUÍN V. GONZÁLEZ.

CUESTIONES PREJUDICIALES

DE APUNTES TOMADOS

POR EL DR. DANIEL J. FRIAS

JUEZ DE INSTRUCCIÓN



Según Merlin, se entiende por cuestión prejudicial toda la que en un proceso deba ser juzgada antes que otra, puesto que ella sería sin objeto, si la persona que la suscita sucumbe en ella. (*Répertoire de jurisprudence: V.º Quest. Prej.*).

Legrevereaud dice que las cuestiones prejudiciales son aquellas cuya decisión previa es necesaria para que se pueda estatuir sobre otras que con ellas se relacionen y que pueden quedar sin objeto, según que ellas sean decididas en uno ú otro sentido. (*Traité de Législation Criminelle*, tomo II, página 38).

Un célebre magistrado belga, estudiando un caso judicial, decía: «Nosotros debemos empezar por fijarnos bien sobre estos tres puntos: ¿qué se entiende en derecho por excepción prejudicial? ¿la ley reconoce, sea expresamente, sea implícitamente, estas excepciones? ¿las somete al uso de ciertas formas, á ciertos plazos y á ciertas pruebas previas? La excepción prejudicial, como lo indica su nom-



bre, es una excepción sobre la cual se debe juzgar antes de pronunciarse sobre la acción, juzgamiento que debe pronunciarse un otro tribunal que aquel que conoce de la acción. En materia criminal, es una cuestión cuya solución debe preceder á la acusación del delito, porque si ella es decidida en un cierto sentido, haciendo lo que él ha hecho, no hubiera podido cometer el delito y la acusación, entonces, fallaría por su base, lo que sucedería en el caso de alegarse que ese hecho no era sino el ejercicio de un derecho: *feci, sed jure feci*».

Ahora bien; una excepción interpuesta por el reo en materia criminal, puede constituir una cuestión prejudicial ó no presentar sino una simple defensa, cuyo examen se confunde con el de la cuestión principal. Es por eso que los autores enseñan, que para apreciar si un hecho dá ó nó lugar á una acción prejudicial, es menester tener presentes estos dos principios:

1.º Que la cuestión prejudicial no pueda resultar sino de hechos anteriores al delito imputado á aquel que la opone.

2.º Que el hecho debe depender únicamente de apreciaciones de títulos y de cuestiones independientes al delito.

De manera, que si al detenido, p. ej., se le imputara el hecho de la violación de un contrato y él negara su existencia, la cuestión de averiguar si tal contrato ha existido ó nó, es una cuestión de hecho independiente al delito, y, por lo tanto, necesariamente prejudicial. Tal sería la violación de un depósito, la sustracción de títulos, etc.

Si, por el contrario, el delito imputado reside en el contrato mismo que ha dado origen al ejercicio de la acción criminal, la prueba del contrato se confunde, en tal caso, con el delito y no puede, desde luego, constituir una cuestión prejudicial cuyo examen puede ser separado del de la cuestión principal; tal sería, p. ej., el caso del delito de estafa.



Todos los casos en que las denegaciones del prevenido al hecho que sirve de base á la acusación, entran en esta segunda categoría, esto es, que se confundan con la cuestión de fondo, no constituyen cuestiones prejudiciales sino simples medios de defensa, cuya apreciación se halla íntimamente ligada á la persecución misma, lo que sucedería en los casos de prescripción, amnistía, etc.

La doctrina ha dividido en dos clases las cuestiones prejudiciales: unas relativas á la acción y otras al juicio. Las primeras suspenden la acción pública que no puede ser promovida hasta que la cuestión haya sido resuelta; las otras no entrañan sino una simple suspensión á la persecución del delito. Las primeras tienen por efecto hacer desaparecer las persecuciones intentadas, ó hacer pronunciar la incompetencia, en cuanto al presente, del juez que entendía en ellas; las demás no tienen otro resultado que suspender temporalmente la persecución, hasta que ellas hayan sido juzgadas. Pero esta terminología, como dice Haus: «no es rigurosamente exacta, porque todas las cuestiones prejudiciales tienen por efecto suspender la acción pública, con esta diferencia: que las unas suspenden el principio del proceso, y las otras, los procesos ya iniciados.» (*Principes généraux du droit pénal belge*, núm. 1.113).

Se puede sentar como una regla general, que el juez llamado á entender en un hecho criminal, tiene la facultad y el deber de apreciar y verificar todas las modalidades y circunstancias de que aquél se halle rodeado; así, es que debe resolver todas las cuestiones que con el hecho se relacionan, á no ser que tal apreciación y solución, suponiendo que ella fuera como acción principal, independiente de todo delito, escapase á su jurisdicción.

Esto no es sino el principio universalmente aceptado, de que el juez que entiende en lo principal debe conocer igualmente de las cuestiones incidentales, principio que



se aplica igualmente en lo criminal, por cuanto la acción pública no puede ser paralizada al agrado de los acusados, quienes podrían suspenderla si se les reconociera el derecho de postergar la acción criminal hasta tanto se resolviera cualquiera de las incidencias que podrían suscitarse durante la instrucción del sumario. De allí la máxima *«que la excepción se halla tan pronto como la acción y que el juez de la acción lo es al mismo tiempo de la excepción»*, máxima que se justifica teniendo en cuenta que los tribunales de represión no podrían llenar su ministerio, que consiste en apreciar el carácter delictuoso del hecho inculminado, si se sustrajera á su decisión uno ó más elementos de la infracción sobre la cual están llamados á pronunciarse.

Es así que los tribunales represivos tienen facultad para resolver cuestiones civiles que se refieran al hecho de la prevención, á menos que estas cuestiones no hayan sido expresamente atribuidas á otra jurisdicción, «puesto que no hay ley alguna que prohíba á los jueces del crimen de conocer en cuestiones civiles—dice un expositor—mucho más si se trata de la interpretación de un contrato ó de un acto sobre el cual recaiga la prevención, en cuyo caso, los jueces del crimen están no sólo facultados, sino obligados á determinar el sentido y los efectos jurídicos de ese acto ó de ese contrato». Así, la jurisprudencia francesa ha reconocido y declarado que los jueces del crimen son competentes para decidir todas las cuestiones que se susciten respecto de la propiedad de cosas muebles. Para justificar esta opinión, se ha dicho que las excepciones relativas á la propiedad de cosas muebles son más frecuentes ante los tribunales represivos, de manera que se trabaría sin cesar el curso de la justicia, si los jueces del crimen no pudiesen, en los principios de su propia jurisdicción, tener el poder bastante para decidir cuestiones de esta naturaleza.



tan íntimamente relacionadas con el delito sobre cuya apreciación están llamados á decidir.

Con el fin de establecer un principio general que pudiera servir de guía en el porvenir en materia de cuestiones prejudiciales, la Corte de Casación de Francia encargó á su presidente M. Barris, redactar una nota que no solamente fijara la jurisprudencia de dicho tribunal en esta materia, sino que sirviera también de cuerpo de doctrina para las otras jurisdicciones en una materia donde los jueces han sido obligados—como dice Dalloz—á crear el principio y determinar su aplicación. Aquel célebre magistrado redactó la famosa nota que fué discutida y aprobada por unanimidad, por la Corte de Casación, en 5 de Noviembre de 1813, conclusiones á las cuales se adhirió M. Merlin, en su calidad de Procurador de aquel tribunal, y que han fijado desde esa época la jurisprudencia del mismo.

El art. 3 del Código de Instrucción Criminal Francés, establece que «la acción civil puede ser perseguida al mismo tiempo y ante los mismos jueces que la acción pública»; ella también puede serlo separadamente, y agrega «que en este caso su ejercicio se halla suspendido hasta tanto no se haya pronunciado definitivamente sobre la acción pública intentada antes, ó pendiente la persecución de la acción civil». Análogo principio al del artículo 1104 de nuestro Código Civil.

Como se ve, la ley francesa no ha hecho sino sentar este principio general, pero la jurisprudencia y la doctrina han llegado á completarlo, fundándose en los principios generales del derecho y en la separación de las distintas jurisdicciones creadas por la ley.

Reconociendo este mismo vacío en la legislación, el Procurador General de la Corte de Casación Belga, decía, con ocasión de un juicio fallado por ésta, en 21 de Julio de 1836, con las Cámaras reunidas: «Nin-



guna disposición de nuestras leyes reconoce expresamente las excepciones prejudiciales; ninguna ha trazado sus caracteres en términos tales que juez alguno pueda desconocerlas sin violar la ley y atraer la casación de su sentencia. Pero si la ley no las reconoce expresamente, ella las ha reconocido implícitamente, puesto que ha establecido distintas jurisdicciones, las unas destinadas á aplicar á los culpables de crímenes, delitos ó contravenciones, las penas que sus acciones merecen; las otras destinadas á pronunciarse sobre las reclamaciones de derechos que los ciudadanos pretendan tener, sea personalmente de los unos en contra de los otros, sean sobre las cosas que les pertenezcan; los límites de estas diferentes jurisdicciones han sido rigurosamente trazados; ellos lo han sido en vista del orden público, que no permite que se los desconozca. De la existencia de estas jurisdicciones derivan las excepciones prejudiciales, que son su consecuencia natural, y si la ley no las ha reconocido expresamente y no las ha definido, es, sin duda, porque ellas pueden presentarse bajo facies tan diversas, que esta definición hubiera sido peligrosa, por lo que valía más deferirla á la doctrina; esto es suficiente para que no se les pueda desconocer, puesto que, estableciéndose diversas jurisdicciones, se supone necesariamente su existencia».

Las cuestiones prejudiciales que la jurisprudencia francesa y belga han reconocido, que dan lugar al envío á otra jurisdicción, son, entre otras, las relativas á la reclamación de estado en materia de filiación. Sobre esto no hay dificultad ninguna, por cuanto los artículos 326 y 327 del Código Civil Francés, declaran: el primero «que los tribunales civiles son únicamente los competentes para estatuir sobre las reclamaciones de estado», agregando el segundo: «que la acción criminal contra un delito de supresión de estado, no se podrá intentar sino después del juicio definitivo en lo civil que la resuel-



va». Las disposiciones de estos artículos se refieren á las cuestiones de filiación únicamente, no á las de nacionalidad, por ejemplo.

La razón de aquellas disposiciones y su principal objeto, es evitar que la solución dada á la acción pública no prejuzgue el juicio de la cuestión de filiación, que los tribunales en la jurisdicción civil son los únicos que tienen facultad para decidirla, ya se trate de una cuestión de filiación natural ó legítima. (Dalloz: *Repertoire de jurisprudence*, V.^o *Quest. prej.*, números 26 y 72; Garraud: *Traité Théorique et pratique du droit pénal français*, tomo V, número 436; F. Hélie: *Instruction Criminelle*, t. II, número 844; Haus: obra citada; y Le Sellyer: *Droit Criminelle*, tomo IV, página 199, número 1465 y siguientes).

Para que la acción pública sea suspendida por una cuestión de estado—enseña Haus—«es menester que el hecho delictuoso que se trata de perseguir constituya una supresión de estado. La infracción—agrega—que ha tenido esta supresión por objeto, pero que no ha producido el resultado que se deseaba, puede ser perseguida inmediatamente. Ciertos crímenes tienen necesariamente por objeto y resultado la supresión del estado de filiación; tales son, p. ej.: el crimen de falsedad, por el cual se asigna al hijo un padre ó madre distintos, declarando falsamente los hechos ante el jefe de la oficina del registro civil; cuando este oficial, en la redacción del acta de nacimiento, desnaturaliza las declaraciones que se le han dado sobre la verdadera filiación del niño; las alteraciones del acta de nacimiento, regularmente inserta en el registro, etc.» (número 1155, obra citada).

Para que la acción pública sea suspendida, es menester, pues, que se trate de averiguar siempre, no si la persecución de un delito de esta especie interesa de cerca ó de lejos la cuestión de estado, sino si ella la suscita directamente y se funda en ella el título mismo del estado supri-



mido. Así, p. ej., la destrucción de una ó muchas actas del registro civil, puede ser perseguida sin que sea necesario averiguar cuáles son las filiaciones suprimidas por el delito. Lo mismo lo pueden ser las inscripciones en actas de nacimiento hechas en hojas volantes, ó los delitos cometidos por haber olvidado hacer las declaraciones ordenadas por la ley.

Igualmente, las infracciones que constituyen á la vez un atentado contra la persona y una supresión de su estado, tales como la exposición, el abandono, la supresión, el ocultamiento y la substracción del niño, pueden ser perseguidas y juzgadas por la jurisdicción criminal, cualquiera que sea su estado.

Son también cuestiones prejudiciales las concernientes á la propiedad inmueble y á los derechos reales sobre los mismos, en razón—se ha dicho—de la importancia que ellos tienen casi siempre, por lo que, deben ser tratados y juzgados por los jueces civiles como cuestiones prejudiciales, siguiendo las reglas de procedimiento y de instrucción á las cuales la ley ha sometido á los tribunales en materia civil, según lo ha reconocido universalmente la doctrina.

La Corte de Casación Francesa, en su nota deliberada el 5 de Noviembre de 1813, á que antes hemos hecho referencia, decidió que las cuestiones relativas á la propiedad de los inmuebles son esencialmente del dominio de los tribunales civiles. De manera que, si el prevenido ante el fuero criminal, propone como defensa una excepción de propiedad, que sea necesariamente prejudicial al delito, el conocimiento de ella debe ser pasado al juez de lo civil.

No solamente las cuestiones que se refieran á la propiedad de los bienes inmuebles deben ser deferidas al conocimiento de los jueces en lo civil, sino también las relativas á los derechos reales, de usufructo, uso y servidumbre sobre los inmuebles. Así, los tribunales del crimen debieran enviar ante los tribunales civiles las cuestiones de esta na-



turalaleza, que el prevenido suscitara para defenderse de la imputación.

La posesión legal constituye también un verdadero derecho sobre la cosa, de tal suerte, que el poseedor que sea acusado de haber cometido un delito en el inmueble de que goza á este título, puede, sin necesidad de invocar la propiedad, limitarse á rechazar, por el solo hecho de su posesión, la imputación del delito. De la misma manera puede, ante el juez de lo civil, elegir la acción que ha de entablar, esto es, el juicio posesorio ó el petitorio; así, pues, cuando se invoque la posesión para establecer un derecho de propiedad sobre un inmueble, la apreciación de los caracteres de esta posesión, no pertenecen más que á los tribunales civiles. (Dalloz: obra citada, V.º, *Quest. prej.*, números 87, 89 y 90; Le Sellyer: *Traité de la comp. y de l'organ. de trib. chargés de la repres.*, tomo II, números 684 y 696; Garraud: *Précis du droit crim.*, número 439; Haus: obra citada, número 1169 y siguientes).

Estos principios, aunque no han sido consagrados por una disposición expresa, han sido, sin embargo, reconocidos por la doctrina y jurisprudencia francesa como antes lo hemos dicho, pues sólo en el Código Forestal y en la Ley sobre pesca fluvial, de 15 de Abril de 1829, de aquella nación, (artículos 182 y 52, respectivamente), se establece de una manera expresa, que la excepción de propiedad ú otro derecho real que invoque el procesado en su favor, dan nacimiento á una cuestión prejudicial que debe ser decidida por los jueces civiles. (Mangin: *Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle*, tomo I, números 201 y 204; Bertauld: *Questions et exceptions prejudiciables en matière répressive*, número 63 y siguientes; Hoffman: *Questions prejudiciables*, tomo I, número 202 y siguientes; Haus: obra citada, número 1110 y siguientes; y Sellyer: obra citada, número 1464 y siguientes).



Haciendo aplicación de estos principios, se ha juzgado, que un tribunal de simple policía no puede, sin exceder sus poderes, decidir que está probado que desde tiempo inmemorial tal parte ha gozado del derecho de llevar á pastar sus ganados sobre tal terreno. Dichos funcionarios no pueden reconocer tampoco en favor del prevenido, la posesión anual de un derecho de pasaje que el mismo invoque, porque esta cuestión debe sólo ser decidida por los tribunales civiles, á quienes debe enviársele para su conocimiento. (Dallos: obra citada, V^{os} *Quest. prej.*, número 90, y *Comp. crim.*, número 369 y año 1856, V., 378 y 379).

A diferencia de las cuestiones relativas al derecho de la propiedad y á los derechos reales sobre los inmuebles, que, como acabamos de ver se consideran prejudiciales y de la competencia exclusiva de los jueces civiles, las contiendas relativas á simples tolerancias ó permisos que el prevenido alegue en su defensa haber obtenido del propietario, son del exclusivo resorte de los jueces de represión, quienes deben apreciarlas y decidir á su respecto.

Si bien es cierto que los jueces de represión no tienen jurisdicción para apreciar en el fondo una excepción prejudicial de propiedad, la tienen, sin embargo, para examinar si dicha excepción es ó no admisible, esto es, si lleva en sí las condiciones requeridas para constituir una verdadera excepción prejudicial que dé margen á su envío á otra jurisdicción. Pero, antes de decidir esto, ellos deben examinar si son competentes para entender sobre el fondo de la cuestión principal, ó, lo que es lo mismo, sobre el delito motivo de la instrucción en la cual se deduce la cuestión prejudicial; porque si el conocimiento de la infracción corresponde á otros jueces, la apreciación de la relación que existe entre la excepción y el delito imputado, no puede ser competentemente hecha sino por



el tribunal llamado por la ley á estatuir sobre el delito en tela de juicio, dado el principio general de la impro-rogabilidad de la jurisdicción consagrado por nuestras leyes (Código de Procedimientos en lo Criminal, artículo 19 y art. 1.º, Código de Procedimientos en lo Civil).

Según los expositores enseñan, son tres las condiciones á las cuales está subordinada la obligación del juez de represión, para aceptar la excepción prejudicial suscitada por el prevenido; ellas son:

1.ª Que la excepción sea de tal naturaleza que haga desaparecer el pretendido delito.

2.ª Que sea personal del que la invoca.

3.ª Que sea acompañada de un principio de prueba.

De modo que, según la primera regla, la excepción debe ser de tal naturaleza que haga desaparecer el delito, puesto que si el hecho que se persigue hubiera de conservar siempre su naturaleza delictuosa, cualquiera que fuese la solución que se le diera á la excepción inexactamente calificada como prejudicial, los tribunales del crimen no tendrían razón alguna legal para demorar el juicio sobre la cual estaban llamados á pronunciarse, una vez que la acción principal, en tales circunstancias, sería completamente ineficaz. En tal situación, pues, los tribunales de represión deben substanciar y proseguir la causa sin tener para nada en cuenta tal clase de excepciones. (Dalloz: 1.º *Quest. prej.*, números 45, 48, 95 y 100 y año 1879, I, 237, y II, 141).'

La segunda regla es que la excepción esté fundada sobre un derecho personal del prevenido, puesto que éste no puede excepcionarse con el derecho de otro, ni con la falta de derecho en la personalidad del querellante. (Garraud: *Precis du droit crim.*, núm. 439). Así, se ha juzgado por los tribunales franceses, que el procesado no puede invocar una excepción prejudicial por actos de posesión que él hubiere ejercido sobre el terreno donde han tenido lugar los hechos incri-



minados, y que no podrían serle ni le eran personales, si se establece que el terreno no le pertenece. (Daloz: 1878, II, 148 y 149). De la misma manera, al prevenido que pretendiera haber obrado con permiso ó por orden del propietario del terreno, no le sería aceptable ese medio prejudicial de defensa, porque él vendría á tener como fundamento para rechazar la acción, tan solo el derecho de un tercero, cuando la acción se dirigía directamente contra él; por cuanto en semejante caso, no tiene calidad ninguna para proponer tales cuestiones á los tribunales civiles sobre derechos de propiedad que le son completamente extraños. Así, el arrendatario, aunque tiene un derecho personal sobre la cosa locada, no puede, sin embargo, deducir la excepción prejudicial de la propiedad, que sólo corresponde al propietario. (Daloz: V.º *Quest. prej.*, número 118 y suplemento número 60).

La última regla para que la excepción prejudicial sea aceptada por el juez de la prevención, es que ella sea verosímil, esto es, que se apoye sobre títulos aparentes ó sobre hechos de posesión equivalentes; porque si el procesado limita su defensa á una vaga manifestación de hechos, desnudos de todo fundamento, no deben ser aceptados, pues, de lo contrario, se dejaría en manos del prevenido el medio de demorar á su arbitrio la causa principal. Y como entra en las facultades del juez, la de examinar si las alegaciones del acusado son ó no verosímiles y aceptables, cuando éstas no reunan los caracteres de seriedad suficiente, ellas deben ser rechazadas, continuando, en tal caso, el juicio sobre la acción criminal pendiente. Es, pues, el juez del crimen el que debe apreciar y decidir sobre esta clase de defensas, que sólo revisten una alegación dilatoria. (Daloz: V.º *Quest. prej.*, números 131, 132 y 133; Le Sellyer: obra citada, tomo II, número 692; Garraud: obra citada, núm. 439).

Ahora bien; como la excepción de propiedad implica



la idea de que aquel que la opone es el propietario ó poseedor de la cosa, se sigue de ahí, necesariamente, que ella no puede ser invocada sino por el procesado personalmente: el juez no la puede suplir de oficio. (Dalloz: núm. 139; Le Sellyer: obra citada, núm. 621).

Cuando el prevenido deduce una excepción prejudicial que presenta todos los caracteres de seriedad requeridos por la ley, el juez del crimen debe suspender sus procedimientos y enviar el conocimiento de la nueva contienda, á los tribunales civiles. Como estas excepciones son perentorias, pueden ser deducidas por el prevenido en cualquier estado de la causa, y aun en estado de apelación; de manera que, si la excepción de propiedad reuniera todos los caracteres legales de admisibilidad y el juez del crimen, en lugar de sobreseer, pasara á otro juez el conocimiento del delito, cometería un exceso de poder. Una vez que el juez ha aceptado una cuestión prejudicial por considerarla procedente, no puede ordenar ninguna medida provisoria con relación á la materia de esa excepción, porque tal facultad está reservada exclusivamente á los tribunales civiles, que son quienes deben estatuir unicamente sobre el fondo de tales contiendas, con arreglo á los límites de su jurisdicción. (Dalloz: *V.º Quest. prej.*, números 140 al 149).

Pero puede darse el caso de que el derecho de propiedad invocado por el prevenido no sea negado por el contrario; en tal circunstancia, el juez que entiende la causa principal debe suspender sus procedimientos en ésta, ó, por el contrario, debe proceder á examinar si probada la existencia de tal derecho ha desaparecido ó nó el delito en cuestión? La mayoría de los autores opinan que cuando el derecho invocado por el prevenido ha sido reconocido ó no contestado, el juez del crimen debe aceptar de plano la excepción, y, dándola por probada, proceder á absolver al procesado en la causa, sin imponerle el cargo de hacer reconocer su derecho por el juez de lo civil, porque no



habiendo sido puesto en cuestión su derecho, sería inútil hacer constatar su existencia por otra jurisdicción. (Dalloz: *V.º Quest. prej.*, número 154; F. Hélie: obra citada, tomo VII, páginas 414, 428 y siguientes; Le Sellyer: obra citada *Traité de la comp.*, tomo II, número 693 y 694; Bertauld: obra citada, número 65; Hoffman: obra citada, tomo II, número 370).

No habría razón alguna para que el juez de la prevención no pudiera en aquel caso aceptar la excepción como un medio de justificación, así como tiene el derecho de rechazarla cuando se le presenta desprovista de fundamentos. Además, sería supérfluo enviarla á conocimiento de los jueces civiles, una vez que el querellante la hubiera reconocido ante el juez de la prevención.

Ahora bien; para negar que el contrato negado ha existido, como para juzgar que existe un principio de prueba por escrito y que, por lo tanto, es admisible la prueba testimonial según los términos de la nota del Presidente Barris, los tribunales de represión se hallan sometidos á las mismas reglas fijadas por el Código Civil, respecto de la prueba, las cuales rigen igualmente para ambas jurisdicciones, pues, como se decía en aquella nota, «los delitos son susceptibles de toda especie de prueba, pero el delito no está en el contrato cuya violación es el objeto de la persecución, lo está en la violación. El contrato que no es más que un acto civil, no puede ser probado, cuando él es negado, sino según la regla común á todos los contratos. Los tribunales de represión deben pronunciarse sobre los intereses civiles, pero la parte civil no puede obtener ante ellos sino aquello que obtendrían ante los tribunales civiles».

Estos principios resumen claramente toda la doctrina que las sentencias posteriores de la Corte de Casación Francesa no ha hecho sino aplicar constantemente, principios que han sido invariablemente aceptados por la doc-



trina y expuestos y comentados por todos los autores que han tratado esta materia, una de las más graves y difíciles del derecho, por las complicaciones y controversias que suscita en la práctica este género de contiendas.

Los principios y doctrinas que acabamos de recordar respecto de las cuestiones prejudiciales, han sido igualmente aceptados por nuestra legislación. Así, en el artículo 17 del Código de Procedimientos en lo Criminal se establece: que si la acción penal dependiese de cuestiones cuya decisión *competa exclusivamente á otra jurisdicción*, no se podrá iniciar juicio criminal antes de que haya decisión firme en la cuestión prejudicial.

Igual disposición consagra el artículo 1104 del Código Civil, estableciendo que las cuestiones prejudiciales serán únicamente las siguientes:

1.^a Las que versaren sobre la validez ó nulidad de los matrimonios.

2.^a Las que versaren sobre la calificación de las quiebras de los comerciantes.

Y el artículo 1105 del mismo Código, agrega: que con excepción de los dos casos anteriores, *ó de otros que sean exceptuados expresamente*, la sentencia del juicio civil sobre el hecho no influirá en el juicio criminal, ni impedirá ninguna acción criminal posterior sobre el mismo hecho,—cuya disposición concuerda con la del artículo 18 del Código de Procedimientos en lo Criminal, que declara ejecutorias en lo criminal las sentencias dictadas en lo civil sobre cuestiones prejudiciales.

Es esta la única excepción al principio general de que las sentencias en el juicio civil no hacen cosa juzgada en lo criminal. Sin embargo, la sentencia posterior sobre la acción criminal, no modificará en manera alguna la sentencia civil anterior pasada ya en autoridad de cosa juzgada.

El artículo 18 de la Ley de Reformas al Código Penal, establece también que no podrá intentarse la acción penal



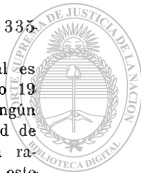
mientras no se declare el divorcio ante la jurisdicción civil, lo que importa declararla previa.

En el cap. VII de la Ley de Registro Civil, al tratar de las rectificaciones de las partidas del registro, se declara también en el art. 87 que el único juez competente para entender en estas cuestiones, es el de primera instancia en lo civil, lo mismo que para la aplicación de las penas establecidas en el artículo 92 de la misma Ley (artículo 95).

De modo que, con arreglo al artículo 17 del Código de Procedimientos en lo Criminal, que consagra el principio general de que las «cuestiones cuya decisión compete exclusivamente á otra jurisdicción...», suspenden el ejercicio de la acción pública, quedan de hecho reconocidas, de una manera expresa y general, las cuestiones prejudiciales que se hallen dentro de estos términos, que son precisamente los mismos consagrados por la doctrina, como acabamos de verlo; por cuanto los jueces del crimen no tienen jurisdicción sino para entender en aquellas cuestiones cuyo conocimiento les ha sido deferido expresamente por la ley de su organización, dejando al conocimiento de los jueces en lo comercial y en lo civil, todas aquellas otras que la ley ha declarado de su exclusiva competencia.

¿Cómo podría un juez de represión declarar, p. ej., en un proceso contencioso, que Fulano es hijo legítimo ó natural de Zutano; que tal inmueble es propiedad de A. y no de B.?; ¿qué jurisdicción tendría para entender en este género de controversias, exclusivamente del fuero civil? ¿y en caso que tal hiciera, qué efecto jurídico tendría tal declaración, hecha por un juez incompetente, por razón de la materia? ¡Es claro, que ninguna! como tampoco la tienen los jueces civiles para entender en cuestiones criminales.

El artículo 1 del Código de Procedimientos en lo Civil, establece de una manera concluyente que la jurisdicción



atribuída á los Tribunales de Justicia de la Capital es improrrogable, principio que se repite en el artículo 19 del Código de Procedimientos en lo Criminal. Bajo ningún concepto puede sostenerse entonces una promiscuidad de jurisdicciones en presencia de una separación tan radical y profunda como la que la ley ha hecho á este respecto.

Con arreglo al artículo 1104 del Código Civil, las cuestiones relativas á la validez ó nulidad del matrimonio son prejudiciales por declaración expresa de la ley.

Lo mismo declara tales á las que versaren sobre la calificación de la quiebra. No obstante que hoy no existe el juicio de calificación de la quiebra de que habla el artículo, que establecía el Código de Comercio anterior (1588), proceso que se hacía en un expediente por separado, con audiencia del síndico y del fallido, y en el cual se declaraba por el juez del comercio á qué categoría correspondía ésta, con arreglo al artículo 1513 y siguientes, esto es, si era casual, culpable ó fraudulenta, no por eso ha desaparecido la razón de ser de aquella disposición legal, pues siempre será una cuestión prejudicial la declaración de quiebra, con arreglo al principio que informa el artículo 1104 del Código Civil: declaración previa que deberá ser hecha por el juez de comercio, para que el fallido pueda ser sometido á juicio criminal.

«Hoy la legislación ha cambiado fundamentalmente, como decían los miembros de la Comisión de Legislación del Senado en su informe sobre la Ley de Quiebras de 30 de Diciembre de 1902. El juicio se inicia ahora por la convocatoria de los acreedores para deliberar sobre la cuestión del presunto fallido».

Organizada la junta é impuestos los acreedores de la situación, estudian el conflicto y lo resuelven en cualquiera de estas tres formas: 1.^a, concordato, concediendo esperas al deudor para facilitarle su giro; 2.^a, los acreedores se



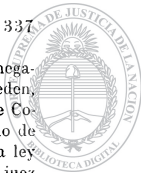
hacen cargo del activo y pasivo y desligan al deudor; y 3.^a, en que no hay arreglo posible y se pide la quiebra del deudor (artículos 1384, 1398, 1412 y 1421 del Código de Comercio).

Como se ve, la declaración de quiebra es necesariamente prejudicial á la acción criminal, de manera que ésta no puede intentarse sin que haya precedido aquélla.

Por otra parte, el art. 1422 del Código de Comercio establece que es el juez de comercio quien debe decretar la quiebra, nombrar los síndicos y dictar todas las medidas de seguridad que la misma ley establece, facultándolo, finalmente, para proceder al arresto del fallido en caso que éste no se presente y someterlo recién al juez de instrucción, mandando testimonio del informe de los interventores cuando resultaren indicios de culpa ó fraude (artículos 1431 y 1513 del Código de Comercio).

Como acaba de verse, de los propios términos de la ley, surge que es el juez de comercio quien únicamente puede dictar aquella resolución, la que sólo se produce al final de varias diligencias judiciales previas que pueden impedirla.

Por otra parte, si la calificación de la quiebra la establecía la ley como prejudicial, con mayor razón lo debe ser la declaratoria misma de quiebra, porque no puede haber calificación sin una declaración anterior de quiebra. Esto es lo principal; aquélla lo accesorio. Además, esta es una medida muy grave, sometida á una legislación especial y á un juez determinado, á quien se le ha dado exclusivamente la competencia para entender en esta clase de juicios. En igual sentido se pronuncian Hoffman: obra citada, tomo II, número 314; Delamare et Le Poitvin: *Traité de droit commercial*, tomo V, página 175 y siguientes; y Trebutien: *Cours élémentaire de droit criminel*, tomo II, página 68 y siguientes. Sin embargo, sobre este punto, las opiniones de los autores de hallan muy divididas y la juris-



prudencia francesa se ha pronunciado en un sentido negativo, esto es, ha decidido que los jueces de represión pueden, aun sin declaración previa de la quiebra por el Juez de Comercio, iniciar el proceso criminal y declarar tal estado de insolvencia. Pero, entre nosotros no pasa lo mismo; la ley ha sido clara y precisa, al declarar que es sólo el juez de Comercio, quien debe decidir tal estado de falencia y desde luego, esta decisión es necesariamente prejudicial á la acción criminal.

La ley, al atribuir á los jueces de comercio la competencia para declarar en estado de quiebra á un comerciante, les fija las reglas á las cuales deben someterse para declararlos en tal estado. Así, los dos hechos fundamentales que deben preceder á la declaración de falencia son: la constatación de la calidad de comerciante y la cesación general de pagos; dos circunstancias de apreciación difícil y delicada, que la ley ha querido reservar exclusivamente á jueces especiales.

Como decía el relator de la ley francesa de 28 de Mayo de 1838, «se ha reservado dicha apreciación expresamente al tribunal de comercio, quien ilustrado por el conocimiento y hábito de los negocios comerciales, puede pronunciarse con mejor conocimiento de causa sobre este cúmulo de circunstancias, cuya apreciación es de suyo difícil y muy delicada». De modo, que para que este pensamiento del legislador sea llenado, es menester reconocer que la competencia del tribunal de comercio es excluyente de toda otra jurisdicción.

Por otra parte, la seguridad del comercio exige que no se pueda sin un motivo muy fundado y grave intervenir en los negocios de un comerciante apoderándose de sus libros y papeles, por cuanto el más ligero principio de instrucción criminal les causaría un daño irreparable en su crédito y reputación. Para conciliar estos dos intereses, el de la sociedad que exige que ningún delito quede impu-



ne y el particular de los comerciantes, que igualmente requiere no sean molestados en su giro por fútiles causas, la ley ha dado á los tribunales de comercio y al Ministerio Público, especialmente, el poder para solicitar y declarar de oficio la quiebra de los comerciantes que se fuguen u ocultan sin dejar un representante que dirija sus dependencias y cumpla sus obligaciones (artículo 1379 del Código de Comercio).

La ley ha asegurado y resguardado así, á la vez, los intereses del comercio y los de la sociedad, dando al Ministerio Público la vigilancia y los medios de prevenir y castigar eficazmente los delitos que puedan cometerse por los comerciantes. Además, la quiebra no es un delito sino cuando reúne alguno de los caracteres de culpa ó fraude señalados por la ley, circunstancias que surgen sólo después de la tramitación de la causa formada ante el juez de comercio; de suerte, que hasta que aquella comprobación y declaración no hayan sido hechas por dicho juez, no existe el delito de quiebra y, por tanto, carecerá de razón de ser toda intervención de la justicia represiva en tal concepto.

Igualmente, con arreglo al art. 87 de la Ley de Registro Civil, son prejudiciales todas las cuestiones relativas á las inscripciones de partidas en dicho Registro, una vez que declara de la exclusiva competencia de los jueces civiles tales resoluciones.

Esta no es sino una consagración del principio general de derecho universalmente reconocido, como antes se ha visto, que todas las cuestiones relativas al estado civil de las personas, son de la exclusiva competencia de los jueces civiles, pues es á ellos á quienes la Ley Orgánica de los Tribunales vigente, les ha dado el conocimiento de todos los asuntos regidos por las leyes civiles, con las limitaciones previstas en las demás leyes de procedimiento.

DANIEL J. FÍAS.

DE LA REIVINDICACIÓN DE LAS COSAS ROBADAS, EN LO CRIMINAL

POR EL

DR. JESÚS H. PAZ



Sabido es que un socio puede acusar criminalmente á otro socio por defraudación, sin que se exija como requisito previo la presentación del contrato social, que, tal vez no existía. No podría, tampoco, alegarse para paralizar la querella, que no hubo demanda por rendición de cuentas.

Si el acusado negase ser socio del querellante, ó sostuviera que rindió cuentas i que las cuentas fueron aprobadas, el juez del crimen se pronunciará sobre la existencia ó inexistencia de la sociedad, ó bien, sobre la validez ó eficacia de la rendición de cuentas.

Si el hijo natural del causante, querella á sus hermanos legítimos por defraudación, en la herencia dejada por el *de cujus*, los acusados no podrían paralizar la querella so pretexto de que el hijo natural á quien le niegan su carácter de tal, no ha justificado previamente su personalidad.

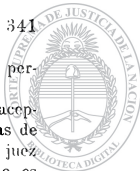


I, sin embargo, si un socio ocurriese á la justicia del crimen demandando por cumplimiento del contrato social ó por rendición de cuentas, si el hijo natural acudiese á esa misma jurisdicción por petición de herencia, las demandas serían rechazadas de plano, por ser manifiesta la incompetencia del juez del crimen para entender en esta clase de asuntos.

¿Cómo es, entonces, que en unos casos tienen jurisdicción los jueces del crimen para entender i pronunciarse sobre materias que entran por completo en las que la lei asigna á la jurisdicción civil? Por ser un principio inconcuso que el juez de lo principal lo es de lo incidental, por ser un principio inconcuso, que todo juez competente para conocer de un proceso criminal, lo es igualmente para decidir todas las cuestiones que se susciten con motivo de él, aún cuando no lo sería si se las propusiese separadamente. Esto, que enseña Haus, (tomo 2, número 1193, *Principios generales de derecho penal belga*), Larran (tomo 5, número 334), es doctrina corriente, preconizada por los tratadistas i aceptada por la jurisprudencia interpretativa de los Tribunales.

Nuestra Excma. Cámara de lo Comercial, Criminal i Correccional, ha hecho suyas las palabras de Haus: «El fallo » de las cuestiones civiles á que dé lugar el juicio criminal, » i cuya decisión no esté reservada expresamente á los » Jueces de lo Civil, corresponde á la jurisdicción de lo » criminal, que tiene atribución para resolverlas, aunque » conformándose á las reglas del derecho civil, concier- » nientes á las pruebas i particularmente á la prueba tes- » timonial».

Las únicas cuestiones civiles cuya decisión está reservada expresamente á los jueces de lo civil, en nuestra legislación, son las llamadas prejudiciales, i esto así, porque se ha respetado lo dispuesto por el Código Civil, no obstante que á juicio de gente entendidísima—yo participo del



mismo parecer—ha invadido una órbita que no le pertenece.

Es un principio inconcuso de derecho—repito—acoptado por todo el mundo, respondiendo á las exigencias de una buena i rápida administración de justicia, que un juez competente para conocer de un proceso criminal, lo es igualmente para decidir todas las cuestiones que se susciten con motivo de él, aún cuando no lo sería, si se las propusiese separadamente.

He recordado estos antecedentes, porque su olvido, á mi modo de ver, es la causa eficiente para que se resuelva mal la cuestión que me ocupa.

Efectivamente: suele decirse, por aquellos que niegan competencia al juez del crimen para entender en una reivindicación sobre cosas robadas, en los procesos que tramitan, que las cuestiones que versan sobre la propiedad i la posesión, son eminentemente civiles, i los jueces naturales para resolverlas, los jueces civiles.

Eminentemente civiles, son también, las cuestiones de sociedad, de estado civil (lugar que una persona ocupa en la familia), i, sin embargo, los que niegan competencia á los jueces del crimen para pronunciarse sobre el dominio de una cosa, no le desconocen para pronunciarse sobre la personalidad del actor, socio ó hijo natural.

Si llegásemos á aplicar el sistema opuesto al que sostenemos, tendríamos que negarle competencia al juez del crimen para ordenar el secuestro de una cosa robada que se encontrara en poder de un tercero extraño al delito. Porque, el poseedor de una cosa mueble, se presume propietario, menos en los casos expresamente exceptuados por la lei, i no puede ser privado de su posesión, sinó en virtud de un juicio que, versando sobre una materia esencialmente civil, debe tramitarse, para emplear las palabras que ellos usan, «ante los Tribunales civiles, que son los jueces naturales para resolver sobre las cuestiones posesorias en general».



No es, pues, la naturaleza de la cuestión á resolver, lo que determina la jurisdicción del juez, ó, para mejor decir, no es la naturaleza de las cuestiones incidentales á resolver, lo que determina la jurisdicción del juez, sino la naturaleza de la cuestión principal, en este caso, el proceso, lo que lo habilita para pronunciarse sobre esas otras cuestiones que se suscitan con motivo de él, aunque, por tercera vez, repetiremos á Haus, ellas no serían de su jurisdicción si se las propusiese separadamente.

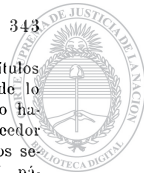
Pero, no sólo por las razones expuestas i que serían suficientes, es aceptable la solución que proponemos, sino aún por las que emanan de los textos mismos de la lei positiva, i á los que, desgraciadamente, se suele acudir interpretándolos á la letra, aún cuando choquen con conclusiones que aconseja la justicia.

El artículo 204 del Código de Procedimientos, establece: «En los casos de delitos contra la propiedad, el damnificado que no quiera entablar la acción criminal, tendrá intervención en el sumario, al sólo objeto de hacer constar la propiedad de la cosa que reclama».

Se nota que el artículo no faculta para reclamar la restitución de la cosa, sino para hacer constar la propiedad de la misma.

Si el Código de Procedimientos diese jurisdicción á los jueces del crimen, para declarar el derecho de poseer ó para negarlo, al que se titula propietario, así lo diría, mientras que, i por el contrario, sólo se refiere al derecho del damnificado de intervenir i al sólo objeto de hacernos constar la propiedad.

Nuestros Tribunales no han interpretado uniformemente el alcance de la lei, i así, en algunos casos ha resuelto la Excelentísima Cámara, «que habiendo contradicción de partes, sobre á quién deben entregarse los títulos robados, entre el querellante, que se dice dueños de ellos, i los poseedores, que sostienen ser poseedores de buena fe, no



»ha podido decidir á quién deben entregarse los títulos »embargados y depositados á su orden». (Cámara de lo Criminal, tomo 24, página 219). I en otros, que «no ha »biendo probado el opositor á la entrega, que su poseedor »era de mala fe, ella procedía, aún cuando los objetos se »cuestrados sean el cuerpo del delito». (Tomo 17, página 384).

«I resultando (se lee en el tomo 41, página 322), que el querellante R. O., ha probado plenamente la propiedad de los cigarros defraudados, desprendiéndose de autos suficientes sospechas para considerar que la compra de P. L. P., no ha sido de buena fe, hágasele de ellos entrega á aquél, etc., etc.».

I la Excm. Cámara, al confirmar la resolución del Inferior, por sus fundamentos y atento á lo dispuesto por el artículo 2768 y concordantes del Código Civil, dice claramente que los jueces del crimen tienen competencia para decidir cuestiones sobre reivindicación de cosas robadas que han dado márgen al proceso.

I esta diversidad de opiniones, existe igualmente en el foro, y entre los pocos que han estudiado nuestro Código de Procedimientos.

Yo creo que el artículo 204, puede i debe ser interpretado, dándoles á los jueces del crimen jurisdicción para pronunciarse sobre á quién le pertenece la cosa robada, i que este temperamento, que lo exige la seguridad de los derechos, economía de tiempo i de gastos, no choca, en modo alguno con la letra i con el espíritu del susodicho artículo.

¿Cuál es el origen inmediato del artículo?

En la doctrina se ha discutido y se discute aún, ante qué jurisdicción deben intentarse las acciones para la indemnización de los daños causados, encontrándose divididas las opiniones en dos campos: los que están por la civil, y los que están por la criminal.



I la discrepancia de opiniones ha trascendido á los códigos. Legislaciones hai, que se pronuncian por la jurisdicción civil, i legislaciones hai que se pronuncian por la jurisdicción del crimen.

I en países del tipo nuestro, se discute también si la materia corresponde ser legislada por los códigos llamados de fondo, ó por la lei procesal.

Nuestro Código Civil, por ejemplo, estatuye, que compete á la jurisdicción civil, i por lo tanto, que es punto que debe ser legislado por él. Diré, mui de paso, que yo entiendo que es propio de los Códigos de Procedimientos. (1)

El proyecto de Código Penal, redactado por los doctores Piñero, Rivarola i Matienzo, se pronuncia por la jurisdicción del crimen: «Cada rama del derecho conserva » su independencia. El juicio civil sólo producirá efectos » penales, incluyendo entre éstos la reparación debida á » las víctimas de delitos, como es lógico i justo». (*Exposición de motivos*, página 120.)

Los doctores Montes de Oca, Malaver i Obarrio, en el *Proyecto de Código de Procedimientos en lo Criminal para la Provincia de Buenos Aires*, daban jurisdicción á los jueces del crimen para entender en la acción civil emergente del delito, siempre que así lo quisiese el damnificado:

(1) Así debe pensar, también, el mui ilustrado profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Tomás Jofré, cuando en su notable obra *Procedimiento Criminal Argentino*, establece en el artículo 91 de su Código de Procedimientos, en materia penal: «La acción para la indemnización de los daños causados por delitos, se ejercerá ante la jurisdicción civil, de acuerdo » con las prescripciones de los artículos 1096, 1098, 1099, 1100, 1102, » 1103 y 1106 del Código Civil». Pues, va de suyo, que si él creyese que el tópico no es de incumbencia de un Código de Procedimientos, no lo legisla, dado el régimen establecido por nuestra Constitución Nacional, i atento á que sería una injusticia atribuirle repeticiones inútiles, que en la codificación son perjudiciales.



«La acción civil puede ser ejercida ante el mismo juez, »i al mismo tiempo que la acción penal».

«Puede, también, ejercerse separadamente ante el juez »civil, debiendo quedar, en este caso, suspendida, la pro- »secución del juicio, hasta la resolución definitiva sobre la »acción penal, intentada antes que la acción civil ó du- »rante su ejercicio. (Artículo 28).».

I como el damnificado pudiera no querellar, i no que- rer acudir á la jurisdicción civil, le da derecho de inter- venir en el sumario:

a) Para hacer constar la propiedad de la cosa que reclamase;

b) I los daños i perjuicios que hubiese sufrido, i su importe;

c) I para asegurar la restitución, reparación ó indemnización correspondiente.

El artículo 263 del título III «De la instrucción», dice á la letra: «El actor civil tendrá en el sumario, solamente »la intervención necesaria para hacer constar la propiedad »de la cosa que reclamase, i los daños i perjuicios que »hubiese sufrido i su importe, i para asegurar la restitución, reparación ó indemnización correspondiente».

Se sanciona nuestro Código de Procedimientos, i guarda silencio respecto á la competencia de los jueces del crimen para entender en demandas por indemnización de los daños causados por delitos, por creer, supongo, que el punto ya estaba legislado en nuestro Código Civil.

I no dándoles competencia á los jueces del crimen para entender en estas acciones, suprime los dos incisos últimos del artículo 263 del citado proyecto de los doctores Montes de Oca, Malaver i Obarrio, i deja el primero, en los términos que se leen en el artículo 243.

La suspensión está bien hecha, dentro del Código. Si pues, el juez del crimen no tiene jurisdicción para entender en acciones sobre daños y perjuicios que se hubiesen sufri-



do, el juez sumariante no tendrá porqué, ni para qué hacer constar el importe de esos daños y perjuicios, ni decretar medidas para asegurar la restitución, reparación ó indemnización correspondiente; pero acordándole jurisdicción para resolver si le pertenece la cosa que reclama, le da derecho para intervenir en el sumario, al sólo objeto de hacer constar la propiedad de esa cosa.

A no ser así, se suprime totalmente el artículo 263, i no tendríamos el artículo 204.

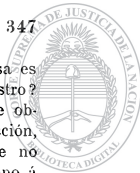
¿Qué objeto habría en permitirle al damnificado hacer constar en el sumario la propiedad de la cosa que reclama, si el juez del crimen no ha de poderse pronunciar sobre la eficacia de la prueba que recibe, ó, en otros términos, si el juez evidenciada la verdad de que la cosa reclamada es del damnificado, no ha de poder decretar su entrega?

Darle intervención en el sumario al sólo objeto de hacer constar la propiedad de la cosa que reclama, i quitarle al juez la facultad de ordenar la entrega de ella si el damnificado demuestra pertenecerle, es algo que yo no entiendo, amén de que pareceme, sería atribuirle al legislador un propósito que en modo alguno puede suponerse lo haya tenido: conferir un derecho ilusorio i aumentar un trabajo estéril.

En cambio, si se establece que el damnificado que no asume el rol de querellante, puede intervenir en el sumario al sólo objeto de recuperar la cosa de su propiedad, por ende, que el juez del crimen, justificado el dominio, está en el deber de mandarla entregar, si esto se establece, se habrá interpretado el artículo de acuerdo con lo que exige la lógica y la justicia.

Cuando un juez dicta un auto, tiene facultad para dejarlo sin efecto.

¿Porqué, en virtud de qué, si ordenando el secuestro de una cosa, aparece el propietario reclamándola, demues-



tra su derecho á poseerla, lo convence de que la cosa es de él, porqué, en virtud de qué, mantendría ese secuestro?

Finalmente, no adivino qué ventajas prácticas se obtendrían con quitarle al juez del crimen esta jurisdicción, con hacerle amontonar inútilmente una prueba que no va á considerar para nada, con hacerle perder tiempo á él i al damnificado, i á este último obligarle á gastos improductivos, no adivino, decía, qué ventajas se obtendrían con multiplicar los pleitos (1), que el legislador debe evitar, i entregar la decisión de un punto á otro magistrado que empezará por conocer lo que su colega ya conoce

Las leyes deben interpretarse con un criterio eminentemente científico, i por lo tanto, práctico, haciéndolo decir decir al legislador lo que debiera decir, lo que convenga á la relación jurídica que diga, porque las leyes son dictadas por hombres i para sociedades cuyas necesidades cambian i se multiplican, i por lo mismo, no pueden ser previstas en toda su intensidad ni en todos sus aspectos, ni es dable estar modificando la lei día á día, momento á momento.

Lo que no ha hecho el legislador, porque no ha sabido, ó porque no ha podido, lo hace el juez, el abogado, su mejor colaborador. Los jueces i los abogados mejoran la lei sin tocarla, i preparan la tarea cuando no la hacen, al legislador.

I todo esto, por si el texto del artículo 204 del Código de Procedimientos, no fuese claro.

JESÚS H. PAZ.

(1) La estadística de los pleitos, es un buen elemento para apreciar el estado de una sociedad i el número de fallos que en un día pronuncian los Tribunales, suele hacer pensar, no tanto en el trabajo que realizan, cuanto si la justicia habrá sido servida.





CUESTIONES PREJUDICIALES

LA SENTENCIA CIVIL Y CRIMINAL

§ 19. La concurrencia de las dos acciones que pueden surgir de un mismo hecho, *una civil, otra criminal*, ha sido resuelta por nuestro Código Civil, á favor de esta última.

El artículo 1101 así lo declara al sentar como regla general que, concurriendo las dos acciones, no habrá condenación en lo civil hasta que la haya en lo criminal. El 1102 y 1103 completan el principio, estableciendo que si el juicio criminal ha sido contrario al acusado, no se podrá negar en el civil, ni su responsabilidad, ni la existencia principal del hecho que constituye el delito, y si por el contrario el procesado hubiere sido absuelto, no se podrá alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre que hubiese recaído la absolución.

(1) Del libro de uno de los autores del presente, *Efectos penales de la quiebra*. reproducimos algunos párrafos que completan el comentario de ciertos puntos tratados en esta obra.



La recíproca ha tenido la misma solución. «La sentencia, dice el artículo 1105, del juicio civil sobre el hecho, no influirá en el juicio criminal, ni impedirá ninguna acción criminal posterior intentada sobre el mismo hecho ó sobre otro que con él tenga relación. Se exceptúan las cuestiones prejudiciales».

El punto de vista tomado por el legislador, resueltamente favorable al predominio de la acción, del procedimiento y de la sentencia criminales sobre los civiles, se explica por la naturaleza distinta de la cuestión que en uno y otro juicio se debate, social en uno, individual en otro, siendo parte en aquél la misma sociedad ofendida representada por el Ministerio Público, siendo en éste contendientes, los particulares directa y exclusivamente interesados.

Pero la excepción que el artículo introduce, tiene fundamentos no menos sólidos.

COMO SURGE LA PREJUDICIALIDAD

§ 20. Con su claridad de estilo acostumbrada, el más ilustre de los penalistas italianos modernos lo ha dicho:

» Admitida hoy por todos los pueblos cultos la existencia de una jurisdicción penal distinta de la civil, con jueces y procedimientos distintos, sucedía que ni el Juez Civil tenía autoridad para conocer del delito como delito, ni el Juez de lo Criminal tenía facultad para estatuir sobre el derecho, real ó personal, controvertido entre las partes. Pero hay un principio general, de orden público, que exige que se evite el escándalo que producirían dos sentencias contradictorias, y en virtud de esta regla superior debió establecerse que en los dos juicios, cuando versaren sobre idéntico objeto principal, no se



» procediese á la vez, sino que uno de los dos se suspendiera para esperar el fin del otro.

» Como regla general y atendiendo á que el juicio civil está establecido en oposición al juicio criminal, aquél en interés privado y éste en interés público, se ha establecido la *precedencia ó prioridad* de éste.

» Pero puede suceder que un derecho privado no puede nacer, si antes no se reconoce en un hecho humano la cualidad del delito, y por el contrario, que un hecho humano no pueda declararse delito, si antes no se ha estatuido sobre la pertenencia de un derecho dado del particular que se dice ofendido. (1) Esta hipótesis es la que ha dado origen por necesidad lógica á una teoría de la *prejudicialidad* que vino á limitar la regla general de la *prioridad*, exigiendo la fuerza de las circunstancias, de un modo imperioso, que el juicio criminal detenga su marcha (2) hasta el término del juicio civil». (3)

§ 21. No era esto desconocido en derecho romano: las *Instituta* de Justiniano citan las cuestiones sobre libertad y sobre filiación. *Prejudiciales acciones in rem esse videntur, quales sunt per quas quæritur an aliquis liber an libertinus sit vel de partu agnoscendo.* (4)

En Roma, sin embargo, por lo menos en los últimos tiempos, estas cuestiones prejudiciales no provocaban conflicto alguno: las resolvía el mismo juez que fallaba sobre la cuestión principal, considerándolas como meros incidentes del juicio.

Las Partidas daban en todos los casos preferencia á

(1) O sobre la existencia de un estado de derecho civil productor de perjuicios.

(2) O no se inicie.

(3) *Carrara* «Lineamenti de práctica legislativa penale: — 13.

(4) Libro IV. Tit. 6.º



la cuestión criminal, dejando al querellante que luego acudiera, si quería, ante el juez civil. (1)

La reforma que en este punto han establecido las legislaciones modernas, arranca de la famosa *Acordada* de la Corte de Casación francesa, de 5 de Noviembre de 1813 y que se conoce con el nombre de *Nota Barris*, cuyos artículos encierran en germen toda la doctrina que después ha sido desarrollada por los tratadistas. El 2º es el de notarse:

«Los tribunales criminales, dice, pueden y deben conocer de los contratos cuya violación caiga bajo la sanción del artículo 408 del Código Penal. (1) Cuando la existencia del contrato se negase ante ellos por la parte perseguida en razón de dicha infracción, aquellos tribunales deben juzgar la cuestión prejudicial de la existencia del contrato: es un principio admitido que todo Juez competente para estatuir sobre un proceso del que está conociendo, lo es para conocer y resolver las cuestiones que se susciten incidentalmente en el mismo proceso, aunque esas cuestiones estuviesen fuera de su competencia. (L. 3, Cód. *De judicis*). Si no puede separarse la prueba del delito de la convención, la competencia en cuanto al delito que constituye la acción principal, lleva necesariamente consigo la competencia sobre el contrato, cuya negación no es otra cosa que la excepción á esta acción y como los tribunales criminales deben resolver en cuanto á los intereses civiles de las partes, deben tener facultad para juzgar sobre la existencia ó validez del contrato al que se refieren esos intereses civiles».

No entra en los límites de este discurso analizar los distintos casos hipotéticos y los no menos variados pun-

(1) La demanda de aquel que dice que siendo el tenedor que se la tomaron por fuerza debe ser oída primeramente et librada segund derecho. Ley 18, Tit. XI, Par. 7.º

(2) Se ocupa de la estufa.



tos de vista adoptados por las legislaciones; (1) bastará á nuestro objeto una breve exposición doctrinal.

ESPECIES DE CUESTIONES PREJUDICIALES

§ 22. Conviene ante todo distinguirlas de las *cuestiones previas*. Unas y otras tienen de común el reclamar Una decisión *anterior* á la de una cuestión *ulterior*. Pero las previas tienen por objeto 'suspender el ingreso al juicio y se formulan en artículo que se llama previo y es de especial pronunciamiento: son incidentes de un asunto principal y no tienen, por sí, valor propio ni existencia real, de modo que, separadas de dicho asunto, no podrían ser objeto de procedimiento alguno.

En cambio, las prejudiciales tienen por sí mismas existencia y valor propio que llega á veces hasta reclamar un procedimiento (y quizá una jurisdicción) aparte del juicio principal.

Las previas siempre las resuelve el mismo Juez que entiende del asunto principal, en virtud del principio de que el Juez que tiene competencia para conocer una causa determinada, la tiene para todas sus incidencias. Como se proponen en forma de excepciones, si el Juez las estima procedentes, sobresee en la causa: tal pasa, en lo criminal, con la prescripción, la amnistía, el indulto, que son cuestiones que reclaman la prioridad sobre la principal, la contienen, la hacen *improponible*. (2)

(1) La teoría más completa la desenvuelve el Código de Instrucción Criminal de Bélgica.—Art. 15, 16 y 18.

(2) Este neologismo es de Borsari citado por Covian y Junio—*Procedimiento penal teórico-práctico*.

Haus, citado por el mismo autor español, pone un sugestivo ejemplo de cuestión previa: un penado se evade de presidio: vuelto á capturar, ante todo ha de identificarse su persona sin lo que no puede castigársele. Esto es una cuestión previa, por que suspende el ejercicio de la acción pública. *sin ser elemento de la infracción penal*.



En cambio, las prejudiciales plantean, *ipso facto*, una cuestión de jurisdicción ó de procedimiento.

§ 23. Con los dos términos, *civil* y *criminal*, pueden imaginarse cuatro combinaciones:

Cuestiones *civiles* prejudiciales de una cuestión *civil*.

Cuestiones *civiles* prejudiciales de una cuestión *penal*.

Cuestiones *penales* prejudiciales de una cuestión *civil*.

Cuestiones *penales* prejudiciales de una cuestión *penal*.

¿Tienen existencia real, ó son posibles jurídicamente, los cuatro casos propuestos?

En primer lugar, es innegable la existencia de *cuestiones civiles que son prejudiciales de una cuestión civil*: tales son, por ejemplo, en un juicio, para uno obtener la declaratoria de herederos, la cuestión propuesta por los demás herederos sobre la filiación legítima del demandante; en un juicio también sucesorio, un hijo se presenta á reclamar su parte en la herencia y se le objeta que ha sido desheredado. Mientras, en el primer caso, no se resuelve el punto de la filiación, y en el segundo, el de la desheredación, no pueden progresar los respectivos juicios. Pero estas cuestiones no ofrecen dificultad alguna ni por la competencia que es siempre la del mismo Juez Civil (1) ni por el procedimiento que es también el mismo. En rigor no son *pre-judiciales*, sino *intra-judiciales*.

Pero ya surge la dificultad, cuando se trata de *cuestiones civiles prejudiciales de una cuestión penal*. ¿Cuál procedimiento se seguirá para resolverlas? ¿Qué juez será el competente para conocer de ellas?

Son estas las verdaderas cuestiones prejudiciales: la que forma el asunto de este discurso es una de ellas. Aquí nos limitamos á señalar su posibilidad jurídica.

(1) En los pocos casos que ofrecería dificultad la competencia distinta por razón de la cuantía, la ley la suprime, considerando la cuestión prejudicial, como accesoria de la cuestión ulterior, que es la que determina la jurisdicción.



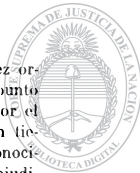
La tercera categoría: *cuestiones penales prejudiciales de una cuestión civil*, tienen también existencia posible jurídica, pero domina en nuestro derecho una idea de gran simplicidad: el predominio de la cuestión penal sobre la civil. El ejemplo clásico es el de un individuo demandado al pago de una obligación consignada en un documento, que niega la autenticidad de éste y sostiene que se ha cometido una falsedad. Lo primero que habrá que ventilar aquí antes de exigir el cumplimiento de la obligación civil, es la acusación criminal. Y esto por el Juez del Crimen y dentro de sus propios procedimientos.

La sentencia que él dicte no podrá ponerse en tela de juicio en la jurisdicción civil. En realidad no son cuestiones prejudiciales propiamente dichas las de esta categoría: son cuestiones judiciales.

En cuanto a las de la cuarta categoría, las *cuestiones prejudiciales penales de una cuestión penal*, convienen los tratadistas en que tampoco merecen el nombre de prejudiciales. Es el mismo Juez el que en caso de dos delitos, uno medio y otro fin (falsedad y bigamia, falsedad y estafa) tiene que juzgarlos y en la misma sentencia. (1)

No debe inducir en una teoría opuesta la disposición del artículo 38 del Código de Procedimientos criminales para la justicia nacional, que prevé el caso de delitos cometidos por una misma persona y que uno de ellos es de competencia de los tribunales nacionales, mientras del otro deben conocer los tribunales del fuero común. La ley da la preferencia al Juez Federal, no pasando el procesado a disposición del juez ordinario ó local hasta ejecutoriada la sentencia del primero. Aquí se establece una mera

(1) La dificultad que pudiera surgir por la razón de la cuantía (ser el delito fin, por ejemplo, correccional: estafa de menor cuantía) queda resuelta atribuyéndose en todos los casos al Juez del delito más gravemente penado—sea fin ó sea medio—el conocimiento del delito más leve que pasa á constituir una simple agravación de aquél.



regla de prioridad ó precedencia, pero teniendo el juez ordinario, plenitud de jurisdicción para resolver el punto que se le somete, con prescindencia de lo resuelto por el Juez Federal respecto del otro delito en que también tiene plena jurisdicción éste, no puede decirse que el conocimiento del delito «nacional» forme una cuestión prejudicial respecto del otro. (1)

En resumen, de las cuatro combinaciones lógicamente posibles, no hallamos más que una en que aparezca la necesidad de una teoría de la prejudicialidad: la que comprende las *cuestiones civiles prejudiciales de una cuestión penal*.

SU DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

§ 24. Limitado, por eliminación, el campo de las cuestiones prejudiciales verdaderamente tales, cabe definir las:

Son cuestiones civiles que se plantean como anteriores á la sentencia del juicio criminal y que antes de ser resueltas, ó por el mismo juez de lo criminal ó por la jurisdicción civil, suspenden y detienen el progreso del juicio penal ó impiden que éste se inicie. (2)

De esta definición surge una clasificación de las cuestiones prejudiciales con arreglo al juez que debe resolverlas, porque, ó bien será el mismo Juez de lo Criminal ante quien se ha planteado quien conocerá de ellas y las resolverá, ó bien es el Juez de lo Civil el llamado á fallarlas, diferenciándose todavía este último término, se-

(1) El punto no aparece siquiera indicado en los tratadistas europeos, por que allí no podría darse el caso; pero tenemos la seguridad de que si lo hubiera tocado algún autor nacional (ó si lo ha previsto algún tratadista norte-americano, cosa que ignoramos), la solución no sería otra que la que le hemos dado.

(2) De las definiciones de Gamás, Bonnier, Rens y Covian, hemos deducido la nuestra que creemos comprende los caracteres esenciales del objeto definido.



gún la cuestión prejudicial surja ante el Juez de lo Criminal, que se ve obligado á suspender todo procedimiento, ó ella se plantee antes de que se inicie el procedimiento criminal. (1)

LAS QUE RESUELVE EL JUEZ DEL CRIMEN

§ 25. Constituyen el primer término de la clasificación. Se cuentan y enumeran por los autores las siguientes:

A—Las cuestiones de derecho civil á que puede dar lugar la propiedad ó posesión de las cosas muebles. No ofreciendo estas cuestiones gran complicación por el principio admitido de que la posesión de las cosas muebles equivale al título de dominio, se ha creído que podían muy bien dilucidarse ante el Juez de lo Criminal con los medios ordinarios de prueba que ante el mismo se practican y con la libre apreciación que se le confiere para fallar.

B—Las que versen sobre la existencia de contratos ó convenciones anteriores ó coexistentes con la infracción penal, y formando ésta y aquéllos un solo acto.

C—Las del estado de ciudad (extradición) y del de familia (el cónyuge, por ejemplo, en los casos de uxoricidio, atentado á la propiedad, etc.)

D—Las de supresión, destrucción ó sustracción de un título y su misma existencia, que el Juez ha de resolver al mismo tiempo que sobre la infracción.

(1) Esta subdivisión no es conocida de los autores que se ocupan en estas materias. Sin embargo, sin ella, la cuestión prejudicial de la quiebra, no tiene filiación lógica. Se sale del paso diciendo que es especial. ¡Y tanto! No es del caso el estudio de otras clasificaciones admitidas.



LAS RESERVADAS Á LA JURISDICCIÓN CIVIL.

§ 26. El segundo término de la clasificación, comprende las cuestiones que *por su importancia ó trascendencia, ó por la dificultad que presenta su resolución, ésta escapa á la jurisdicción de los tribunales de represión. Generalmente los Códigos las limitan á determinados casos; el nuestro solo enumera dos*

*
* *

DE LA PRUEBA EN EL JUICIO CRIMINAL.

§ 44. El principio fundamental en esta materia fué elegantemente expuesto por Julio Claro en una frase, la misma que hemos dado por lema del discurso:

Si en el juicio criminal se produjera algún acta, puede el reo decir que las actuaciones levantadas en el juicio civil no hacen fe en el criminal, ni aun la sentencia (civil) que hubiese recaído sobre (el hecho de) el mismo crimen.

Y, añade el glosador, «ni aún la confesión hecha en el juicio civil hace plena prueba en el criminal»: *confessio facta in iudicio civili, non facit in iudicio criminale plenam probationem.*

Lo hemos dicho: lo que el Juez del Crimen busca, es *formarse una convicción* sobre el hecho delictuoso cuyo conocimiento se le ha sometido.

Una *convicción*: en lo penal no puede satisfacerse al Juez con aquella «suficiente persuasión ó urgente probabilidad» que puede bastar para adoptar una determinación en los negocios ordinarios de la vida, y que desde luego es suficiente para que el Juez civil falle el asunto de que conoce. En lo criminal el Juez necesita adquirir una *plena seguridad*, un íntimo convencimiento de que el reo



es culpable y merece una pena: en caso de duda debe absolverle.

Ahora bien, el Juez no tiene á su disposición más que dos medios (1) para adquirir esta certeza: las *presunciones* y las *pruebas*.

Las presunciones son *circunstancias probabilísimas tenidas como ciertas, pero que, sin embargo, pueden ser contradichas*. Son un sustituto de la prueba verdaderamente dicha. Se diferencian de los *indicios* en que éstos se *deben* probar, mientras que las presunciones se *tienen* por probadas, y al que las niega incumbe la prueba de lo contrario á ellas.

Enumerar esas presunciones, además de inútil, sería cosa imposible por su gran variedad y su gran número. Sería, además, peligroso que el legislador se detuviera en esto y las limitara taxativamente.

Pero hay casos en que el legislador, por unas ú otras razones, se cree obligado á establecer una determinada presunción legal y se la pone como tal al Juez, salvo siempre la prueba en contrario. Uno de estos casos y el más señalado, es el del artículo 6 del Código Penal, que en nuestro tema se confunde con la decisión del Juez de Comercio de ser la quiebra culpable ó fraudulenta. (2)

Con esta presunción por base, el Juez del Crimen procede á aquilatar las pruebas que ofrece el proceso.

§ 45. Las pruebas las define el mismo Ellero: «como » conjunto de circunstancias que se someten á los sentidos » del Juez y las cuales ponen de manifiesto el contenido

(1) Ellero—Certidumbre en los juicios criminales, § 3.

(2) Actualmente lo equivaldría el informe de los contadores, al no existir ya por la nueva ley, calificación de la quiebra, si bien á los efectos de la prejudicialidad, importaría lo mismo la resolución del Juez de Comercio que ordena el envío al de Instrucción de los antecedentes de la quiebra. (Véase en el tomo I, pág. 38 y en el presente, pág. 319).



» del juicio, es decir, la material ejecución del delito», ó en otros términos: «los atestados de personas ó de cosas » acerca de la existencia del hecho criminal». Comprenden no solo las *probationes probandae* ó á probarse, sino también las que se consideran prueba preconstituída, *probatio probata*, (1) que derivan de las presunciones legales en el caso nuestro, de las *presunciones legales* que sobre la base de la presunción legal y afirmándola ó contradiciéndola (según el texto del mismo artículo 6) vienen á mezclarse con las demás pruebas que se crucen en el progreso del juicio, tales:

- La confesión;
- La de testigos;
- La inspección ocular;
- La de peritos;
- La documental;
- La de indicios.

Para no dar proporciones desmedidas al discurso, nos limitaremos á señalar su especialidad en el caso que nos ocupa.

§ 46. Hay en lo civil un género de probanzas que no producen la certidumbre real, sino una certeza puramente ficticia con la cual debe contentarse el Juez; las llama Mittermaier, *pruebas formales*, como ser las que se derivan del juramento, de las rebeldías, de la contestación evasiva y en general todas las que se declaran tales en virtud de la efectividad de un apercibimiento impuesto de antemano por el Juez á los litigantes.

Tales pruebas no tienen eficiencia en lo criminal, procedimiento que las rechaza, por cuanto la situación del Juez del Crimen es distinta, como ya hemos dicho, de la del Juez Civil. Este tiene que decidirse forzosamente entre

(1) Ricci. Tratado de las pruebas, § 3.



las dos alegaciones que se le plantean, alternativa en que no se halla el Juez del Crimen que no tiene en vista más que la verdad, no la convencional de la *litis contestatio*, sino la *real, la material* ó de fondo á la cual llega en virtud de la certeza que se forma.

Es cierto que la absolución de posiciones por el querellante, es comunmente admitida, pero ni su absolución en rebeldía, ni el mismo perjurio del absolvente, pueden tener en lo criminal el efecto que en lo civil; podrán quizá afectar al querellante en sus intereses, pero no mejorarán la situación del reo, porque no aportan al procedimiento ningún dato real y positivo.

§ 47. Análoga observación cabe respecto de la *prueba documental*. Aún en lo civil, Bonnier, (1) advierte que la presunción legal que se deriva de los documentos públicos ó de los privados reconocidos en juicio, no puede atar en todos los casos la libre convicción del Juez. Desde luego, en lo criminal, nunca podrá tener más fuerza que en lo civil. Comunmente se le atribuye la misma.

Así se dice que «los instrumentos públicos constituyen plena prueba á menos que sean enervados por otras pruebas;» (2) «que los escritos privados, reconocidos en su firma y en » su contenido, constituyen contra el que hace el reconocimientos la misma prueba que los públicos;» (3) pero en realidad, esta prueba no tiene preferencia respecto de ninguna otra. En materia criminal no hay jerarquía entre las pruebas, ni el Juez se ve cohibido, en su libre apreciación, por otras reglas que las puramente críticas.

(1) Tomo 2º N.º 573. Tratado de las pruebas de derecho civil y penal.

(2) Art. 349 Cód. de Proc. citado.

(3) Art. 350 *ibidem*. Obsérvese que el principio se establece con más timidez que en lo civil, donde basta el reconocimiento de la firma que es presunción del de su contenido. Además, en lo criminal no se puede obligar al reo al reconocimiento (artículo 351). En todo esto domina el principio de la imperfección de esas pruebas.



Así la importancia decisiva que *los libros de comercio* tienen como medio de prueba contra su autor, en lo civil ó comercial, en lo penal no serán más que una de tantas pruebas que quizá, por venir incluida en la presunción general que importa la decisión de la cuestión prejudicial, será la que menos deberá tener en cuenta el Juez del Crimen, al apreciar el conjunto de la prueba.

§ 48. La prueba *testifical* dentro de las condiciones que la ley fija para su producción en juicio y especialmente juzgada á la luz de los preceptos de la sana crítica, es medio de prueba que en lo criminal suele ser decisivo, ya por relacionarse con los demás medios, ya por constituir una atestación directa de la misma materialidad del delito. Por el primer aspecto, que es el más frecuente, la prueba *testifical* se correlaciona con la de indicios, ó con la escrita, ó con la confesión (una de las formas de la *extrajudicial*), ó con la *pericial*.

Esta misma prueba (*testifical* y *pericial*) suelen dominar en lo criminal, así como en el procedimiento civil dominan la de confesión y la *documental*.

Respecto á la prueba que surge de *la confesión* del mismo acusado, y dejando aparte lo que ella tenga de prueba formal, debemos advertir que se la admite en lo penal con ciertas limitaciones que en realidad la dejan reducida á no ser otra cosa que un testimonio más, el cual tiene que discernirlo el Juez y aquilatarlo con la misma severidad que cualquier otro que se produzca.

§ 49. Uno de los medios de prueba más decisivos dentro del procedimiento criminal, es la prueba de *indicios*. En el caso especial que nos ocupa, tienen los indicios *excepcional* importancia, pues su mera existencia en lo comercial es bastante para iniciar el juicio criminal, es decir, que ellos pueden ser bastante para que se establezca la presunción de criminalidad que á su vez podrá ser des-



truida (entre otros medios de prueba y aún sin ellos) por nuevos indicios.

Indicio, dice Ellero, *es aquella circunstancia probable, de la cual se induce una prueba de otra circunstancia que se investiga.*

O, inversamente, es la *inducción de un hecho desconocido, en virtud de otro conocido.* (1)

El indicio prueba aquella circunstancia á que se refiere *como necesaria*: la necesidad entre el indicio y lo «indicado» nace de que aquél, considerado como efecto, no puede tener otra causa que éste. Cuando algún efecto puede tener varias causas (la fuga, por ejemplo, que puede ocurrir á consecuencia de un delito ó por cualquier otro motivo) debe procederse, examinando otros efectos que, ligados con aquél, dan á conocer que, todos juntos, ~~no~~ tienen, ni pudieron tener más que una sola causa; en este caso no tenemos el indicio *necesario*, sino el indicio *probable*, siendo preciso averiguar la causa verdadera entre tantas posibles. Lo que pasa es que ese indicio *probable* se trueca en *necesario* cuando con las otras pruebas (entre ellas, quizá otros indicios) se van rechazando todas las hipótesis posibles, excepto una sola.

Dejando á un lado, como ajena á nuestro propósito, la consideración de los indicios que se llaman *subjetivos* (la capacidad de delinquir, el móvil del delito y la oportunidad de cometerlo), y yendo á los indicios *objetivos* ó *prueba real de indicios*, como «hechos que se muestran » al Juez, no como ellos existen y ocurren» (por testimonios, por documentos...) «sino que se inducen por él mismo», hay que reconocer que sería imposible analizarlos todos. Son tantos cuantos son los hechos contingentes.

Fuente principalísima de indicios, son las *manifestaciones del mismo reo.*

(1) Obra citada. XII.



Manifestaciones *anteriores* son, por ejemplo, las amenazas de cometer un delito, la revelación hecha por un mandante ó un mandatario de la proposición ó aceptación de un mandato criminal. Estas manifestaciones anteriores *directas*, no son tan frecuentes como las *indirectas*, ó tácticas, que resultan de hechos y dichos del acusado que denuncian más ó menos claramente el delito: tales son las amenazas vagas, los consejos buscados, los diálogos ó las relaciones con otros reos ya convictos, y en general, todos aquellos actos que aisladamente considerados, serían indiferentes, pero que tienen conexión con el delito últimamente realizado.

Estas manifestaciones anteriores, tanto las directas como las indirectas, no son indicios muy fuertes, porque cabe siempre la posibilidad del desistimiento, forzoso ó voluntario, del delito.

Las manifestaciones *posteriores* del reo, tanto en dichos como en hechos, son ya indicios más probables. Elle-ro enumera los siguientes:

Declaración de haber cometido un delito en general, sin precisar cual;

Deposición falsa;

Silencio ó imposibilidad de negar la inculpación; (1)

Fuga;

Ocultación y rebeldía; (2)

Supresión de las huellas materiales del delito;

Transacción con la víctima;

Soborno de testigos y cohecho de funcionarios;

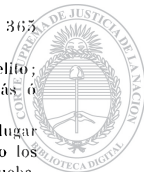
Remordimiento;

Cambio súbito de situación económica;

Presencia en el lugar del delito después de cometido;

Prosecución de actos referentes al delito mismo.

(1, 2) No deben confundirse con la confesión ficta, prueba formal en lo civil. Aquí es uno de tantos indicios ó mejor, sub-indicios.



En general, estos indicios no inducen el mismo delito; son circunstancias del mismo, indicaciones de él, más ó menos próximas.

La prueba real, la pericial y la documental, dan lugar á muchos indicios: la misma prueba testifical, cuando los testigos no tienen los requisitos propios de esta prueba, puede valer como indicio. (1)

Aumenta la importancia de la prueba indiciaria, cuando se trata de *las pruebas* que se llaman *imperfectas*, tales como:

Las *medialas* ó no originales: testigos de oídas, declaraciones escritas, copias;

Las pruebas *ilegítimas*: testimonios producidos ante un tribunal penal incompetente, ó ante un tribunal civil;

Las *pruebas de probabilidad directas*: afirmaciones no firmes de los testigos, dudas, sospechas de los mismos, juicios probables de peritos;

Las pruebas de *probabilidad indirectas* (indicios aislados ó contingentes), si bien ya hemos visto que un indicio *contingente* vale en un conjunto de ellos, del cual surja un indicio *necesario*.

Todos estos indicios, lo mismo los de *inculpación*, que los de *descargo* (pues el reo á veces no podrá ofrecer otra prueba que la indiciaria y el Juez deberá también tomarla en consideración) se imponen á la reflexión del Juez, con arreglo al siguiente principio:

Forman prueba cuando el hecho que se ha de probar resulta necesariamente (como causa y efecto) de un indicio ó, de varios formando conjunto, sin poder, en este último caso, fijarse el número de los que se requieren: él resultará en cada caso, de los que se necesiten para establecer la relación de necesidad (moral ó física) entre el indicio y

(1) Véase en el art. 258 del Cód. de Proc. citado, una aplicación de estos principios.



la cosa á que se refiere: el criterio del que juzga recae sobre todos los hechos morales y materiales que constituyen el delito; separa los que lo indican de los que lo excluyen, estableciendo cuántos y cuáles prevalecen y si éstos son suficientes para engendrar la certidumbre.

De aquí que aquellos *indicios de fraude ó culpa* que el Síndico (1) puede condensar en su informe y el Juez de Comercio apreciar como bastantes para dar como resuelta la cuestión prejudicial y con ello introducir en el juicio criminal la presunción del artículo 6 del Código Penal, no obligan en nada la conciencia del Juez del Crimen que debe apreciarlos por sí mismo y rehacer la labor comercial, estudiando uno á uno los indicios, desde su punto de vista que ya entonces prima.

Aquellos indicios se mezclarán ahora con otros: si son sub-indicios, serán quizá agrupados en forma que produzca un conjunto distinto del apreciado en la cuestión prejudicial. En todos los casos, se sujetarán al contraste de las demás pruebas y todo ello será pasado por el crisol del criterio judicial que declarará libremente la existencia ó la no existencia del hecho punible, y si debe substituir la presunción de criminalidad que importaba la decisión de la cuestión prejudicial, ó si ella ha sido destruida en el juicio criminal, quedando relegada á su rol de hipótesis interina, necesaria para entablar el procedimiento, pero de la cual *no queda nada*, al término de éste.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS ⁽¹⁾

DE LOS

TOMOS I Y II



Abandono de la querella—Hace procedente la condenación en costas al actor. (t. I, p. 162).

— Casos en que se entenderá haberse producido (art. 174).

Abogados—Son pasibles de costas. (Art. 143 á 146).

— El de la contraparte no puede ser testigo (t. I, p. 319).

— Están obligados al secreto profesional (art. 275).

Aborto—Elementos probatorios que deberán reunirse (art. 225).

Absolución de posiciones—Efectos jurídicos de las mismas. (Art. 470).

— Proceden en estado de sumario si el juez lo estima conveniente (t. I, p. 203).

— No rezan para el acusador en juicios de calumnia (t. II, p. 213).

— Sus consecuencias en materia penal (t. II, p. 361).

Absolución del reo—Se entenderá siempre libre. (Art. 497).

Abuso de autoridad—Algunos casos en que se considera existente aquel delito. (t. I, p. 190).

Abuso de confianza—Cuando se reputa existe. (t. I, p. 296).

Actos jurídicos—Condiciones para su validez. (Art. 348).

Actos preparatorios—Son accesorios que deben seguir la causa principal. (t. I, p. 52).

— Deben relacionarse directamente con el delito (t. I, p. 245).

(1) Conviene advertir, que tanto con la abreviatura (*art.* ó *arts.*), como por la indicación del tomo y página, se hallará la materia que se desee conocer, pues nos hemos valido, indistintamente, de uno y otro medio.



- Acciones penales*—No pueden ser objeto de cesiones. (t. II, p. 76).
- No pasan á los herederos: excepciones (t. II, p. 76).
 - Los arreglos sobre daños causados por un delito, importan la renuncia de ellas (t. II, p. 76).
- Acción privada*—Cuando se extingue. (Art. 15).
- Acción criminal*—Razón de su predominio sobre la civil (t. II, p. 350).
- Acciones que nacen de los delitos*—Sus clases. (Art. 14).
- Acumulación de procesos*—Debe ordenarse al resolverse la prisión preventiva (t. I, p. 68).
- Reglas que deben observarse (t. II, ps. 53 á 56).
 - Sentencia de la Cámara tratando tal punto (t. II, p. 313).
- Acusador*—No puede estar presente en la indagatoria del acusado. (tomo I, p. 211).
- Acusación calumniosa*—No debe declarársela tal sin que conste el propósito de perjudicar por medio de falsa imputación (t. II, página 127).
- Adhesión*—Produce los mismos efectos que la apelación (t. II, página 137).
- Adhesión*—No procede en caso de consulta. (t. 2, p. 162).
- Queda sin efecto, renunciándose á la apelación (t. II, p. 162).
- Adulterio*—Véase «Cuestiones prejudiciales».
- Agentes de Policía*—Sus deberes en caso de *infraganti* delito (art. 4).
- Sus declaraciones no prueban el desacato (art. 308).
- Agravio futuro*—No puede apelarse de él (t. II, p. 135).
- Alevosía*—La declaración de su existencia, requiere unanimidad de votos. (Art. 11).
- Allanamiento*—Véase «Visitas domiciliarias».
- Amnistía ó indulto*—Fundamento de éstas excepciones y jurisprudencia (t. II, p. 78).
- Anestésico*—Su uso importa una violencia en la persona. (t. I, p. 245).
- Anónimo*—Pueden autorizar ó permitir un procedimiento de oficio (t. I, p. 179).
- Antecedentes del procesado*—Siendo malos, dan mérito á la prueba de presunciones. (Art. 358).
- Apelación*—Véase «Recurso de apelación».
- Apercibimiento*—Caso en que será dado levantarlo. (t. I, p. 158).
- Aprehensión*—El derecho que la autoriza prohíbe las vías de hecho. (Artículo 3).
- Arma*—Aceptación jurídica de la palabra. (Art. 211).
- Arraigo del juicio*—El procesado (caso de calumnias), puede ausentarse sin arraigar el juicio (t. II, p. 219).
- No es exigido en materia penal (art. 172).



- Arraigo del fiador*—Debe resultar probado (art. 381).
- Arresto provisorio*—Siendo resultado de un pedido de extradición, procede la libertad bajo fianza (t. II, p. 289).
- Arresto del testigo*—Limitación del tiempo para el mismo (t. I, p. 336).
- Ascendientes*—Los del acusado no pueden ser testigos. (Arts. 278-279).
- Astucia*—Es circunstancia que se presume acompaña generalmente al delito de hurto. (Art. 229, t. 1, p. 246).
- Asuntos inmorales*—Véase «Causa torpe».
- Auto fundado*—Requiere lo sean el de prisión y el de ocupación de la correspondencia. (t. 1, p. 444).
- Autor principal*—Su declaración nada prueba contra el cómplice. (Artículo 306).
- Autopsia*—Casos en que se impondrá. (Art. 222).
- Ausencia*—Su intención debe resultar plenamente comprobada (en caso de calumnias) para que proceda el arresto (t. II, p. 219).
- Autenticidad discutible*—Teniéndola, los documentos carecen de valor. (t. II, p. 227).
- Autos interlocutorios*—Su definición. (t. II, p. 131).
- **Forma** en que se concederá la apelación contra ellos (art. 505).
- Bienes del procesado*—Deberán embargarse como garantía de sus responsabilidades legales (t. II, p. 36 á 45).
- Aún excarcelado, no pueden entregársele (t. II, p. 40).
 - **No pueden devolverse**; de hecho quedan embargados (art. 411).
- Bienes secuestrados*—En caso de extradición, deben entregarse á la nación requirente (t. II, p. 287).
- Bienes de la víctima*—Deben ponerse á la orden del juez de la sucesión. (t. 1, p. 222).
- Beodez*—Cuando se presume completa; valor jurídico de la voz involuntaria. (Art. 260).
- Considerada como circunstancia calificativa. (Art. 260).
 - Signos de la misma. (Art. 260).
- Calidad de comerciante*—Fingida, importa defraudación. (t. 1, p. 208).
- Calificación errónea*—No será causal para el rechazo de la querella. (tomo 1, p. 205).
- Calumnia é injuria*.—Procedimiento para esta clase de juicios. (Artículo 591).
- Caso de incomparecencia del acusado ó del querellante (art. 592).
 - Caso de haber sido inferidas en juicio. (Art. 593).
 - Retracción. Art. 595).
 - Inferida á la esposa, son acusables por el marido; son improcedentes las «diligencias preparatorias»; la negativa al delito produce el sobreseimiento; formas en qué puede



perpetrarse el delito; el retiro de las frases injuriosas equivale á la retractación (t. II, ps. 215 y 216).

Calumnia é injuria—Exención de responsabilidad de un editor; el acusado no puede nombrar apoderado; cabe autores principales y cómplices en esta clase de delitos; el acusado puede constituir apoderado; la retractación determina las costas (t. II, p. 214).

- Puede rechazarse de plano la demanda; explicaciones no satisfactorias del acusado; lugar del delito, siendo inferidas por la prensa; injurias á la contraparte, en juicio; incomparecencia al juicio verbal del que acusa; absolución de posiciones; publicaciones injuriosas, sin firma (t. II, p. 213).
- No procede el arresto del acusado, si su intención de ausentarse no resulta visible (t. II, p. 219).
- Son acusables inferidas por carta (t. II, p. 217).

Cámara de Apelaciones—Asuntos de su conocimiento. (Art. 33).

Capacidad del fiador—Disposición del Código Civil que la establece. (Art. 381).

Careos—Facultad del juez para decretarlos; no corresponden entre el reo y la víctima; exigencia del juramento siendo entre testigos; se harán constar las circunstancias del acto; careos entre ausentes (t. I, ps. 367 á 374).

- Puede estar en ellos el defensor (t. I, p. 374).

Cartas misivas—Pueden agregarse al juicio. (Art. 356).

Cartas privadas—Las injurias contenidas en ellas, son acusables: no es necesaria la publicidad (t. II, p. 217).

Cartas substraídas—No serán admitidas en juicio. (Art. 355).

Caución hipotecaria—Debe otorgarse por escritura pública. (Art. 383).

Caución juratoria—Requisitos para su procedencia. (Arts. 386 á 388).

Caución personal—Su objeto. (Art. 379).

- Sus clases. (Art. 380).

Caución real—Como podrá constituirse. (Art. 383).

Causa propia—La excepción de incomparecencia no reza tratándose de causa propia (art. 290).

Causa torpe—No merece amparo de la justicia. (Art. 200).

Cesionario—No tienen personería. (t. II, p. 74).

Cesiones de la acción—No son admitidas en lo criminal. (t. II, p. 76).

Circunstancias del delito—No pueden suponerse ni presumirse: deben probarse. (t. I, p. 172).

Circunstancias eximentes—El juez de instrucción puede considerarlas (t. II, p. 61).

Circunstancias personales del reo—Deben hacerse constar. (Art. 260).



- Citaciones por edictos*—Casos en que procede; su contenido; forma; término; etc. (Arts. 139 á 141).
- Citaciones desde el extranjero*—Condiciones para hacerlas (art. 665).
- Citación del procesado*—No concurriendo á la que se le hubiere hecho, autorizará orden de detención contra él. (t. 1, p. 256).
- Citación de testigos*—Funcionarios que las practicarán; formas ordinaria y extraordinaria (arts. 135 y 282).
- Formas en que deberá hacerse; casos en que podrán ser detenidos; citación por exhortos, etc. (arts. 281 á 288).
- Ciudadano*—Caso en que es equiparado á un agente de autoridad. (Art. 3).
- Coacción*—Si se alega haberse hecho, debe probarse. (t. 1, p. 382).
- Comerciante*—Simulándose la calidad de tal, importa defraudación (t. 1, p. 208).
- Comparendo personal*—Las excepciones de ley no se entienden tratándose de causa propia. (t. 2, p. 335).
- Comparendo verbal*—Debe ser personal. (Art. 591).
- La inasistencia del abogado, permite señalar otra audiencia (t. II, p. 216).
 - La inasistencia de las partes, no autoriza su conducción por la fuerza pública (t. II, p. 216).
- Competencia*—Manifestándose dudosa, la tendrá el juez de la jurisdicción mayor (t. II, p. 57).
- Siendo dudosa, se resuelve por la mayor (t. I, p. 61).
 - Sentido ó significado de la palabra (art. 44).
 - Las cuestiones que suscite pueden serlo por inhibitoria ó declinatoria. (Art. 45).
 - Reglas para establecerla (art. 34).
- Cómplices*—Cabe suponerlos en delito de calumnia. (t. II, p. 214).
- La declaración del autor principal, nada prueba contra ellos (t. I, p. 362).
- Compulsa de libros*—El juez de instrucción puede ordenarla; límites. (Art. 352).
- Compra-venta*—La adquisición de mercaderías, al fiado, y su venta inmediata, importa delito (t. I, p. 208).
- Comprobación del delito*—Corresponde hacerla al mismo juez. (art. 196).
- Los medios que se consideren propios para ello, no pueden fundar una nulidad. (Art. 198).
 - Véase «Cuerpo del delito».
- Conclusión del sumario*—Término de la ley para terminarlo. (Artículos 206 y 442).



Conclusión del sumario—El auto que lo da por terminado, no hace cosa juzgada (t. II, p. 56).

— Tampoco es apelable. (t. II, p. 56).

— Elementos que debe reunir para considerarlo terminado (art. 429).

Condonación ó perdón—Casos en que procede como excepción previa. (t. II, p. 79).

Confesión—Requisitos que debe reunir para su validez; es simple ó calificada; es indivisible; jurisprudencia; retractación, etc. (Arts. 316 á 321).

— La extrajudicial no tiene valor (t. I, p. 375 y siguientes).

— La del delito del robo no forma prueba acerca del valor de las cosas que fueron objeto de él. (t. I, p. 253).

— Con cargos, está abolida (art. 8).

— Se considerará como no existente: no obsta á la averiguación del delito. (Art. 235).

— Producida ante la policía en asuntos correccionales, es válida. (t. II, ps. 201 y 202).

Cónyuge del acusado—No puede ser testigo. (Art. 278).

Conjunto de circunstancias—Véase «Indicios».

Consulta—Elevada la causa al Superior con aquél carácter, no corresponde la adhesión del fiscal. (t. II, ps. 162 y 303).

Contradicciones—Facultades del juez en presencia de aquellas cuando el procesado incurra en ellas. (Art. 8).

— No se presumen ante la falta de concordancia en los testigos. (Art. 306).

Contradocumento—Véase «Prueba instrumental».

Contrato—La violación de sus cláusulas no puede fundar una acusación delictuosa. (t. I, p. 207).

— La justicia criminal puede y debe conocer de él, cuando su violación constituya delito (t. II, p. 352).

— Debe justificarse plenamente su existencia si en su violación se hace consistir el delito (t. I, p. 208).

Contrato simulado—La existencia del juicio civil sobre aquél, no impide la acción penal. (t. II, p. 79).

Corte de cabello—Véase «Lesiones».

Correspondencia del acusado—Casos en que puede interceptársele. (Artículo 359).

Cosa juzgada—El sobreseimiento provisional, no tiene aquel carácter. (t. II, p. 63).

— Fundamentos en que descansa (t. II, p. 77).

— Principio que la rige (art. 7).

— No se establece por la resolución del Jefe de Policía (t. II, p. 77).



Cosas robadas—Disposiciones del Código Civil aplicables cuando se ha perdido la posesión de un objeto por sustracción del mismo. (art. 425).

- Intervención que se admite al damnificado. (art. 204).
- Derecho de reivindicarlas (t. II, apéndice).

Costas procesales—Principios en que se funda su aplicación; alcanzan al Ministerio Fiscal y abogados; en que consistirán. (Artículos 143 á 146).

- Deben imponerse al acusador si abandona la querella (t. I, p. 162).
- La obligación de pagarlas es mancomunada para los querellantes (t. I, p. 129).

Cuerpo de Bomberos—Su informe sobre las causas del incendio no hace prueba. (Art. 230).

Cuerpo del delito—Varias definiciones á su respecto; su constatación es la base del procedimiento; delitos de huellas materiales y *facti transeuntis*; medios de comprobación; etc. (t. I, p. 217 á 254).

- La sola confesión del reo no prueba su existencia (art. 358).
- Su existencia puede probarse por presunciones (t. I, p. 235).
- Puede justificarse de una manera indirecta (t. I, p. 218).
- Lo constituye la materialidad de la infracción misma (t. I, p. 219).
- Su comprobación es de incumbencia exclusiva del juez (t. I, p. 220).
- La confesión del reo no obstará á su comprobación (t. I, p. 253).
- La falta de huellas del mismo, no inducirá á dudar de su existencia (t. I, p. 441).

Cuerpos de escritura—Observancias para los mismos. (Art. 608).

Cuestiones de estado—Véase «Cuestiones prejudiciales».

Cuestiones prejudiciales—(De apuntes del Juez de Instrucción doctor J. Frías). Definición. Principios fundamentales para establecer la prejudicialidad. Dos cuestiones prejudiciales. Regla general sobre jurisdicción. Consecuencias. La nota Barris. Legislación procesal francesa. Doctrina belga. Cuestiones de estado. Idem sobre propiedad inmueble. Idem sobre derechos reales. Sobre la posesión. Especialidad de la doctrina y jurisprudencia francesas. Alcance de la jurisdicción represiva ó criminal. Requisitos de la excepción de prejudicialidad. Sobre la prueba. Derecho argentino y la ley núm. 4189. Rectificación de partidas. De la quiebra. Cuestiones de estado civil. (t. II, p. 319).

- Si la acción penal dependiese de ellas, no podrá iniciarse el juicio criminal (art. 17).
- Habiéndolas, hacen inadmisibile el sobreseimiento: la querella solo debe rechazarse (t. II, p. 319).



Cuestiones prejudiciales—De la sentencia civil y la criminal. Como surgen. Sus especies. Definición y clasificación. Las que resuelve el Juez del Crimen. Las reservadas á la jurisdicción civil (t. II, ps. 349 á 358).

Correcciones disciplinarias—Conducto por el cual se aplicarán á los funcionarios de policía (art. 194). Véase también «Apercibimientos».

Contradicciones—No las hacen suponer las divergencias de detalles. (t. II, p. 117).

Cheque incobrable—Caso en que importa defraudación y otro en que no constituye delito. (t. II, p. 61).

Damnificado—La omisión de denuncia de su parte, hace lo mismo procedente la instrucción. (t. I, p. 247).

Daños y perjuicios—Competencia de la justicia del crimen para conocer de aquellos (t. II, p. 191).

Debates y defensas—Su prohibición en estado de sumario (Art. 180).

Declaraciones—Tomadas sólo por el secretario, son nulas (t. II, p. 153).

— Debe recibirlas el mismo juez (art. 247 y 292).

— Formalidades que regirán (art. 303).

Declaración por cartas—Cuando es válida (art. 300).

Declaración negada—Importa un desacato (art. 291).

Declaración indagatoria—En juicios correccionales, la prestada ante la policía es válida (t. II, ps. 201 y 202).

— No ratificándola el juez, es causa de nulidad (t. II, p. 207).

Declaración indebida—Permite hacer caso omiso de ella (t. I, p. 328).

Declaración desfavorable—No se le recibirá al pariente contra el pariente procesado (t. I, p. 327).

Declinatoria—Ante que juez deberá proponerse (art. 47). Véase también «Competencia».

Dedos—La fractura de uno, no importa la de un miembro principal (t. I, p. 239).

Defensa del cónyuge—Caso en que se ha considerado existente (t. I, p. 295).

Defensa legítima—El juez de instrucción puede declararla (t. II, p. 61).

Defensa en juicio—El procesado puede defenderse por sí mismo (art. 9).

Defensa propia—Tres casos de jurisprudencia (t. I, ps. 294 y 295).

Defensa de los reos—Debe individualizarse (art. 9).

Defensor—Momentos en que puede ser designado por el reo (t. I, p. 281).

— El de pobres no puede rehusar sus servicios en ningún caso (t. I, p. 282).

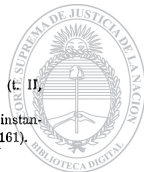
— Puede conferenciar libremente con su defendido. (t. II, p. 294).

— No puede ser testigo (art. 275).

Defensor de oficio—Caso en que se le nombrará al reo (art. 9).



- Defensor de pobres*—Está obligado á aceptar la defensa (art. 9).
 — Su asistencia á las visitas de cárceles es obligatoria (t. II, p. 298).
- Deformidad notable*—Circunstancias que la caracterizan (art. 223).
- Delito*—Debe aparecer claramente la intención dolosa (art. 200).
- Delito consumado*—Existe, en caso de subtracciones, aun cuando el reo á pesar de su voluntad no haya podido llevarse consigo las cosas subtraídas (t. I, p. 245).
- Delitos privados*—Dan lugar á la acción pública ya iniciado el procedimiento, los así llamados (art. 16).
- Delitos por culpa*—Responsabilidad civil de terceros en aquellos (artículo 425).
- Delito infraganti*—Cómo ha de entenderse según nuestra ley (art. 3).
 — Respecto de quién se considera (art. 5).
- Delito medio*—Cometido fuera de la jurisdicción del juzgado, debe declararse la incompetencia (t. I, p. 64).
- Demencia*—Declarada que existe en el reo, cesa la jurisdicción del juez de lo criminal (t. I, ps. 21 y 299).
- Denuncia*—Requiere capacidad civil en quien la formule y careciendo de ella se iniciará el procedimiento de oficio (art. 155).
 — Contenido de la denuncia (art. 156).
 — Formas para deducirla (art. 157).
 — Observancias para el funcionario que la reciba (arts. 158 y 159).
 — Obligaciones de los jueces una vez que la han recibido (art. 169).
 — A quienes no se les admitirá (art. 163).
 — Es obligatoria para los empleados públicos (art. 164).
 — La del damnificado no es indispensable para la formación del proceso (art. 229, t. I, p. 247).
- Denunciante*—Sus responsabilidades (art. 168).
 — Puede apelar, haciéndose acusador, de los autos dictados en la fecha en que se presenta como tal (t. II, p. 135).
- Derecho de tránsito*—No equivale á la extradición (t. II, p. 283).
- Derechos reales*—Véase «Cuestiones prejudiciales».
- Derecho de acusar*—Declarado perdido, procede el sobreseimiento si el fiscal lo pide (t. II, p. 98).
- Descendientes*—Los del acusado no pueden ser testigos (arts. 278-279).
- Depósito*—La violación del llamado *irregular*, no constituye delito. (t. II, p. 61).
- Depositario singular*—Puede disponer de los fondos: su obligación es civil (art. 200).
- Depositario judicial*—Su responsabilidad criminal (art. 200).
- Desacato*—Las declaraciones de los vigilantes, por sí sólas, no lo prueban (t. I, p. 366).



Desistimiento—No detiene la marcha del proceso (art. 16).

- No provoca el sobreseimiento: el sumario debe proseguirse (t. II, p. 67).
- El del Fiscal de Cámaras, de la apelación del de primera instancia, no obsta á la resolución del Superior (t. II, ps. 157 á 161).

Detención—En qué se distingue de la prisión preventiva (art. 6).

- El auto que la revoca es inapelable (art. 6).
- Situaciones que pueden provocarla; su diferencia con la prisión preventiva (art. 363).
- Siendo indebida constituye abuso de autoridad (art. 370).
- Sólo pueden justificarla indicios vehementes de culpabilidad (t. I, p. 11).

Detención privada—Precepto que define y castiga aquél delito (t. I, p. 464).

Detención ilegal—Véase «Habeas Corpus».

Detenidos enfermos—Lugares en que permanecerán (art. 681).

Destitución ó suspensión—Preceptos sobre esta clase de penas (art. 565).

Destierro—Modo de proceder cuando ha sido impuesto como pena (artículo 562).

Deuda—Caso en que su negación constituye delito (t. I, p. 208).

Días hábiles—Cuando lo son en materia penal (art. 6).

Dictamen pericial—No será de considerarlo resolviendo cuestiones ajenas á las que lo motiven (art. 346).

Diligencias pedidas—Su omisión no pueden fundar un pedido de nulidad (t. II, p. 146).

- Facultad del juez para aceptarlas ó rechazarlas (art. 198).

Diligencias probatorias—El juez correccional puede hacerlas practicar por la policía (t. II, p. 201).

Diligencias practicadas—El juez puede anularlas si no intervino por sí mismo en ellas (t. I, p. 199).

Dinero secuestrado—No puede serle devuelto al reo (art. 411).

Directores de sociedades—Tienen personería para acusar por calumnias (t. II, p. 213).

Discusión de la causa—Momento en que queda cerrada (art. 493).

Divergencia de detalles—En los testigos no importa contradicción (t. II, p. 117).

Documentos secuestrados—Deben ser devueltos á su propietario (artículo 356).

Documentos privados—De autenticidad discutible, no sirven (t. II, página 227).

- Principio sobre su ocupación (art. 359).



- Documentos sin traducir*—En idioma extranjero carecen de valor (t. I, p. 421).
- Documentos dudosos*—Siendo de autenticidad discutible, carecen de valor (t. II, p. 227).
- Documentos substraídos*—No serán admitidos en juicio (art. 355).
- Documentos de cotejo*—Orden en que deberán procurarse (art. 602).
- Documento falso*—Debe agregarse al proceso en estado original (t. II, p. 223).
- Véase «Prueba instrumental».
- Dolo civil*—No puede engendrar delitos (art. 1).
- Dolo criminal*—Lo determina el delito mismo (art. 1).
- Dudos*—Existiendo, favorecen la situación legal del reo (art. 13).
- Existiendo acerca de la competencia, se resuelve por la jurisdicción mayor (t. I, p. 61).
- Duración del sumario*—Límite de tiempo para terminarlo (art. 442).
- Edificios públicos*—Cuáles son tenidos por tales á los efectos del allanamiento (art. 401).
- Editor*—Su responsabilidad en caso de calumnia (t. II, p. 213).
- Efecto devolutivo*—Véase «Recurso de apelación».
- Ejecución de las sentencias*—Corresponde á primera instancia (art. 557).
- Ejecución del delito*—No quedando huellas, no importa suponer que el delito no haya dejado pruebas directas de su ejecución: opinión del Camarista Dr. D. Saavedra (art. 358).
- Ejecutoria*—Caso en que se considera no se ha producido (t. II, p. 300).
- Elevación de pena*—Procede si hubo adhesión del Fiscal (t. II, p. 302).
- Nó, si sólo apeló el defensor (t. II, p. 302).
- Embargo*—Su fin en bienes del procesado; fuente legal que lo autoriza; momento en que se ordenará; substitución del mismo; no procede sin previo requerimiento de pago; la fijación de la suma será hecha por el juez; bienes que podrán embargarse; administración y enajenación de los mismos; apelación, etc. (t. II, ps. 36 á 45).
- Debe decretarse aún estando excarcelado el reo (art. 379).
- Eliminados algunos cargos, debe reducirse la cantidad (t. II, p. 40).
- Embraguez*—Cómo se manifiesta según sus grados (art. 260).
- Empleados públicos*—A quienes se les considera como tales (art. 164).
- Enajenación mental*—Presumiéndose en el reo, medidas que se adoptarán para su comprobación (art. 262).
- Enemistad*—La malquerencia, el odio, no son fundamentos bastantes para tener por establecida aquélla (t. II, p. 115).
- Envenenamiento*—Procedimiento á seguirse (arts. 226 y 227).



Escusamiento—Cuando existe (art. 228).

Escritos privados—Su valor (art. 350).

Esposa—El marido puede acusar las injurias que le hayan sido dirigidas.
(t. II, p. 215).

Estado civil—Puede acreditarse ante el juez de la causa (t. II, p. 74).

Estafa—Se consuma este delito mediante la entrega de cheque inco-
brable (t. II, p. 61).

Extradición—Casos en que procede (art. 646).

- Competencia de la autoridad requirente (art. 647).
- Existencia de tratados y su falta (art. 648).
- Puede acordarse de oficio ó á pedido de parte (art. 649).
- Apelación (art. 650).
- Recaudos, identidad, discusión, etc. (art. 651 y siguientes).
- Tratados en vigencia (t. II, ps. 258 á 271).
- No procede en ella el recurso de *consulta* (t. II, p. 282).
- Procede la excarcelación del arrestado (t. II, p. 289).
- Los gastos de captura debe abonarlos el reo (t. II, p. 274).
- No procede si no está justificada la existencia del delito (t. II, p. 276).
- El fiador no puede pedirla (t. II, p. 20).

Error judicial—Véase «Recurso de revisión».

Evasión—La del procesado suspende la apelación á su respecto (t. II, p. 233).

Examen pericial—El juez siempre debe acudir al perito; por regla general deben ser dos; han de tener título; dictaminarán éstos previo juramento; el cargo es obligatorio; inhabilidades y recusación de los peritos; fijación de los puntos; fuerza probatoria; reglas para la valuación del dictamen, etc. (t. I, p. 390 á 417).

Examen de testigos—Es obligatorio para el testigo; casos en que serán dispensados del comparendo personal; penas no compareciendo ó negando la declaración; el examen debe ser separado; excepciones; conocimiento de las penas; juramento; forma del examen; oralidad del acto; repreguntas; falsedades (t. I, ps. 334 á 358).

Excarcelación bajo fianza—Se atenderá á la pena, no á las circunstancias del delito (art. 376).

- Requiere encarcelación previa (art. 376).
- Procederá resolverla aún estando en suspenso la jurisdicción del juez (art. 376).
- No procede por homicidio voluntario (art. 376).
- No procederá mediando reincidencia ó reiteración; definición de éstas (art. 377).



Excarcelación bajo fianza—El auto que la concede ó deniega, no causa instancia (art. 395).

- Declarada procedente, el auto debe cumplirse á pesar de la apelación (art. 395).

Excepciones previas—Enumeración de las que podrán oponerse (artículo 443). Véase también «Falta de jurisdicción», «Falta de personalidad», «Falta de acción», «Cosa juzgada», «Amnistía ó indulto», «Condonación ó perdón» y «Prescripción».

- Momentos en que pueden oponerse (art. 444).
- Siendo varias deben deducirse acompañadas (art. 445).
- Forma de interponerlas (arts. 446-47).
- Procedimiento (arts. 448 al 53).
- Efectos legales y apelación (arts. 454-55).
- Casos en que suspenden el curso del juicio (art. 456).

Excepción de prejudicialidad—Sus requisitos. Véase «Cuestiones prejudiciales».

Exhumación—Caso en que procederá (art. 219).

Expedientes—Su agregación como prueba (art. 348).

Exposiciones escritas—No proceden en asuntos correccionales (t. II, p. 197).

Expresión de agravios—Vencido el término, procede la deserción del recurso (t. II, p. 163).

- No formulándose en delitos privados, debe darse por desistido al que acusa (t. II, p. 162).

Falsedad de un documento—Declarada en juicio civil, no hace prueba en lo criminal (art. 348).

Falsificación de documentos—La querellas ó denuncias sobre los mismos, deben admitirse sin excepción de casos (art. 597).

- Los documentos serán rubricados (art. 598).
- Serán objeto de un acta de descripción (arts. 599 y 601).
- Deberes de los depositarios de documentos falsificados (art. 601).
- La acusación criminal que motive los mismos, no se suspende por el juicio civil que también hubiere originado (t. II, p. 221).
- Elementos para la existencia de este delito (t. II, p. 221).

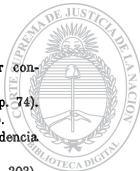
Falso delito—La denuncia sobre el mismo debe corregirse disciplinariamente (t. I, p. 155).

Falso testimonio—No existe si no ha causado perjuicio (t. I, p. 358).

- Mancras como puede incurrirse en él (t. I, p. 341).

Faltas ó contravenciones—Autoridades á las que incumbe su conocimiento (art. 27).

- Procedimientos acerca de las mismas (arts. 585 al 590).



Falta de concordancia—En las declaraciones, no hace presumir contradicción (art. 306).

Falta de acción—Casos en que procederá como excepción (t. II, p. 74).

Falta de personalidad—Su significado; jurisprudencia (t. II, p. 72).

Falta de jurisdicción—Lo que importa esta excepción; jurisprudencia (t. II, p. 71).

Fallos—Sanciones contra la demora en pronunciarlos (t. II, p. 303).

Farmacéuticos—Casos en que están amparados del secreto profesional (art. 275).

Fiador—Debe ser persona capaz (art. 381).

- Sus obligaciones no se extinguen por la prescripción de la pena impuesta al reo (art. 379).

- Carece de personería para apelar de la sentencia (t. II, p. 135).

Fianza de results—Es improcedente su exigencia en materia criminal (t. I, p. 160).

Fianza carcelaria—Casos en que corresponderá su cancelación (artículo 396).

- Su monto es potestativo del juzgado (art. 378).

- No hace cosa juzgada (art. 378).

- Su objeto (art. 379).

- No puede embargarse por honorarios (art. 385).

- Cuando se hará efectiva y procedimiento que se seguirá (artículos 392 á 394).

Filiación del acusado—Debe ser exigida previamente al reconocimiento (art. 264, t. I, p. 303).

Firma—No puede suplirla una marca ó cruz (art. 352, t. I, p. 427).

Flagrante adulterio—Fundamento que sirve de base para la exención de pena (art. 260).

Fotografía—Considerada como elemento de juicio de gran utilidad (art. 216).

Fuga de presos—Procedimiento que deberá seguirse (art. 613 y sgtes).

Fuga del procesado—No paraliza el sumario (art. 10).

Funcionarios de policía—Sus responsabilidades en la prevención (artículo 194).

- Sus obligaciones y facultades con relación al delito (art. 184).

- Término de su intervención en la prevención (art. 185).

Funcionarios públicos—En caso de calumnia contra ellos, debe admitirse la retractación (t. II, p. 218).

Fuerza irresistible—Pericia para su comprobación (art. 260).

Ganzúa—Por el solo hecho de hallarse en poder del acusado, no permite calificarse el hecho de robo (art. 228).

Grabados—La injuria puede resultar de ellos (t. II, p. 215).



Generales de la ley—Concurriendo éllas y negándolas el testigo, incurre en el delito de falsedad (t. I, p. 324).

Habeas corpus—Casos contra los que procede este recurso (art. 617).

- Autoridades judiciales que conocerán de él (art. 618).
- Obligaciones de la autoridad requerida (art. 619).
- Consecuencias á la desobediencia del recurso (art. 620).
- No procede en los casos de pena impuesta (art. 621).
- Quienes pueden deducirlo (art. 622).
- Puede plantearse de oficio (art. 623).
- Arresto del funcionario autor de la restricción de la libertad (arts. 624 y 626).
- Conducción del detenido ante el Tribunal del recurso (art. 625).
- Notificación del recurso (arts. 627 y 628).
- Pedido de informes y su contenido (arts. 629 y 630).
- Incumplimiento del auto: consecuencias y procedimiento (artículo 631).
- Enfermedad de la persona á favor de la cual se interpone el recurso (art. 632).
- Empleo de la fuerza pública (art. 633).
- Libertad del detenido (art. 634).
- Rechazo del recurso (art. 635).
- Custodia del detenido (art. 636).
- Intervención del Ministerio Fiscal (art. 637).
- Prueba de oposición al informe sobre las causas del arresto (art. 638).
- Recurso contra la sentencia (art. 639).
- Forma del procedimiento (art. 640).
- Multas, término para el cumplimiento del recurso, costas y sellos de reposición (arts. 641 á 645).
- No corresponde á la Corte, originariamente, el recurso; el juez del domicilio del recurrente, es el competente; los jueces de Instrucción tienen competencia para conocer del recurso (t. II, p. 241).
- No cabe imposición de costas, sin audiencia previa (t. II, p. 256).
- No procede contra orden de prisión del Poder Legislativo; la vigilancia de la policía, no lo autoriza; no se admitirá si el arresto obedece á medidas de corrección; idem, en virtud de la Ley de Residencia (t. II, p. 239).
- Su origen es constitucional (t. II, p. 236).
- Procede habiendo arresto ó bajo la inminencia de efectuarse ilegalmente (t. II, p. 238).
- La ley que acuerda el recurso, es sólo de procedimiento: opinión del Juez doctor E. French (t. II, p. 239).



- Hechos adversos*—Deben averiguarse estos y los favorables (art. 210).
- Hermano de la víctima*—No puede ser acusador (art. 14).
- Hermanos del reo*—No pueden ser testigos (arts. 278-279).
- Herederos*—El representante legal de éstos, tiene personería para proseguir la acción (t. II, p. 73).
- La acción penal no se extiende á ellos: excepciones (t. II, p. 76).
- Hijos naturales*—Sus padres pueden estar en juicio por ellos (t. I, p. 31).
- Honorabilidad del acusado*—No puede admitirse información sobre la misma para provocar el sobreseimiento definitivo (t. II, p. 63).
- Honorarios*—Forma en que será determinada su importancia (art. 147).
- Los bienes embargados al reo, no pueden afectarse al pago de aquéllos (art. 411).
 - La fianza no puede embargarse para hacer frente á aquéllos (art. 411).
 - Los devengados ante el juez de instrucción, deben ejecutarse ante el mismo (t. I, p. 131).
 - Los devengados en la Cámara, ésta debe regularlos (t. I, p. 131).
- Huellas del delito*—Véase «Cuerpo del delito».
- Huellas materiales*—Cómo se procederá no habiéndolas dejado el delito (art. 218).
- Identidad*—Debe establecerse por reconocimiento (t. I, ps. 301 á 311).
- Condiciones para que éste tenga valor (t. I, ps. 301 á 311).
 - Observancias (t. I, ps. 301 á 311).
 - Circunstancias del acto (t. I, ps. 301 á 311).
 - Precauciones (t. I, ps. 301 á 311).
 - Varios medios para la identificación (t. I, ps. 301 á 311).
 - Fines de la misma (t. I, ps. 301 á 311).
 - Si no se ha establecido en forma de ley, los indicios no valen (art. 358).
 - El sobreseimiento provisorio no basta para hacer inutilizar las pruebas de identificación (t. II, p. 63).
 - Las medidas que tiendan á ella, no pueden autorizar una acción por abuso de autoridad (art. 270, t. I, p. 310).
- Idioma extranjero*—Los documentos no traducidos al idioma nacional no tienen valor probatorio (art. 348).
- Imparcialidad de los jueces*—Es su primer deber (t. II, p. 125).
- Imposición de penas*—Habiendo omitido hacérselas saber al testigo, su declaración es lo mismo válida (t. I, p. 342).
- Inasistencia del acusador*—En juicios de injuria, hace suponer desistimiento (t. II, p. 216).
- Incendio voluntario*—Procedimiento que ha de seguirse (art. 230).
- Incidentes por separado*—Razón de ser de los mismos (t. II, p. 88).



Incompetencia del juez—En cualquier estado del sumario, el juez puede declararla (art. 430).

Incomunicación—Funcionarios que podrán decretarla; casos en que procederá; tiempo de duración; limitaciones; responsabilidades del juez y carceleros (arts. 256 á 259).

— Puede ordenarla la policía en asuntos correccionales (t. II, p. 201).

Inconsciencia del acto—Cómo se comprobará (art. 260).

Inculpabilidad—Tratándose de patentizarla, todos los medios deben considerarse necesarios (art. 280, t. I, p. 329).

Indagatoria—Momentos en que se impondrá su recepción (art. 236).

— Término dentro del cuál ha de recibirse (art. 237).

— Su principal objeto: opinión del Fiscal doctor Marengo (t. I, p. 264).

— Será tomada separadamente (art. 238).

— Negativa del procesado (art. 239).

— Forma en que ha de recibirse (art. 240 y 241).

— Siendo imposible recibirla debe libertarse al reo (art. 6).

— Es un acto voluntario para el prevenido (art. 8).

— Prohibición de amenazas sobre el reo al prestarla (art. 242).

— Examen prolongado, etc. (art. 244).

— No es personal para el juez: éste puede delegarla á otro igual á él (art. 236, t. I, p. 257).

— El acusador no puede estar presente en ella (t. I, p. 211).

— Momentos en que debe tomarse estando el reo detenido (art. 6).

Indicios—Esta prueba la constituyen el conjunto de circunstancias (t. I, p. 441).

— Su definición legal (art. 357).

— Condiciones que deben reunir (art. 358).

— Deben recaer sobre el acusado (art. 358).

— Teoría sintética de Ellero (t. II, p. 363).

Indulto—Véase «Amnistía ó Indulto».

Información de abono—Corresponderá en casos de fallecimiento del testigo (art. 485).

Informaciones de estado—El juez de instrucción es competente para conocer de ellas (t. I, p. 159).

Informes médicos—Para fijar la jurisdicción, prevalece el de los Tribunales (t. I, p. 59).

— No forma prueba respecto á la posición en que se hayan inferido las heridas (t. I, p. 237).

— El de los Tribunales prevalece sobre los particulares (t. I, p. 238).

— Antes de evacuarlo se les permitirá á los facultativos el examen del proceso (t. I, p. 410).



Informes médicos—Estando en contradicción con otro, prima el último (t. I, p. 239).

- Sobre ellos, en cuanto á la forma del hecho, prevalece la prueba testifical (t. I, p. 414).
- Siendo contradictorios, prevalece la confesión del reo (t. I, p. 383).

Informe in voce—La presencia del acusado no es necesaria (t. II, p. 168).

Infracciones—Cuando lo son y dejan de serlo ante la ley penal (art. 1).

Inhibitoria—Véase «Competencia».

- Forma en que se intentará (art. 46).
- La falta de audiencia del Ministerio Fiscal, anula el procedimiento (art. 51).

Injuria—Véase «Calumnia é injuria».

Infanticidio—Medidas de comprobación (art. 224).

Inhabilidades de los testigos—Momento en que serán apreciadas (artículo 308).

Inhabilitación general—Lo que importa esa pena (art. 563).

Inspección ocular—Su importancia (art. 210).

Intención de matar—Criterio para tenerla por establecida (art. 209).

Interceptación epistolar—Véase «Correspondencia del acusado».

Interpretación de la ley—Sus clases (art. 12).

Interpretes—Deberán tener título de tales (art. 252).

Intervención del querellante—Será igual á la del acusado (art. 203).

Interrogatorios—No deben admitirse en materia penal (art. 297).

Instrumentos públicos—Enumeración de los que son tenidos por tales (art. 349).

- Su valor (art. 349).

Instrumentos, armas, etc.—Deben sellarse y retenerse (art. 215).

Irresponsabilidad—Cualquier medio y oportunidad pueden servir para acreditarla (t. I, ps. 20 y 171).

Jefe de policía—Sus deberes en caso de *infraganti* delito (t. I, p. 11).

- En la prevención es el mismo juez, por ficción jurídica (t. I, p. 195).

Jueces—Al resolver un proceso, no pueden hacer afirmaciones depresivas para los poderes públicos (t. II, p. 125).

Jueces correccionales—Asuntos de su conocimiento (arts. 28 á 30).

Jueces de paz—Deben ser examinados por informe (art. 290).

- Pueden ser procuradores ante otra jurisdicción: no cabe contra ellos la excepción de falta de personalidad (t. II, p. 74).

Jueces de Sección—Causas de que conocerán (art. 23).

Juicio—Su definición y personas que en él intervienen (art. 1).

Juicio civil—Sus actuaciones no hacen fe en el criminal (t. II, p. 358).



- Juicios correccionales**—Forma del procedimiento (arts. 569-70).
 — Llamamiento de testigos, indagatoria, etc. (arts. 571 y sigs.).
- Juicio verbal**—Es previo en todo juicio de calumnia ó injuria (art. 591).
- Juramento del damnificado**—Su omisión en casos de robo impide castigar el delito (art. 229, t. I, p. 247).
- Juramento del reo**—No debe prestarlo (art. 240).
- Jurisdicción**—No es prorrogable; es ordinaria ó común (art. 19).
 — Autoridades que la ejercen (art. 24).
 — Conocimiento que le corresponde (art. 25).
- Ley análoga**—Su inaplicabilidad en materia penal (art. 12).
- Ley nueva**—Si es más favorable al reo, hace procedente la revisión (t. II, p. 180).
- Ley sobre autenticación de documentos**—(t. I, p. 122).
- Ley preexistente**—Es requerida para todo juicio (t. I, p. 6).
- Ley procesal**—Su carácter en la Capital de la República (t. II, p. 317).
- Lenguaje del reo**—Debe procurarse resulte el mismo que él ha empleado (t. I, p. 273).
- Lesiones**—Como deben ser fijados los daños causados por ellas (t. II, p. 191).
 — Pericia que harán necesaria (art. 223).
 — No se reputan tales el corte del cabello á una mujer (t. I, p. 239).
- Litis pendencia**—Condiciones para que proceda como excepción previa (t. II, p. 78).
- Libros de comercio**—Aun siendo de extraños al juicio, el juez puede compulsarlos (t. I, p. 427).
 — Si no constituyen prueba, pueden formar una presunción (art. 358).
- Libro de actas**—Su examen debe limitarse á las pertinentes (art. 348).
- Libertad**—Casos en que procede su restricción y con qué carácter (art. 363).
 — Puede resolverse en cualquier momento (t. I, ps. 13 y 451).
- Locura**—La llamada moral no es circunstancia eximente (art. 262).
 — No es causal que paralice el sumario (art. 10).
 — La excentricidad ú originalidad del procesado no la hace suponer (art. 10).
 — La premeditación que haya existido en el reo no deja de hacerla presumir (art. 260).
- Loterías prohibidas**—No deben devolverse los billetes secuestrados (t. I, p. 214).
 — La estafa del premio no importa delito (t. I, p. 208).
- Lugar del delito**—Para determinarlo hay que atender á lo que constituye el delito mismo (t. I, p. 52).
 — Cual se reputa tratándose de calumnia ó injuria (t. II, p. 213).



Mala fe—No habiéndola deben devolverse los objetos secuestrados (t. I, p. 226).

Mandatarios—De los poderes públicos no requieren poder especial á los efectos de su personería (t. I, p. 151).

Matrimonio del raptor—Exento éste de pena, por su enlace con la ofendida, participa del beneficio el cómplice.

(Debemos advertir, ya que sólo es posible hacerlo en este lugar, dado el estado de impresión de esta obra, que la sentencia que se cita, ha sido confirmada por la Excma. Cámara.) (t. I, p. 36).

Médicos—Es obligatoria la denuncia para ellos; excepciones (arts. 165 á 167).

- Están obligados á prestar los auxilios de su profesión (art. 186).
- Con sueldo del Estado no pueden cobrar honorarios (art. 347).
- Casos en que están amparados del secreto profesional (art. 275).
- Los de policía no pueden cobrar honorarios (art. 347).

Menor de edad—Siéndolo el procesado, sólo puede ser patrocinado por defensor (art. 9).

- Emancipado puede ser querellante (t. I, p. 31 y t. II, p. 74).
- Siéndolo el procesado, medidas que se impondrán (t. I, p. 297).

Mejor proveer—Las diligencias que se ordenen con este carácter deben practicarse con intervención de las partes (t. II, p. 121).

Mercaderías sustraídas—Procede su secuestro al sólo objeto de la investigación (t. I, p. 226).

Mérito de la prueba testifical—Modo de apreciar su fuerza probatoria; reglas de sana crítica; condiciones del testimonio; cómo será apreciada la inhabilidad (t. I, p. 359 á 366).

Ministerio Fiscal—Sus representantes son pasibles de costas (t. I, p. 130).

- No puede oponérsele la excepción de falta de acción sino en delitos privados (t. II, p. 75).
- Forma en que deducirá la acción penal (art. 171).
- El desistimiento del Fiscal de Cámaras del recurso interpuesto por el Fiscal de Primera Instancia, no impide al Superior dictar la resolución que corresponda (ps. 157 á 161).
- Los fiscales están obligados á concurrir á las visitas de cárceles (t. II, p. 298).
- Funcionarios que lo desempeñan; sus obligaciones, etc., (t. I, p. 104 á 111).
- El fiscal de primera instancia está obligado á formular acusación cuando así lo resuelva el Fiscal de Cámaras (t. II, p. 99).
- Sus representantes son partes en cualquiera clase de juicio (t. I, p. 179).
- A los efectos de las denuncias, sus representantes son simples intermediarios (t. I, p. 156).



- Muerte violenta**—Identificación de la víctima (art. 219).
- Muerte del querellante**—Sus efectos en el juicio (art. 175).
- Muerte del testigo**—Hará procedente una información de abono (art. 485).
- Muerte del procesado**—Debe resultar probada; extingue la acción penal (t. I, p. 165 y t. II, p. 62).
- Cancela la fianza (art. 396).
 - Ocurrida, la acción por daños y perjuicios es de incumbencia sólo de los tribunales civiles (t. I, p. 164).
 - No exonera á su testamentaria de las responsabilidades civiles (t. I, p. 165).
- Muerte de un socio**—No anula los poderes conferidos en nombre de la sociedad (t. I, p. 165).
- Multas, cantidades pecuniarias**—Como han de hacerse efectivas (artículos 567 y 568).
- Mutilación**—Acepción jurídica de la palabra (t. I, p. 239).
- Mutuario**—Véase «Depositorio singular».
- Negación de deuda**—Sus requisitos (art. 200).
- Notificaciones**—Término en que deben practicarse; por quienes serán diligenciadas; forma de las mismas (arts. 123 á 132).
- Nulidad**—Véase «Recurso de nulidad».
- Obediencia debida**—Supone legitimidad de la orden (art. 260).
- Objetos robados**—Su reintegro al damnificado corresponderá hacerse terminado el proceso; excepciones (t. I, p. 212).
- Objetos secuestrados**—Sobreseído el proceso deben ser devueltos al reo (t. II, p. 63).
- Obligación de hacer**—No cumplida no constituye delito (t. I, p. 208).
- Orden de prisión**—Cual será su contenido (art. 373).
- Padres naturales**—Pueden estar en juicio por sus hijos (art. 14).
- Parientes del reo**—Caso en que pueden intervenir en el proceso (art. 10).
- Sólo pueden declarar en favor de éste (art. 280).
- Parteras**—Caso en que están comprendidas en la excepción del secreto profesional (art. 275).
- Particularmente ofendido**—Lo que significa (art. 170).
- Pena agotada**—Admite la caución juratoria (art. 388).
- Pena de muerte**—Disposiciones legales que rigen acerca de la misma (arts. 559 y 560).
- Exigencias de la ley para su imposición (art. 11).
- Pena de presidio, etc.**—Disposiciones respecto á su cumplimiento (artículo 561).
- Pericia**—El auto que la ordena no es apelable (t. I, p. 392).
- Pericia caligráfica**—Es una prueba secundaria (art. 346).
- Peritos**—El juez debe requerir siempre sus servicios (art. 212).



Persona jurídica—Sus representantes no pueden ser acusadores si carecen de facultad (art. 170).

Personas jurídicas—No cabe acción penal contra ellas (art. 14).

— Pueden ser querellantes (art. 14).

Personas ofendidas ó damnificadas—Quienes han de ser consideradas como tales (art. 14).

Piezas de convicción—Se procurará recogerlas (art. 211).

— Caso en que serán devueltas á sus dueños (art. 150; 154 y 151).

Planos—Necesidad de su confección (art. 216).

Plenario—Procedimiento ante el juez de sentencia; antes de la acusación puede pedirse ampliación del proceso; procedencia del sobreseimiento; caso de acusación obligatoria para el fiscal, etc. (t. I, ps. 93 á 101) Véase también «Conclusión del sumario».

Pluralidad de querellantes—Habiéndola deben aparecer bajo una sola representación (t. I, p. 209).

Pluralidad de reos—Apareciendo contradicción, tantos deben ser los defensores como fueren ellos (t. I, p. 19).

Poder especial—Es esencial en asuntos criminales (t. I, p. 158).

Poder general—No es suficiente para instaurar acciones criminales (t. II, p. 73).

Policía—Su carácter es administrativo: no depende del Poder Judicial (t. I, p. 197).

Preguntas—Debe concebirlas y hacerlas el mismo juez (t. I, p. 349).

Prejuzgamiento—Las diligencias para «mejor proveer», no pueden fundar una recusación (t. II, p. 121).

Premeditación—Presupone intención deliberada antes de obrar (art. 260).

Prescripción—Puede oponerse esta excepción siendo prófugo el reo (artículo 10).

— Es nulo el auto que acepta la excepción, si el acusador no ha sido oído (t. II, p. 146).

— Considerada como excepción previa; jurisprudencia (t. II, p. 81).

Presunciones—Véase «Indicios».

Prevención—Responsabilidades de la policía en aquélla (art. 194).

Principio de prueba por escrito—Requisito para que tenga valor (t. I, p. 427).

Prisión preventiva—Requiere orden escrita (art. 2).

— Es un medio de instrucción (art. 2).

— Tiempo dentro del cual ha de dictarse (art. 6).

— Concepto legal de esta medida; tiempo en que ha de dictarse; requisitos; apelabilidad de la misma; principios acerca de ella, etc. (t. I, p. 447 á 467).

— Requiere auto fundado (t. I, p. 444).



Prisión preventiva—Debe dictarse si el sobreseimiento ha sido revocado por el Superior (t. II, p. 67).

— Los principios que rigen sobre ella, son aplicables a los juicios correccionales (t. II, p. 128).

Prisiones—Deberes de los encargados de las mismas (arts. 677 a 682).

Procedimiento en segunda instancia—Apelación libre (arts. 518 a 537).

— En relación (arts. 538 a 539).

— Denegación de recurso (art. 540 a 543).

— Retardada justicia (art. 544 a 545).

— Nulidad (art. 546 a 547).

Procedimiento escrito—No es motivo de nulidad en asuntos correccionales (t. II, p. 197).

Procesado absuelto—Puede ser excarcelado bajo caución juratoria (art. 88).

Procurador—No es admitido en representación del acusado (art. 9).

Profesores—Tienen derecho a cobrar honorarios (art. 347).

Prófugos—Siéndolo el pco, no puede estar en juicio (art. 10).

— Carece de derecho para interponer recurso de queja (t. II, p. 173).

Propiedad inmueble—Cuestiones relativas a la misma. Véase «Cuestiones prejudiciales».

Prueba—De la recepción de la causa a prueba y su renuncia (art. 467).

— Principio acerca de la misma: le incumbe al acusador (art. 468).

— Medios de prueba (art. 469).

— Término para la misma, etc. (art. 471 y sgts).

— Su definición según Ellero (t. II, p. 359).

Prueba instrumental—Sus condiciones; fuerza probatoria; derechos del procesado sobre esta clase de prueba; medios para la comprobación de los documentos, etc. (arts. 348 a 356).

Prueba documental—Valor de los libros de comercio (t. II, p. 362).

Prueba testimonial—Casos en que es procedente en materia criminal (art. 352).

— Es procedente para justificar la entrega de fondos (t. I, p. 427).

Pruebas imperfectas—Enumeración de algunas de ellas (t. II, p. 365).

Pruebas formales—Las así llamadas no tienen eficacia en lo criminal (t. II, p. 360).

Pupilos—Cuando no pueden ser testigos (art. 278-279).

Querrela—Quiénes sólo pueden promoverla (art. 278-279).

— No puede desestimar-se una vez admitida (art. 200).

— Cuando será desestimada (art. 200).

— Contenido y requisitos (art. 176).

— El carácter doloso de la misma, no puede establecerse en el sobreseimiento (t. II, p. 61).

— En forma, hará procedente su substanciación (art. 199).



Querellante—Puede asumirse tal rol en cualquier estado del juicio (t. I, p. 159).

- Queda sometido á la jurisdicción del juez; sus responsabilidades (art. 172, 173 y 177).

Quebra—Considerada como cuestión prejudicial. Véase «Cuestiones prejudiciales».

- Debe haber declaración previa al juicio criminal (art. 17).
- No es delito si no reúne caracteres de culpa ó fraude; éstos deben aparecer ante la jurisdicción comercial (t. II, p. 338).

Químicos—Con sueldo del Estado no pueden cobrar honorarios (art. 347).

Ratificación de la prevención—Convendrá siempre hacerla (art. 197).

Ratificación de testigos—Debe ordenarse si sus declaraciones han sido observadas; jurisprudencia (art. 484).

Recaudos—Véase «Extradición».

Recusaciones—Sólo pueden admitirse mediando causa: no habiéndola de las enumeradas por la ley, son prohibidas; funcionarios que pueden ser recusados; procedimientos, etc. (t. I, p. 84 á 104).

Reapertura del sumario—El auto que así lo ordena, es inapelable para el acusado (t. II, p. 63).

- ¿Podrá reabrirlo el juez de instrucción habiendo ya pasado al de sentencia? (t. II, p. 53).

Rebeldía del procesado—Casos en que será declarada; no paralizará el sumario; en plenario suspende la tramitación del proceso (t. I, p. 132 á 137).

Recurso de apelación—Resoluciones contra las cuales se admitirá (artículo 501).

- Término para deducirlo (art. 502).
- Formas en que puede deducirse (art. 503).
- Forma de su otorgamiento (art. 504).
- Forma de su concesión tratándose de autos interlocutorios (artículo 505).
- Apelación en ambos efectos y en el devolutivo (arts. 506 y 507).
- Cuándo no impide la prosecución del sumario (t. I, p. 458).
- No le asiste al fiador respecto de la sentencia (t. II, p. 135).
- Su desistimiento sólo puede hacerse ante el Superior (t. II, p. 135).
- No cabe contra agravio futuro (t. II, p. 135).
- No se admitirá contra el auto ordenando una pericia (t. I, p. 392).
- Casos en que es obligatorio para los defensores (art. 690).

Recursos de hecho—Debe hacerse la relación de antecedentes y no enviarse la causa (t. II, p. 173).

Recurso de nulidad—Resoluciones contra las cuales tiene lugar (art. 509).

- Término para su deducción (art. 510).



Recurso de nulidad—Consecuencias de la nulidad así declarada (artículos 511 y 512).

- Cuando las nulidades quedarán subsanadas (art. 513).
- Su procedencia en materia penal (t. II, p. 150).
- No fundándose, se induce que se ha renunciado al recurso (t. II, p. 147).
- Casos prácticos en que se han tratado (jurisprudencia) (t. II, ps. 145 y siguientes).
- Procede contra las resoluciones de competencia dictadas sin audiencia Fiscal (t. I, p. 208).
- Los medios de averiguación empleados, no pueden fundarlo (t. I, p. 176).

Recurso de queja—Casos en que procederá, etc. (arts. 514 al 517).

Recurso de reposición—Autos contra los cuales procede (art. 498).

- Tiempo en que debe interponerse (art. 499).
- La resolución que recaiga hará ejecutoria: excepto, si también se hubiere apelado (art. 500).
- Cabe contra un auto denegando diligencias pedidas (t. I, p. 176).
- Casos de jurisprudencia relativos al mismo. (t. II, ps. 132, 133 y 134).

Recurso de revisión—Casos en que procederá (art. 551).

- Quienes pueden promoverlo (art. 552).
- Procedimiento (arts. 553 al 556).

Reconvenciones—Su prohibición (art. 8).

Registros—Véase «Visitas domiciliarias».

Reincidencia—Considerada como agravante y obstativa de la excarcelación (art. 377).

- No se tiene en cuenta si el delito anterior la ha sido en otra jurisdicción (art. 377).
- Cómo debe justificarse (art. 260).

Reivindicación—Su procedencia ante el juez del crimen (art. 204).

Estudio al respecto del doctor Jesús H. Paz (t. II, *Apéndice*).

Reiteración—Acepción jurídica de esta voz (art. 377).

Reglamentos de policía—Los defensores pueden ampararse de las excepciones de la ley á los reglamentos que fijan día para visitar los presos (t. II, p. 294).

Remisión de pena—No importa un desistimiento (art. 16).

Renuncia de la acción—Véase «Acciones penales».

Responsabilidad civil—Concurriendo respecto de terceros en juicios criminales, procederá contra ellos el embargo de sus bienes; condiciones; preceptos legales que la establecen; disposiciones sobre



el procedimiento á seguirse; intervención á que tendrán derecho (t. II, ps. 46 á 50).

Responsabilidad civil—Los terceros responsables no pueden intervenir en el proceso, si la acción es puramente penal (art. 425).

- Oportunidad en qué serán oídos los terceros responsables (arts. 427 y 463).
- Deben tomarse medidas de seguridad para hacerlas efectivas. (art. 10).
- Es solidaria (art. 411).
- Su conocimiento es del juez del delito (t. II, p. 191).
- Los jueces del crimen son competentes para resolverla (t. II, p. 126).
- Caso en que no corresponde para el padre del menor acusado (art. 425).

Responsabilidad del fiador—Debe resultar comprobada (art. 381).

Responsabilidad penal del delincuente—La falta de ella puede demostrarse por cualquier medio (t. I, p. 423).

Repreguntas—Pueden hacerse al testigo (art. 302).

Representación común—Debe existir entre los querellantes: excepción á este principio (art. 201).

Representantes legales—Quiénes son (art. 14).

Resultandos y considerandos—Su omisión no puede fundar la nulidad de la sentencia (t. II, p. 146).

Retardo de justicia—Véase «Recurso de quejas».

Retractación—En el comparendo de conciliación (calumnias ó injurias) determina las costas (t. II, p. 214).

Retrogradación del procedimiento—No corresponde hacerse (t. II, p. 53).

Revisión—Véase «Recurso de revisión».

Revocatoria—Produciéndose respecto del sobreseimiento, debe dictarse auto de prisión preventiva (t. II, p. 67).

Robo—Detalles que se harán constar (art. 228).

- Consecuencias de la omisión del juramento por parte del damnificado (t. I, p. 217).

Rueda de presos—Véase «Identidad del delincuente».

Sana crítica—Lo que exigen las reglas que la rigen (art. 305).

Secretarios—No pueden rechazar querellas (art. 199).

- Son nulas las declaraciones recibidas por ellos (art. 303).

Secreto del sumario—Rechaza la indagación á base de pesquisa general (t. I, p. 337).

- No reza en virtud de delitos privados (t. I, p. 176).
- Debe recomendar su mantenimiento al juez exhortado (t. I, p. 333).
- Concluye cuando se manda oír al acusador (t. II, p. 68).
- El auto de prisión preventiva lo hace cesar parcialmente (art. 367)



Secreto profesional—Personas que pueden invocarlo en su favor (art. 275).
Secuestros—Disposición legal que los autoriza (art. 211).

Sentencia—Tiempo en que deberá pronunciarse y reglas á que deberá sujetarse (arts. 494 y 495).

- Puntos accesorios (art. 496).
- El juez no puede modificarla (t. II, p. 125).
- Su nulidad puede declararse de oficio (t. II, p. 149).

Sentencia civil—No forma prueba en el juicio criminal (t. II, p. 221).

- No produce efecto en la jurisdicción criminal (art. 18).
- La del juicio civil no tiene influencia alguna en el criminal (t. II, p. 350).

Sobreseimiento—Momento en que debe dictarse (art. 432).

- Clasificación (art. 433).
- Casos que será definitivo ó provisional (arts. 434 y 435).
- Efectos en uno y otro caso (art. 436).
- Declaración en favor del acusado (art. 437).
- Cuando es total ó parcial (arts. 438 y 439).
- No puede dictarse sin previa audiencia del fiscal y acusador (art. 441).
- El auto que lo pronuncia debe fundarse (t. II, p. 59).

Sociedad mercantil—El uso de la firma, importa facultad para nombrar apoderado (t. I, p. 159).

Socio—Tiene personería para querellarse (art. 170).

- Puede querellar directamente en nombre de la sociedad (t. I, p. 159).

Substitución de embargo—El procesado tendrá derecho á hacerla (t. II, p. 40).

- Lo mismo sucede con el tercero responsable civilmente (t. II, p. 48).

Sumario—Su objeto (art. 178).

- Formas de su iniciación (art. 179).
- Debe ser secreto (art. 180).

Sumario de oficio—Lo que debe entenderse por tal (t. I, p. 182).

Sumario de prevención—Su contenido y formalidades en el mismo (artículos 191 y 192).

Suspensión de empleo—Véase «Destitución ó suspensión de empleos».

Suprema Corte Nacional—Causas en que conoce originariamente y en apelación (arts. 21 y 22).

Tacha de testigos—Circunstancias que la harán procedente (art. 486).

- Término en que serán alegadas y probadas (art. 487).
- Prueba de las mismas (arts. 488-89).

Tercerías de dominio—El juez de instrucción es competente para entender en ellas (art. 411).



Término—Es improrrogable el que se le da al querellante para evacuar la vista del sumario (t. II, p. 68).

- Corre individualmente (t. II, p. 136).
- Acordada de la Cámara al respecto (t. II, p. 99).
- No estándolo determinado, debe el juez fijarlo previamente (t. II, p. 303).
- Debe concederse al nuevo defensor por enfermedad del primero (t. II, p. 135).
- El Fiscal se halla sujeto al establecido por la ley (t. II, p. 101).
- Los del art. 672 son improrrogables (t. II, p. 289).
- Igual sucede con el artículo 441 (t. II, p. 68).

Testigos—No puede serlo el abogado de la contraparte (t. I, p. 319).

- Causas que los hará pasibles de responsabilidad penal (t. I, p. 341).
- Su número será ilimitado: se deja al arbitrio del juez (t. I, p. 315).
- Personas que no serán oídas como tales (t. I, p. 315).
- Quienes lo serán al sólo objeto de la indagación (t. I, p. 319).
- Serán interrogados cuando hubieren sido indicados como tales (t. I, p. 312).
- Siendo espontáneos no pierden su carácter de tales (t. I, p. 313).
- La declaración nadie tendrá derecho á rehusarla (t. I, p. 314).
- Momentos en que serán apreciadas sus inhabilidades (t. I, p. 326).
- Quienes no podrán ser llamados como testigos (t. I, p. 327).
- Siendo para simples indicaciones, grupos que con ellos pueden formarse (t. I, p. 322).
- Están igualmente obligados éstos, al juramento (t. I, p. 323).

Traducción de documentos—Si no ha sido hecha, estos no tienen valor (t. I, p. 421).

Transacción—Véase «Acciones criminales».

Tratados de extradición—Nómina y resumen de los mismos, celebrados por la Argentina con otras naciones (t. II, ps. 258 á 271).

Tutores—No pueden ser testigos respecto de sus pupilos (arts. 278 á 279).

Valuación—Corresponde hacerse en todos los casos (art. 234).

Víctima—Su hermano puede acusar á falta de los padres (t. I, p. 30).

- Su declaración, sino se querella, es válida (art. 277).

Vigilancia infundada—Autoriza el *habeas corpus* (t. II, p. 240).

Vindicta pública—El Fiscal es su representante legal (t. I, p. 159).

Visto del sumario—Vicio de nulidad el sobreseimiento, si ha sido omitida al acusador (t. II, p. 67).

Visitas domiciliarias—Casos que la autorizan; debe practicarlas el mismo juez (art. 399).

- Deben efectuarse de sol á sol: excepciones (art. 400).



Visitas domiciliarias—La resolución que las ordene debe fundarse (artículo 403).

— Casos en que la policía puede allanar el domicilio (arts. 187 á 189).

Visita de cárceles—Misión de los Jueces de Instrucción (arts. 684 - 85).

— Idem de la Cámara (art. 686 y siguientes).

Violación de domicilio—No apareciendo la intención de robar, sólo existe aquel delito (t. I, p. 244).

Voluntad de acusar—Debe constar de una manera positiva y auténtica (t. II, p. 73).

Voluntad criminal—Prevalece mientras la prueba no la destruye (t. I, p. 7).

— Opinión del doctor Tomás Jofré sobre la presunción de voluntad criminal (t. I, p. 379).



BIBLIOGRAFÍA ⁽¹⁾



- Aguilera de Paz* (Enrique)—Tratado de las cuestiones prejudiciales y previas.
- Alfaro y Lafuente* (Santos)—Jurisprudencia del Tribunal Supremo en los juicios criminales.
- Azcárate* (Gumersindo)—Ensayo de una introducción á la legislación comparada.
- Bentham* (Jérémie)—Traité de législation civile et pénale.
- Bérenger*—De la justice criminelle en France.
- Bernard* (Paul)—Traité théorique et pratique de l'extradition.
- Bonnier* (Eduardo)—Tratado de las pruebas.
- Borsani*—Azione penale.
- Borsani e Casorati*—Procedura penale italiana.
- Borlotucci*—La nuova riforma giudiziaria in Italia.
- Buccellati*—Istituzioni di diritto e procedura penale.
- Canale* (Francisco)—Conferencias sobre procedimientos penales.

(1) Casi siempre se prescinde en esta lista de las obras generales, cuyo conocimiento se presupone ó puede ser útil, tanto de derecho penal, como de procedimiento nacional ó extranjero.



Caravantes (José de V., y)—Tratado de procedimientos.

— Causas célebres españolas y extranjeras.

Cárcano—Il pubblico ministero in Italia.

Carnot—De l'instruction criminelle.

Carrara (F.)—Programma—Azione penale—Opusculi.

Casorati (L.)—Il processo penale e le riforme.

Cocito (V.)—La parte civile in materia penale.

Cortés (Gerónimo)—Vistas fiscales.

Covian y Junco (Victor)—El procedimiento penal teórico-práctico (tomo 1º)—Código de Procedimiento Penal.

Crivellari (Giulio)—Concetti fondamentale di diritto penale.

— Il Codice Penale per il regno d'Italia.

Chauveau (Ad.) & *Hélie* (Faustin)—Théorie du code pénal.

Dalloz (Ed.)—Code Pénal annoté et expliqué.

— Répertoire de jurisprudence.

Delamarre & Lepoitvin—Traité de droit commercial.

Dumon (Esteban)—Tratados de Jeremías Bentham sobre legislación civil y penal. (Traducción de Ramón Salas).

Duverger—Manuel du juge d'instruction.

Ellero (Pietro)—Trattati criminali.

— Errores judiciales.

Ferrer y Minguet (Vicente)—Deberes y atribuciones de los promotores fiscales.

Framarino dei Malatesta (Nicolás)—Lógica de las pruebas.

García Goyena (Francisco)—Código Criminal Español.

García Goyena, Aguirre y Montalbán—Febrero ó librería de jueces, abogados y escribanos.

García Reynoso (M.)—El procedimiento penal en la provincia de Buenos Aires.

Garraud—Traité théorique et pratique du droit pénal.



- Gennep* (A. van)—La formation des légendes.
- Geyer* (A.)—Le projet de code allemand de procédure criminelle.
- Giner* (Francisco)—Estudios jurídicos y políticos.
- González* (Joaquín V.)—Manual de la Constitución Argentina.
- Haus* (J. J.)—Principes généraux du droit pénal belge.
- Hélie* (Faustin)—De l'Instruction Criminelle.
- Krafft Ebing*—Reformabilidad criminal (trad. de Raffaele).
- Lastres* (Francisco)—Procedimientos civiles y criminales.
- Legrand du Saulle*—Medicina legal.
- Lira* (J. B.)—Del Ministerio Público.
- López Moreno* (Santiago)—Procedimiento Civil y Criminal.
— La prueba de indicios.
- Luccini* (P.)—Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio.
- Malagarriga* (Cárlos)—Efectos penales de la quiebra.
- Manduca* (F.)—Procedimiento Penal.
- Mangin* (M.)—De l'Instruction écrite.
- Medina* (León) y *Marañón* (Manuel)—Leyes penales de España.
- Merkel* (A.)—Derecho Penal—Traducción y notas de P. Dorado.
- Meyer*—Le questione degli scabini.
- Mittermaier* (C. J. A.)—Tratado de las Pruebas.
- Montes de Oca* (M. A.)—Derecho Constitucional.
- Obarrio* (Manuel)—Proyecto de Código de Procedimientos en lo criminal.
— Curso de derecho penal.
- Olivart* (Marqués de)—Colección de los tratados, convenios y documentos internacionales.



Ortolán—Tratado de derecho penal—Penalidad, Jurisdicción, Procedimiento (traducción y notas de Melquiades Pérez Rivas).

Pacheco (Joaquín Francisco)—Código Penal Concordado.

Pantoja (José María)—Repertorio de jurisprudencia criminal.

Perotta (M.)—Il processo penale.

Pescatore (M.)—Sposizione comparata del Diritto giudiziario.

Reus (Emilio)—Enjuiciamiento Criminal.

Rossi (P.)—Traité du droit pénal.

Royer (L.)—Projet de loi tendant á reformer le code d' instruction criminelle.

Ruiz y Rodríguez (Hermenegildo)—Compilación anotada del enjuiciamiento criminal.

Saluto (S.)—Commento al Codice di procedura penale italiana.

Selva (Narciso B.)—Comentarios al Código Penal reformado.

Swinderer (O. Q. van)—Le projet de Code pénal anglais de 1879.

Tissot (J.)—Le droit pénal.

Tolomei (G.)—Diritto e procedura penale.

Trebutien (E.)—Cours de droit criminel.

Vázquez Acevedo (A.)—Concordancias y anotaciones del Código Penal de la República O. del Uruguay.

Vatel—Notas al Código Penal de Baviera.

Viada y Vilaseca (Salvador)—Código Penal reformado.

Vieira de Araujo (J.)—O Código Penal segundo as fontes.
— A revisao dos processos penaes.

Zimmermann—Etude sur la prison préventive.

Además de los cuerpos legales vigentes y de los fallos de los tribunales de la Suprema Corte Nacional, de las tres



Cámaras de la Capital, Federales de La Plata, Córdoba y Paraná y las de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe (en sus originales o en el *Diccionario de la Jurisprudencia Argentina*.) se ha tenido en cuenta en esta obra textos ú opiniones de los siguientes jueces, profesores ó abogados:

Astigueta (Francisco B.)—Bazán (Abel)—Cabanillas (Lucas López)—Carreras (Oscar de las)—Cúllen (Tomás R.)—Díaz (Delfín B.)—Drago (Agustín J.)—Estéves (Miguel)—French (Eduardo)—Frías (Daniel J.)—Gallegos (Servando A.)—García (Juan Agustín)—García (J. A. hijo.)—Hernández (Obdulio)—Jofré (Tomás)—Lamarque (Facundo)—Larroque (Alberto)—Marengo (Cárlos L.)—Saavedra (Diego)—Seeber (Arturo)—Segovia (Lisandro)—Urdinarraín (Agustín J.)



INDICE GENERAL DEL TOMO II



Texto del Código y comentarios (arts. 376 á 699).....	
Indice del Código, comprendiendo los arts. 376 á 699.	307
Acumulación de procesos. (Fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital).....	313
Carácter de la ley procesal en la Capital de la República (por el Dr. Joaquín V. Gonzalez).....	317
Cuestiones prejudiciales (por el Dr. Daniel J. Frías)..	319
Reivindicación de cosas robadas, en la jurisdicción criminal (por el Dr. Jesús H. Paz).....	339
Cuestiones prejudiciales (por el Dr. Carlos Malagarriga)	349
Sobre la prueba en el juicio criminal (del mismo)...	358
Indice alfabético de materias de los tomos I y II.....	367
Bibliografía.....	397
